

Diciembre 28 de 1960

46ª REUNION — 1ª SESION ESPECIAL EXTRAORDINARIA

Presidencia de los doctores JOSE MARIA GUIDO, presidente provisional del Honorable Senado, y Bartolomé Pérez, presidente de la Comisión de Legislación General

Secretarios: señores ALEJANDRO N. BARRAZA y CLAUDIO A. MAFFEI

Prosecretario: señor CESAR ALBERTO RODRIGUEZ

MINISTROS PRESENTES:

de Economía e interino de Trabajo y Seguridad Social,  
ingeniero ALVARO C. ALSOGARAY;  
de Obras y Servicios Públicos,  
ingeniero ALBERTO R. COSTANTINI

SECRETARIOS DE ESTADO PRESENTES:

de Hacienda,  
doctor GUILLERMO W. KLEIN;  
de Transporte,  
ingeniero MANUEL F. CASTELLO

SENADORES PRESENTES:

ARANA, Tomás Pedro  
BAYOL, Augusto G.  
BERTIN, Alfredo Felipe  
BERTORA, José María Antonio  
BIAIN, Pablo  
CALDERÓN, Segundo Rosa  
CAÑEQUE, Francisco E.  
CIARLOTTI, Pedro Antonio  
DAVILA, J. Aníbal  
DE LLAMAS, Enrique V.  
FALCO, Clodomiro  
FIGUEROA, Héctor E.  
FLEITAS, Víctor Hugo  
GALLO, Victorio Manuel  
GARCÍA, Alfredo  
GUIDO, José María

GUZMAN, Benjamin  
ITURRALDE, Antonio  
JARITONSKY, José  
JUAREZ, José Gregorio  
LEAVY, Napoleón Tomás  
LEBRERO, Carlos Alberto  
MALLEVILLE, Julio A.  
MANSILLA, Juan Argentino  
MIRANDA, Guillermo Hdefonso  
NOGUEIRA, Eduardo  
PEREZ, Bartolomé  
RACEDO, Lucio E.  
ROCHA ERRECART, Adolfo  
SANCHEZ, Franklin Alberto  
TURANO, Armando Luis  
VERA BARROS, Pedro César  
VILCHEZ, Martín  
VILLALBA, Lucas  
WEIDMANN, Rodolfo A.

AUSENTES, CON AVISO:

BAZÁN, Eduardo  
DÍAZ, Juan Luis  
FITTIPALDI, Juan Pablo  
GÓMEZ, Carlos Bernabé  
MARTOS, Francisco Luis  
PARRA PÉREZ, Diego  
RICA, Diego Isidro  
TRUNSKY, Salomón

- 7.—Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Cultos en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se crea la representación diplomática de la República en el Reino de Cambodia. Se aprueba. (Página 2284.)
- 8.—Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se crea la representación diplomática de la República en la República Nacional de Vietnam. Se aprueba. (Página 2285.)
- 9.—Asunto entrado:  
XXIV.—Proyecto de ley del señor senador Fleitas sobre unificación de fueros de los juzgados nacionales de primera instancia en lo civil, comercial y de paz de la Capital Federal. (Página 2288.)
- 10.—Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que la República Argentina adhiera a la convención relativa al Estatuto de los Refugiados. Se aprueba. (Página 2289.)
- 11.—Consideración del dictamen de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre aumento del capital circulante de la Corporación Argentina de Productores de Carnes. Se aprueba. (Página 2305.)
- 12.—Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley, en revisión, por el que se autoriza a la Municipalidad de la Capital Federal a emitir hasta \$ 3.000.000.000 en bonos de pavimentación. (Página 2310.)
- 13.—Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Comunicaciones y Transportes en el proyecto de ley, en revisión, sobre beneficios y franquicias a los partidos políticos. Se aprueba. (Página 2311.)
- 14.—Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley, que le fuera pasado en revisión, sobre prórroga de la concesión del uso de un inmueble a la Sociedad Rural Argentina. Se aprueba. (Página 2317.)
- 15.—Consideración del dictamen de la Comisión de Interior y Justicia en la insistencia de la Honorable Cámara de Diputados en su sanción al proyecto de ley sobre modificaciones del decreto ley 5.571/57. Se aprueba. (Página 2318.)
- 16.—A moción del señor senador Rocha Errecart se resuelve pasar a cuarto intermedio hasta las 16. (Página 2320.)
- 17.—Asunto entrado:  
XXV.—Dictamen de comisión. (Página 2320.)
- 18.—Moción del señor senador Rocha Errecart para que se incluya en el plan de labor de la sesión de la fecha el dictamen de la Comisión de Obras Públicas sobre urbanización del área comprendida entre las calles Leandro N. Alem, Córdoba, Eduardo Madero y San Martín. Se aprueba. (Página 2320.)
- 19.—Consideración de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley, en revisión, sobre presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 1961; por el que se determina el monto máximo a que podrá ascender el déficit de explotación de las empresas del Estado; sobre reformas al régimen impositivo, y sobre modificación a la ley de contribución inmobiliaria. Se aprueban. (Página 2320.)
- 20.—Consideración del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley, en revisión, sobre presupuesto del territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Se aprueba. (Página 2453.)
- 21.—Asuntos entrados:  
XXVI.—Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdos para hacer designaciones en la justicia. (Página 2475.)  
XXVII.—Mensaje del Poder Ejecutivo acompañando copia del decreto por el que se incluyen nuevos temas para ser considerados por el Honorable Congreso en las sesiones extraordinarias. (Página 2475.)
- 22.—Consideración del dictamen de la Comisión de Obras Públicas en el proyecto de ley, en revisión, relativo a la urbanización del área comprendida entre las calles Córdoba, Leandro N. Alem, Eduardo Madero y San Martín, de la Capital Federal. Se aprueba. (Página 2475.)
- 23.—A moción del señor senador Bayol se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de resolución a que se refiere el punto XVIII de los asuntos entrados. (Página 2478.)
- 24.—Moción del señor senador Malleville para que se pase a estudio de la Comisión de Agricultura y Ganadería el proyecto de comunicación del señor senador Jaritonsky referente a la comercialización del excedente de lúpulo que tienen las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Se aprueba. (Página 2479.)
- 25.—Moción del señor senador Rocha Errecart para que el honorable cuerpo pase a sesión secreta para considerar dictámenes de la Comisión de Acuerdos. Se aprueba. (Página 2479.)
- 26.—Apéndice:  
Sanciones del Honorable Senado. (Página 2479.)

—En Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de diciembre de 1960, a la hora 11 y 10, dice el

Sr. Presidente (Guido). — La sesión está abierta.

## 1

## ASUNTOS ENTRADOS

**Sr. Presidente (Guido).** — Por Secretaría se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

**Sr. Secretario (Barraza).** — (*Leyendo*):

## I

## Citación a sesión especial

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1960.

*Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, doctor José María Guido.*

Tenemos el agrado de dirigirnos al señor presidente a fin de solicitarle quiera tener a bien citar al Honorable Senado para realizar sesión especial, mañana, miércoles 28, a las 10, con el objeto de considerar despachos de comisión en los asuntos incluidos en la convocatoria a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo.

Saludamos al señor presidente con nuestra mayor consideración.

*Augusto G. Bayol. — Pablo Biain. — José Gregorio Juárez. — Carlos Alberto Lebrero. — Enrique V. De Llamas. — Lucas Villalba.*

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1960.

Visto la nota que antecede y atento lo dispuesto en el artículo 21 del reglamento del Honorable Senado,

*El presidente del Honorable Senado de la Nación*

## DECRETA:

Cítese al Honorable Senado para realizar sesión especial, mañana, miércoles 28, a las 10, a fin de considerar despachos de comisión en asuntos incluidos en la convocatoria a sesiones extraordinarias.

**JOSÉ MARÍA GUIDO.**  
**Alejandro N. Barraza.**

—Al Archivo.

## II

**Inclusión de nuevos temas a considerar por el Honorable Congreso en sesiones extraordinarias. — Mensaje del Poder Ejecutivo**

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1960.

*Al Honorable Senado de la Nación.*

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad, llevando a su conocimiento en copia legalizada adjunta el decreto 15.269 dictado en el día de la fecha, por el que se incluyen nuevos temas entre los asuntos a considerar por el Honorable Congreso de la Nación en sesiones extraordinarias.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

**ARTURO FRONDI.**  
**Alfredo R. Vítolo.**

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1960.

Visto el decreto 12.682, del 18 de octubre de 1960, por el cual se convoca al Honorable Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias,

*El presidente de la Nación Argentina*

## DECRETA:

Artículo 1º — Inclúyense, entre los asuntos a considerar por el Honorable Congreso durante las presentes sesiones extraordinarias, los que a continuación se indican:

- 1º Foro de Abogados de la ciudad de Buenos Aires.
- 2º Concesiones gratuitas a entidades mutualistas.
- 3º Reformas al sistema impositivo nacional.
- 4º Régimen impositivo inmobiliario de la Capital Federal.
- 5º Regímenes de servidumbres para construcción de oleoductos y gasoductos y para conductores de energía.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.

**FRONDI.**  
**Alfredo R. Vítolo.**

—Al Archivo.

## III

**Abastecimiento de agua a la ciudad de Córdoba. — Mensaje del Poder Ejecutivo**

Buenos Aires, 7 de diciembre de 1960.

*Al Honorable Senado de la Nación.*

El Poder Ejecutivo nacional tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad con referencia a la comunicación cuyo texto se le hiciera llegar por nota de fecha 29 de septiembre último, y que se refiere a vuestra expresión de deseos en el sentido de que se informe en relación con el abastecimiento de agua a la ciudad de Córdoba.

Al respecto debo expresar a vuestra honorabilidad que la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, ha previsto un programa de obras para servir a dicha ciudad con una población de 700.000 habitantes.

La primera etapa, actualmente en construcción, comprende lo siguiente: establecimiento potabilizador Suquia, conducto de agua potable a las reservas y conducto maestro desde establecimiento Alto Alberdi, con presupuesto y porcentajes de obra ejecutada en ese mismo orden de: \$ 160 millones y 55 %; \$ 12 millones y 60 %; \$ 60 millones y 10 por ciento.

El plan para los años 1961/1965 prevé una inversión total aproximada de \$ 900 millones, distribuida en: establecimiento Suquia (2ª etapa para elevar la capacidad de producción de 1 m<sup>3</sup>/s. a 2 m<sup>3</sup>/s.) con \$ 200 millones; conducto alimentador desde establecimiento Suquia al de Alto Alberdi, con \$ 60 millones; reacondicionamiento del acueducto La Calera a Alto Alberdi con \$ 40 millones, y reacondicionamiento y ampliación de cañerías maestras, con \$ 600 millones.

La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación ha dedicado hasta la fecha particular atención al problema de abastecimiento de agua a la ciudad de Córdoba, destinando a tal fin y dentro de la disponibilidad de recursos asignaciones anuales crecientes, conforme con el detalle anexo.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

**ARTURO FRONDI.**  
**Alberto R. Costantini. — Pascual Palazzo.**

ción inmediata a los anhelos largamente acariciados por las entidades mutualistas y de beneficencia enumeradas en el artículo 1º del decreto ley 5.571/57, sin perjuicio de que la comisión, basándose en los antecedentes reunidos, propicie en su oportunidad un nuevo instrumento legal que contemple la situación de las instituciones nacionales, municipales y empresas del Estado.

Por las consideraciones expuestas, vuestra Comisión de Interior y Justicia aconseja al Honorable Senado la no insistencia en su sanción.

**Sr. Presidente (Guido).** — Si ningún señor senador hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de la comisión, que aconseja al cuerpo no insistir en su anterior sanción en el proyecto de ley que se considera.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Guido).** — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

## 16

### MOCION

**Sr. Rocha Errecart.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Guido).** — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Rocha Errecart.** — Hago moción de que el cuerpo pase a cuarto intermedio hasta las 16.

**Sr. Presidente (Guido).** — En consideración la moción formulada por el señor senador por Buenos Aires. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Guido).** — Invito al Honorable Senado a pasar a cuarto intermedio hasta las 16.

—Así se hace siendo las 13 y 30.

—A la hora 17 y 15, dice el

**Sr. Presidente (Guido).** — Continúa la sesión.

—Entra al recinto y ocupa una banca en el hemiciclo el señor secretario de Estado de Hacienda, doctor Guillermo Walter Klein.

## 17

### ASUNTO ENTRADO

**Sr. Presidente (Guido).** — Por Secretaría se va a dar cuenta de un nuevo asunto entrado.

## XXV

### Dictamen de comisión

#### OBRAS PÚBLICAS:

Se ha expedido en el proyecto de ley en revisión relativo a la urbanización del área comprendida entre las calles Córdoba, Leandro N. Alem, Eduardo Madero y San Martín de la Capital Federal. (Al orden del día.)

## 18

### MOCION

**Sr. Rocha Errecart.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Guido).** — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Rocha Errecart.** — Hago moción, señor presidente, para que se incluya en el plan de trabajo para la sesión de hoy, a continuación de las preferencias votadas, el dictamen de la Comisión de Obras Públicas de que se acaba de dar cuenta, sobre urbanización del área comprendida entre las calles Córdoba, Leandro N. Alem, Eduardo Madero y San Martín, de la Capital Federal.

**Sr. Presidente (Guido).** — Se va a votar la moción que acaba de formular el señor senador por Buenos Aires.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Guido).** — Se procederá en consecuencia.

## 19

### PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL PARA 1961, DEFICIT DE EXPLOTACION DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO, REFORMAS AL REGIMEN IMPOSITIVO Y MODIFICACION A LA LEY DE CONTRIBUCION INMOBILIARIA

**Sr. Presidente (Guido).** — Corresponde considerar los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley, en revisión, sobre presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 1961, sobre monto máximo a que podrá ascender el déficit financiero de explotación de las empresas del Estado, sobre reformas al régimen impositivo y sobre modificación a la ley de contribución inmobiliaria.

Por Secretaría se les dará lectura.

**Sr. Secretario (Maffei).** — (*Leyendo*):

#### Dictamen de comisión

*Honorable Senado:*

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el proyecto de ley, en revisión, de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio de 1961, que comprende el período 1º de noviembre de 1960 a 31 de octubre de 1961; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

Sala de la comisión, 27 de diciembre de 1960.

José María Antonio Bértora. — Juan Argentino Mansilla. — Clodomiro Falco. — Armando Luis Turano.



deberán ser comunicados al Congreso Nacional, por conducto del ministerio o secretaría que corresponda y con intervención de la Secretaría de Hacienda, inmediatamente de aprobados, si el mismo se encontrara en funciones o en las primeras sesiones que realice cuando las medidas hubiesen sido adoptadas durante su receso.

Art. 11. — Facúltase al Poder Ejecutivo para licitar, adjudicar y contratar las adquisiciones y obras contenidas en el plan de recuperación ferroviaria, dispuesto por el decreto 7.052/60.

Asimismo autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las erogaciones mínimas que estime necesarias para la prosecución del mencionado plan en el ejercicio 1960/61, hasta tanto se dé término a los estudios definitivos de planificación del transporte.

Los recursos para las erogaciones a que se refiere el párrafo anterior deberán obtenerse de los créditos correspondientes a EFEA, autorizados por la presente ley, con destino a la atención de los déficit de explotación e inversión.

Art. 12. — El Poder Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Hacienda podrá otorgar préstamos reembolsables de carácter transitorio a los efectos de atender los compromisos contraídos y cuyo cumplimiento resulte ineludible, a las empresas del Estado cuyos presupuestos se prevé financiar con recursos propios y se viesen abocadas durante el ejercicio a afrontar déficit temporarios de caja.

Art. 13. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FEDERICO F. MONJARDÍN.

Eduardo T. Oliver.

#### Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el proyecto de ley en revisión, sobre reformas al régimen impositivo; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

Sala de la comisión, 27 de diciembre de 1960.

José María Antonio Bértora. — Juan Argentino Mansilla. — Clodomiro Falco. — Armando Luis Turano.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados  
(23 de diciembre de 1960)

#### PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Modifícase la ley 11.683 (texto ordenado en 1960), en la siguiente forma:

1. Sustitúyese el artículo 63, por el siguiente:

Artículo 63. — La prescripción de las acciones y poderes del fisco para determinar

y exigir el pago del impuesto se interrumpirá:

1º Por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación impositiva.

2º Por renuncia al término corrido de la prescripción en curso.

3º Por el juicio de apremio iniciado contra el contribuyente o responsable en los únicos casos de tratarse de impuestos determinados en una sentencia del tribunal fiscal debidamente notificada o en una intimación o resolución administrativa debidamente notificada y no recurrida por el contribuyente; o, en casos de otra índole, por cualquier acto judicial tendiente a obtener el cobro de lo adeudado.

En los casos de los incisos 1º y 2º el nuevo término de prescripción comenzará a correr a partir del 1º de enero siguiente al año en que las circunstancias mencionadas ocurran.

2. Agrégase al artículo 72, el siguiente párrafo:

Con el recurso de reconsideración deberán acompañarse u ofrecerse todas las pruebas que se tuvieran, no admitiéndose después otros escritos u ofrecimientos de prueba.

3. Suprímese la mención de «sobreprecio a los combustibles» en el segundo párrafo del artículo 110 de la ley 11.683, texto ordenado en 1960 y sustitúyese el tercer párrafo del mismo artículo por el siguiente:

La aplicación del impuesto a las actividades lucrativas y del sobreprecio a los combustibles se regirá por la presente ley, facultándose al Poder Ejecutivo para establecer las excepciones, aclaraciones o modificaciones que considere convenientes para adaptar a las características de tales gravámenes el régimen de esta ley.

Art. 2º — Modifícase la ley de impuesto a los réditos, texto ordenado en 1960, en la siguiente forma:

1. Agrégase al final del primer párrafo del inciso f) del artículo 19:

En caso de que estos réditos provengan de dividendos de sociedades anónimas, la Dirección devolverá las sumas percibidas por impuesto de réditos a dichos dividendos contra presentación de los comprobantes necesarios.

2. Sustitúyese el inciso h) del artículo 19, por el siguiente:

h) Los intereses de depósitos en caja de ahorro, cualquiera sea la modalidad adoptada para su liquidación y pago y los producidos por las su-

mas que las empresas acrediten a sus empleados en concepto de depósitos o préstamos, dentro de los límites que establezca la reglamentación;

3. Sustitúyese el inciso i) del artículo 19, por el siguiente:

- i) Las indemnizaciones por antigüedad en los casos de despido y las que se reciban en forma de capital o renta por causa de muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad, ya sea que los pagos se efectúen en virtud de lo que determinan las leyes civiles y especiales de previsión social o como consecuencia de un contrato de seguro. No están exentas las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios, ni las remuneraciones que se continúen percibiendo durante las licencias o ausencias por enfermedad y las indemnizaciones por falta de preaviso en el despido;

4. Sustitúyese el último párrafo del artículo 20, por el siguiente:

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes residentes en el país que obtengan réditos comprendidos en el artículo 60, superiores a veinticuatro mil pesos (\$ 24.000) moneda nacional tendrán derecho a una deducción adicional igual al excedente de dicha suma y hasta un máximo de noventa y seis mil pesos (\$ 96.000) moneda nacional anuales.

5. Sustitúyese el inciso g) del artículo 62, por el siguiente:

- g) Los gastos que origine la percepción de los réditos. En caso de beneficiarios del exterior que perciban intereses por préstamos otorgados a personas o firmas radicadas en el país, se admitirá como deducción por todo concepto el cincuenta por ciento (50 %) de los importes efectivamente percibidos;

6. Agrégase al inciso j) del artículo 62, el siguiente párrafo:

Sin perjuicio de esta deducción, los contribuyentes podrán computar como pago a cuenta del impuesto el diez por ciento (10 %) de las sumas donadas;

7. Agrégase al inciso ñ) del artículo 62, la siguiente expresión final: «y de otras empresas que sean declaradas de interés nacional por el Poder Ejecutivo»;

8. Agrégase al inciso o) del artículo 62, a continuación de la palabra «gastos», la expresión «de laboratorios de análisis, de radiografías, de internación en clínicas y sanatorios».

9. Sustitúyese el inciso f) del artículo 68, por el siguiente:

- f) En concepto de reserva para indemnización por despido, rubro antigüedad, se admitirá, a opción del contribuyente, la aplicación de cualesquiera de los sistemas que se mencionan en los dos puntos siguientes. Sin perjuicio de ello, a los efectos de la constitución de tal reserva, los contribuyentes deberán adicionar la ya existente de acuerdo con las disposiciones legales vigentes al 31 de octubre de 1960. Al fondo así formado, se imputarán las indemnizaciones que efectivamente se paguen en los casos de despidos, rubro antigüedad.

- a) El importe resultante de aplicar sobre las remuneraciones abonadas durante el ejercicio, al personal en actividad al cierre del mismo, el por ciento que representan en los tres últimos ejercicios, las indemnizaciones reales por el rubro antigüedad pagadas sobre las remuneraciones totales abonadas;

- b) Un por ciento a fijar por el Poder Ejecutivo —no superior al dos por ciento (2 %)— a aplicar sobre las retribuciones totales abonadas durante el ejercicio, al personal en actividad al cierre del mismo.

10. Agrégase al artículo 83 la siguiente expresión final: «y para extenderla hasta el total de la inversión».

11. Elévase de diez mil pesos (\$ 10.000) moneda nacional a veinte mil pesos (\$ 20.000) moneda nacional el monto establecido en el segundo párrafo del artículo 86, y suprimense los primeros escalones de diez mil pesos (\$ 10.000) moneda nacional a quince mil pesos (\$ 15.000) moneda nacional y de quince mil pesos (\$ 15.000) moneda nacional a veinte mil pesos (\$ 20.000) moneda nacional de la escala incluida en dicho artículo.

12. Las disposiciones contenidas en el presente artículo se aplicarán en la siguiente forma:

Para los particulares y las sucesiones indivisas cuando son sujetos del impuesto, sobre todos los réditos que perciban, se les acrediten en cuenta o se pongan a su disposición a partir del 1º de enero de 1961.

Para las rentas de primera categoría se estará a lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 11.682, texto ordenado en 1960.

Para los comerciantes, entidades comerciales o civiles o personas asimiladas a comerciantes por la Dirección, sobre todos

los réditos netos que arrojen sus ejercicios anuales cerrados a partir del 1º de enero de 1961, con excepción de la norma contenida en el punto 9 que será de aplicación en los ejercicios anuales cerrados a partir del 1º de noviembre de 1960, inclusive.

Art. 3º — Modifícase la ley de impuesto a las ventas, texto ordenado en 1960, en la siguiente forma:

1º Elévase al diez por ciento (10 %) la tasa del ocho por ciento (8 %) fijada por el artículo 10, a partir del día 1º del mes siguiente a aquel en que venza el término de treinta días corridos contados desde la fecha de publicación de la presente ley.

2º Agrégase al segundo párrafo del artículo 12, la siguiente expresión final: «así como para dejar sin efecto, total o parcialmente, las exenciones vigentes».

Art. 4º — Modifícase la ley de impuestos internos, texto ordenado en 1956, y sus modificaciones, en la siguiente forma:

1. Suprímese del primer párrafo del artículo 25 la expresión «hasta un veinte por ciento (20 %)».

2. Sustitúyese, a partir del 1º de enero de 1961, el artículo 102 por el siguiente:

Artículo 102. — Los objetos suntuarios abonarán en concepto de impuesto interno la tasa del 10 %, con excepción de los comprendidos en los incisos d) y e) del artículo 103 que pagarán el 7 %.

A los efectos de lo dispuesto por el artículo 89 de la presente ley, en los casos de fabricación de objetos suntuarios por cuenta de terceros, será responsable del impuesto el aportante de la materia prima principal.

Se entenderá por materia prima principal el elemento que caracteriza, define o individualiza el destino final del artículo elaborado y que constituya, a la vez, la materia indispensable para su existencia.

3. Sustitúyese, a partir del 1º de enero de 1961, el artículo 110 por el siguiente:

Artículo 110. — Las cervezas de producción nacional o extranjera abonarán un impuesto interno de un peso moneda nacional (\$ 1) por litro.

Art. 5º — Los impuestos creados por el artículo 3º de la ley 15.274 se aplicarán a partir de la publicación de dicha ley (2 de marzo de 1960).

Art. 6º — Los contratos u operaciones referentes a los seguros de vida individuales o colectivos y de accidentes personales y los títulos de ahorro y capitalización estarán exentos de los impuestos nacionales internos y de sellos.

Art. 7º — Modifícase la ley de impuesto a la transmisión gratuita de bienes, texto ordenado en 1959, en la siguiente forma:

1. Sustitúyese la escala del artículo 4º por la siguiente:

Monto de la hijuela, legado o donación	Padres, hijos, cónyuges, otros ascendientes y descendientes		Colaterales de 2º grado		Colaterales de 3er. grado		Colaterales de 4º grado, otros parientes y extraños	
	Cta. fija	Porc. s/ exced. lín. mín.	Cta. fija	Porc. s/ exced. lín. mín.	Cta. fija	Porc. s/ exced. lín. mín.	Cta. fija	Porc. s/ exced. lín. mín.
De 50.000 hasta 100.000	m\$.n.	%	m\$.n.	%	m\$.n.	%	m\$.n.	%
" 100.000 " 200.000	—	—	—	4,0	—	6,0	—	10,0
" 200.000 " 300.000	—	—	2.000	6,0	3.000	8,0	5.000	12,0
" 300.000 " 400.000	—	—	8.000	8,0	11.000	10,0	17.000	14,0
" 400.000 " 500.000	—	—	16.000	11,0	21.000	12,0	31.000	16,0
" 500.000 " 750.000	—	—	27.000	14,0	33.000	14,0	47.000	18,0
" 750.000 " 1.000.000	—	10,0	41.000	18,0	47.000	18,0	65.000	21,0
" 1.000.000 " 1.500.000	25.000	13,0	86.000	22,0	92.000	22,0	117.500	25,0
" 1.500.000 " 2.000.000	57.500	16,5	141.000	26,0	147.000	27,0	180.000	29,0
" 2.000.000 " 3.000.000	140.000	20,0	271.000	31,0	282.000	33,0	325.000	33,0
" 3.000.000 " 4.000.000	240.000	25,5	426.000	36,0	447.000	39,0	490.000	38,0
" 4.000.000 a más pagarán	495.000	30,5	786.000	41,4	837.000	44,3	870.000	45,0
	20,0 %		30,0 %		32,0 %		33,0 %	

2 — Derógase el artículo 5º.

3 — Sustitúyese el inciso a) del artículo 6º, por el siguiente:

a) Las sucesiones y donaciones cuyo monto total no exceda de los siguientes límites:

1) De m\$.n. 500.000, cuando se trate de transmisiones de padres, hijos, espo-

sos y otros ascendientes y descendientes en línea recta;

2) De m\$.n. 50.000 en los demás casos.

Para establecer el monto se tendrán en cuenta no sólo los bienes existentes en territorio nacional, sino también los de fuera de él.

4 — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las sucesiones que se inicien y a las demás transmisiones que se exterioricen a partir del 1º de enero de 1961.

Art. 8º — Modifícase la ley de impuesto de sellos (texto ordenado en 1959 y sus disposiciones modificatorias), en la siguiente forma:

1. Agrégase en el primer párrafo del artículo 32, después de la expresión «al contado o a plazos, de», la palabra «mercaderías».

2. Sustitúyese el artículo 71 por el siguiente:

Artículo 71. — Ante los jueces nacionales de primera instancia de paz y los del trabajo de la Capital Federal el sellado de actuación será de cuatro pesos moneda nacional (m\$.n. 4) por foja, cuando el valor del juicio exceda de mil pesos moneda nacional (m\$.n. 1.000) o se trate de juicio cuyo valor sea indeterminado.

Ante los jueces de paz del territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, el sellado de actuación será de tres pesos moneda nacional (m\$.n. 3) por foja, cuando el valor del juicio exceda de mil pesos moneda nacional (m\$.n. 1.000) o se trate de juicios cuyo valor sea indeterminado.

3. Sustitúyese el artículo 73 por el siguiente:

Artículo 73. — Ante la Cámara Nacional de Apelaciones de Paz y la del Trabajo de la Capital Federal, el sellado de actuación será de siete pesos moneda nacional (m\$.n. 7) por foja cuando el valor del juicio exceda de mil pesos moneda nacional (m\$.n. 1.000) o se trate de juicios cuyo valor sea indeterminado.

4. Sustitúyese el artículo 74 por el siguiente:

Artículo 74. — Ante los jueces nacionales de primera instancia de la Capital Federal en lo civil y comercial federal, en lo criminal y correccional federal, en lo contenciosoadministrativo, en lo civil, en lo comercial, en lo criminal de instrucción, en lo criminal de sentencia, en lo correccional, del trabajo, cuando el valor del juicio exceda el límite de competencia de la justicia de paz, en lo comercial de registro y los jueces federales de primera instancia con asiento en provincias, el sellado de actuación será de siete pesos moneda nacional (m\$.n. 7) por foja.

Cuando debido al fuero de atracción que ejercen los juicios universales, o por tratarse de sucesiones o de asuntos que interesen al derecho de familia, deba conocer la justicia de primera instancia en juicios que por su monto hubieran debido corresponder al conocimiento de la justicia de paz, se actuará en el sellado que fija el párrafo 1º del artículo 71.

5. Sustitúyese el artículo 75 por el siguiente:

Artículo 75. — Ante los jueces federales de primera instancia del territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, el sellado de actuación será el establecido en el artículo 71 (primer párrafo), cuando el valor del juicio exceda de mil pesos moneda nacional (m\$.n. 1.000) y hasta dos mil pesos moneda nacional (m\$.n. 2.000), o se trate de juicios cuyo valor sea indeterminado, y el establecido en el artículo 74 cuando exceda de dos mil pesos moneda nacional (m\$.n. 2.000).

6. Sustitúyese el artículo 76 por el siguiente:

Artículo 76. — Ante las cámaras nacionales de apelaciones de la Capital Federal en lo civil, en lo comercial, en lo criminal y correccional, del trabajo cuando el valor del juicio exceda el límite de competencia de la justicia de paz, en lo federal y contenciosoadministrativo, las cámaras federales de apelaciones, con asiento en provincias y en el territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud y los tribunales arbitrales, el sellado de actuación será de once pesos moneda nacional (m\$.n. 11) por foja.

7. Sustitúyese el punto 1º del inciso a) del artículo 77 por el siguiente:

1º El que fija el artículo 71 (párrafo primero) cuando el valor del juicio exceda de mil pesos moneda nacional (m\$.n. 1.000) y hasta dos mil pesos moneda nacional (m\$.n. 2.000).

8. Sustitúyese el artículo 78 por el siguiente:

Artículo 78. — En todas las actuaciones judiciales, con excepción de las que tramiten ante la justicia de paz y del trabajo cuando el valor del juicio no exceda el límite de competencia de aquélla, los abogados y procuradores pagarán dos pesos moneda nacional (m\$.n. 2) y sesenta centavos moneda nacional (m\$.n. 0,60), respectivamente, por cada escrito. Los demás profesionales o peritos que intervengan pagarán dos pesos moneda nacional (m\$.n. 2) por cada escrito, informe, pericia, testimonio o instrumento que presenten.

En la justicia de paz y del trabajo, cuando el valor del juicio no exceda el límite de competencia de aquélla, se abonará la mitad de estos gravámenes. Cuando los profesionales o peritos actúen por derecho propio no pagarán impuesto.

9. Sustitúyese el primer párrafo del artículo 84 por el siguiente:

Artículo 84. — Además del sellado de actuación que corresponda con arreglo a los disposiciones precedentes, las actuaciones

nes judiciales que se inicien ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los jueces nacionales de primera instancia en lo civil, en lo comercial, de paz y del trabajo de la Capital Federal, los jueces federales de primera instancia y de paz del territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, los jueces nacionales de primera instancia en lo civil y comercial federal, en lo criminal y correccional federal y en lo contencioso-administrativo de la Capital Federal y los jueces federales de primera instancia con asiento en provincias o ante la jurisdicción arbitral, estarán sujetas, cuando el valor cuestionado exceda de dos mil pesos moneda nacional (m\$.n. 2.000) en la Capital Federal y de tres mil pesos moneda nacional (m\$.n. 3.000) en las provincias y en el territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, o sea indeterminado, a un sello de justicia que se aplicará de la siguiente forma:

10. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a partir del 1º de enero de 1961, con excepción de las vinculadas con el sellado de actuación ante la justicia del trabajo que regirán desde la fecha de vigencia de la ley 15.017.

Las reformas al régimen de la ley de sellos (texto ordenado en 1959) dispuestas por la ley 15.267 se aplicarán desde el día siguiente al de la publicación de esta última en el Boletín Oficial (22 de febrero de 1960).

Art. 9º — Modifícase la ley de aduana, texto ordenado en 1956, y sus modificaciones, en la siguiente forma:

1. Agrégase al artículo 125, como inciso b), el siguiente:

b) Disponer la exención o reducción de las tasas establecidas en el artículo 132 en casos debidamente justificados.

2. Sustitúyese el artículo 132 por el siguiente:

Artículo 132. — Las mercaderías que se importen o exporten, definitiva o transitoriamente, estén o no gravadas con derecho, inclusive las despachadas en tránsito para el extranjero, abonarán en concepto de servicio de estadística la tasa de hasta el 3 % cuando se importen y de hasta el 1 % cuando se exporten.

3. Agrégase como artículo 146 el siguiente:

Artículo 146. — Si el documentante ignora la especie, calidad, cantidad o valor de las mercaderías o no quiera exponerse a error en su declaración, podrá presentarla con la cláusula de ignorar todas o algunas de estas condiciones. En estos casos, el documentante deberá proceder al examen y clasificación de los bultos por su cuenta y bajo su responsabilidad y estará obligado

a concretar su declaración dentro de los ocho días contados desde el vencimiento del plazo acordado por el artículo 208, inciso d) o, en su defecto dentro de los ocho días de la entrada a depósito del último bulto documentado o de la finalización de la descarga del vapor en el caso de faltar a la misma alguno de los bultos. Vencido este término, la aduana podrá clasificar las mercaderías por cuenta del documentante, aplicándoles un recargo equivalente al dos por ciento (2 %) de su valor.

4. Sustitúyese el artículo 174 por el siguiente:

Artículo 174. — Cuando en buques, aeronaves u otros medios de transporte, de propiedad privada o de empresas estatales, se encuentren ocultas a bordo, o en poder de los tripulantes o empleados de los mismos o en los compartimientos que les son reservados y demás sitios de su acceso, mercaderías sin manifestar que, de acuerdo con las disposiciones aduaneras, debieron ser oportunamente declaradas, además del comiso irredimible de éstas, se impondrá una multa igual al valor de las mercaderías en infracción al agente o propietario de la empresa, quienes a su vez podrán repetir el importe contra el o los tripulantes individualizados como responsables.

Ambas penalidades, o sus equivalentes, serán igualmente aplicadas en los casos de mercaderías manifestadas por los tripulantes o empleados que en oportunidad de inspecciones fiscales no se comprueben a bordo en poder de los mismos, a menos de probarse en forma fehaciente su normal consumo o utilización personal o su total destrucción sin beneficio propio.

5. Agrégase al artículo 12 de la ley 14.792, como párrafo final, el siguiente:

Lo dispuesto en este artículo será también aplicable a las falsas manifestaciones, actos u omisiones tendientes a obtener el reintegro ilegítimo de derechos, recargos y otros gravámenes comprendidos en el régimen del «draw back».

Art. 10. — Deróganse los artículos 1.032, 1.075 y 1.076 de las ordenanzas de aduana.

Art. 11. — Autorízase al Poder Ejecutivo para aplicar el producido de los recargos, retenciones e impuestos sobre las importaciones y exportaciones (decreto ley 5.168/58, ratificado por ley 14.467 y ley 14.789, artículo 27) a la atención de las erogaciones previstas en la sección 2ª - presupuesto de inversiones patrimoniales, en la medida en que lo permita el desarrollo financiero del ejercicio.

Sin perjuicio de las exenciones o reducciones que autorice el Poder Ejecutivo respecto de los recargos, retenciones e impuestos en vigor (de-

cretos 9.969/58, 11.917/58, 11.918/58, 242/59 y sus modificatorios y complementarios), las modificaciones que introduzca en dichas disposiciones —tales como la determinación de nuevos recargos o retenciones, la aprobación de nuevas listas de mercaderías, la inclusión de otras mercaderías en las listas en vigencia o la transferencia de ciertas mercaderías de una a otra lista— no podrán elevar en más de un ciento por ciento (100 %) los máximos establecidos por aquellos decretos.

Art. 12. — Retrotráese al 1º de enero de 1958 la derogación del decreto ley 6.266/58, dispuesta por el artículo 47 de la ley 15.021.

Art. 13. — Los repuestos que se importen con el fin de adaptar los controles de automóviles para su conducción por lisiados, así como todos los elementos ortopédicos necesarios para los mismos, que no se produzcan en el país o que su producción sea insuficiente, quedan exentos del pago de derechos aduaneros y recargos de importación, previa comprobación de destino.

Así mismo, facúltase al Poder Ejecutivo para coordinar con los bancos oficiales las medidas conducentes a facilitar créditos para la adquisición de lo descrito precedentemente por parte de los interesados.

Art. 14. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FEDERICO F. MONJARDÍN.

Eduardo T. Oliver.

#### Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el proyecto de ley, en revisión, por el que se modifica la ley de contribución inmobiliaria; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

Sala de la comisión, 27 de diciembre de 1960.

José María Antonio Bértora. — Juan Argentino Mansilla. — Clodomiro Falco. — Armando Luis Turano.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados

(23 de diciembre de 1960)

#### PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Modifícase la ley de contribución inmobiliaria, texto ordenado en 1960, en el sentido de que el impuesto municipal de alumbrado, barrido y limpieza y las tasas y derechos por los servicios de provisión de agua y desagües cloacales y pluviales, serán liquidados y percibidos, a partir del 1º de enero de 1961, respectivamente por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación.

Art. 2º — Suspéndese, a partir del 1º de enero de 1961 y por el término de dos años, el cobro

del impuesto de contribución territorial en jurisdicción de la Capital Federal. Al vencimiento de dicho plazo su liquidación y percepción quedará a cargo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. La suspensión antedicha implica la exención del pago del impuesto por el período expresado.

Art. 3º — El impuesto municipal de alumbrado, barrido y limpieza, se liquidará y percibirá conforme a lo que al respecto establezca la correspondiente ordenanza municipal, la que preverá las bases impositivas y demás detalles de avalúo, exenciones, reclamos, formas de pago, plazos y demás circunstancias relativas al cobro del impuesto.

Art. 4º — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, a partir de la fecha indicada en el artículo 1º, dentro de la aplicación plena del régimen de la ley 13.577, procederá a la liquidación y recaudación de las tasas y derechos por los servicios que presta, operaciones que quedan a su cargo, como así también todas las que se le vinculen.

Art. 5º — La Dirección General Inmobiliaria continuará teniendo a su cargo la percepción de la contribución inmobiliaria liquidada hasta el 31 de diciembre de 1960, siendo de aplicación, en todo lo referente a la materia, el régimen de la ley respectiva.

Art. 6º — Todas las tareas de ejecución, conservación y actualización del catastro de la Capital Federal, para el cumplimiento de la ley 14.159, incluida la modificación del estado parcelario y la división de inmuebles por el régimen de la ley 13.512, quedan radicadas en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Art. 7º — Facúltase al Poder Ejecutivo para disponer cuanto fuere necesario para el mejor cumplimiento de la presente ley, en tanto se relacione con el ordenamiento y transferencia de funciones, créditos presupuestarios, etcétera, incluso para convenir con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la transferencia de personal, oficinas técnicas, muebles y útiles y demás elementos que resulten indispensables, quedando transferidas, a partir del 1º de enero de 1961, las atribuciones previstas en el decreto ley 7.688/56 a los organismos que, a dichos fines tengan a cargo las funciones respectivas.

Art. 8º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FEDERICO F. MONJARDÍN.

Eduardo T. Oliver.

Sr. Presidente (Guido). — En consideración

Sr. Bértora. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Bértora. — Señor presidente; señores senadores: no sé si porque aquella, la de hace un año, fue nuestra exposición de iniciados, cuando seguramente con más emoción que sapiencia nos tocó informar un proyecto de pre-

cretos 9.969/58, 11.917/58, 11.918/58, 242/59 y sus modificatorios y complementarios), las modificaciones que introduzca en dichas disposiciones —tales como la determinación de nuevos recargos o retenciones, la aprobación de nuevas listas de mercaderías, la inclusión de otras mercaderías en las listas en vigencia o la transferencia de ciertas mercaderías de una a otra lista— no podrán elevar en más de un ciento por ciento (100 %) los máximos establecidos por aquellos decretos.

Art. 12. — Retrotráese al 1º de enero de 1958 la derogación del decreto ley 6.266/58, dispuesta por el artículo 47 de la ley 15.021.

Art. 13. — Los repuestos que se importen con el fin de adaptar los controles de automóviles para su conducción por lisiados, así como todos los elementos ortopédicos necesarios para los mismos, que no se produzcan en el país o que su producción sea insuficiente, quedan exentos del pago de derechos aduaneros y recargos de importación, previa comprobación de destino.

Así mismo, facúltase al Poder Ejecutivo para coordinar con los bancos oficiales las medidas conducentes a facilitar créditos para la adquisición de lo descrito precedentemente por parte de los interesados.

Art. 14. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FEDERICO F. MONJARDÍN.  
Eduardo T. Oliver.

#### Dictamen de comisión

#### Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el proyecto de ley, en revisión, por el que se modifica la ley de contribución inmobiliaria; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

Sala de la comisión, 27 de diciembre de 1960.

José María Antonio Bértora. — Juan Argentino Mansilla. — Clodomiro Falco. — Armando Luis Turano.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados  
(23 de diciembre de 1960)

#### PROYECTO DE LEY

#### El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Modifícase la ley de contribución inmobiliaria, texto ordenado en 1960, en el sentido de que el impuesto municipal de alumbrado, barrido y limpieza y las tasas y derechos por los servicios de provisión de agua y desagües cloacales y pluviales, serán liquidados y percibidos, a partir del 1º de enero de 1961, respectivamente por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación.

Art. 2º — Suspéndese, a partir del 1º de enero de 1961 y por el término de dos años, el cobro

del impuesto de contribución territorial en jurisdicción de la Capital Federal. Al vencimiento de dicho plazo su liquidación y percepción quedará a cargo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. La suspensión antedicha implica la exención del pago del impuesto por el período expresado.

Art. 3º — El impuesto municipal de alumbrado, barrido y limpieza, se liquidará y percibirá conforme a lo que al respecto establezca la correspondiente ordenanza municipal, la que preverá las bases impositivas y demás detalles de avalúo, exenciones, reclamos, formas de pago, plazos y demás circunstancias relativas al cobro del impuesto.

Art. 4º — La Administración General de Obras Sanitarias de la Nación, a partir de la fecha indicada en el artículo 1º, dentro de la aplicación plena del régimen de la ley 13.577, procederá a la liquidación y recaudación de las tasas y derechos por los servicios que presta, operaciones que quedan a su cargo, como así también todas las que se le vinculan.

Art. 5º — La Dirección General Inmobiliaria continuará teniendo a su cargo la percepción de la contribución inmobiliaria liquidada hasta el 31 de diciembre de 1960, siendo de aplicación, en todo lo referente a la materia, el régimen de la ley respectiva.

Art. 6º — Todas las tareas de ejecución, conservación y actualización del catastro de la Capital Federal, para el cumplimiento de la ley 14.159, incluida la modificación del estado parcelario y la división de inmuebles por el régimen de la ley 13.512, quedan radicadas en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Art. 7º — Facúltase al Poder Ejecutivo para disponer cuanto fuere necesario para el mejor cumplimiento de la presente ley, en tanto se relacione con el ordenamiento y transferencia de funciones, créditos presupuestarios, etcétera, incluso para convenir con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la transferencia de personal, oficinas técnicas, muebles y útiles y demás elementos que resulten indispensables, quedando transferidas, a partir del 1º de enero de 1961, las atribuciones previstas en el decreto ley 7.688/56 a los organismos que, a dichos fines tengan a cargo las funciones respectivas.

Art. 8º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FEDERICO F. MONJARDÍN.  
Eduardo T. Oliver.

Sr. Presidente (Guido). — En consideración.

Sr. Bértora. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Bértora. — Señor presidente; señores senadores: no sé si porque aquélla, la de hace un año, fue nuestra exposición de iniciados, cuando seguramente con más emoción que sapientia nos tocó informar un proyecto de pre-

supuesto general para la administración nacional, es que en el dictamen de hoy, cuando aún no se ha diluido en nuestro propio espíritu el eco de aquellas palabras sencillas a fuer de sinceras, es que nos parece que esto es la continuación de un mismo acto, la culminación de un mismo proceso, el ensamblamiento de piezas confeccionadas para adecuarse.

Estamos aquí los mismos actores. No ha variado la composición de esta Cámara ni la fisonomía de este cuerpo, integrado, desde el comienzo de nuestro mandato, surgido de los históricos comicios del 23 de febrero de 1958, por representantes de un solo sector político. Por ello es doblemente grave nuestra responsabilidad y mayor el cuidado que debemos poner en el estudio, no porque aquí esté proscrito el diálogo, que se practica en hondura y sin cortapisas, sino porque los enfoques que dimanar de doctrinas disímiles, aunque errados, resultan siempre constructivos, porque ahondan el análisis y acucian la investigación.

Se dice a veces que a un espíritu honrado le basta y sobra con la propia conciencia del deber cumplido. Pero, con ser esto importante, aquí no se trata de nuestra tranquilidad interior, sino del interés público comprometido, al que se sirve mejor exhibiendo todas las opiniones, sobreponiendo todos los argumentos, meritando todos los pareceres. Por ello digo que es doblemente grave nuestra responsabilidad, porque debemos, desde nuestro propio ángulo, situarnos en todas las posiciones y excoGITar, sin contradicción frontal, lo que nos parece más apropiado para esta grave coyuntura histórica. Claro está que el precedente nos es favorable. El año anterior, en análoga situación y en peores circunstancias, abordamos la misma tarea, y los resultados, la gestión financiera, pese a problemas artificiales creados a designio por los empresarios de la frustración, apuntan que no fue errado nuestro cálculo ni desacertadas nuestras previsiones. Claro está que entonces señalamos caminos erizados de sacrificios que debieron ser recorridos por todos, con ejemplarizadora altivez, porque en ello va insito el porvenir de nuestras instituciones, la revitalización de nuestra economía, la causa de nuestra nacionalidad. Pero no fue pareja la opción hacia la ruta abierta. Unos la recorrieron con optimismo, otros con mal disimulada resignación y no pocos con hosca reticencia. Digamos, sí, que el balance fue de comprensión general, lo que alienta nuestra empresa y entona los espíritus para la prosecución de la lucha. Como siempre, la despiadada postura sectaria, sistemática a veces, de minorías resentidas o inadaptadas, no hace sino confirmar la regla de aquella humana comprensión general que exhibe a un pueblo vigoroso, seguro de su destino. Y es que en realidad nos exhibe como un país que renace, despertando con renovado empuje luego de su largo letargo yacente, y apunta un síntoma que

se refleja en la economía y que tiene sus implicancias en lo financiero.

He dicho que apunta un síntoma, es decir, que advertimos ya el indicio premonitorio, la anticipación anunciadora de la meta anhelada, del efecto buscado. Pero la enfermedad y la postración han sido largas, cuan graves, para que con anticipado e imprudente optimismo bajemos la guardia y abandonemos las previsiones. Antes al contrario, los síntomas evidencian, más que la recuperación total de la salud y la reanudación de una existencia normal, el vigor latente y actuante de un organismo excepcionalmente dotado, capaz de revitalizarse por sus propias defensas, y que sabrá salir airoso de cualquier trance si somos capaces de encauzar su conducta y aprovechar sus posibilidades. Y en esta tarea estamos, tarea odiosa a veces, porque toca frenar aspiraciones incontenidas e incontinentes e impulsos noblemente ambiciosos que en cada capullo que aún pugna por florecer computan por anticipado un fruto en sazón.

—Entra en el recinto y ocupa una banca en el hemiciclo el señor ministro de Economía e interino de Trabajo y Seguridad Social, ingeniero Alvaro C. Alsogaray.

**Sr. Bértora.** — Somos incapaces, por temperamento y por vocación, de frenar un anhelo, de apagar una fe, de restringir un progreso, y es por eso y para eso —fruto de nuestro contacto con la parquedad de los números y con el viviente acaecer nacional— que queremos marcar bien la distinción entre la realidad palpable y conquistada, con lo que podría ser, sin análisis, una mera sensación subjetiva y alucinante.

Este presupuesto, como el anterior, no da seguramente satisfacción a grandes problemas sociales y económicos, que quedan así en latencia, acordando prioridad a inversiones productivas, capaces éstas, por sí solas, de resolver los anhelos insatisfechos.

Sabemos todos, señor presidente, que a partir de la crisis excepcional de 1930 muchos de los principios de técnica presupuestaria enunciados por Say hace más de 70 años, han perdido parte de su vigencia, o al menos de su intangibilidad; en especial, el del equilibrio. Pero no porque no sigan siendo aconsejables ni convenientes, sino porque a veces deben ceder a otras exigencias tanto o más importantes que la del propio equilibrio presupuestario.

Por ello queremos hacernos cargo del especioso argumento, tan llevado y tan traído, de que nuestro renovado empeño en equilibrar nuestro presupuesto es la resultancia de una exigencia impuesta por compromisos internacionales. Y para ser más concretos, por los que el país contrajo con el Fondo Monetario Internacional antes de la ascensión de este gobierno.



Y yo me pregunto, señor presidente: resultancia o no de una exigencia que fluye de obligaciones de este tipo, a cuyo cumplimiento podríamos estar constreñidos como fruto de una continuidad jurídica que nos hicimos el propósito de respetar, ¿tal medida en materia financiera —la del equilibrio presupuestal—, es o no aconsejable? ¿Beneficia o no al saneamiento de las finanzas públicas y a la expansión de la economía?

Porque si nuestro criterio —tanto el del gobierno como el de sus detractores— es coincidente en cuanto a la bondad de esta medida de saneamiento financiero, la objeción carece de relevancia, pues, impuesta o no la medida, igualmente hubiéramos perseguido la misma meta e iguales objetivos.

No queremos con esto significar que la preparación y ejecución de un presupuesto deba estar signada a ultranza por la eliminación del déficit, sino que ella entraña la norma, lo saludable, lo conveniente; pero sin desmedro de una prudente elasticidad que impida la amputación de los rubros esenciales. Si no sería como dejarse morir por no endeudarse en la farmacia.

No siempre el obtener superávit significa o entraña un buen manejo de los negocios públicos. Interesa también el resultado de la gestión. Pueden obtenerse mayores ingresos que egresos, pero ser fruto del agobio de impuestos o de la privación de servicios o inversiones esenciales, y ello no podría entrañar, como norma generalizada, una buena gestión. Lo bueno es lo eficiente; pero puede no ser lo barato.

Señor presidente: hemos hablado hasta aquí de prudencia y de contención. ¿Significa ello que carezcamos de fe en el porvenir que se avecina? ¿Es que dudamos acaso del triunfo final de nuestras potencias creadoras? En absoluto, señor presidente. Constituimos un pueblo fuerte y viril, crisol de razas que habita una porción del continente, dotado de todas las virtualidades. Pueblo magnífico, dueño de una pujanza que no desfallece y un suelo feraz con todos los climas en la dilatada extensión de nuestra patria. ¿Cómo hemos, entonces, de dudar de un presente cuajado de un promisorio mañana, en gestación? Si no lo dudan los de afuera, que presurosos vuelcan sus créditos para nuestra expansión industrial y el pujante desarrollo de nuestra economía, ¿cómo hemos de dudarlos nosotros mismos, que vemos, día a día, recuperarse el valor adquisitivo de nuestra moneda y estabilizarse el costo de nuestros precios internos, y que hemos visto pasar al país por un agudo estado de crisis sin el pavoroso fantasma de la desocupación? ¿Cómo dudar, al ver fortalecerse el mercado de capitales, encauzarse el ahorro popular por carriles no especulativos, expandirse la producción y proliferar las fábricas y nuevas industrias a lo largo y a lo ancho de toda la República?

¿Es que acaso no vemos incorporarse nuevos rubros de elaboraciones a la larga lista con que ya cuenta el país, y que la Nación, capitalizándose, entra por sí misma en un afirmado proceso de expansión?

Señor presidente: dentro de este panorama entra así a considerar esta Cámara el proyecto de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal de 1961, iniciado el 1º de noviembre próximo pasado y que terminará el 31 de octubre venidero, el que, sancionado por la otra rama legislativa, ha merecido de parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en cuyo nombre informo, el dictamen favorable que sometemos a la consideración del cuerpo.

Cumplimos con este acto la concreción de la segunda etapa dentro del clásico y conocido proceso de la confección del presupuesto: preparación, formulación, aprobación y ejecución. Lo hacemos cumpliendo un imperativo constitucional, cual es el establecido por el artículo 67, inciso 7º, de nuestra Carta Magna al disponer que corresponde al Congreso fijar anualmente el presupuesto de gastos de la administración de la Nación y aprobar o desechar la cuenta de inversión.

Sabido es que en nuestro país la formulación del presupuesto corresponde al Poder Ejecutivo. La ley 12.961, de contabilidad, lo disponía expresamente, y la vigente, aprobada por decreto ley 23.354 y ratificada por ley 14.467, así lo establece al determinar en su artículo 12 que «el Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Hacienda, presentará al Congreso antes del 15 de julio de cada año el proyecto de presupuesto general para el siguiente ejercicio».

Tradicionalmente el referido proyecto era remitido a la Cámara de Diputados, aunque ninguna disposición constitucional lo estableciera, a no ser la del artículo 44, que dispone taxativamente que incumbe a dicha Cámara exclusivamente la iniciativa en materia de leyes sobre contribución.

La primera disposición legal que establece que la Cámara de Diputados es iniciadora en materia presupuestaria es la del citado artículo 12 de la actual ley de contabilidad, que en su segundo párrafo determina que «si la Cámara de Diputados, que actuará como Cámara de origen, no recibiera dicho proyecto en la época indicada —se refiere al 15 de julio— iniciará la consideración del asunto tomando como anteproyecto el presupuesto en vigor». Salvo esta circunstancia, que no se ha concretado nunca en la práctica, el control preventivo ejercido por el Parlamento mediante la fijación del presupuesto es, sobre todo, de orientación y de equilibrio. Su voto representa el consenso sobre el programa de gobierno y sobre los principios básicos de su política financiera.

Es el Poder Ejecutivo el que, por su contacto diario con la administración, está en mejores

condiciones de valuar los gastos y recursos, tarea ésta que está centralizada en la Secretaría de Estado de Hacienda, a la que incumbe, por disposición expresa de la ley orgánica de ministerios, «todo lo inherente al patrimonio, recursos y gastos del Estado» y en particular «lo relativo al presupuesto general de la Nación y cuenta de inversión».

Asimismo, la ley de contabilidad establece en su artículo 14 que en todo proyecto de ley del poder administrador o decreto que en forma directa o indirecta modifique la composición o contenido del presupuesto general, tendrá intervención el citado departamento de Estado, sin perjuicio de la que le compete al ministerio correspondiente.

La responsabilidad del presidente de la República en la materia surge directamente del texto constitucional. En efecto, el artículo 86, inciso 13, determina que aquél «hace recaudar las rentas de la Nación y decreta su inversión con arreglo a la ley o presupuesto de gastos nacionales». En otros Estados, en cambio, dicha responsabilidad recae sobre todo el gabinete, pues los demás ministros, a la par del de Hacienda, defienden y sostienen los planes en sus respectivas jurisdicciones.

Pese a que los tratadistas han apoyado distintas situaciones, en general la doctrina se inclina a acordar al Parlamento un poder moderador, pero no de iniciativa; régimen éste no adoptado en nuestro país en el orden federal, excepto en el caso ya apuntado, y al que me he referido precedentemente. Si bien es cierto que se critica que el Congreso, en virtud de disposiciones incluidos en sucesivas leyes de presupuesto, va ya paulatinamente delegando facultades que le son privativas, es bueno recordar que en materia de gastos el presupuesto es preventivo y limitativo en concepto de inversión y en el monto; y en lo que respecta a los recursos, es preventivo pero no limitativo, por cuanto el derecho de exigirlos y la obligación de recaudarlos no nacen, en nuestro régimen vigente, de dicha ley anual, sino en los distintos textos legales que reglan la materia impositiva. Sentado, entonces, que por nuestra ley de contabilidad es al Poder Ejecutivo al que compete la iniciativa en la preparación del presupuesto, la que se efectúa por conducto de la Secretaría de Hacienda, no por demás conocida resultará menos oportuna, aunque más no sea una breve referencia a la forma como encara y ejecuta el citado departamento de Estado tan delicada función. Creo que la crudeza de Galdstone al decir que el ministro de Hacienda «es un hombre a quien se obliga a pasar por una selva espinosa, llevando en sus manos dos platillos del presupuesto en perfecto equilibrio, en medio de ladrones que lo acosan y atacan» refleja, en sentido figurado, claro está, la verdadera batalla que debe librar desde el momento inicial en que va recibiendo los anteproyectos de presupuesto de

los distintos ministerios y secretarías de Estado, hasta la redacción final del proyecto que se someterá a la consideración del Poder Legislativo.

Creo también, con Thiers, que se requiere «cierta ferocidad» para decir «no» a la mayoría de las peticiones que se le formulan en procura de incrementaciones crediticias para tal o cual servicio, para tal o cual creación. Es la misma «ferocidad» que debemos adoptar las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, cuando una vez radicado el proyecto en las mismas, tenemos que negar demandas que, aunque justas, razones de índole financiera las hacen irrealizables. Es que cada uno, atrincherado en su propio sector por formación profesional o por inclinaciones espirituales, atribuye y acuerda a las actividades de su dirección un plano preferente de vital necesidad y por sobre todos los demás rubros del plan de gastos. Quizás todos tengan razón, pero no tal vez en la medida de sus demandas, o al menos en la medida de las disponibilidades del Tesoro. ¿Cómo podría discutirse la conveniencia de alcanzar un grado óptimo en la salud de la población si hasta por razones no ya humanas sino económicas, va en ello el deterioro de la producción y el aumento de las cargas sociales? Y qué no decir de la instrucción pública y de la capacitación técnica y de la sanidad vegetal y animal, en donde las plagas anualmente deterioran riqueza equivalente a 20 millones de pesos —más que el déficit de nuestro presupuesto—, y así sucesivamente la justicia, los servicios públicos, las fuerzas para la preservación del orden y la defensa nacional, atribuyéndose cada uno una preeminencia según la cual ninguna de las otras podría subsistir sin estar cubiertas las necesidades de ellas mismas. Y todos tienen razón y no la tienen a la vez, porque dentro de ese juego de deducciones, la primera preferencia sería la de la Dirección General Impositiva, sin cuyo concurso no habría recaudación y sin recursos no funcionarían, o funcionarían retaceados, la mayor parte de los organismos del Estado. Como bien ha dicho un ex ministro de Hacienda, el equilibrio del presupuesto en una nación, puede compararse con lo que en la vida privada significa que el jefe de una familia, después de una vida de despilfarro, resuelve algún día poner orden en los gastos de su casa; aquello que ha sido un hogar alterado por el descontento y la discordia, será en adelante un centro de alegría y de felicidad, ya que las necesidades de la esposa y de los hijos serán satisfechas, si se regulan. En los estados, cuando se llega a esta situación, hasta las conspiraciones se desvanecen.

Cuando el año pasado, desde esta misma banca y asumiendo idéntica representación que la que ahora ejerzó, me cupo el honor de informar los proyectos de presupuesto para los años 1958/59 y 1959/60, expresé conceptos, hice acotaciones y llegué a conclusiones finales que tendría que repetir en esta oportunidad, y a las que

ahora me remito. No podría ser de otra manera, porque el proyecto en examen sigue la política que sobre la materia se trazara el Poder Ejecutivo desde que asumió el gobierno, materializada en los proyectos a que he hecho referencia, política que compartimos, no por sumisión incondicional a la misma, lo que sería impropio de nuestras convicciones republicanas, sino por espontánea adhesión, considerando que es la única que debe seguirse en la actual coyuntura económica.

Es indudable que es necesario actuar con un profundo sentido de la mesura y de la prudencia para obtener un equilibrio presupuestario acorde con las necesidades más apremiantes de los distintos servicios que atiende el Estado, y con los recursos con que el mismo cuenta para su financiación.

No voy a repetir, pues, lo que dije hace un año sobre esta materia, pero quiero expresar que no puede compartirse a la letra el principio ortodoxo enunciado por Say cuando afirmaba que lo mejor es gastar menos; lo primordial y difícil a la vez es, dentro de las posibilidades de los ingresos que se estiman para un ejercicio fiscal determinado, volcar los mismos en aquellas prioridades más esenciales para la vida del país, regulando esas prioridades conforme a cada momento histórico, pero cuidando en todo caso que medidas drásticas de supresión de déficit no provoquen contracciones rigurosas de perniciosos efectos en la economía. Siempre lo financiero debe ir del brazo de lo económico.

No por muy sabido también es menos cierto que así como uno de los factores que conducen a la inflación es el exceso de los gastos públicos, dicho incremento progresivo no es exclusivo de nuestro país, sino que es un fenómeno que lo experimentan o han experimentado todas las naciones en mayor o menor grado. El punto es importante porque el gasto público tiene gravitación decisiva sobre la distribución de la renta nacional, razón por la cual su inversión —la de los gastos públicos— debe reflejarse en beneficio del mayor número de la población, fijándose el orden de prioridades que así lo determinen.

Autores argentinos y extranjeros han tratado de explicar este avance casi incontenible de las expensas públicas. Entre los primeros, Morselli lo define como «el gran desarrollo de la vida social y económica del pueblo en el último siglo», y afirma que esta tendencia secular de los gastos del Estado ya ha asumido la categoría de ley histórica.

En el año 1908, en su cátedra de finanzas en Córdoba, enunciaba el profesor Ruiz Moreno como causales de incrementación de dichos gastos en nuestro país, entre otras, el aumento de las necesidades públicas determinado por el acrecentamiento rápido de la población; el aumento de la deuda pública; la depreciación de la moneda y el encarecimiento de la vida, que

provocan el aumento de precios y salarios; las guerras civiles e internacionales que se han producido en el transcurso de su historia; el fomento nacional; el cumplimiento de una acción oficial en procura del desenvolvimiento y aumento de la riqueza nacional; el aumento de la cantidad de agentes y funcionarios, así como el derroche del patrimonio nacional; la falta de control en la administración; los gastos militares; la política interna, que nos hace ir marchando al tanteo en la vida republicana.

Referido al aumento incesante de los gastos públicos, siempre recuerdo aquella anécdota atribuida al ministro de Finanzas Villé, cuando al presentar ante el parlamento francés el presupuesto de 1826, el de más altas cifras hasta entonces, exclamó enfáticamente ante quienes se alarmaban de los guarismos: «Señores, salud a estas cifras, porque no las volveréis a ver más». Y así fue, efectivamente, porque esas cifras, no obstante esa alarma que tenían los parlamentarios franceses de aquel entonces, fueron sobrepasadas por todos los presupuestos que le sucedieron.

He querido significar con estas palabras, referidas a la tendencia progresiva de crecimiento en los gastos públicos, que la misma —repito— no es un fenómeno aislado y exclusivo de nuestro país, sin querer por ello, claro está, asumir la defensa de los déficit presupuestarios resultantes de esa tendencia de incrementación, aunque ello podría ser justificable si fueran el resultado de erogaciones destinadas a la adquisición de bienes de capital, sobre todo reproductivos, especialmente en países como el nuestro, en pleno desarrollo, y pudiesen ser enjugados por medios no inflacionarios.

Un ejemplo de lo que acabo de expresar lo ha dado Italia. En efecto, en una conferencia pronunciada por el doctor Alejandro Shaw en la Bolsa de Comercio el 23 de noviembre próximo pasado sobre el tema «El milagro italiano», ha dicho al respecto que el presupuesto italiano, que en un momento dado, como en otros países, era la causa principal de la inflación, fue reduciéndose poco a poco. Hoy se ha llegado a la situación en que el déficit del presupuesto se enjuga con emisiones a largo plazo, y se limita al monto que esas emisiones pueden alcanzar. El freno es, pues, el propio mercado monetario. En esta forma el déficit estatal ha dejado de ser un factor inflacionario.

Es una medida, señor presidente, análoga a la contenida en los lineamientos del programa monetario que el gobierno argentino se propone llevar a cabo durante el año 1961. En razón de que durante los últimos meses del ejercicio 1959/60 se logró prácticamente la financiación de los gastos públicos con el producido de los impuestos y con los recursos obtenidos en el mercado interno de capital, el gobierno proyecta ahora no aumentar su deuda con el Banco Central ni financiar, como hasta ahora, su déficit

con préstamos respaldados por créditos a corto plazo obtenidos en el exterior, sino proseguir con el programa trazado y financiar el desequilibrio del presupuesto con aquellos medios no inflacionarios.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Legislación General, doctor Bartolomé Pérez.

**Sr. Bértora.** — Claro está que se pondrá a cubierto de cualquier contingencia reservando el saldo no usado de los 3.700 millones con que el gobierno contaba al 31 de octubre de 1960, correspondiente a los préstamos con respaldo financiero de divisas, que se previó serían utilizados en el ejercicio 1959/60 para cubrir sus necesidades de Tesorería. Incluso el plus de recaudaciones ha permitido al Tesoro reintegrar sustanciales adelantos del Banco Central, y tal mejora general en la situación financiera del gobierno ha permitido, asimismo, al citado Banco Central reducir la exigencia de los encajes sobre depósitos de los bancos comerciales, con su saludable repercusión sobre el crédito, acrecentando los márgenes para sus operaciones de cartera.

Séame permitido hacer una pequeña acotación sobre una noticia reciente publicada en la mayoría de los diarios de nuestro país que corrobora lo que acabo de expresar sobre la curva ascendente en las expensas públicas, reflejadas en los presupuestos de los distintos países. Dicha noticia extraída del diario «La Prensa», del 25 de noviembre próximo pasado, dice textualmente: «El secretario general de las Naciones Unidas, señor Hammarskjöld, ha formulado declaraciones pesimistas sobre las finanzas de la institución internacional. Según sus noticias, el ejercicio actual terminará el 31 de diciembre con un déficit de dos millones de dólares, caso sin precedentes en la historia del organismo encargado de la preservación de la paz. Como es natural el aumento de las erogaciones se manifiesta año por año, como consecuencia del crecimiento de los servicios y de las más frecuentes misiones destinadas a estudiar problemas en distintas partes del mundo. Crece el número de funcionarios auxiliares y también los gastos generales, pero las cuotas impuestas a cada miembro no siguen la misma progresión, pues hay una resistencia natural, particularmente entre los innumerables países de escasos recursos, para aceptar mayores tributos. Sería interesante establecer, entre tanto, si la incorporación de nuevos países, que ha sido tan pronunciada en el año presente, favorece o perjudica el equilibrio del presupuesto de la institución, puesto que si por un lado significa mayor número de cuotas, por otro importa un aumento de gastos proporcional al número de miembros y no al monto de las respectivas contribuciones». Luego de otras consideraciones termina el articulista expresando: «Las Nacio-

nes Unidas ha dicho el secretario general deben afrontar las consecuencias de sus propios actos. Esto es evidente, ya sean con referencia a la institución o a cada uno de sus miembros. Si se reconocen los beneficios que ellos reciben de su organismo desde un punto de vista general, no podrá dudarse de la equidad de retribuirlos como está dispuesto».

Creo, señor presidente, que existe tanta analogía, tantos puntos de coincidencia entre las causales que han motivado la situación presupuestaria deficitaria de la UN, que estoy comentando, con las que influyen en la de los propios países miembros, entre ellos el nuestro, que creo resulta innecesario entrar en mayores consideraciones sobre el particular.

Retomando el hilo de mi exposición he de referirme ahora a las características que presenta el plan de erogaciones y recursos para el ejercicio fiscal ya iniciado que elaborado por el Poder Ejecutivo con la moderación a que he referido, ha sido enviado en forma simultánea a ambas Cámaras del Poder Legislativo, lo cual ha permitido que el Senado en general y la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en particular, hayan podido estudiarlo y analizarlo en forma exhaustiva, sin el apremio que pareciera trasuntar el hecho de que a pocas horas diríamos de su sanción en la Honorable Cámara de Diputados, estemos en condiciones de encarar su tratamiento en este Honorable Senado.

No he de entrar en mayores detalles en lo que respecta a la estructura del precitado proyecto, por cuanto éste, al igual que los sancionados por las leyes 15.020 y 15.021, para los dos ejercicios fiscales anteriores, se encuadra en las prescripciones de la ley de contabilidad.

Mantiene, por lo tanto, las dos grandes secciones denominadas Presupuesto de Gastos y Presupuesto de Inversiones Patrimoniales, compuesta la primera por los sectores 2 y 3, Servicios y Deuda Pública, respectivamente e integrada la segunda por los sectores 4, Inversiones y 5 Trabajos Públicos. El sector Servicios comprende las erogaciones de los poderes Legislativo y Judicial, de la Presidencia de la Nación, de los distintos ministerios y secretarías de Estado, del Tribunal de Cuentas de la Nación y de los anexos Obligaciones a cargo del Tesoro y Crédito de Emergencia, gastos que se financian al igual que los del sector 3, Deuda Pública, con recursos de Rentas Generales.

El sector a que me estoy refiriendo —el de Servicios— se compone también de los anexos relativos a Cuentas Especiales y Organismos Descentralizados, cuyas erogaciones se atienden con los recursos propios provenientes de los mismos, sin perjuicio de los aportes que con cargo a Rentas Generales y canalizados por conducto del anexo 31, Obligaciones a cargo del Tesoro, realiza el Estado.

Los sectores 4 y 5, Inversiones y Trabajos Públicos, presentan analogías, en cuanto a su aspecto estructural, con el de Servicios.

En efecto, al igual que en este último, se discriminan las erogaciones que, aumentando su patrimonio y financiadas con recursos provenientes del uso del crédito, han de efectuar los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y el Tribunal de Cuentas de la Nación, incluyendo a su vez un crédito global de emergencia y el anexo Obligaciones a cargo del Tesoro, el que contribuye con sus aportes a la antifinanciación de las expensas que para idénticos fines —inversiones patrimoniales— realizarán en el ejercicio las entidades descentralizadas y las cuentas especiales.

Habiendo dejado así expuestas, en breve síntesis, las secciones y sectores que integran el presupuesto general, he de entrar al comentario de las cifras del mismo tal cual fueron proyectadas por el Poder Ejecutivo, para luego analizar las modificaciones introducidas a aquéllas por la otra rama legislativa y las razones por las cuales la comisión, por encontrarlas justificadas, las hace suyas y aconseja su aprobación.

Antes de entrar en el árido campo de los guarismos y para una mejor comprensión de las cifras que he de señalar, me permito una pequeña acotación: la Comisión de Presupuesto

y Hacienda ha confeccionado una serie de cuadros analíticos, los que se encuentran sobre las bancas de mis distinguidos colegas, y a los cuales me iré remitiendo en el curso de este informe.

Solicito, pues, que las citas que haga de los mismos se interpreten como pedido de inserción en el Diario de Sesiones a la altura de la exposición en que dichas citas sean efectuadas, y que los cuadros que no sean mencionados, pero que son ilustrativos para la interpretación del presupuesto, se incorporen igualmente al final de la misma.

**Sr. Presidente (Pérez).** — Si hay asentimiento se procederá en la forma solicitada por el señor senador.

—Asentimiento.

**Sr. Bértora.** — Como puede apreciarse en el cuadro número 1, el total del presupuesto ha sido fijado en \$ 117.677.500.000, de los cuales \$ 92.148.400.000 corresponden a la sección gastos y \$ 25.529.100.000 a la de inversiones patrimoniales, con una relación porcentual del 78,30 y 21,70 por ciento, respectivamente, sobre el monto total.

CUADRO Nº 1

CUADRO RESUMEN

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1961

(En millones de m\$n.)

	Servicios	Inversiones	Trabajos públicos	Total general	%
Administración central ....	66.489,9 (1)	1.013,2	7.870,1	75.373,2	64,05
Cuentas especiales .....	4.923,4	1.024,1	913,9	6.861,4	5,83
Organismos descentralizados	20.735,1	3.208,0	11.499,8	35.442,9	30,12
Total general .....	92.148,4	5.245,3	20.283,8	117.677,5	100,00
% .....	78,30	4,46	17,24	100,00	

(1) Incluye servicio de la deuda pública.

Los \$ 92.148,4 millones asignados a gastos se descomponen en la siguiente forma: Servicios, \$ 84.468,5 millones, es decir, el 71,77 por ciento; y Deuda Pública, \$ 7.679,9 millones, o sea, el 6,53 por ciento.

La Sección Inversiones Patrimoniales, para la cual, como he dicho, se han asignado \$ 25.529,1 millones, se integra con el sector Inversiones, \$ 5.245,3 millones, y Trabajos Públicos, \$ 20.283,8 millones, cifras que representan para cada tipo de erogación el 4,46 por ciento y el 17,24 por ciento, respectivamente.

Los guarismos mencionados precedentemente están influidos por aquellos importes que —sobre todo en el anexo Obligaciones a cargo del

Tesoro— constituyen aportes o contribuciones que efectúa el Estado a fin de financiar, principalmente, los presupuestos de cuentas especiales y organismos descentralizados.

En este sentido el proyecto que estamos considerando presenta una novedad interesante y digna de mención, cual es la de identificar en un inciso denominado «Transferencias» los créditos destinados específicamente a los fines que he puntualizado. Ello permite, mediante una operación de despojo, reajustar cifras —como puede verse en los cuadros 2, 3, 25 y 26— para llegar a un presupuesto depurado, eliminando la duplicidad de los importes a que he hecho referencia.

CUADRO Nº 2

## CUADRO RESUMEN

**TOTALES GENERALES DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1961. —  
DEDUCCION TRANSFERENCIAS**

(En millones de m\$n.)

	Administración central	Cuentas especiales	Organismos descentralizados
Servicios .....	66.489,9 (1)	4.923,4	20.735,1
Transferencias .....	4.753,4	5,1	152,8
Totales depurados ....	61.736,5	4.918,3	20.582,3
Inversiones .....	1.013,2	1.024,1	3.208,0
Transferencias .....	355,1	—	808,5
Totales depurados ....	658,1	1.024,1	2.399,5
Trabajos públicos .....	7.870,1	913,9	11.499,8
Transferencias .....	2.991,3	—	—
Totales depurados ....	4.878,8	913,9	11.499,8

(1) Incluye servicio de la deuda pública.

CUADRO Nº 3

## CUADRO RESUMEN

**PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1961. — DEDUCIDAS TRANSFERENCIAS**

(En millones de m\$n.)

	Servicios	Inversiones	Trabajos públicos	Total general	%
Administración central ....	61.736,5 (1)	658,1	4.878,8	67.273,4	61,94
Cuentas especiales .....	4.918,3	1.024,1	913,9	6.856,3	6,31
Organismos descentralizados	20.582,3	2.399,5	11.499,8	34.481,6	31,75
Total general .....	87.237,1	4.081,7	17.292,5	108.611,3	100,00
% .....	80,32	3,76	15,92	100,00	

(1) Incluye servicio de la deuda pública.

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 1961  
SECTOR 2 - TITULO 1 . SERVICIOS

CUADRO Nº 25

TRANSFERENCIAS  
(En millones de m\$ñ.)

A N E X O	A CUENTAS ESPECIALES			A ORGAN. DESC.		TOTALES	
	De rentas generales	De administ. central	De anexo 31	De administ. central	De anexo 31	De administ. central	De anexo 31
1 Presidencia de la Nación .....	26,0	26,0	—	—	315,9	26,0	315,9
2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto .....	5,0	5,0	—	—	—	5,0	—
5 Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública .....	—	—	—	—	717,4	—	717,4
25 Ministerio del Interior .....	9,8	9,8	—	—	24,0	9,8	24,0
28 Ministerio de Educación y Justicia .....	—	—	15,9	—	3.381,3 (1)	—	3.397,2
31 Obligaciones a cargo del Tesoro .....	4.675,4	—	15,9	—	4.659,5	—	—
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ..	—	—	—	—	—	—	—
51 Secretaría de Agricultura y Ganadería .....	—	—	—	—	91,4	—	91,4
54 Secretaría de Comercio .....	—	—	—	—	—	—	—
55 Secretaría de Industria y Minería .....	—	—	—	—	49,1	—	49,1
60 Ministerio de Defensa Nacional .....	0,3	0,3	—	—	—	0,3	—
61 Secretaría de Guerra .....	7,7	7,7	—	—	65,4	7,7	65,4
62 Secretaría de Marina .....	—	—	—	—	12,7	—	12,7
63 Secretaría de Aeronáutica .....	2,0	2,0	—	—	2,3	2,0	2,3
71 Secretaría de Obras Públicas .....	—	—	—	—	—	—	—
72 Secretaría de Comunicaciones .....	27,2	27,2	—	—	—	27,2	—
TOTALES .....	4.753,4	78,0	15,9	—	4.659,5	78,0	4.675,4

(1) Incluye \$ 3.113,4 de contribución a las universidades nacionales.

A N E X O	Total transferencias	De cuentas especiales	A rentas generales	De organismos descentra- lizados	A organismos descentra- lizados
1 Presidencia de la Nación .....	—	—	—	—	—
2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto .....	—	—	—	—	—
5 Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública .....	—	—	—	—	—
25 Ministerio del Interior .....	—	—	—	—	—
28 Ministerio de Educación y Justicia .....	—	—	—	—	—
31 Obligaciones a cargo del Tesoro .....	—	—	—	—	—
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ..	—	—	—	89,6	89,6
51 Secretaría de Agricultura y Ganadería .....	—	—	—	—	—
54 Secretaría de Comercio .....	—	5,1	5,1	—	—
55 Secretaría de Industria y Minería .....	—	—	—	—	—
60 Ministerio de Defensa Nacional .....	—	—	—	—	—
61 Secretaría de Guerra .....	—	—	—	—	—
62 Secretaría de Marina .....	—	—	—	—	—
63 Secretaría de Aeronáutica .....	—	—	—	—	—
71 Secretaría de Obras Públicas .....	—	—	—	63,2	63,2
72 Secretaría de Comunicaciones .....	—	—	—	—	—
TOTALES .....	4.753,4	5,1	5,1	152,8	152,8

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 1961  
TRANSFERENCIAS

CUADRO N° 26

SECTOR 4 - TITULO I - INVERSIONES  
SECTOR 5 - TITULO II - TRABAJOS PUBLICOS  
(En millones de m\$u.)

	De uso del crédito	A cuentas especiales	A organismos descentral.	De organismos descentral.	A organismos descentral.	De uso del crédito	A cuentas especiales	A organismos descentral.
1. Presidencia de la Nación .....	—	—	30,9	—	—	—	—	17,0
2. Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública .....	—	—	39,2	—	—	—	—	—
25. Ministerio del Interior .....	—	—	—	—	—	—	—	124,2
28. Ministerio de Educación y Justicia .....	—	0,2	269,9 (1)	—	—	—	—	170,0 (2)
31. Obligaciones a cargo del Tesoro .....	355,1	—	—	—	—	2.991,3	—	—
33. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social .....	—	—	—	808,5	808,5	—	—	—
34. Secretaría de Agricultura y Ganadería .....	—	—	2,4	—	—	—	—	18,7
35. Secretaría de Industria y Minería .....	—	—	0,7	—	—	—	—	55,3
36. Secretaría de Energía y Combustibles .....	—	—	—	—	—	—	—	1.005,0
51. Secretaría de Guerra .....	—	—	0,1	—	—	—	—	203,4
52. Secretaría de Marina .....	—	—	1,0	—	—	—	—	—
53. Secretaría de Aeronáutica .....	—	—	0,1	—	—	—	—	—
71. Secretaría de Obras Públicas .....	—	—	10,8	—	—	—	—	1.400,0
Totales .....	355,1	0,2	354,9	808,5	808,5	2.991,3	—	2.991,3

(1) Incluye \$ 262,8 de contribución a las universidades nacionales.

(2) Corresponde a contribución a las universidades nacionales.



Aplicando idéntico criterio, se ha suprimido del presupuesto general el que correspondía a los servicios auxiliares de Obras Sanitarias de la Nación, dado que, como es sabido, el mismo se financiaba con los recursos propios y/o con las sumas que le transfería el citado organismo descentralizado con cargo a sus autorizaciones presupuestarias, lo cual, a la postre, representaba una duplicación de las mismas.

Acabo de expresar que el título I, Servicios, representa con sus 84.468,5 millones de pesos proyectados, el 71,77 por ciento. ¿Cómo se discriminan los referidos guarismos? Lo indicaré en cifras globales, por cuanto el detalle, anexo por anexo, puede observarse en el cuadro número 5.

CUADRO Nº 5

## PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 1961

## SECTOR 2 - TITULO I - SERVICIOS

(En millones de m\$n.)

ANEXO O JURISDICCION	RENTAS GENERALES			CUENTAS ESPECIALES			ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
	Créditos brutos	Economía a realizar	Créditos netos	Créditos brutos	Economía a realizar	Créditos netos	Créditos brutos	Economía a realizar	Créditos netos
1 Presidencia de la Nación .....	207,9	31,2	176,7	45,1	4,5	40,6	358,1	35,8	322,3
2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto .....	1.128,1	169,2	958,9	9,1	0,9	8,2	—	—	—
5 Ministerio de Asistencia Social y Sa- lud Pública .....	3.076,6	461,5	2.615,1	36,3	3,6	32,7	803,1	80,3	722,8
22 Congreso de la Nación .....	330,1	49,5	280,6	—	—	—	—	—	—
23 Corte Suprema y Tribunales Inferiores	881,8	132,3	749,5	—	—	—	—	—	—
25 Ministerio del Interior .....	2.836,1	425,4	2.410,7	40,2	4,0	36,2	47,9	4,8	43,1
28 Ministerio de Educación y Justicia ..	10.482,0	1.572,3	8.909,7	60,1	6,0	54,1	4.536,7	125,9	4.410,8
30 Tribunal de Cuentas de la Nación ..	102,5	15,4	87,1	—	—	—	—	—	—
31 Obligaciones a cargo del Tesoro ....	11.168,6	257,2	10.911,4	—	—	—	—	—	—
32 Crédito de emergencia .....	5.700,0	—	5.700,0	—	—	—	—	—	—
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad So- cial .....	211,3	31,7	179,6	22,6	2,3	20,3	1.061,7	129,5	932,2
50 Ministerio de Economía .....	30,4	4,5	25,9	—	—	—	—	—	—
51 Secretaría de Agricultura y Ganadería	871,9	130,8	741,1	—	—	—	2.134,1	213,4	1.920,7
52 Secretaría de Hacienda .....	2.010,8	301,6	1.709,2	2.579,5	257,9	2.321,6	12,3	1,2	11,1
53 Secretaría de Finanzas .....	17,9	2,7	15,2	—	—	—	4.115,8	427,8	3.688,0
54 Secretaría de Comercio .....	430,6	64,6	366,0	312,7	30,8	281,9	131,5	13,1	118,4
55 Secretaría de Industria y Minería ...	2,0	0,3	1,7	—	—	—	91,7	9,2	82,5
56 Secretaría de Energía y Combustibles	1,7	0,3	1,4	—	—	—	30,1	3,0	27,1
60 Ministerio de Defensa Nacional .....	84,1	12,6	71,5	0,7	0,1	0,6	—	—	—
61 Secretaría de Guerra .....	10.065,4	1.509,8	8.555,6	296,9	29,7	267,2	3.538,8	353,9	3.184,9
62 Secretaría de Marina .....	6.835,8	1.025,3	5.810,5	1.458,4	145,8	1.312,6	14,1	1,4	12,7
63 Secretaría de Aeronáutica .....	4.542,1	681,3	3.860,8	126,7	12,7	114,0	2,6	0,3	2,3
70 Ministerio de Obras y Servicios Pú- blicos .....	16,7	2,5	14,2	—	—	—	—	—	—

ANEXO O JURISDICCION	RENTAS GENERALES			Cuentas Especiales			ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
	Créditos brutos	Economía a realizar	Créditos netos	Créditos brutos	Economía a realizar	Créditos netos	Créditos brutos	Economía a realizar	Créditos netos
71 Secretaría de Obras Públicas .....	947,8	142,2	805,6	433,4	43,3	390,1	5.547,5	455,8	5.072,3 *
72 Secretaría de Comunicaciones .....	4.416,6	662,5	3.754,1	45,7	4,6	41,1	—	—	—
73 Secretaría de Transporte .....	115,2	17,3	97,9	2,5	0,3	2,2	204,3	20,4	183,9
Totales .....	66.514,0	7.704,0	58.810,0	5.469,9	546,5	4.923,4	22.630,3	1.875,8	20.735,1 *

CUADRO Nº 5 (continuación)

ANEXO O JURISDICCION	TOTALES GENERALES					
	Créditos brutos	%	Economía a realizar	%	Créditos netos	%
1 Presidencia de la Nación .....	611,1	0,65	71,5	0,71	539,6	0,64
2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto .....	1.137,2	1,20	170,1	1,68	967,1	1,14
5 Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública .....	3.916,0	4,14	545,4	5,39	3.370,6	3,99
22 Congreso de la Nación .....	330,1	0,35	49,5	0,49	280,6	0,33
23 Corte Suprema y tribunales inferiores	881,8	0,93	132,3	1,31	749,5	0,89
25 Ministerio del Interior .....	2.924,2	3,09	434,2	4,29	2.490,0	2,95
28 Ministerio de Educación y Justicia .....	15.078,8	15,94	1.704,2	16,83	13.374,6	15,83
30 Tribunal de Cuentas de la Nación .....	102,5	0,11	15,4	0,15	87,1	0,10
31 Obligaciones a cargo del Tesoro .....	11.168,6	11,80	257,2	2,54	10.911,2	12,92
32 Crédito de emergencia .....	5.700,0	6,02	—	—	5.700,0	6,75
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social .....	1.295,6	1,37	163,5	1,61	1.132,1	1,34
50 Ministerio de Economía .....	30,4	0,03	4,5	0,04	25,9	0,03
51 Secretaría de Agricultura y Ganadería ..	3.006,0	3,18	344,2	3,40	2.661,8	3,15
52 Secretaría de Hacienda .....	4.602,6	4,87	560,7	5,54	4.041,9	4,78
53 Secretaría de Finanzas .....	4.133,7	4,37	430,5	4,25	3.703,2	4,38
54 Secretaría de Comercio .....	874,8	0,92	108,5	1,07	766,3	0,91
55 Secretaría de Industria y Minería .....	93,7	0,10	9,5	0,09	84,2	0,10
56 Secretaría de Energía y Combustibles ..	31,8	0,03	3,3	0,03	28,5	0,03
60 Ministerio de Defensa Nacional .....	84,8	0,09	12,7	0,13	72,1	0,09
61 Secretaría de Guerra .....	13.901,1	14,69	1.893,4	18,70	12.007,7	14,22
62 Secretaría de Marina .....	8.308,3	8,78	1.172,5	11,58	7.135,8	8,45
63 Secretaría de Aeronáutica .....	4.671,4	4,94	694,3	6,86	3.977,1	4,71
70 Ministerio de Obras y Servicios Públicos .....	16,7	0,02	2,5	0,02	14,2	0,02
71 Secretaría de Obras Públicas .....	6.928,7	7,32	641,3	6,33	6.288,0 *	7,42
72 Secretaría de Comunicaciones .....	4.462,3	4,72	667,1	6,59	3.795,2	4,49
73 Secretaría de Transporte .....	322,0	0,34	36,0	0,37	284,0	0,34
TOTALES .....	94.614,2	100,00	10.126,3	100,00	84.468,5 *	100,00

(\*) Deducido \$ 19,4 millones por contribución a Explotación Capital Federal en concepto de gastos de administración común (Administración General de Obras Sanitarias de la Nación).

Las erogaciones a financiar con recursos de rentas generales alcanzan a \$ 58.810 millones; las atendidas con recursos de cuentas especiales llegan a \$ 4.923,4 millones, y las que han de realizar las entidades descentralizadas con cargo a sus recursos se han fijado en \$ 20.735,1 millones.

Dichos importes representan por su orden el 49,97, el 4,18 y el 17,62 por ciento. Los créditos que configuran el anexo Servicios de la Deuda pública están constituidos por los conceptos e importes discriminados en el cuadro número 6, por lo cual no abundaré en mayores detalles en homenaje a la brevedad.

## CUADRO Nº 6

## PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 1961

## SECTOR 3 - TITULO II - DEUDA PUBLICA

## ANEXO SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

CONCEPTO	Créditos netos en millones de m\$.n.
Servicios de empréstitos emitidos en pesos moneda nacional .....	5.589,9
Servicio de intereses de bonos del Tesoro .....	50,0
Intereses de letras de tesorería y de otras obligaciones a corto plazo .....	1.345,0
Gastos relativos a la deuda pública .....	20,0
Servicio de nuevas obligaciones .....	550,0
Bonos nacionales para inversiones bancarias - decreto ley 13.127/57 - artículo 13 .....	125,0
Total .....	7.679,9

Para concluir el enunciado de las cifras fijadas en el proyecto que analizamos sólo resta referirme a aquellas que constituyen el presupuesto de inversiones patrimoniales, formado, como ya lo he dicho en el curso de este informe, por los sectores 4, inversiones, y 5, trabajos públicos.

El primero de ellos se discrimina en las erogaciones que se financian con el producido del uso del crédito por un importe de 1.013,2 millones de pesos y una relación porcentual del 0,86 %; en las que efectuarán —con cargo a sus propios recursos— los servicios de cuentas especiales por 1.024,1 millones, es decir el 0,87 %, y por último las expensas a realizar por los organismos descentralizados, y que totalizan 3.208 millones, o sea el 2,73 %, que serán autofinanciadas por las referidas entidades.

En el cuadro 7 pueden observarse en forma detallada los importes a que he hecho referencia precedentemente, por anexo o jurisdicción, y por los distintos tipos de financiación.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 1961

## SECTOR 4 - TITULO I - INVERSIONES

(En millones de m\$n.)

ANEXO O JURISDICCION	USO DEL CREDITO			Cuentas Especiales		Organismos Descentralizados			
	Créditos brutos	Economía a realizar	Créditos netos	Créditos brutos	Economía a realizar	Créditos netos	Créditos brutos	Economía a realizar	Créditos netos
1 Presidencia de la Nación .....	1,4	0,3	1,1	15,5	3,1	12,4	39,9	8,0	31,9
2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto .....	5,1	1,0	4,1	—	—	—	—	—	—
5 Ministerio de Asistencia Social y Sa- lud Pública .....	99,9	20,0	79,9	12,1	2,4	9,7	57,1	11,4	45,7
22 Congreso de la Nación .....	9,1	1,8	7,3	—	—	—	—	—	—
23 Corte Suprema y Tribunales Inferiores	10,1	2,0	8,1	—	—	—	—	—	—
25 Ministerio del Interior .....	28,9	5,8	23,1	43,3	8,7	34,6	3,1	0,6	2,5
28 Ministerio de Educación y Justicia ..	68,4	13,7	54,7	10,5	2,1	8,4	523,8	13,6	510,2
30 Tribunal de Cuentas de la Nación ..	0,1	—	0,1	—	—	—	—	—	—
31 Obligaciones a cargo del Tesoro ....	449,1	18,8	430,3	—	—	—	—	—	—
32 Crédito de emergencia .....	100,0	—	100,0	—	—	—	—	—	—
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad So- cial .....	0,5	0,1	0,4	0,1	—	0,1	1.635,2	4,5	1.630,7
50 Ministerio de Economía .....	0,3	—	0,3	—	—	—	—	—	—
51 Secretaría de Agricultura y Ganadería	33,4	6,7	26,7	—	—	—	192,6	38,5	154,1
52 Secretaría de Hacienda .....	90,5	18,1	72,4	289,0	57,8	231,2	2,8	0,6	2,2
53 Secretaría de Finanzas .....	0,1	—	0,1	—	—	—	282,8	56,6	226,2
54 Secretaría de Comercio .....	8,1	1,6	6,5	19,8	4,0	15,8	5,2	1,0	4,2
55 Secretaría de Industria y Minería ...	—	—	—	—	—	—	20,1	4,0	16,1
56 Secretaría de Energía y Combustibles	—	—	—	—	—	—	1,1	0,2	0,9
60 Ministerio de Defensa Nacional .....	4,6	0,9	3,7	—	—	—	—	—	—
61 Secretaría de Guerra .....	39,8	8,0	31,8	276,0	55,2	220,8	217,9	43,6	174,3
62 Secretaría de Marina .....	73,6	14,7	58,9	375,5	75,1	300,4	1,2	0,2	1,0
63 Secretaría de Aeronáutica .....	77,8	15,6	62,2	73,8	14,7	59,1	0,8	0,2	0,6
70 Ministerio de Obras y Servicios Pú- blicos .....	0,4	0,1	0,3	—	—	—	—	—	—
71 Secretaría de Obras Públicas .....	13,3	2,7	10,6	164,5	32,9	131,6	504,9	100,9	404,0
72 Secretaría de Comunicaciones .....	38,0	7,6	30,4	—	—	—	—	—	—
73 Secretaría de Transporte .....	0,2	—	0,2	—	—	—	4,3	0,9	3,4
Totales .....	1.152,7	139,5	1.013,2	1.280,1	256,0	1.024,1	3.492,8	284,8	3.208,0

ANEXO O JURISDICCION	TOTALES GENERALES					
	Créditos brutos	%	Economía a realizar	%	Créditos netos	%
1 Presidencia de la Nación .....	56,8	0,96	11,4	1,68	45,4	0,87
2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto .....	5,1	0,09	1,0	0,15	4,1	0,08
5 Ministerio de Asistencia Social y Sa- lud Pública .....	169,1	2,85	33,8	4,97	135,3	2,58
22 Congreso de la Nación .....	9,1	0,15	1,8	0,26	7,3	0,14
23 Corte Suprema y tribunales inferiores	10,1	0,17	2,0	0,29	8,1	0,15
25 Ministerio del Interior .....	75,3	1,27	15,1	2,22	60,2	1,15
28 Ministerio de Educación y Justicia ..	602,7	10,17	29,4	4,32	573,3	10,93
30 Tribunal de Cuentas de la Nación ..	0,1	0,00	—	—	0,1	0,00
31 Obligaciones a cargo del Tesoro ....	449,1	7,58	18,8	2,76	430,3	8,20
32 Credito de emergencia .....	100,0	1,69	—	—	100,0	1,90
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad So- cial .....	1.635,8	27,60	4,6	0,68	1.631,2	31,09
50 Ministerio de Economía .....	0,3	0,01	—	—	0,3	0,01
51 Secretaria de Agricultura y Ganadería	226,0	3,81	45,2	6,64	180,8	3,45
52 Secretaria de Hacienda .....	382,3	6,45	76,5	11,25	305,8	5,83
53 Secretaria de Finanzas .....	282,9	4,77	56,6	8,32	226,3	4,31
54 Secretaria de Comercio .....	33,1	0,56	6,6	0,97	26,5	0,51
55 Secretaria de Industria y Minería ...	20,1	0,34	4,0	0,59	16,1	0,31
56 Secretaria de Energía y Combustibles	1,1	0,02	0,2	0,03	0,9	0,02
60 Ministerio de Defensa Nacional .....	4,6	0,08	0,9	0,13	3,7	0,07
61 Secretaria de Guerra .....	533,7	9,01	106,8	15,70	426,9	8,14
62 Secretaria de Marina .....	450,3	7,60	90,0	13,23	360,3	6,87
63 Secretaria de Aeronáutica .....	152,4	2,57	30,5	4,48	121,9	2,32
70 Ministerio de Obras y Servicios Pú- blicos .....	0,4	0,01	0,1	0,01	0,3	0,01
71 Secretaria de Obras Públicas .....	682,7	11,52	136,5	20,07	546,2	10,41
72 Secretaria de Comunicaciones .....	38,0	0,64	7,6	1,12	30,4	0,58
73 Secretaria de Transporte .....	4,5	0,08	0,9	0,13	3,6	0,07
Totales .....	5.925,6	100.—	680,3	100.—	5.245,3	100.—

En lo que respecta al plan de trabajos públicos para el ejercicio fiscal de 1961, el mismo se descompone en 7.870,1 millones de pesos, con cargo al producido del uso del crédito, lo cual representa el 6,69 %; en 913,9 millones de autorizaciones crediticias previstas en los presupuestos de cuentas especiales, que se financiarán con sus recursos propios, con una relación porcentual del 0,78 % y en 11.499,8 millones programados por los organismos descentralizados, que serán atendidos con sus ingresos y que frente al monto total significan el 9,77 %. A título ilustrativo me remito al cuadro 8, en el cual se discriminan las erogaciones que por sus importes globales acabo de citar.

CUADRO Nº 8

## PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 1961

## SECTOR 5 - TITULO II - TRABAJOS PUBLICOS

(En millones de m\$n.)

## CREDITOS NETOS

ANEXO O JURISDICCION	Uso del Crédito	Cuentas Especiales	Organismos Descentra- lizados	Total General	%
1 Presidencia de la Nación .....	8,0	—	17,0	25,0	0,12
2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ..	20,0	—	—	20,0	0,10
5 Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública	150,0	—	—	150,0	0,74
23 Corte Suprema y Tribunales Inferiores .....	7,0	—	—	7,0	0,03
25 Ministerio del Interior .....	50,0	—	128,3	178,3	0,88
28 Ministerio de Educación y Justicia .....	9,2	306,7	286,1	602,0	2,97
31 Obligaciones a cargo del Tesoro .....	2.991,3	—	—	2.991,3	14,75
32 Crédito de Emergencia .....	300,0	—	—	300,0	1,48
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ....	20,0	24,0	—	44,0	0,22
51 Secretaría de Agricultura y Ganadería .....	25,1	—	57,3	82,4	0,41
52 Secretaría de Hacienda .....	56,0	40,0	—	96,0	0,47
53 Secretaría de Finanzas .....	—	—	910,2	910,2	4,49
54 Secretaría de Comercio .....	—	11,1	—	11,1	0,05
55 Secretaría de Industria y Minería .....	—	—	53,0	53,0	0,26
56 Secretaría de Energía y Combustibles .....	—	—	1.546,1	1.546,1	7,62
60 Ministerio de Defensa Nacional .....	11,0	—	—	11,0	0,05
61 Secretaría de Guerra .....	490,5	0,2	601,8	1.092,5	5,39
62 Secretaría de Marina .....	1.137,0	—	—	1.137,0	5,60
63 Secretaría de Aeronáutica .....	1.500,0	—	—	1.500,0	7,40
71 Secretaría de Obras Públicas .....	955,0	531,9	7.900,0	9.386,9	46,28
72 Secretaría de Comunicaciones .....	140,0	—	—	140,0	0,69
Totales .....	7.870,1	913,9	11.499,8	20.283,8	100,00

Para hacer frente a los gastos e inversiones patrimoniales, cuyos importes han sido fijados por el artículo 1º del proyecto, y que en grandes cifras he ido mencionando siguiendo el orden presupuestario, se han estimado —en el artículo 2º— los recursos que indicaré a continuación: rentas generales, 76.717,4 millones de pesos; producido del uso del crédito, 8.000 millones; cuentas especiales, 6.861,4 millones, y organismos descentralizados, 35.442,9 millones, lo que hace un total de 127.021,7 millones.

El detalle analítico de los ingresos de referencia puede apreciarse en el cuadro 27.

## CUADRO Nº 27

## RESUMEN DEL CALCULO DE RECURSOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 1961

(Recursos netos en millones de m\$n.)

CONCEPTO	Nº 1 Rentas generales	Nº 3 Uso del crédito	Nº 4 Cuentas especiales	Nº 5 Organismos descentral.	Totales generales
Impuestos aduaneros y tasas portuarias .....	4.500,0	—	—	—	4.500,0
Impuestos internos unificados .....	8.480,0	—	—	—	8.480,0
Contribución inmobiliaria .....	209,0	—	—	—	209,0
Impuesto a los réditos .....	14.310,0	—	—	—	14.310,0
Impuesto a las ventas .....	12.460,0	—	—	—	12.460,0
Impuesto a los beneficios extraordinarios .....	310,0	—	—	—	310,0
Impuesto de sellos .....	3.300,0	—	—	—	3.300,0
Impuesto a la transmisión gratuita de bienes .....	400,0	—	—	—	400,0
Impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes .....	890,0	—	—	—	890,0
Impuesto a las carreras .....	611,0	—	—	—	611,0
Impuesto a las ganancias eventuales .....	190,0	—	—	—	190,0
Derechos consulares .....	900,0	—	—	—	900,0
Impuesto a la revaluación de activos .....	930,0	—	—	—	930,0
Participaciones diversas .....	100,0	—	—	—	100,0
Lotería de Beneficencia Nacional .....	602,4	—	—	—	602,4
Rentas diversas .....	2.505,0	—	—	—	2.505,0
Correos y Telecomunicaciones .....	3.000,0	—	—	—	3.000,0
Reintegro de la deuda pública .....	2.920,0	—	—	—	2.920,0
Contribución de empresas del Estado .....	100,0	—	—	—	100,0
Recargo y retenciones sobre importaciones y expor- taciones .....	20.000,0	—	—	—	20.000,0
Producido del uso del crédito .....	—	8.000,0	—	—	8.000,0
Presidencia de la Nación .....	—	—	53,0	371,2	424,2
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto .....	—	—	8,2	—	8,2
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública ...	—	—	42,4	768,4	810,8
Ministerio del Interior .....	—	—	70,9	173,9	244,8
Ministerio de Educación y Justicia .....	—	—	369,2	5.207,2	5.576,4
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social .....	—	—	44,3	2.565,0	2.609,3
Secretaría de Agricultura y Ganadería .....	—	—	—	2.132,0	2.132,0
Secretaría de Hacienda .....	—	—	2.592,7	13,4	2.606,1
Secretaría de Finanzas .....	—	—	—	4.824,4	4.824,4
Secretaría de Comercio .....	—	—	308,9	122,5	431,4
Secretaría de Industria y Minería .....	—	—	—	151,7	151,7
Secretaría de Energía y Combustibles .....	—	—	—	1.574,0	1.574,0
Ministerio de Defensa Nacional .....	—	—	0,6	—	0,6
Secretaría de Guerra .....	—	—	488,2	3.961,1	4.449,3
Secretaría de Marina .....	—	—	1.613,0	13,7	1.626,7
Secretaría de Aeronáutica .....	—	—	173,1	2,9	176,0
Secretaría de Obras Públicas .....	—	—	1.053,6	13.376,2	14.429,8
Secretaría de Comunicaciones .....	—	—	41,1	—	41,1
Secretaría de Transporte .....	—	—	2,2	187,3	189,5
Totales .....	76.717,4	8.000,0	6.861,4	35.442,9	127.021,7
Erogaciones .....	66.489,9	8.883,3	6.861,4	35.442,9	117.677,5
Resultado .....	+ 10.227,5	— 883,3	—	—	+ 9.344,2

En la parte final del mismo se consignan las erogaciones, de cuyo cotejo resulta un superávit preventivo de 10.227,5 millones de pesos en aquellos servicios atendidos con el producido de rentas generales; un déficit de igual carácter, de 883,3 millones en las inversiones patrimoniales financiadas con recursos provenientes del uso del crédito y expensas y recursos que se nivelan en los servicios e inversiones con cargo

a recursos de cuentas especiales y organismos descentralizados, lo cual arroja como resultado preventivo un superávit de 9.344,2 millones, según puede observarse en el balance que figura en el artículo 3º del proyecto en consideración.

Para llegar a ese superávit ha sido necesario fijar economías de inversión del orden de los 10.806,6 millones de pesos, distribuidas en la

siguiente forma: en el presupuesto de gastos, por un importe de 10.126,3 millones integrado por 7.704; 546,5 y 1.875,8 millones, en aquellas erogaciones que se financian con recursos provenientes de rentas generales; de cuentas especiales y de organismos descentralizados, respectivamente, y en el presupuesto de inversiones, las restricciones crediticias alcanzan a 680,3 millones, cifra esta formada por 139,5 millones para las expensas que se atienden con el producido del uso del crédito; 256 millones para aquellas que se cubren con los ingresos de cuentas especiales, y por último, 248,8 millones para los planes de inversiones autofinanciados por las entidades descentralizadas.

Si bien, como he dicho, en el presupuesto proyectado para la administración general las erogaciones que se fijan y los recursos que se estiman para su financiación arrojan preventivamente un resultado positivo de 9.344,2 millones de pesos, este superávit debe destinarse a compensar situaciones deficitarias de otros sectores. En efecto, en el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo —con sanción favorable de la Cámara baja y despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el que será informado por otro de sus miembros, el señor senador Falco— se programan las contribuciones del Tesoro para financiar los déficit de explotación y las inversiones para obras y equipos de las empresas del Estado, por un total de 29.103,6 millones de pesos.

De lo que acabo de expresar se infiere que el equilibrio obtenido en la administración central, cuentas especiales y organismos descentralizados, queda roto por ese enorme pulpo que son las empresas del Estado y que convierten el ya comentado superávit de 9.344,2 millones de pesos, en un déficit de 19.759,4 millones. Este originará —a no dudarlo— una deuda flotante que por el artículo 4º del proyecto que estoy analizando, se faculta al Poder Ejecutivo a consolidar, a cuyos efectos se lo autoriza a emitir títulos de la deuda pública o realizar las operaciones de crédito que con este fin resulte necesario.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, doctor José María Guido.

**Sr. Bértora.** — Pasaré ahora, señor presidente, a comentar las distintas disposiciones que componen el articulado del proyecto cuyo dictamen favorable estoy informando.

Los artículos 1º, 2º y 3º, determinan, respectivamente, las autorizaciones crediticias de las distintas secciones y sectores presupuestarios; los recursos estimados con cargo a los cuales aquellas serán financiadas y el balance financiero resultante. A ellos me he referido ya en

forma detallada, lo mismo que a lo que se establece por el artículo 4º.

En todos los presupuestos figura una disposición similar a la que aparece en el artículo 5º. En efecto, se trata de la facultad que el Congreso otorga al Poder Ejecutivo para que éste, ampliando los créditos del presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal recién comenzado, pueda proseguir o iniciar en dicho ejercicio el cumplimiento de las leyes dictadas en 1960. También se autoriza al poder administrador para atender las mayores erogaciones provenientes de incrementos vegetativos de la enseñanza, de los regímenes de escalafonamiento, de los adicionales por antigüedad y promociones del alumnado.

El proyecto que estamos considerando ha previsto en 12.100 millones de pesos el monto del Anexo 32, Crédito de Emergencia, discriminado en la siguiente forma: servicios, 11.700 millones; inversiones, 100 millones, y trabajos públicos, 300 millones.

El referido anexo, heredero, diría yo, del antiguo «Crédito Adicional», tiene su origen en el artículo 5º de la ley de contabilidad, al disponer que la ley de presupuesto fijará un crédito global de emergencia destinado a refuerzo de las partidas contenidas en el presupuesto general que hayan resultado insuficientes, con exclusión de las que se refieran a gastos en personal y a la ejecución del plan anual de obras y trabajos públicos. Agrega, por último, que el mencionado crédito será proporcional al total general de las partidas a las cuales pueda ser aplicado y que dichas disposiciones se hacen extensivas a los presupuestos de las entidades descentralizadas que desarrollan una actividad administrativa. La ley 14.794, en su artículo 6º, estableció el concepto y el carácter del crédito de emergencia, al disponer que el mismo podrá destinarse, durante el ejercicio, a reajustar cualquiera de las partidas contenidas en los anexos, sea cual fuere el régimen que regule la forma de incrementación de las mismas, siempre que tales anexos no admitan compensaciones internas que permitan resolver las insuficiencias producidas. Además, agregaba que el referido crédito podrá aplicarse en el ejercicio de la creación de nuevos conceptos de inversión. Dicha norma fue luego mantenida en la ley 15.021, de presupuesto para el ejercicio de 1960, y se repite ahora en el artículo 6º del proyecto que comentamos.

La facultad que por el artículo 7º se otorga al Poder Ejecutivo tiende a permitir que éste pueda emitir títulos de la deuda pública en cantidad suficiente como para poder financiar el plan de inversiones que, por un monto de 1.013,2 millones de pesos, con cargo al producido del uso del crédito se ha proyectado en el sector correspondiente de la sección 2ª, presupuesto de inversiones patrimoniales.



El artículo 89 determina la financiación de las erogaciones autorizadas para los trabajos públicos, sector 5., y prevé la ampliación de créditos para el supuesto caso de que éstos no cubrieran las inversiones autorizadas para el ejercicio. La presente disposición obedece a razones perfectamente conocidas por los señores senadores. Sabemos que, contrariamente a lo que ocurre con los gastos funcionales de la administración pública, que son anuales, los créditos que se refieren a trabajos públicos se mantienen hasta su total disposición o utilización a través de varios años, según así lo exija la realización de las obras correspondientes.

Por este motivo, las autorizaciones de presupuestos que se refieren a dichos trabajos públicos tienden, dentro del sistema que cita la ley de contabilidad, a la finalidad de precisar el monto que puede invertirse durante el ejercicio, con cargo a los créditos legales de reserva previamente determinados.

Como consecuencia de todo ello, es que el artículo que estamos comentando individualiza la fuente legal que se afecta, que no es otra que el decreto ley 470/55 y sus disposiciones complementarias.

Ahora bien, los saldos de estas autorizaciones mencionadas no parecen suficientes para cubrir las erogaciones que pueden realizarse durante el ejercicio 1961, por cuyo motivo se faculta al Poder Ejecutivo para su ampliación con el propósito de no entorpecer ni limitar los planes analíticos de obras que a juicio del mismo resulte necesario cumplir.

Por lo demás, este artículo tiene su antecedente en el texto del artículo 10 de la ley 15.021, Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio del año 1960.

El texto del artículo 99 autoriza al Poder Ejecutivo a incrementar los créditos previstos para las distintas finalidades del Plan de Obras y Trabajos Públicos, sector 5 del ejercicio 1961, cuando el aumento de los recursos especiales no provenientes del uso del crédito o el arbitrio de nuevos recursos especiales así lo permiten. También faculta al Poder Ejecutivo, en el caso de que el aumento o el arbitrio de nuevos créditos lo haga posible, y siempre que lo estime más conveniente, a mantener los créditos autorizados reduciendo la parte de financiación que opera por el uso del crédito.

La doble finalidad que puede cumplirse a través de las disposiciones de este artículo 99 que, bueno es decirlo, ya existía como artículo 11 en la ley 15.021 precitada, es perfectamente explicable.

Resulta claro que los créditos previstos en el proyecto de presupuesto que consideramos, provenientes de cuentas especiales, propios de organismos descentralizados y contribuciones de naturaleza especial como el caso del Fondo Nacional de Energía, se han determinado previa

estimación de su posible rendimiento, y como ello contribuye a reforzar el recurso típico de las inversiones patrimoniales que es el uso del crédito público, si esos dichos recursos especiales excedieran los rendimientos previstos, es lógico otorgar al Poder Ejecutivo la elasticidad suficiente para que, de acuerdo a lo que estime más oportuno, pueda aumentar los planes de obras o bien reducir el uso que quiera hacer del crédito público.

Las disposiciones que contiene el artículo 10 del proyecto modifican parcialmente el régimen que instituye la ley de contabilidad para la ejecución del plan anual de obras y trabajos públicos, pues el artículo 99 de esta última ley dispone expresamente que el presupuesto establecerá «el importe global correspondiente a cada finalidad y su distribución por jurisdicción territorial, de acuerdo con las leyes básicas respectivas», en tanto que el artículo que consideramos otorga al Poder Ejecutivo la facultad de realizar la distribución por jurisdicciones territoriales. Ha debido hacerse así porque las autorizaciones de inversión que se han incluido en el proyecto de presupuesto, para cada ministerio y secretaria, no llegan al monto que ellos han solicitado, sino que en líneas generales reproducen cifras del ejercicio 1960, por cuyo motivo ha resultado imposible detallar las reducciones que es posible efectuar en cada jurisdicción territorial. El inconveniente se supera, precisamente, dejando a cargo del Poder Ejecutivo el problema de la jurisdicción territorial, que deberá realizar en oportunidad de la formulación analítica del plan.

Contrariamente a lo referido para el artículo 99 de la ley de contabilidad, primera parte, la norma del proyecto que comentamos se atiene fielmente al artículo 11 de la precitada ley en cuanto se refiere a la autorización para fijar las inversiones mínimas para la continuación de las realizaciones ya iniciadas al 31 de octubre de 1960, hasta tanto sean aprobados los planes analíticos para el nuevo ejercicio.

La parte final del artículo 10 autoriza al Poder Ejecutivo a realizar compensaciones entre las finalidades y jurisdicciones territoriales cuando las circunstancias así lo reclamen. Con ello se pretende dinamizar la realización del Plan de Obras, sujeto, como es obvio, a la incidencia de factores climáticos, de disponibilidad de mano de obra o de materiales, etcétera, que afectan la regularidad de su desarrollo.

Paso a referirme al artículo 11. Esta norma faculta al Poder Ejecutivo para determinar no sólo el funcionamiento de los servicios de cuentas especiales, tal como lo permite la ley de contabilidad, sino también su sistema de administración, así como la creación de nuevas cuentas o la cancelación de aquellas que se estime necesario, incorporándolas parcial o totalmente a los presupuestos financiados con rentas gene-

rales o con el producido de la negociación de títulos, según corresponda. Estímase que con el texto del presente artículo se subsanan deficiencias del artículo 141 de la ley de contabilidad que, como un contrasentido, permite que el Poder Ejecutivo haga lo más, fijar el régimen de funcionamiento de las cuentas especiales, y no lo autoriza a realizar lo menos, que es determinar su sistema de administración.

Los preceptos contenidos en el artículo 12, configuran facultades que se vienen otorgando en sucesivas leyes de presupuesto, tanto al Poder Ejecutivo como a los presidentes de ambas Cámaras del Poder Legislativo, a fin de que puedan efectuar, dentro de sus respectivas jurisdicciones, las reestructuraciones de crédito y economías que sean necesarias a raíz de exigencias estrictamente impostergables de los servicios. Dichas facultades, en esta oportunidad, se hacen extensivas al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por razones fácilmente comprensibles y cuya explicación es obvia. Asimismo, se autoriza al poder administrador a modificar los planes de erogaciones y recursos de los servicios de cuentas especiales y organismos descentralizados, presupuestos que por ser autofinanciados por los referidos servicios, podrán ser ampliados o reducidos, siendo en este sentido la autorización otorgada mucho más amplia que la que se establece para los ajustes a realizar en aquellas expensas que se atienden con recursos provenientes de rentas generales.

Al referirme a las cifras del presupuesto que consideramos, me detuve en la discriminación de las economías que por un importe total de 10.806,6 millones de pesos han sido fijadas en los presupuestos de servicios (10.126,3 millones) y de inversiones (680,3 millones). La única forma de mantenerse en los créditos netos establecidos es, sin lugar a dudas, mediante una estricta política de restricción en las expensas públicas, política en la cual todos debemos coadyuvar en la medida de nuestras posibilidades. No obstante ello, y a fin de darle al Poder Ejecutivo la libertad de acción necesaria, por el artículo 13 se autoriza al mismo a liberar economías de inversión con el objeto de poder atender necesidades impostergables de los servicios, facultad que, por otra parte, viene repitiéndose en las últimas leyes de presupuestos nacionales.

Al redactar el texto del artículo 14 se ha tenido especialmente en cuenta la buena marcha del plan anual de obras y trabajos públicos, vista la dificultad que presenta la preparación de los planes analíticos, y, por otra parte, no se ha hecho sino repetir normas que arrancan del decreto ley 5.945/58 y que en la ley de presupuesto del ejercicio pasado figuraban en las disposiciones de su artículo 18.

Una breve explicación aclarará el concepto. El artículo 3º, apartado 2º, de la ley de contabilidad, dispone que el plan de inversiones

patrimoniales debe dividirse en dos sectores, a saber: el de adquisición de bienes de uso o de producción, y el de ejecución del plan anual de trabajos y obras públicas. Tal división, teóricamente posible, resulta de difícil realización, por cuya razón se ha proyectado el artículo que comento, dejándola transitoriamente en suspenso, con el propósito de que oportunamente, por vía aclaratoria o modificatoria de esa parte de la ley de contabilidad, se superen los obstáculos que su cumplimiento presenta.

Por el decreto ley 5.949 de fecha 24 de abril de 1958, se abrió un crédito extraordinario por la suma de 103.871.830 de pesos, equivalente a 2.060.950 libras esterlinas al tipo de cambio oficial de 50 pesos con 40 centavos por libra, a fin de dar cumplimiento a los pagos del gobierno de la Nación, con motivo de la transacción autorizada a raíz de la expropiación de los bienes de la Compañía Primitiva de Gas de Buenos Aires y Compañía de Gas de la Provincia de Buenos Aires.

Las posteriores modificaciones del sistema cambiario y la implantación de un tipo único de cambio, que hace que ahora sean necesarios 234 pesos moneda nacional por cada libra esterlina, han traído como consecuencia que el mencionado crédito de 103 millones, resulte insuficiente para respaldar la obligación en divisas, razón por la cual es indispensable la ampliación del mismo. A ello tiende la disposición proyectada en el artículo 15, que, por otra parte, es repetición de idéntica norma sancionada, para el ejercicio fiscal de 1960, por la ley 15.021 en su artículo 19.

La norma contenida en el artículo 16, está relacionada con las modificaciones que podrá efectuar el Poder Ejecutivo en los créditos del presupuesto general de la administración nacional, para el ejercicio fiscal recién iniciado en las circunstancias y por las causales a que me he referido al comentar los artículos en los cuales se otorga tal facultad. El artículo que analizo, dispone la comunicación al Congreso de las mencionadas modificaciones, la que debe ser efectuada por el poder administrador, por conducto del ministerio o secretaría de Estado respectiva y con intervención de la Secretaría de Hacienda.

Resulta indudablemente auspiciosa una disposición que obliga al Poder Ejecutivo a dar cuenta al Congreso Nacional de aquellas modificaciones que se vea obligado a introducir al presupuesto nacional por imperio de circunstancias que determina específicamente la ley.

La ley 14.070 autorizó al Poder Ejecutivo para convenir con las provincias y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la financiación de los planes de obras públicas y otros gastos a cubrir con el producido de la negociación de títulos de la deuda pública interna local, mediante préstamos o anticipos en efectivo facultándolo para movilizar transitoriamente las

disponibilidades de tesorería o para realizar las operaciones financieras que considerara conveniente.

Para cumplir con los fines previstos en el texto legal a que me he referido, el decreto ley 16.990/57 autorizó al poder administrador a emitir títulos de la deuda pública por un importe de hasta 800.000.000 de pesos. Dicha suma fue elevada a 1.000 millones por la ley 14.794, a 1.200 millones por la ley 15.020, presupuesto para el ejercicio fiscal 1958/59, y reducida a 1.000 millones por la ley 15.021, que sancionara el presupuesto para el ejercicio último.

El artículo 17 del proyecto que ahora comento fija en 1.200 millones de pesos el monto máximo que el Poder Ejecutivo podrá anticipar a los fines indicados en el período 1º de noviembre de 1960 al 31 de octubre de 1961, anticipo que será distribuido territorialmente por la Secretaría de Estado de Hacienda y con el asesoramiento previo del Consejo Federal de Inversiones. Establece además la suma de pesos 200.000.000, por partes iguales, con destino a Misiones y La Pampa para obras públicas, en virtud de su condición de nuevas provincias.

El tercer párrafo del artículo que analizo mantiene una norma estatuida en la recordada ley 14.794 que se ha ido repitiendo en sucesivos textos presupuestarios. Me refiero a la norma por la cual se faculta al Poder Ejecutivo para entregar a las provincias y a la Municipalidad de la Capital Federal, con cargo de reintegro, las sumas que requieran para cubrir los déficit que irroque la ejecución de los presupuestos correspondientes —en este caso al ejercicio recién iniciado—, a cuyo efecto se lo autoriza para hacer uso del crédito público.

El artículo 42 de la ley de contabilidad dispone que el Poder Ejecutivo podrá hacer uso del crédito a corto plazo independientemente de lo autorizado en las leyes bancarias, para hacer frente a deficiencias estacionales de caja y hasta el monto que fije anualmente la ley de presupuesto. Es en virtud de ello que las distintas disposiciones legales aprobatorias de programas presupuestarios de cada ejercicio fiscal, establecen el cuántum de ese monto, habiendo experimentado el mismo en los últimos años la siguiente evolución: en el ejercicio 55/56, por disposición de la ley 14.395, 1.000 millones de pesos; en el ejercicio 57, por decreto ley 23.573/56, 1.500 millones de pesos; en el ejercicio 57/58, por decreto ley 16.990/57, 3.000 millones de pesos, y en el ejercicio 59/60, ley 15.021, 5.000 millones de pesos. Para el ejercicio fiscal 1960-1961, el artículo 18 del proyecto establece en 12.000 millones de pesos el referido límite máximo para la emisión de letras de tesorería, estimándose adecuada para el desenvolvimiento de dichos papeles.

El artículo 19 del proyecto autoriza al presidente de la Nación para delegar en los señores

ministros o secretarios de Estado, una serie de actos de gobierno que por su naturaleza o por su importancia dentro del actual régimen no hacen sino recargar sus funciones sin ningún beneficio práctico para la seguridad de los trámites administrativos. Como garantía, el segundo apartado de la norma que comento mantiene la posibilidad de recurrir ante el Poder Ejecutivo cuando estime que la decisión de los funcionarios en quienes estuvieran delegadas las actuaciones no se han ajustado a las normas vigentes.

Es indudable que la vida moderna, con su natural complejidad, hace imprescindible quitar de la esfera de la más alta magistratura de la Nación, una serie de actividades que le restan tiempo y dedicación a los importantes y verdaderos asuntos de Estado.

Quiero acotar al respecto, señor presidente, que este punto a que se refiere el artículo 19 del proyecto que consideramos, ha sido motivo de mis inquietudes durante mucho tiempo, y que he venido elaborando con la colaboración de varios empleados de la casa un anteproyecto modificatorio de la ley de contabilidad y de las leyes orgánicas en virtud del cual se saca de la esfera de funcionarios de cierta jerarquía, sobre todo, de mayor jerarquía representativa, una serie de atribuciones que traban el desenvolvimiento de sus funciones. Cuando la gente de la calle lee un decreto por el cual advierte que el presidente de la Nación tiene necesidad de firmar una resolución para cambiar la designación de una persona, por ejemplo, que muda de estado civil, francamente puede pensar que el presidente tiene muy poco que hacer si debe ocuparse de esos menesteres. De manera que en esto, como en lo que atañe a la responsabilidad por las autorizaciones de gastos, espero en el próximo período parlamentario presentar modificaciones de tipo orgánico a la expresada ley de contabilidad.

Y prosigo con mi exposición referente al dictamen de la comisión. Reiteradamente el Poder Ejecutivo, por intermedio del equipo económico, ha expresado la conveniencia de modificar la ley de ministerios, como resultado de la experiencia de su aplicación en el término de algo más de dos años. El artículo 20 del proyecto recoge esa inquietud suprimiendo la Secretaría de Finanzas, organismo que se estima innecesario, ya que sus funciones pueden ser perfectamente absorbidas por el Ministerio de Economía, al que se transfieren. Es evidente que esta medida satisface además la necesidad que existe de ir reduciendo la administración central en la medida en que ello es posible, sin afectar el funcionamiento del engranaje estatal. Tratándose de una reducción que de una u otra manera va a significar una economía dentro del presupuesto de la Nación, la Comisión de Presupuesto y Hacienda encuentra perfectamente satisfactoria la reducción que comento. Va de suyo que el ar-

título referido ajusta el texto de la ley de ministerios, como corresponde, a la mencionada supresión. El conjunto de los artículos 21, 22, 23 y 24 se refiere al Banco Central de la República, y por sus disposiciones se restituyen al mismo las facultades de aprobar su presupuesto de sueldos y gastos y el respectivo cálculo de recursos. Se ajusta el texto de su carta orgánica sustituyendo «Hacienda» por «Economía» y la expresión «Ministerio de Hacienda» por «Secretaría de Estado de Hacienda», y por último se dispone el ordenamiento de su carta orgánica.

Los artículos 25 y 26 se relacionan con autorizaciones que se otorgan a la Corte Suprema de Justicia. Por la primera de ellas se refuerza el presupuesto del anexo correspondiente a este poder en la suma de 330 millones de pesos, incremento que será destinado al pago de compensaciones por mayor jerarquía y responsabilidad. En cuanto a la segunda, consiste en una facultad que se le confiere con el objeto de rever la situación de revista de los fiscales y defensores de pobres, incapaces y ausentes ante los tribunales de los distintos fueros.

En oportunidad de analizar la cifra del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo expresé que luego lo haría con las variantes que sobre dichos guarismos había introducido la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, modificaciones que han sido aprobadas por la otra rama del Poder Legislativo. ¿En qué consisten dichos incrementos y qué destino se dará a los mismos? La sola enunciación de los artículos que los facultan haría casi innecesaria su explicación. Sin embargo, creo oportuno incursionar sobre ellos por cuanto representan necesidades mínimas de distintos servicios de la administración pública, ante solicitudes presentadas por los diversos ministros y secretarios de Estado en reuniones realizadas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a las que hemos concurrido miembros de la comisión en cuyo nombre informo, lo que nos ha permitido compenetrarnos de dichas peticiones y formar criterio sobre la justicia de las mismas. Esa es la razón por la cual las apoyamos, y solicitamos de nuestros distinguidos colegas adopten idéntico temperamento.

Para una mejor información de este honorable cuerpo dividiré los aumentos crediticios que se incluyen en los artículos 25, 26, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65 y 66 en aquellos que serán destinados para mejoras de sueldos y jerarquización del personal de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y en los que servirán para atender los planes de inversiones y trabajos públicos de distintos organismos estatales.

Con esto quiero decir que no seguiré el orden correlativo del articulado del proyecto.

Analizaré por lo tanto las normas establecidas por los artículos 25 y 43, originadas, como es de conocimiento general, en el principio tantas ve-

ces pregonado y nunca concretado de jerarquizar la función pública. El Poder Ejecutivo dio el primer paso en tal sentido con el dictado del decreto 9.552, de fecha 10 de agosto próximo pasado, al disponer para el personal bajo su jurisdicción un sistema de compensaciones por «servicios calificados», «dedicación funcional», «responsabilidad jerárquica» y «premio por asistencia».

Guiados por idénticos propósitos que los que motivaron la comentada medida del poder administrador, y con el objeto de arribar a los mismos fines, los poderes Judicial y Legislativo han de implantar en sus respectivos ámbitos de acción regímenes similares en beneficio de su personal, a cuyos efectos por los artículos que estoy analizando se refuerzan los anexos 23 —Corte Suprema y tribunales inferiores— y 22 —Congreso de la Nación— en las sumas de 330 y 270 millones de pesos, respectivamente.

No creo necesario referirme a la justicia de la jerarquización del personal de la casa, que se ajustará a normas análogas a las que con igual justicia imperan ya en otras reparticiones del Estado.

El personal del Congreso, por otra parte, que por la naturaleza especial de sus tareas siempre gozó de una retribución también especial, había quedado ya rezagado con relación a otros agentes de la administración que antes gozaran de una asignación inferior.

Pero la disposición, señor presidente, introduce asimismo una norma permanente como índice de la compensación que por todo concepto deben recibir los legisladores, y que está señalada por la que se asigne a los miembros de la Corte Suprema de Justicia nacional, conforme con el criterio de que a igual jerarquía igual emolumento.

Este artículo mereció una especial y señalada consideración en el debate sostenido en la Cámara baja, siendo criticado y defendido por miembros de todos los sectores. Y han hecho bien en ventilarlo con toda franqueza, en un problema que es tan personal y donde se sanciona un autoaumento por quienes tienen la facultad de dar y de negar.

Saben los señores senadores cuál ha sido mi posición en materia de retribución a los legisladores, y no porque no esté compenetrado de la ajustada situación de muchos de ellos que sufren deterioro en su patrimonio, descuidando sus intereses los que los tienen, o abandonando su profesión o contrayendo obligaciones y compromisos varias veces superiores a sus ingresos.

Todo eso lo he reconocido porque en mayor o menor grado es el problema de todos, y si me he opuesto, no obstante, es porque vivimos un momento especialísimo de la vida argentina, en donde el común de la gente ignora este pequeño gran drama del legislador, y los que no lo ignoran y que militan en la antidemocracia, bus-

can todos los pretextos para desacreditar al parlamentarismo.

Yo no exijo que el legislador deba necesariamente ser un hombre abnegado. Basta que sea un hombre cabal, por lo que cuando me he preguntado si es o no plausible un aumento de asignación que asegure la independencia de quienes integran uno de los tres poderes del Estado, no me he puesto a pensar que tengo derecho a exigir un renunciamiento, sino simplemente si con mi autoaumento no desalentaré al hombre del común, que no sabe de nuestras obligaciones e ignora lo que él juzga equivocadamente una espectable y brillante posición económica.

He querido decir estas cosas, señor presidente, para que quede bien claro cuál es y ha sido el sentido de mi postura de siempre, y no porque no aquilate la necesidad del aumento que auspicia la comisión y el bloque, con los que tengo el deber de ser solidario.

Por lo demás, cada uno es dueño de la compensación que fija el presupuesto, y puede dar a la misma el destino que mejor le parezca. Disiento, eso sí, con un criterio sostenido por varios miembros de la otra Cámara, y es el de que la dedicación debe ser *full-time*, es decir, exclusiva y excluyente. Creo, sí, que se debe cumplir acabadamente con los deberes y funciones de legislador, pero no hay razón alguna —y sí conveniencia— en que cada uno, en la medida de sus posibilidades, prosiga con sus actividades profesionales, comerciales o industriales compatibles con la función pública que desempeña. He dicho que existe conveniencia en proseguirla, y diré el porqué. Salvo que se sostenga un criterio cavernario como el expuesto recientemente por el profesor Bielsa, para quien por poco no debe exigirse la condición de jurisperito para ocupar una banca en el Parlamento, o hacer de ello una carrera universitaria. La verdad es que el cargo es periódico y breve, y termina, salvo reelección, que no es la regla, con el muy corto mandato que le otorga el pueblo. ¿Y qué ocurre, por lo común, con el legislador que sin tener fortuna abandona todas sus actividades anteriores? Que al finalizar su mandato es un paria que busca su reelección a todo trance, o se convierte en un postulante del servicio exterior, o cualquier otra solución por la vía del presupuesto, que le permita sobrellevar dignamente su existencia, cuando lo que se necesita es que el ciudadano se reintegre en plenitud al medio de que proviene, a proseguir sus actividades precedentes al mandato, y a continuar su lucha de siempre por sus ideales democráticos.

Yo estimo, y me pongo como ejemplo, de que con una ordenada distribución del tiempo queda lugar para otras actividades, sin descuidar, claro está, las primordiales, que son las de la función parlamentaria.

He vertido algunas opiniones a título personal y quiero, para finalizar el análisis de este

artículo, fijar el criterio de la comisión. Esta entiende que una retribución adecuada asegura la promoción a las bancas conforme a la idoneidad. De lo contrario, el acceso al Parlamento podría quedar limitado a los hombres de fortuna, lo que no sería el reflejo de una verdadera democracia. Además, la experiencia demuestra que las asignaciones insuficientes han sido compensadas en otras épocas por medios deshonestos: órdenes para la adquisición de automóviles sin pago de derechos aduaneros; secretarios privados costeados por el erario público, cuando no algún *affaire* como aquel tan sonado de la compra de las tierras de El Palomar.

Sobre este problema de las dietas, señor presidente, se ha traído el parangón, relacionándolas con la retribución, las ocupaciones y la dedicación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia nacional, y se ha dicho, por algunos, que no guarda igualdad. Yo diría que, haciendo una comparación y un cotejo, hay cosas favorables y otras desfavorables que, en definitiva, quizá se compensan. Y digo esto porque no es verdad, como se afirma, que el Parlamento trabaja cinco meses del año, o sea lo que asigna la Constitución para el período ordinario de sesiones. La experiencia demuestra que no es así, y ello está avalado por la circunstancia de que estamos aún sesionando al filo de la finalización del año. Esta circunstancia obedece al hecho de que vivimos en una época en que los problemas se suceden día a día, en un mundo cambiante, de verdadera emergencia, por lo que es preciso modificar las leyes a cada momento. La verdad sea dicha: el Parlamento está en funcionamiento los doce meses del año, de tal manera que el argumento de la dedicación carece de relevancia.

Se ha expresado que se podría compensar a los parlamentarios con una dieta fija y una retribución en virtud de la distancia de sus domicilios hasta el lugar en que ejercen sus funciones. Eso no es una novedad, pues ya fue ensayado, existiendo antecedentes legislativos al respecto. Pero la idea fue desechada y derogada la disposición, ya que quedó demostrado que no siempre el que vive más lejos es el que tiene mayores gastos. Y digo esto porque los actuales medios de comunicación hacen que una persona distante del lugar del funcionamiento del Congreso pueda estar a veces en breves horas y hasta en minutos en el lugar del ejercicio de sus funciones y conducido gratuitamente en transportes del Estado, y otros, pongo mi caso por ejemplo, ya que soy el legislador de provincia que, tomando la distancia en línea recta, está más cerca de la Capital Federal, con excepción de los de la provincia de Buenos Aires; sin embargo, salvo que haga uso del avión, no tengo ningún medio que me conduzca en menos de siete u ocho horas a la Capital Federal, y los

transportes que debo usar son de empresas privadas. De manera que habría que hacer la compensación mediante una declaración jurada, que es distinta para cada uno de los 250 legisladores del Parlamento, lo que sería impracticable.

Por otra parte, y haciendo esta comparación con respecto a la justicia, corresponde señalar que el juez vive en el lugar del asiento de su tribunal; allí tiene su casa, y hace de su actividad una carrera en la que tiene estabilidad, lo que le permite jubilarse normalmente en el ejercicio de sus funciones y hasta puede, inclusive, ejercer actividades que no sean incompatibles con las de su cargo.

Quiere decir, señor presidente, que si bien hay argumentos o comparaciones que favorecen en lo que atañe a una mayor retribución de los jueces con respecto al parlamentario, hay otras situaciones que compensarían esa diferencia que he anotado. Además, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia tienen retribuciones que los parlamentarios no reciben. No sé en virtud de la autorización que acuerda esta ley que vamos a votar hoy, cómo se va a reestructurar esa compensación a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, pero en la actualidad, además del sueldo que tiene el juez y de sus gastos de representación, recibe asignaciones complementarias por costo de vida, goza del sueldo anual complementario; tiene un sobrecargo por antigüedad en el servicio y percibe el salario familiar. Nosotros entendemos, por tanto, que en ningún caso —y la comisión así lo ha considerado, y espero que también lo interprete la Honorable Cámara— el legislador debe percibir ninguna de las asignaciones a las que tiene derecho el funcionario de carrera, que son aquellas a que me he referido precedentemente con respecto a los jueces de la Corte.

—Entra en el recinto y ocupa una banca en el hemiciclo el secretario de Estado de Transporte, ingeniero Manuel F. Castello.

**Sr. Bértora.**— Finalmente, y para terminar con el estudio de este artículo, quiero expresar que nosotros tenemos plena fe en los hombres de todos los partidos que han sido promovidos a la función parlamentaria en esta oportunidad y que no creemos que la falta de una mejor retribución hubiera desviado a los mismos del patriótico empeño que tienen en servir plenamente los intereses de la República.

Pero como dejo expresado, la comisión ha despachado favorablemente este asunto, y me he querido referir así, detalladamente, al mismo, para que no se diga que este aumento se hace en forma vergonzante sino a la plena luz del día.

El artículo 92 de la ley 14.473, que instituyó el estatuto del docente, estableció el índice 27 para el cargo de vicedirector de escuela común y vicedirector de jardín de infantes, es decir,

se colocó a dicho personal en una situación económica inferior con respecto a sus subordinados, maestros de grado, y a subsanar tal injusticia tiende la disposición del artículo 44, que eleva del 27 al 29 el índice referido. El artículo 58 incluye una disposición por la cual se incrementa en 331 millones de pesos la partida que, por un importe de 1.500 millones con destino al aumento de las remuneraciones del personal docente comprendido en el mismo, figura en el anexo 32, créditos de emergencia. Ante la sola enunciación del incremento proyectado y el destino que piensa dársele al citado aumento, creo que resulta innecesario abundar en mayores comentarios sobre la justicia del mismo. Idéntica reflexión cabe ante la norma que establece el precitado artículo 58, en el sentido de reforzar la partida para pasividades de las fuerzas armadas de la Nación en 2.400 millones de pesos.

También son dignas de destacar las mejoras que se han de otorgar al personal de la Secretaría de Comunicaciones, para el cual se destinan, por el artículo 60, la suma de 1.142 millones a discriminar en la forma siguiente: para aplicación del escalafón, 1.070 millones, y los 72 millones restantes para financiar el aumento de 100 a 200 pesos de la retribución adicional que en concepto de «bonificación» asignara a los agentes el decreto 13.378 del corriente año. Cabe puntualizar asimismo —dentro de las modificaciones tendientes a beneficiar a los agentes de la administración pública nacional— las que se relacionan con el estatuto del personal civil de las fuerzas armadas, para el cumplimiento del cual se destina, por el artículo 66, la cantidad de 500 millones. Con el objeto de reforzar la dotación del personal de la Prefectura Nacional Marítima, a efectos de que esta institución pueda cumplir a satisfacción con las funciones específicas para las cuales fue creada, entre las que figuran como de mayor importancia la vigilancia de nuestras costas y la represión del contrabando, por el artículo 53 se autoriza un refuerzo presupuestario de 70 millones de pesos que se destinarán a la provisión de 70 cargos para el personal superior y de 700 de marineros en el cuerpo de personal subalterno.

Por el artículo 62, y con destino a las mayores erogaciones originadas de la promoción del alumnado, crecimiento vegetativo, creación de nuevos establecimientos y demás necesidades de la enseñanza secundaria, se prevé la cantidad de 500 millones de pesos, facultándose al Poder Ejecutivo para distribuir tal suma por intermedio de la Secretaría de Estado de Hacienda.

Me referiré ahora a algunos incrementos crediticios concretados en distintas disposiciones del resto del articulado y que, como he dicho ya, tienden a solucionar urgentes necesidades de la administración pública. Vaya como ejemplo la creación de 200 plazas en la dotación del personal subalterno de seguridad y defensa de la Dirección Nacional de Institutos Penales, por un



importe de 19 millones de pesos, autorizados por el artículo 40 *in fine*; el refuerzo para la Dirección Nacional de Geología y Minería por la suma de 45 millones, a que se refiere el artículo 41, y el aumento que por 50 millones de pesos se introduce en el presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en virtud de lo estatuido por el artículo 42, aumento éste que será distribuido por el poder administrador en virtud de la autorización que a tales fines se le confiere por el citado artículo.

Uno de los aspectos que ha merecido la atención de la otra rama legislativa en las modificaciones introducidas al proyecto originario se relaciona con la salud pública. Es por ello que tanto el presupuesto del ministerio del ramo como los de algunos de los organismos descentralizados que desarrollan funciones afines han recibido aportes crediticios de alguna consideración. Así tenemos que para el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, por el artículo 55, se destinan en el sector 2, Servicios, la cantidad de 470 millones, así distribuidos: para gastos de sostenimiento de los establecimientos de lepra y tuberculosis, 50 millones; para las grandes luchas sanitarias en todo el país, \$ 350.000.000; para el Instituto Nacional de la Salud, \$ 10.000.000; para la labor de capacitación de la Escuela Nacional de Salud Pública, \$ 50.000.000; y por último, para habilitación de obras terminadas, \$ 10.000.000.

Además, como contribución de ayuda a las provincias para planes integrales de salud, se prevé un crédito suplementario de 50 millones de pesos.

Asimismo ha sido contemplada la humanitaria labor que realizan la Comisión Nacional de Rehabilitación del Lisiado, entidad descentralizada que funciona en jurisdicción del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, y el Instituto de Oncología Angel H. Roffo, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, cuyos respectivos presupuestos han sido aumentados por los artículos 38 y 45 en las sumas de 22 y 3 millones de pesos, respectivamente.

La gestión, a veces silenciosa pero no por ello menos eficaz, que en pro de las ciencias y la cultura general realizan en el país algunas meritorias instituciones ha sido considerada en las modificaciones que estoy analizando, y los aportes que por las mismas se destinan, de no mucha significación en el aspecto financiero, atento a las escasas posibilidades para una mayor ayuda, considero que representan ante todo y sobre todo, un reconocimiento y apoyo moral hacia los precitados organismos.

En efecto, por el artículo 58 se incrementan los presupuestos de las siguientes entidades: Academia Argentina de Letras e Instituto Nacional de Filología y Folklore Anexo, \$ 3.500.000; Academia de Ciencias Económicas, \$ 700.000; Academia Nacional de Agronomía y Veterina-

ria, \$ 200.000; Academia Nacional de Bellas Artes, \$ 400.000; Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, \$ 400.000; Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales e Instituto de Botánica Darwiniano Anexo, \$ 400.000; Academia Nacional de la Historia, \$ 250.000; Academia Nacional de Medicina, \$ 4.000.000; Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales (Buenos Aires), \$ 225.000; Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales (Córdoba); \$ 80.000.

Por el mismo artículo se concretan contribuciones de 10 y 2 millones de pesos a favor de las Universidades Populares Argentinas y de la cuenta especial «Fomento de Bibliotecas Ley 419», que funciona en jurisdicción del Ministerio de Educación y Justicia, y finalmente por el artículo 59 se aumenta en 3 millones de pesos la partida que para subsidios a bibliotecas dependientes de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares se destina anualmente con cargo al anexo 31, Obligaciones a Cargo del Tesoro.

Con el fin de intensificar la campaña que contra las plagas de la ganadería desarrolla la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, por el proyecto sancionado por la cámara baja, y a raíz también de una modificación introducida por su Comisión de Presupuesto y Hacienda, se prevé en el artículo 52 un refuerzo de 100 millones de pesos con destino a la Dirección General de Sanidad Animal, dependiente del mencionado departamento de Estado.

Pasaré ahora a ocuparme de aquellos incremento de créditos que financiarán los planes de inversiones patrimoniales de las entidades estatales que en cada caso indicaré, y que por la sola enunciación de los fines para los cuales dichos aumentos han de ser destinados, creo resulta obvio abundar en mayores comentarios.

Por el artículo 39 se fija en 50 millones de pesos el plan de trabajos públicos que efectuará la Dirección General de Parques Nacionales; inversión a todas luces retributiva si tenemos en cuenta que dichas obras se efectuarán en una zona de nuestro país como Bariloche, adonde acuden fuertes corrientes turísticas extranjeras, con el consiguiente aporte de divisas.

La disposición contenida en el artículo 40 permitirá a la Dirección Nacional de Institutos Penales efectuar una serie de obras y refacciones por un importe de 50 millones de pesos en el Instituto de Detención de la Capital Federal, en la Cárcel Nacional de Resistencia, en la Colonial Penal de Santa Rosa y en la cárcel de Neuquén. Hechos de pública notoriedad han puesto en evidencia el deficiente estado en que se encuentran algunos de nuestros institutos carcelarios, razón por la cual la comisión estima que no es precisamente para obras de este tipo para las que el Estado debe escatimar su apoyo financiero. Idéntica reflexión cabe para los planes de trabajos a realizar por la Dirección Nacional de Geología y Minería, a que se refiere la autorización conferida por el artículo 41, que

refuerza en 55 millones de pesos los créditos que para tales fines estaban previstos en el proyecto de presupuesto originario.

Los artículos 49 y 50, que brevemente analizaré a continuación, enfocan dos problemas de vital importancia en el país, cuya solución tratan precisamente de materializar las disposiciones contenidas en los mismos: me refiero al mejoramiento de la edificación de casas de estudio, y a facilitar la propiedad de la tierra al colono que la trabaja.

En efecto, por el artículo 49, y con destino a las obras de terminación y habilitación del edificio para la facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y trabajos de mejoramiento y remodelación de edificios dependientes de la misma, se asignan 60 millones de pesos, y por el artículo 50, se faculta al Poder Ejecutivo para entregar al Consejo Agrario Nacional la suma de 100 millones de pesos para la adjudicación de tierras a los exceptuados a las prórrrogas de arrendamiento y desalojados por sentencia firme, y para la habilitación de nuevas tierras e inversión en mejoras necesarias para su puesta en producción.

En el anexo 5, Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, se han inyectado —por el artículo 55— créditos destinados a la financiación de inversiones por un importe total de 175 millones de pesos en los siguientes rubros: grandes luchas sanitarias en todo el país, 100 millones; habilitación de obras terminadas, 40 millones; labor de capacitación de la Escuela Nacional de Salud Pública, 5 millones, e Instituto Nacional de la Salud, 30 millones, y por el artículo 58 se refuerza el presupuesto de la Universidad Tecnológica Nacional en la cantidad de 25 millones. Hay autorizaciones crediticias de inversiones patrimoniales cuya sola enunciación basta para que las mismas se justifiquen, tales las que se materializan en los artículos 63, 64 y 65, destinadas a acrecentar los presupuestos de los ministerios de Educación y Justicia y de Asistencia Social y Salud Pública en la suma de 49.500.000 y 1.500.000 pesos, respectivamente, que serán destinadas y distribuidas en la forma y para los fines que paso a detallar: equipamiento de establecimientos educacionales, 15 millones; dotación de muebles y otros elementos patrimoniales a establecimientos culturales, 5 millones; para la adquisición de material y elementos para educación física, 3 millones; para mecanización de los servicios financieros contables, 25 millones; para el Instituto Nacional de Sordomudos Profesor Bartolomé Ayrolo, 1 millón; para el Instituto Experimental del Mogóico, 500.000 pesos y por último con destino a la Escuela Hogar de Ciegos General Manuel Belgrano, dependiente del Departamento de Ciegos de la Dirección Nacional de Asistencia Social, 1.500.000 pesos.

Antes de proseguir con el análisis de los restantes artículos del proyecto, deseo determinar

precisamente que el total de las incrementaciones crediticias producidas por la Cámara baja es del orden de los seis mil millones de pesos, y que su financiación se ha obtenido por el mayor producido que se prevé para los impuestos a los réditos, a las ventas y a la revaluación de activos, debido a las modificaciones a introducir en el régimen impositivo vigente y a un ajuste sobre los cálculos efectuados sobre la estimación primitiva efectuada en oportunidad del envío del proyecto de presupuesto al Poder Legislativo.

La regla estatuida por el artículo 27, es repetición de la que figuró en la ley 15.021, de presupuesto para el último ejercicio fiscal y la misma se basa en un profundo sentido federalista y en la conveniencia técnico-administrativa de descentralizar distintos servicios que la Nación presta en jurisdicción provincial en la actualidad.

Por la primera parte de este artículo se faculta al poder administrador a convenir con los gobiernos provinciales la transferencia de dichos servicios. Teniendo en cuenta que las referidas transferencias llevan implícito el reconocimiento de las contribuciones financieras necesarias para el sostenimiento de los servicios que se descentralizan, la segunda parte del artículo en examen prevé tal circunstancia al disponer que las aludidas contribuciones se incorporarán oportunamente a las cuotas de participación de impuestos a que se refieren las leyes 14.060, 14.390 y 14.788.

La ley 14.236, modificatoria del régimen legal del Instituto Nacional de Previsión Social, determina, entre las atribuciones de los directores de las cajas nacionales de previsión, la de proyectar el presupuesto general de gastos y recursos, sometiéndolo a la consideración del Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sin que los gastos, incluida la contribución para el sostenimiento del Instituto Nacional de Previsión Social y de la Secretaría, puedan exceder del 5 % total de los recursos habidos en el último ejercicio anterior al proyecto de presupuesto.

Del análisis efectuado en los planes presupuestarios para el año 1961 de las distintas cajas que constituyen nuestro sistema previsional, se desprende que dicha relación porcentual se cumple sólo en ocho de ellas, mientras que en las cinco restantes se sobrepasa al referido coeficiente, como puede observarse en el cuadro que tengo sobre mi banca y que, a título ilustrativo, me permitiré leer:

Caja	Coefficiente %
Bancaria .....	0,72
Comercio .....	1,31
Estado .....	1,38
Servicios Públicos .....	1,46
Periodismo .....	2,07
Ferrovial .....	2,26



Caja	Coefficiente %
Industria .....	2,40
Navegación .....	2,53
Trabajadores Rurales .....	6,45
Empresarios .....	7,16
Trabajadores Independientes ..	11,42
Servicio Doméstico .....	21,22
Profesionales .....	42,55

De la lectura que acabo de efectuar se deduce que los coeficientes que exceden del 5 % a que se refiere el precitado texto legal, se producen en aquellas cajas de más reciente creación, razón por la cual y hasta tanto las mismas completen su estructuración y funcionamiento pleno, se hace necesario que por una disposición legal se convalide tal situación. A ello tiende la primera parte del artículo 28 del proyecto que estoy analizando, mientras que por la segunda, se faculta al poder administrador a reajustar, hasta el monto que sea necesario, los distintos presupuestos, con el objeto de poder posibilitar la continuidad de los servicios.

En el transcurso del presente informe he expresado que entre las innovaciones de carácter estructural que presenta el proyecto de presupuesto que estamos considerando figura la eliminación, dentro del mismo, de las erogaciones y recursos de los servicios auxiliares de Obras Sanitarias de la Nación, y puntalicé los motivos por los cuales se adoptaba tal temperamento. En efecto, hasta el ejercicio fiscal anterior los mencionados gastos y recursos aparecían en el presupuesto general de la administración nacional, e igualmente, en el presupuesto de Obras Sanitarias de la Nación, figuraban previstos los créditos con cargo a los cuales se financiaban las referidas erogaciones, lo que implicaba una duplicación de autorizaciones. Dicho temperamento se complementa con la disposición del artículo 29, por la cual se autoriza al Poder Ejecutivo para que, con intervención de la Secretaría de Hacienda, proceda a determinar los créditos de los servicios auxiliares de referencia y a efectuar la distribución analítica de los mismos.

El artículo 28 del decreto ley 16.990, de fecha 26 de diciembre de 1957, dispuso que las promociones o aumentos de las asignaciones del personal de la administración nacional en todas sus ramas, cualquiera fuese el motivo o la autoridad competente que los disponga, no podrán tener efectos retroactivos y regirán, invariablemente, a partir del 1º del mes siguiente al de la fecha en que hubieran sido dispuestos, norma que no será de aplicación para los casos en que tales mejoras respondan a movimientos automáticos de los agentes, establecidos por regímenes escalafonarios en vigor. La disposición que acabo de citar fue incorporada a la ley 11.672 (complementaria permanente de presupuesto) por el artículo 45 del cuerpo legal que con el número 15.021 aprobó el presupuesto general de la ad-

ministración nacional para el ejercicio que acaba de finalizar el 31 de octubre próximo pasado.

Por el artículo 30 del proyecto que estamos considerando, y con el objeto de perfeccionar la medida ya comentada, se amplía su ámbito de aplicación, al agregar en la misma que el aumento de las sobreasignaciones, compensaciones, reintegro de gastos y otros beneficios análogos comenzarán a regir a partir del 1º del mes siguiente al de la fecha en que dichos aumentos fueron concretados. Tal es, brevemente expuesta, la modificación que por la norma proyectada se introduce al precitado artículo 28 del decreto ley 16.990/57.

La redacción del artículo 31 es lo suficientemente clara y concisa, razón por la cual resulta obvio entrar en mayores consideraciones sobre el particular. Sabido es que el Poder Ejecutivo está empeñado en el reajuste y racionalización de las estructuras administrativas y en la fijación de normas para la determinación de niveles jerárquicos, de acuerdo con principios técnicos que se aplican universalmente. Para ello ha luchado y lucha contra situaciones creadas en algunos organismos estatales a raíz de dispares disposiciones legales. Para evitar en lo futuro situaciones similares, la norma a implantarse por este artículo establece la mecánica a seguir por intermedio de la Secretaría de Estado de Hacienda, asesorada por el Instituto Superior de Administración Pública, entidad descentralizada que funciona en jurisdicción de la Presidencia de la Nación.

La ley 14.794, en su artículo 12, facultó al Poder Ejecutivo para tomar a su cargo el quebranto producido hasta el 31 de diciembre de 1958, en la gestión de la Caja Nacional de Ahorro Postal, como consecuencia de las medidas de ordenamiento bancario dispuestas por el decreto ley 13.125/57, a cuyos efectos se lo autorizó a realizar las operaciones de crédito correspondientes. En virtud de ello, el poder administrador resolvió compensar al mencionado organismo el quebranto ya indicado que por un importe de 797,2 millones de pesos se había producido en la gestión del mismo, para lo cual dispuso la entrega de títulos denominados «Plan de Inversión y Capitalización 1959» del 8 por ciento de interés anual, computándose los intereses corridos desde el 12 de octubre de 1959, o sea desde la fecha de la entrega de los referidos valores. De lo expuesto se infiere que la Caja Nacional de Ahorro Postal se vio privada de percibir la suma de 50.176.000 pesos en concepto de renta sobre los títulos en cuestión, en el lapso comprendido entre el 1º de enero de 1959 y el 12 de octubre del mismo año. Ello trajo aparejado, como es lógico suponer, inconvenientes en el desenvolvimiento financiero de la institución de referencia, motivo por el cual y con el objeto de obviar los mismos el artículo 32 del proyecto faculta al Poder Ejecutivo a compensar dicho importe.

El artículo 33 determina explícitamente que toda disposición emanada del Poder Ejecutivo nacional referente a la actuación de los agentes del Estado y al uso de los bienes, será de aplicación en todos los organismos de su jurisdicción, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, con las excepciones ya acordadas o que el mismo Poder Ejecutivo disponga en lo futuro.

Este artículo tiene por objeto evitar las objeciones que comúnmente presentan las entidades descentralizadas o autárquicas y las empresas del Estado, a las medidas con que el Poder Ejecutivo está tratando de obtener una eficiente racionalización administrativa a través de una serie de normas que ordenen la materia para toda la administración pública de su dependencia, como se ha hecho en la mayoría de los países del mundo y como resulta evidente que debe ser.

En teoría la facultad del Poder Ejecutivo de dictar los reglamentos llamados «autónomos» es indiscutible. Ellos tienen fuerza obligatoria por cuanto el poder administrador los impone dentro de su esfera de competencia y en ejercicio de sus facultades propias. Pero en los hechos el Poder Ejecutivo o sus organismos de control deben sostener polémicas para establecer la vigencia general de normas que deben ser generales, para evitar sectores privilegiados dentro de la administración nacional.

Para poder apreciar en qué consiste la modificación que por el artículo 34 se introduce al régimen vigente en materia de seguro de vida colectivo para el personal del Estado, cabe recordar que en la actualidad aquél establece que las primas serán anuales y se abonarán por adelantado, deduciéndose del sueldo anual complementario del agente, y que en los casos de personal que no perciba aguinaldo o cuando éste sea insuficiente para cubrir su aporte de prima por los capitales básico y adicional, el pago se efectuará mediante deducción sobre los haberes del asegurado por el mes de diciembre, o en su defecto, según lo que determine la reglamentación.

Las normas que acabo de mencionar y que están contenidas en el artículo 5º de la ley 13.003 (texto ordenado en 1958), son sustituidas por el artículo cuyo análisis estoy efectuando, en el sentido de facultar al Poder Ejecutivo para que, por vía de reglamentación, establezca la periodicidad que resulte más conveniente, en cuanto a la percepción de las referidas primas, tanto para los agentes asegurados como para la Caja Nacional de Ahorro Postal. Se considera que la modificación que se propicia resultará conveniente, por cuanto en la actualidad, uno de los motivos por los cuales el personal no opta por el capital adicional, es precisamente lo gravoso que le resulta el descuento de una sola vez de la prima correspondiente, sobre el sueldo anual complementario que percibe.

El artículo 35 del proyecto contiene una cierta previsión de orden financiero, y su trata-

miento en la otra Cámara suscitó el más extenso debate en particular de todo el articulado del proyecto de ley que estamos considerando.

Su ulterior votación, casi por unanimidad, luego de tres horas de un constructivo cambio de opiniones, en el que se examinaron sus alcances y consecuencias a la luz de las prescripciones constitucionales y legales, demuestra que se desvanecieron todas las dudas sobre sus imprevisibles implicancias.

La disposición es clara en cuanto establece: «Cuando convenga facilitar la movilización de capitales en el mercado interior o exterior, con el fin de establecer o ampliar servicios públicos o actividades que directa o indirectamente están vinculadas a los servicios de ese carácter, mediante obras o explotaciones legalmente autorizadas, declaradas de interés nacional por ley o por el Poder Ejecutivo, queda éste facultado para prestar la garantía de la Nación, con carácter accesorio o principal, a obligaciones que con la finalidad mencionada asuman las entidades públicas o privadas prestatarias de dichos servicios.»

Recalco que la facultad para prestar esta garantía de la Nación, no lo es para cualquier obra o para cualquier explotación, sino para las que lo estén «legalmente autorizadas», sean declaradas de «interés nacional», y lo sean con el fin «de establecer o ampliar servicios públicos o actividades que, directa o indirectamente, están vinculadas a los servicios de ese carácter».

Como se advierte, la facultad acordada al Poder Ejecutivo tiene un ámbito jurisdiccional, por lo que resulta limitativa y no discrecional. Sólo por confusión puede aseverarse que tal facultad importa una delegación de facultades, ya que sólo es delegable lo que es privativo de quien lo delega, y esto no lo es.

Más aún, esta atribución, que es consustancial del Poder Ejecutivo, como órgano administrador, al igual que todos sus actos, puede ser juzgada en última instancia por el Parlamento, conforme a las normas constitucionales. En otras palabras, no puede obrar arbitrariamente, so pena de ser pasible de los correctivos constitucionales.

Pero dice también la última parte del artículo: «Si la operación se concertara con organismos internacionales económico-financieros a los que pertenezca como miembro la República Argentina, el Poder Ejecutivo queda facultado para ratificar los convenios complementarios de garantía que se ajusten a los términos y condiciones usuales, y a los estipulados en los respectivos convenios básicos y reglamentaciones sobre préstamos», disposición que, como se expresa en la parte final de este artículo, es también limitativa y no discrecional.

No entraña tampoco la disposición una contradicción con las normas financieras contenidas en las cartas anuales remitidas al Fondo Monetario Internacional, pues éstas sólo enun-

cian un propósito de política fiscal y general a cumplir y no configuran un pacto ni un convenio bilateral ni una atadura que ahorroje, oprima o subyugue, por lo que puede ser revisada en cualquier tiempo y referida a cualquier asunto.

El artículo 35 tampoco es un mandato para otorgar avales, sino la autorización de una facultad en previsión de hipotéticas tratativas que, no obstante su conveniencia para el país, pudieran interrumpirse, truncarse o al menos dilatarse por la exigencia de un requisito de este tipo por parte de los negociadores.

Sería deplorable para el país que, mediando intereses sustanciales para la colectividad —y me refiero a los servicios públicos—, haya que abandonar un negocio cuando se presenta en condiciones favorables porque no se pueda facilitar la movilización de capitales en el mercado.

Las correcciones de forma introducidas al artículo en la otra Cámara con respecto al proyecto original —con lo que se obtuvo un asentimiento general— tornan innecesario que me ocupe en esta instancia de las observaciones tejidas alrededor de la interpretación de los artículos 29, 67 inciso 19 y 86 incisos 1 y 14 de la Constitución Nacional.

Sólo quiero agregar, señor presidente, que esta disposición avala —por su sola inclusión en el articulado de la ley— nuestra firme situación en el mercado de capitales; que dotará al gobierno de una herramienta útil, acorde con la naturaleza de las operaciones de este tipo, que requieren agilidad y la máxima capacidad para negociar, y, finalmente, facilitar la promoción de los planes de expansión y desarrollo, que constituye uno de nuestros postulados programáticos.

El artículo 36 del presente proyecto de ley autoriza al Poder Ejecutivo a suprimir dependencias, servicios y funciones, así como redistribuirlos o transferirlos entre los distintos organismos de Estado, y, además, reducir empleos en la medida que estime compatible con el funcionamiento adecuado de los servicios.

Esta norma es similar a la del artículo 13 de la ley 14.794, sancionada en enero de 1959, en oportunidad de cuyo tratamiento el señor senador Díaz, miembro informante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, al fundamentar dicha parte de la iniciativa, dijo entre otras cosas lo siguiente, que me voy a permitir leer porque sus conceptos son de rigurosa actualidad.

Dijo el senador Díaz: «Como consecuencia de la realidad económica de la Nación, el Poder Ejecutivo ha encarado la realización de un plan de estabilidad que presupone, entre otras medidas, el equilibrio del presupuesto general. No obstante las mayores tasas tributarias recientemente sancionadas por el Congreso, es impres-

cindible realizar importantes economías en los gastos públicos para poder eliminar el déficit previsto para el corriente ejercicio; y como resulta imposible alcanzar los niveles necesarios a expensas del inciso «otros gastos», hácese ineludible que dichas economías se completen con algunas otras que se aplicarán sobre el inciso «gastos en personal» mediante la reducción de agentes previa indemnización.

»Esta es la razón de ser de la autorización que se acuerda al Poder Ejecutivo por el artículo 13, que está suficientemente avalada, además, por la necesidad de adecuar la planta de personal de la administración pública en su número y en su competencia.

»En su número, porque a los efectos de la racionalización administrativa —contamos actualmente con más de 1.000.000 de agentes, decía Díaz en aquel momento— el exceso de personal traba el desenvolvimiento de los trámites y lleva a una burocracia inoperante; y en cuanto a la competencia es necesario complementar con una medida de esta naturaleza las normas del Estatuto del Servicio Civil de la Nación para obtener como consecuencia y mediante la selección de los mejores una elevación en el índice promedio de los conocimientos exigibles al agente.»

Después de casi dos años de aplicación del plan de racionalización y austeridad, del que forma parte el artículo que comentamos, que ha dejado como saldo la realización de sensibles economías y un cúmulo de experiencias que es necesario utilizar, se ha llegado a la conclusión de que es necesario mantener el impulso inicial, perfeccionándolo a los fines de alcanzar una sólida y eficiente organización administrativa que suprima los males del exceso burocrático, tan perjudicial a los intereses económicos del país. A ello tiende la presente norma legal, cuya sanción estimamos conveniente producir.

Por medio del artículo 37 se otorga al poder administrador la facultad de centralizar en organismos adecuados la venta de inmuebles a que se refiere la ley 13.539 y las leyes especiales dictadas hasta la fecha referentes a la enajenación de inmuebles no necesarios para sus servicios.

Los estudios realizados sobre la posibilidad de proceder a la venta de bienes inmuebles que no son necesarios para los servicios a cargo del Estado permiten arribar a la conclusión de que, para proceder en forma expeditiva, resulta conveniente facultar al Poder Ejecutivo para centralizar las ventas en organismos que tengan la suficiente agilidad y puedan desenvolverse dentro de un margen de libertad, sin perjuicio de dar cumplimiento a las disposiciones legales en vigor.

Por el artículo 46 del proyecto se incrementa en la suma de 1.500.000 el presupuesto de la Caja Nacional de Previsión para el Personal Bancario con destino a la creación de la División Reajuste del mismo organismo. Además, se autoriza a la precitada caja para convenir con el

Instituto de Servicios Sociales para Bancarios la atención y el correspondiente pago de las prestaciones para sus agentes, reemplazando de este modo los servicios que le prestaba hasta la fecha la Dirección de Obra Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Como es lógico, se suprime la partida de gastos que fijaba el presupuesto con destino a este último organismo y se la reemplaza con la autorización de gastar hasta el 4 por ciento del monto de los sueldos que perciba el personal beneficiado.

Los artículos 47 y 48 están referidos a la Biblioteca Nacional. Por el primero de ellos se destina para la construcción de su edificio el solar de propiedad del Estado nacional ubicado entre las calles Agüero, avenida Libertador General San Martín y Austria, de la Capital Federal. El segundo determina que el Ministerio de Educación y Justicia propondrá las medidas de gobierno que convengan para reservar con idénticos fines a los mencionados en el artículo 47 las demás parcelas de la manzana comprendidas por las calles avenida Libertador General San Martín, Austria, Las Heras y Agüero.

Por el artículo 51 se introducen modificaciones al régimen de contratación del Estado con el objeto de ubicar, dentro del valor actual de la moneda, algunas de las disposiciones que sobre la materia contiene la ley de contabilidad.

En efecto, el artículo 57 del referido texto legal determina que el Poder Ejecutivo aprobará las contrataciones que excedan de 1.000.000 de pesos, y el respectivo ministro, dentro de su jurisdicción, las que superen los 100.000 pesos. La variante introducida en el artículo que comentamos consiste en elevar a 5.000.000 y 1.000.000 de pesos, respectivamente, los citados topes.

En cuanto a la modificación que se efectúa del artículo 58, significará que el poder administrador ha de determinar, para cada jurisdicción, los funcionarios facultados para autorizar las referidas contrataciones, cualquiera sea el monto de las mismas, y para aprobar las que no excedan de 1.000.000 de pesos en lugar de 100.000 pesos, como es la cantidad que fija el artículo 58 de la ley de contabilidad, que es la que se sustituye.

El texto del artículo 54 contiene una serie de disposiciones referidas al presupuesto del Tribunal de Cuentas de la Nación. Por la primera de ellas se determina que el Poder Ejecutivo deberá remitir al Congreso, junto con el presupuesto general de la administración nacional, el anteproyecto preparado para sí mismo por el Tribunal de Cuentas de la Nación. Esta medida tiene por objeto que el Congreso Nacional cuente con los suficientes elementos de juicio para tomar su decisión en el caso de que las estimaciones del organismo mencionado no coincidan con la del proyecto general.

El segundo párrafo del artículo que consideramos otorga al citado tribunal una serie

de facultades referentes al reajuste de los créditos de su presupuesto y a la fijación del estatuto y régimen escalafonario de su personal, determinando expresamente el alcance y limitación de esas atribuciones.

El artículo 39 de la ley 14.509 dice textualmente: «Hasta tanto el porcentaje autorizado para gastos administrativos por las disposiciones legales vigentes no cubra los aumentos que se establecen en esta ley, en el Instituto Nacional de Previsión Social, las cajas mencionadas en el artículo 1º y en la Dirección General de Préstamos Personales y con Garantía Real, no podrán crearse nuevos cargos.»

El artículo 56 del proyecto exceptúa a la Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Independientes de las normas que establece el citado artículo 39, dada la urgente necesidad de personal que la misma tiene y el atraso en que se encuentran las tareas de cómputo y liquidación. Es sabido, señor presidente, que la Caja de Trabajadores Independientes, que cuenta con más de 250.000 afiliados, tiene en este momento arriba de 90.000 expedientes en trámite, entre jubilaciones y pensiones, y sólo cuenta con una dotación de 300 agentes, insuficientes casi hasta para contestar la correspondencia de la propia caja.

Por medio del artículo 57 se autoriza al Poder Ejecutivo a crear una cuenta especial dentro del Anexo 54 —Secretaría de Estado de Comercio—, con cargo a la cual se imputarán los gastos que demande la tarea que requiere el cumplimiento de la ley 15.326. A tal efecto se faculta al poder administrador para deducir con destino a la creación de dicha cuenta la suma de 0,03 pesos moneda nacional por kilogramo de azúcar de los importes que se acrediten al Fondo Regulador Azucarero en virtud de lo dispuesto por el artículo 12 de la ley 15.326.

Esta financiación ha merecido la aprobación de la comisión por encontrarla perfectamente lógica.

El artículo 150 de la ley 11.672, complementaria y permanente del presupuesto, corresponde al capítulo Régimen Legal de Superintendencia de Seguros.

Por el texto del artículo 61 de la iniciativa que consideramos, se autoriza al Poder Ejecutivo a ordenar las disposiciones del mencionado artículo 150 con las reformas y agregados que resulten del artículo 39 de la ley 15.021 y las que se sancionan por el artículo en consideración, que voy a resumir brevemente.

En el punto 1º elévase a pesos 30.000 y 9.000 las cuotas anuales correspondientes a las sociedades comerciales y civiles, respectivamente, estableciéndose que la tasa uniforme se calculará sobre las primas o cuotas brutas devengadas de seguros directos, netas de anulaciones por riesgo no corrido.

El punto 2º, que se refiere a la creación de la Superintendencia de Seguros dependiente de la Secretaría de Finanzas, se sustituye por

un nuevo texto que dispone la creación de la superintendencia como entidad autárquica que mantendrá sus relaciones con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Economía de la Nación, y fija los fines que debe cumplir y las atribuciones que le correspondan.

En el punto 3º se incluyen nuevas facultades del organismo referentes a su presupuesto, y a la inclusión en el régimen de su ordenamiento de determinadas entidades y personas.

Por último, se sustituye la redacción del punto 14 referida a las sanciones que se aplicarán a las sociedades por infracciones al ordenamiento, estableciendo un régimen más orgánico como surge evidentemente del nuevo texto.

El artículo 67 del proyecto establece la financiación para las erogaciones que se determinan en los artículos 25, 26, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65 y 66, disponiendo que la misma será con el crédito de emergencia respectivo según la naturaleza del gasto.

Por el artículo 68 se incorporan a la ley 11.672 (complementaria permanente de presupuesto) los artículos 17, 24, 25 y 38 de la ley 15.021, de presupuesto general de la administración nacional para el año pasado. Para una mayor información de los señores senadores, me detendré en el comentario del contenido de los mencionados artículos.

El artículo 17 dispone que los créditos del presupuesto general de la administración nacional, comprenderán invariablemente previsiones por doce meses y que los ajustes, modificaciones, reestructuraciones, ampliaciones y reducciones de los créditos y economías contenidos en los presupuestos de gastos e inversiones patrimoniales que disponga el Poder Ejecutivo en virtud de las facultades conferidas al mismo, deberán formularse sobre aquella base, en forma tal que no den lugar a incrementos automáticos de créditos para el ejercicio fiscal siguiente.

El artículo 24 establece que a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 11, inciso b) de la ley 14.236, las cajas nacionales de previsión computarán como «recursos habidos en el último ejercicio anterior al proyecto de presupuesto» respectivo, el monto que resulte de sumar a lo efectivamente ingresado desde la iniciación del ejercicio financiero anterior al del proyecto de presupuesto (1º de noviembre) y hasta el 31 de mayo siguiente, la estimación de recursos igualmente efectivos correspondientes a los cinco meses (junio a octubre) que aún resten para completar el ejercicio, cuya cifra servirá de base a los fines de aquel cómputo.

Por el artículo 25 se estatuye que los presupuestos de gastos de todos los organismos nacionales de previsión, cualquiera sea su naturaleza, deberán prever en el respectivo cálculo de recursos, el total de los ingresos del ejercicio, discriminado por rubros, complementándose el detalle con un balance preventivo que consigne los importes destinados al pago de pasividades,

a la atención del presupuesto administrativo y otros conceptos de inversión que, por su carácter, no deban ser incluidos en este último.

Por fin, el artículo 38 autoriza a la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación para que proceda a reintegrar directamente el importe que corresponda por aranceles abonados de más, impresos indebidos, multas dejadas sin efecto, etcétera, hasta la suma de 10.000 pesos, debiendo considerarse los importes respectivos como rebaja de recaudación.

Por el breve enunciado de las normas precitadas se comprende fácilmente la necesidad de su inserción en un texto legal permanente.

Señor presidente: llegados a esta altura de mi exposición, cabe preguntarse: ¿satisface este presupuesto las exigencias sustanciales de la economía nacional? El hecho económico, señor presidente, es un complejo que por ser tal es una combinación de muchos otros, pero distinguiéndose de todos ellos. Las leyes económicas, por su complejidad y variabilidad y por las incidencias que sobre ellas reflejan los fenómenos sociales, no pueden estudiarse con la simplicidad de las precisas y ajustadas fórmulas matemáticas.

Existen sin duda principios comprobados, lineamientos generales, acaeceres análogos, un parecido consecuente a renglón seguido de un mismo antecedente; pero sería presunción quimérica encerrarse en prenociones de rigidez conceptual para aplicar soluciones universales en el tiempo y en el espacio. Recuerdo sobre el particular la medulosa exposición del señor secretario de Hacienda al discutirse este mismo proyecto el año anterior, cuando se refería al proceso de desarrollo, a su costo y a sus sacrificios, según se tratara de las naciones iniciadoras o continuadoras.

Y es que cada acontecimiento, cada nueva estructura, cada paso o cada retroceso en la marcha hacia el futuro exigen un nuevo replanteo y una nueva ponderación crítica. Cada día y en cada lugar se introduce un nuevo elemento de estudio digno de sobrepesar, y soslayarlo del análisis, subestimarlos como factor de conclusiones importa tanto como ignorar que estamos frente a una ciencia dinámica que se perfecciona en cada nueva experiencia.

Partiendo de estas premisas estimamos por ello que el estudio del presupuesto de la Nación no es, o al menos nos resistimos a que lo sea, la mera alquimia capaz, en un frío juego de números, de tratar de desembocar sin ninguna otra consideración de tipo social y económico, en una ley sin déficit técnico.

Creemos, en cambio, que es la adecuada y precisa oportunidad, cuando se van a dar las grandes autorizaciones para gastos y las correlativas imposiciones al pueblo, para analizar siquiera sea en apretada síntesis, el estado de la situación económica del país, su proceso de desarrollo, sus necesidades vitales, sus po-

sibilidades financieras, a la que nos hemos referido ya al comienzo de esta exposición.

Y este presupuesto ha sido concebido en la medida de lo compatible en función de los planes de desarrollo y de estabilización financiera. Ningún devaneo filosófico; ninguna receta rígida, permanente y universal capaz de operar una milagrería ha guiado a quienes estructuraron este proyecto y a quienes dictaminamos por su aprobación.

Simplemente hemos escogido una política acorde con las circunstancias que vive el país, que si bien prudente, no deja por ello de ser revolucionaria en sus formulaciones, y no nos ha de faltar el coraje civil para realizarla.

Los que impugnan nuestros planes sin aconsejar soluciones mejores bien saben que no somos culpables de los acaeceres sociales, políticos, económicos y financieros, que ahora imponen y determinan esa política.

He leído minuciosa y detenidamente el debate que en la otra Cámara tuvo lugar con motivo del tratamiento de este mismo proyecto. He analizado especialmente las críticas y objeciones, y confieso que me han decepcionado, sin negar por ello la sana inspiración patriótica de que puedan haber hecho gala los impugnantes.

Hubo exposiciones quizás brillantes, seguramente sinceras, pero sin otro valimiento que su concepción doctrinaria, pero sin aportación alguna a la solución concreta de los problemas que sufre el país.

No se trata, pues, de repetir con galanura el esquema teórico de tal o cual tratadista, esquema quizás concebido para otras circunstancias y para otro país. Sería como saberse de memoria un tratado de medicina y no saber luego qué recetarle al paciente. No basta ser erudito: es preciso ojo clínico y acertar con la terapéutica.

Pero todo eso que es elemental se ha querido sustituir por algunos con una crítica despiadada, sin ningún aporte constructivo que dé soluciones concretas a las supuestas fallas de conducción, que las tenemos, sin duda, por lo que, lejos de molestarnos, las anhelamos si ellas revelan un saldo positivo. Bien venidos los hombres con inquietudes por la cosa pública que ayuden a salir al país de su encrucijada, pero sin juego efectista, sin pirotecnia, tras la cual no queda nada, desaparecida la estela dejada a su paso.

Es verdad que hemos impuesto sacrificios a la colectividad. Pero ¿sólo por un sádico y malsano propósito opresivo para la economía popular? ¡No, señor presidente! Nadie podría siquiera pensar eso con sensatez. Todos estos sacrificios, que hemos medido con la posibilidad de su absorción, los hemos establecido con la profunda y sincera convicción de que eran la contribución inexorable para evitar al pue-

blo, en un futuro inmediato, sacrificios y penurias mayores.

Nosotros, como el que más, aspiramos a que la colectividad, en su mayor número, disfrute del acrecentamiento de la riqueza y del desarrollo de la producción, pero el primer objetivo cuando la riqueza falta y la producción se estanca, es crearlas y desarrollarlas, y en eso estamos. Y no habrá tal disfrute si no crece aceleradamente el ritmo de la producción nacional. De ahí un orden de prioridades que ha sido impuesto como una necesidad nacional.

Renegariamos de toda una tradición y de nuestros más caros anhelos, siempre vigentes, si nos desentendiéramos de las injusticias sociales, del mejoramiento de la clase trabajadora, del acceso del pueblo a la cultura, de la obtención de una vivienda higiénica, de la conquista de un salario justo, y de un retiro oportuno, condigna con el esfuerzo creador.

No hemos dado un paso atrás, sino que estamos tomando posiciones, tácticamente, con un solo objetivo: superar la crisis y avanzar, avanzar siempre, en pos del progreso, para vencer al atraso, a la ignorancia, a la miseria y al hambre.

Si ésta —la que atravesamos— fuese una simple y común crisis cíclica, bastaría con programar un presupuesto también «cíclico», siguiendo la marcha progresiva de la riqueza pública y reajustándolo conforme a cálculos previsibles. Pero la nuestra es más grave, como que dimana de problemas estructurales que exigen, paralelamente, correctivos en profundidad, que nos toca a nosotros aplicar con retraso por incompreensión de quienes nos precedieron, crisis de estructura que nos ha descolocado en el concierto mundial como resultancia de nuestras técnicas perimidas, de nuestras inversiones desacertadas, de nuestra imprevisión y de nuestra política interna y externa practicada miopemente en deterioro de nuestra economía.

Pero, el esfuerzo sobrellevado estoicamente por el pueblo en los últimos treinta meses no ha sido en vano, y ya se dan las condiciones para la recuperación que anhelamos: el restablecimiento casi absoluto de la estabilidad de los precios internos, la cotización sin variantes de nuestro signo monetario y la reducción del déficit fiscal, conjugando armónicamente con la expansión de nuestra economía, que será impulsada ahora decisivamente, en el año que se avecina. Fue necesario, a costa de una contracción inevitable, detener el fantasma de una inflación incontrolada que deterioraba el salario, y a la postre, con la vana ilusión de una abundancia pasajera, empobrecía a los más en beneficio de los menos. Para todo eso fue precisa una rígida disciplina económico-financiera en la que el poder público debió dar el ejemplo.

La consigna fue la de crear riquezas y bien-estar duraderos. Condiciones dignas de vida

dentro de una economía sana, para todos y no para una élite. En suma: una expansión en todos los ámbitos de la producción nacional, pero también con una oportunidad de consumo para todos los sectores de la población del país.

No es esto, señor presidente, una declamación demográfica, como que tenemos dicho que esas mejoras y esas oportunidades para que no degeneren en causas inflacionarias, no han de ir más allá de la riqueza creada y del índice de la producción. En suma: que debemos ser nosotros los artífices de nuestro propio destino.

Ningún gobierno ha logrado como el nuestro, el poder afrontar sin contracciones agudas, sin desocupación, sin agobio de gravámenes, sin rebaja de sueldos, una situación como la que hemos atravesado, de distorsión y de crisis.

En los años posteriores a 1930 en que también, como ahora, se encaró un plan de saneamiento financiero, se exigieron privaciones al pueblo que éste no pudo soportar. Hubo recesión, exhibiéndose un panorama de desocupación y de miseria con caravanas de hombres que deambulaban por campos y ciudades en busca de trabajo y de un jornal, y lo que es más grave, de cualquier jornal.

Es que entonces se encaró lo financiero con preeminencia de lo económico y ahora se trata de medidas coordinadas, en donde un plan de expansión y desarrollo procura absorber las resultancias negativas de las medidas financieras.

Es que la política de saneamiento debe ser congruente y racional, pero no simplista, como que la economía es una sola y al país y a sus finanzas hay que considerarlos como un todo armónico e intercorrelacionado, si es que queremos evitar distorsiones y efectos contraproducentes.

Tomemos para ello dos ejemplos: el de la hipertrofia burocrática y el del déficit ferroviario.

En el primer caso, si la burocracia es excesiva, displicente e insensible, lo simplista es podar drásticamente, reduciéndola a los límites de las necesidades estatales, jerarquizar y exigir eficiencia. Quedarían de un día para otro medio millón de personas sin trabajo, o lo que es lo mismo, privados de sus ingresos. Pero esa medida no se ha tomado así, drásticamente, por timidez o complacencia, sino por su repercusión social y económica de efectos contraproducentes. La burocracia no puede suprimirse a costa del desempleo, sino en la medida de su posible transferencia al sector privado. Sin duda que hay que proseguir en la tarea de la racionalización administrativa, pero teniendo en cuenta los factores apuntados.

Y algo análogo podemos argumentar con el déficit ferroviario. Este, entre otras causas, es producido por un ritmo de crecimiento de las tarifas inferior al del costo de los servicios. Al cubrirse los déficit de explotación con recursos

de rentas generales, el Estado, en forma encubierta, está subsidiando el transporte con fondos que abona toda la Nación a través de sus tributos. Sin duda, que es una injusticia que el habitante del interior del país esté abonando parte del pasaje del hombre que viaja en los subterráneos de la Capital Federal. Pero ¿podría de un día para otro, incrementarse el pasaje en tal medida que cubriera el gasto que el mismo origina? Hemos abandonado la política de los subsidios, pero no podríamos tampoco, mediante ese planteo simplista eliminar drásticamente una corruptela que viene de antaño. Podrá hacerse en la medida de la absorción racional por el usuario y estudiando sus implicancias en el costo de la vida. Lo otro —lo drástico— alteraría la paz social y provocaría alteraciones de carácter económico, más grave que el resultado deficitario de las empresas.

Claro está que con estos ejemplos no pretendemos justificar lo injustificable ni ensayar un conformismo ante los males que nos afligen como si tales distorsiones fuesen irreversibles y no existiera para las mismas una solución adecuada. Sí que la hay, señor presidente: pero solución racional, no guiada por impulsos simplistas que no saben frenar la impaciencia.

Es curioso observar cómo desde el 19 de mayo de 1958 a la fecha, quienes antes de entonces cuando veían desencadenarse infaustos acontecimientos en todos los aspectos de la vida argentina, el moral, el social, el cultural, el político, el económico, el financiero, reflexionaban, compadeciéndolos por anticipado a quienes les tocara gobernar este país luego de este desastre. Por paradoja, éstos son hoy los que más piedras ponen en el camino y los que más contribuyen a retardar la recuperación. Y digo paradoja porque las minorías perdidas pretenden ahora imponer sus programas mientras la agrupación triunfadora y gobernante, permeable a los problemas que afligen a la República, predica el amor y la tolerancia, difiere la aplicación de sus postulados, acomodándose al acaecer y a la realidad nacional.

Acoto el hecho, señor presidente, nada más, y dejo que cada uno lo analice y desentrañe la razón que lo mueve.

Señor presidente: un legislador que dictamina ante su Cámara en nombre de la comisión de la que es vehículo e intérprete, es a la vez un informante que trata de difundir con claridad y sencillez, con palabras accesibles al pueblo, las motivaciones que inspiran el despacho.

Si siempre se tiene el deber de ser claro, doblemente lo es tratándose de esta ley que impone tributos y sacrificios y que explica dentro de la pormenorización compatible con la circunstancia, adónde, en qué forma y en beneficio de quiénes ha de ir la acción tributaria de los habitantes de la República.

Pusimos y seguiremos poniendo nuestro cuidado en analizar el presente avizorando el fu-



turo con sentido de previsión, desechando todo planteo que no se fundamente en un estudio congruente y serio, basado en cálculos razonables, apartando así toda posibilidad de que por imprevisión o ligereza puedan enervarse las fuerzas creadoras, con su secuela de postración y desaliento.

Toda esta preocupación que nos embarga, puesto nuestro pensamiento en el pueblo, exige que redoblemos nuestro renovado propósito de perfeccionar el mecanismo financiero e impositivo del Estado, para así demandar con autoridad, y obtener por espontánea adhesión, la cooperación del hombre argentino en la restauración del crédito público y el definitivo saneamiento de nuestras finanzas.

Porque queremos llevar a la conciencia pública que cuando el Estado impone tributos no castiga, sino regula, y quien regula debe estar presidido por el equilibrio y por la prudencia: su accionar debe ser gradual, como lo es la obra de la naturaleza; y no debe serlo sólo en la medida de sus apremios financieros cuanto, fundamentalmente, en la defensa de la economía general. En todo caso es bueno no olvidar el consejo de Suetonio: «Conviene al buen pastor esquilarse las ovejas, pero no degollarlas.»

¿Es antisocial el sistema impositivo? En todo caso, ¿podría serlo mejor en las actuales circunstancias? ¿Se han hecho progresos en la desgravación a medida que las necesidades sociales y los factores económicos así lo han aconsejado?

Sin duda, señor presidente, que el saldo exhibido nos es ampliamente favorable, pero no me he de ocupar de este aspecto del proyecto que consideramos, ya que sobre ello versará la exposición de otro de los miembros informantes de la comisión.

A fuer de enunciar lo que es ya un lugar común, no está de más recordar que la historia de los pueblos podría estar escrita a través del estudio de sus sucesivos presupuestos. De sus inversiones y del origen de los recursos para arbitrar tales inversiones se extrae una orientación y una política, una concepción y un fin impresos por el poder público. La historia dirá si estuvimos acertados en nuestros planteos y en nuestras previsiones. Este presupuesto es cuanto menos sincero en la medida de la exactitud compatible con lo conjetural, como se trata de una aproximación señalada a priori en base a supuestos previsibles, pero no fatales, de acaeceres no matemáticos, sino económicos, y, por tanto, posiblemente variables dentro de la unidad total de gastos y recursos del Estado.

Pero lo que no podría decirse frente a su estructura es que la misma no lleva directamente a la fiscalización de los poderes, tal como lo exige un auténtico papel republicano. La publicidad es de la esencia de nuestro régimen, pero la publicidad de lo simple, de lo asequible, de lo fácil-

mente interpretable, no de lo abstruso, de lo intrincado, de lo complejo.

Quede bien claro, señor presidente, que esta promoción argentina que ha cargado sobre sus espaldas con la grave responsabilidad de la conducción en el álgido filo de la bancarrota, cuando la desesperanza se cernía sobre el suelo de la patria, no tiene vocación para la opresión ni es capaz de imponer más sacrificios al pueblo que los que exija su propia redención.

«Bien haya, pues, para salvar tanto el apremio de las finanzas públicas como privadas —ya que no concebíamos con nuestra mentalidad radical la coexistencia de un gobierno rico al lado de un pueblo declinante, postrado en sus posibilidades de realización— de que afrontemos todos la subida de la última cuesta, repechando unidos con afán patriótico, para vencer los escollos que aún restan hasta la meta trazada.

He dicho que el sacrificio lo debemos afrontar todos, y no que unos lo prediquen y otros lo realicen, porque fácil y cómodo, como lo dice el adagio, es el tener fuerzas para soportar las desdichas y los sacrificios ajenos.

Nuestra posición es espiritualmente cómoda, señor presidente, ya que, a un año de nuestro informe anterior en esta misma materia, más se afirma nuestra convicción de haber estado acertados en nuestros planteos.

Dijimos entonces, palabras más o palabras menos, que una igual preocupación alentaba al gobierno: por un lado, sanear sus finanzas; pero por el otro, en igual o principal medida, revitalizar la economía de la Nación, sin la cual de nada vale el mejor de los esfuerzos financieros. Y todo hace ya suponer que, a breve plazo, serán tangibles los resultados de la recuperación.

Es verdad que nos dimos con ahínco a la tarea de poner orden en nuestras desquiciadas finanzas y a recuperar el crédito perdido, antes de encarar los postergados programas sociales que ha menester, pero sería injusto sostener que nuestra preocupación estuvo sólo signada por lo financiero, con indiferencia de lo social, cuando la historia de estos últimos treinta meses vividos por la República aleccionan que ha sido a la inversa, porque nuestro fin último ha sido lo económico y social, y sólo a través de lo financiero.

Y es que sólo podremos robustecer la economía popular, dar satisfacción a las mejoras sociales, si contamos con ordenadas finanzas públicas, libres de un déficit endémico, y aventada que sea en su hora la postración producida por una burocracia insensible e improductiva que retarda el crecimiento del país y devora al contribuyente.

Sin duda que no es tarea fácil la del hombre de Estado que debe ponerse al frente de un país que encuentra distorsionado en su economía y anarquizado en su conducción.



Su primera misión debe ser la de contribuir a formar una nueva conciencia sobre el quehacer nacional, para que todos comprendan y valoren su papel protagónico, admitiendo por convicción como premisa inconcusa, que no habrá un país grande y próspero sin el esfuerzo y el sacrificio parejo, de los de abajo y de los de arriba, del capital y del trabajo, de los gobernantes y de los gobernados.

Quizá la solución no radique en trabajar más sino en hacerlo mejor, ordenadamente, sin prevenciones ni desconfianzas, libres de ataduras a preconceptos y a perimidos esquemas, echando por la borda los principios caducos a los que adhirió sin análisis a fuer de oírlos y repetirlos, sin advertir que un devenir incesante preside el mundo en que vivimos, que rezagarse es retroceder y que por tanto debemos seguir adelante si aspiramos a que Argentina sea una potencia mundial, y a que sus hijos disfruten y gocen del venturoso porvenir a que tienen derecho.

Pero debemos ser claros y precisos, señor presidente, si aspiramos a ser bien interpretados. Formar una nueva conciencia, frente a nuevos planteos exigidos también por nuevos problemas, no en proclamar una crisis moral, ni confesar una quiebra de la argentinidad.

Puede haber, y existirá sin duda, un alojamiento de determinadas estructuras, resabio de formas perimidas que otrora se proclamaron

desaprensivamente como dogmas indiscutidos e indiscutibles. Pero nada más.

Nuestro pueblo emergerá una vez más triunfante y viril, de lo que pudo parecer a algunos un callejón sin salida, como lo demostró otras tantas veces en el curso de su joven aunque ya rico historial.

Claro está que la capacidad de resistencia para el sacrificio y las virtudes excelsas de un pueblo puestas al servicio de la recuperación, se ponen en juego cuando se alienta la esperanza de que tal sacrificio no será estéril, y de que le abrirán la ancha y promisoría perspectiva de un horizonte mejor.

Señor presidente, señores senadores: a nosotros nos toca no defraudarlo.

Sigamos pulsando las necesidades de ese pueblo con humana comprensión. Interpretemos sus inquietudes con aguda sensibilidad, con tolerancia y con amor. Porque el amor, como lo dijera alguna vez el malogrado jurista uruguayo Eduardo Couture, es capaz, por sí solo, de transformar el trabajo en creación; la tenacidad en heroísmo; la lucha en holocausto; la fe en martirio; y la vida en poesía. Nada más. (*Aplausos.* Varios señores senadores, el señor ministro y los señores secretarios de Estado rodean y felicitan al orador.)

—Los cuadros cuya inserción ha solicitado el señor senador, son los siguientes:

CUADRO N° 4

### RESUMEN DE CREDITOS NETOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 1961

(En millones de m\$n.)

ANEXO O JURISDICCION	Servicios	Servicio de la deuda pública	Inversiones	Trabajos públicos	Totales	%
1 Presidencia de la Nación .....	539,6	—	45,4	25,0	610,0	0,52
2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto .....	967,1	—	4,1	20,0	991,2	0,84
5 Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública .....	3.370,6	—	135,3	150,0	3.655,9	3,11
19 Servicio de la deuda pública .....	—	7.679,9	—	—	7.679,9	6,53
22 Congreso de la Nación .....	280,6	—	7,3	—	287,9	0,24
23 Corte Suprema y tribunales inferiores ..	749,5	—	8,1	7,0	764,6	0,65
25 Ministerio del Interior .....	2.490,0	—	60,2	178,3	2.728,5	2,32
28 Ministerio de Educación y Justicia .....	13.374,6	—	573,3	602,0	14.549,9	12,36
30 Tribunal de Cuentas de la Nación .....	87,1	—	0,1	—	87,2	0,07
31 Obligaciones a cargo del Tesoro .....	10.911,4	—	430,3	2.991,3	14.333,0	12,18
32 Crédito de emergencia .....	5.700,0	—	100,0	300,0	6.100,0	5,18
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	1.132,1	—	1.631,2	44,0	2.807,3	2,39
50 Ministerio de Economía .....	25,9	—	0,3	—	26,2	0,02
51 Secretaría de Agricultura y Ganadería ..	2.661,8	—	180,8	82,4	2.925,0	2,49
52 Secretaría de Hacienda .....	4.041,9	—	305,8	96,0	4.443,7	3,78
53 Secretaría de Finanzas .....	3.703,2	—	226,3	910,2	4.839,7	4,11
54 Secretaría de Comercio .....	766,3	—	26,5	11,1	803,9	0,68
55 Secretaría de Industria y Minería .....	84,2	—	16,1	53,0	153,3	0,13
56 Secretaría de Energía y Combustibles ...	28,5	—	0,9	1.546,1	1.575,5	1,34
60 Ministerio de Defensa Nacional .....	72,1	—	3,7	11,0	86,8	0,07
61 Secretaría de Guerra .....	12.007,7	—	426,9	1.092,5	13.527,1	11,50

ANEXO O JURISDICCION	Servicios	Servicio de la deuda pública	Inversiones	Trabajos públicos	Totales	%
62 Secretaria de Marina .....	7.135,8	—	360,3	1.137,0	8.633,1	7,24
63 Secretaria de Aeronáutica .....	3.977,1	—	121,9	1.500,0	5.599,0	4,76
70 Ministerio de Obras y Servicios Públicos .....	14,2	—	0,3	—	14,5	0,01
71 Secretaria de Obras Públicas .....	6.268,0	—	546,2	9.386,9	16.201,1	13,77
72 Secretaria de Comunicaciones .....	3.795,2	—	30,4	140,0	3.965,6	3,37
73 Secretaria de Transporte .....	284,0	—	3,6	—	287,6	0,24
Totales .....	84.468,2	7.679,9	5.245,3	20.283,8	117.677,5	100,00

CUADRO Nº 9

## RESUMEN DE CREDITOS NETOS

## PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 1961

(En millones de m\$.n.)

ANEXO O JURISDICCION	Administración central	Cuentas especiales	Organismos descentralizados	Totales	%
1 Presidencia de la Nación .....	185,8	53,0	371,2	610,0	0,52
2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ..	983,0	8,2	—	991,2	0,84
5 Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública ..	2.845,0	42,4	768,5	3.655,9	3,11
19 Servicio de la deuda pública .....	7.579,9	—	—	7.579,9	6,53
22 Congreso de la Nación .....	287,9	—	—	287,9	0,24
23 Corte Suprema y tribunales inferiores .....	764,6	—	—	764,6	0,65
25 Ministerio del Interior .....	2.483,8	70,8	173,9	2.728,5	2,32
28 Ministerio de Educación y Justicia .....	8.973,6	369,2	5.207,1	14.549,9	12,37
30 Tribunal de Cuentas de la Nación .....	87,2	—	—	87,2	0,07
31 Obligaciones a cargo del Tesoro .....	14.333,0	—	—	14.333,0	12,18
32 Crédito de emergencia .....	6.100,0	—	—	6.100,0	5,18
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ....	200,0	44,4	2.562,9	2.807,3	2,39
50 Ministerio de Economía .....	26,2	—	—	26,2	0,02
51 Secretaría de Agricultura y Ganadería .....	792,9	—	2.132,1	2.925,0	2,49
52 Secretaría de Hacienda .....	1.837,6	2.592,8	13,3	4.443,7	3,78
53 Secretaría de Finanzas .....	15,3	—	4.824,4	4.839,7	4,11
54 Secretaría de Comercio .....	172,5	278,8	122,6	803,9	0,67
55 Secretaría de Industria y Minería .....	1,7	—	151,6	153,3	0,13
56 Secretaría de Energía y Combustibles .....	1,4	—	1.574,1	1.575,5	1,34
60 Ministerio de Defensa Nacional .....	86,2	0,6	—	86,8	0,07
61 Secretaría de Guerra .....	9.077,9	488,2	3.961,0	13.527,1	11,50
62 Secretaría de Marina .....	7.096,4	1.613,0	13,7	8.633,1	7,34
63 Secretaría de Aeronáutica .....	5.423,0	173,1	2,9	5.599,0	4,76
70 Ministerio de Obras y Servicios Públicos ....	14,5	—	—	14,5	0,01
71 Secretaría de Obras Públicas .....	1.771,2	1.053,6	13.376,3	16.201,1	13,77
72 Secretaria de Comunicaciones .....	3.924,5	41,1	—	3.965,6	3,37
73 Secretaria de Transporte .....	98,1	2,2	187,3	287,6	0,24
Totales .....	75.373,2	6.861,4	35.442,9	117.677,5	100,00

## PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 1961

CUADRO Nº 10

## ADMINISTRACION CENTRAL

(En millones de m\$n.)

A N E X O	S E R V I C I O S			I N V E R S I O N E S			TRABAJOS PUBLICOS
	Créditos brutos	Economía a realizar	Créditos netos	Créditos brutos	Economía a realizar	Créditos netos	Créditos netos
1 Presidencia de la Nación .....	207,9	31,2	176,7	1,4	0,3	1,1	8,0
2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto .....	1.128,1	169,2	958,9	5,1	1,0	4,1	20,0
5 Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública ...	3.076,6	461,5	2.615,1	99,9	20,0	79,9	150,0
19 Servicio de la deuda pública .....	7.679,9	—	7.679,9	—	—	—	—
22 Congreso de la Nación .....	330,1	49,5	280,6	9,1	1,8	7,3	—
23 Corte Suprema y tribunales inferiores .....	881,8	132,3	749,5	10,1	2,0	8,1	7,0
25 Ministerio del Interior .....	2.836,1	425,4	2.410,7	28,9	5,8	23,1	50,0
28 Ministerio de Educación y Justicia .....	10.482,0	1.572,3	8.909,7	68,4	13,7	54,7	9,2
30 Tribunal de Cuentas de la Nación .....	102,5	15,4	87,1	0,1	—	0,1	—
31 Obligaciones a cargo del Tesoro .....	11.168,6	257,2	10.911,4	449,1	18,8	430,3	2.991,3
32 Crédito de emergencia .....	5.700,0	—	5.700,0	100,0	—	100,0	300,0
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social .....	211,3	31,7	179,6	0,5	0,1	0,4	20,0
50 Ministerio de Economía .....	30,4	4,5	25,9	0,3	—	0,3	—
61 Secretaría de Agricultura y Ganadería .....	871,9	130,8	741,1	33,4	6,7	26,7	25,1
62 Secretaría de Hacienda .....	2.010,8	301,6	1.709,2	90,5	18,1	72,4	56,0
63 Secretaría de Finanzas .....	17,9	2,7	15,2	0,1	—	0,1	—
54 Secretaría de Comercio .....	430,6	64,6	366,0	8,1	1,6	6,5	—
55 Secretaría de Industria y Minería .....	2,0	0,3	1,7	—	—	—	—
56 Secretaría de Energía y Combustibles .....	1,7	0,3	1,4	—	—	—	—
60 Ministerio de Defensa Nacional .....	84,1	12,6	71,5	4,6	0,9	3,7	11,0
61 Secretaría de Guerra .....	10.065,4	1.509,8	8.555,6	39,8	8,0	31,8	490,5
62 Secretaría de Marina .....	6.835,8	1.025,3	5.810,5	73,6	14,7	58,9	1.137,0
63 Secretaría de Aeronáutica .....	4.542,1	681,3	3.860,8	77,8	15,6	62,2	1.500,0
70 Ministerio de Obras y Servicios Públicos .....	16,7	2,5	14,2	0,4	0,1	0,3	—
71 Secretaría de Obras Públicas .....	947,8	142,2	805,6	13,3	2,7	10,6	955,0
72 Secretaría de Comunicaciones .....	4.416,6	662,5	3.754,1	38,0	7,6	30,4	140,0
73 Secretaría de Transporte .....	115,2	17,3	97,9	0,2	—	0,2	—
Totales .....	74.193,9	7.704,0	66.489,9	1.152,7	139,5	1.013,2	7.870,1

CUADRO Nº 10 (continuación)

## A N E X O

## T O T A L E S   G E N E R A L E S

	Créditos brutos	%	Economía a realizar	%	Créditos netos	%
1 Presidencia de la Nación .....	217,3	0,27	31,5	0,40	185,8	0,25
2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto .....	1.153,2	1,39	170,2	2,17	983,0	1,30
5 Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública ....	3.326,5	4,00	481,5	6,14	2.845,0	3,78
19 Servicio de la deuda pública .....	7.679,9	9,23	—	—	7.679,9	10,19
22 Congreso de la Nación .....	339,2	0,41	51,3	0,66	287,9	0,38
23 Corte Suprema y tribunales inferiores .....	898,9	1,08	134,3	1,71	764,6	1,01
25 Ministerio del Interior .....	2.915,0	3,50	431,2	5,50	2.483,8	3,30
28 Ministerio de Educación y Justicia .....	10.559,6	12,69	1.586,0	20,22	8.973,6	11,91
30 Tribunal de Cuentas de la Nación .....	102,6	0,12	15,4	0,20	87,2	0,12
31 Obligaciones a cargo del Tesoro .....	14.609,0	17,55	276,0	3,52	14.333,0	19,02
32 Crédito de emergencia .....	6.100,0	7,33	—	—	6.100,0	8,09
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social .....	231,8	0,28	31,8	0,41	200,0	0,27
50 Ministerio de Economía .....	30,7	0,04	4,5	0,01	26,2	0,03
51 Secretaría de Agricultura y Ganadería .....	930,4	1,12	137,5	1,76	792,9	1,05
52 Secretaría de Hacienda .....	2.157,3	2,59	319,7	4,08	1.837,6	2,44
53 Secretaría de Finanzas .....	18,0	0,02	2,7	0,04	15,3	0,02
54 Secretaría de Comercio .....	438,7	0,53	66,2	0,85	372,5	0,49
55 Secretaría de Industria y Minería .....	2,0	0,00	0,3	0,00	1,7	0,00
56 Secretaría de Energía y Combustibles .....	1,7	0,00	0,3	0,00	1,4	0,00
60 Ministerio de Defensa Nacional .....	99,7	0,12	13,5	0,17	86,2	0,11
61 Secretaría de Guerra .....	10.595,7	12,73	1.517,8	19,35	9.077,9	12,04
62 Secretaría de Marina .....	8.046,4	9,67	1.040,8	13,27	7.006,4	9,30
63 Secretaría de Aeronáutica .....	6.119,9	7,35	696,9	8,89	5.423,0	7,19
70 Ministerio de Obras y Servicios Públicos .....	17,1	0,02	2,6	0,04	14,5	0,02
71 Secretaría de Obras Públicas .....	1.916,1	2,30	144,9	1,85	1.771,2	2,35
72 Secretaría de Comunicaciones .....	4.594,6	5,52	670,1	8,54	3.924,5	5,21
73 Secretaría de Transporte .....	115,4	0,14	17,3	0,22	98,1	0,13
Totales .....	83.216,7	100,00	7.843,5	100,00	75.373,2	100,00

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 1961

CUADRO Nº 11

ANEXO 100 - CUENTAS ESPECIALES

(En millones de m\$.n.)

JURISDICCION	SERVICIOS			INVERSIONES			Trabajos públicos Créditos netos
	Créditos brutos	Economía a realizar	Créditos netos	Créditos brutos	Economía a realizar	Créditos netos	
1 Presidencia de la Nación .....	45,1	4,5	40,6	15,5	3,1	12,4	—
2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto .....	9,1	0,9	8,2	—	—	—	—
5 Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública ....	36,3	3,6	32,7	12,1	2,4	9,7	—
25 Ministerio del Interior .....	40,2	4,0	36,2	43,3	8,7	34,6	—
28 Ministerio de Educación y Justicia .....	60,1	6,0	54,1	10,5	2,1	8,4	306,7
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social .....	22,6	2,3	20,3	0,1	—	0,1	24,0
52 Secretaría de Hacienda .....	2.579,5	257,9	2.321,6	289,0	57,8	231,2	40,0
54 Secretaría de Comercio .....	312,7	30,8	281,9	19,8	4,0	15,8	11,1
60 Ministerio de Defensa Nacional .....	0,7	0,1	0,6	—	—	—	—
61 Secretaría de Guerra .....	296,9	29,7	267,2	276,0	55,2	220,8	0,2
62 Secretaría de Marina .....	1.458,4	145,8	1.312,6	375,5	75,1	300,4	—
63 Secretaría de Aeronáutica .....	126,7	12,7	114,0	73,8	14,7	59,1	—
71 Secretaría de Obras Públicas .....	433,4	43,3	390,1	164,5	32,9	131,6	531,9
72 Secretaría de Comunicaciones .....	45,7	4,6	41,1	—	—	—	—
73 Secretaría de Transporte .....	2,5	0,3	2,2	—	—	—	—
Totales .....	5.469,9	546,5	4.923,4	1.280,1	256,0	1.024,1	913,9

TOTALES GENERALES

JURISDICCION	Créditos brutos	%	Economía a realizar	%	Créditos Netos	%
1 Presidencia de la Nación .....	60,6	0,79	7,6	0,95	53,0	0,77
2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto .....	9,1	0,12	0,9	0,11	8,2	0,12
5 Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública ....	48,4	0,63	6,0	0,75	42,4	0,62
25 Ministerio del Interior .....	83,5	1,09	12,7	1,58	70,8	1,03
28 Ministerio de Educación y Justicia .....	377,3	4,92	8,1	1,01	369,2	5,38
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social .....	46,7	0,61	2,3	0,29	44,4	0,65
52 Secretaría de Hacienda .....	2.908,5	37,95	315,7	39,34	2.592,8	37,79
54 Secretaría de Comercio .....	343,6	4,48	34,8	4,34	308,8	4,50
60 Ministerio de Defensa Nacional .....	0,7	0,01	0,1	0,01	0,6	0,01
61 Secretaría de Guerra .....	573,1	4,78	84,9	10,58	488,2	7,11
62 Secretaría de Marina .....	1.833,9	23,93	220,9	27,53	1.613,0	23,51
63 Secretaría de Aeronáutica .....	200,5	2,62	27,4	3,41	173,1	2,52
71 Secretaría de Obras Públicas .....	1.129,8	14,74	76,2	9,49	1.053,6	15,36
72 Secretaría de Comunicaciones .....	45,7	0,60	4,6	0,57	41,1	0,60
73 Secretaría de Transporte .....	2,5	0,03	0,3	0,04	2,2	0,03
Totales .....	7.663,9	100,00	802,5	100,00	6.861,4	100,00

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 1961  
ANEXO 200 - ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS  
(En millones de m\$.n.)

CUADRO Nº 12

JURISDICCION	SERVICIOS			INVERSIONES			Trabajos públicos Créditos netos
	Créditos brutos	Economía a realizar	Créditos netos	Créditos brutos	Economía a realizar	Créditos netos	
1 Presidencia de la Nación .....	358,1	35,8	322,3	39,9	8,0	31,9	17,0
5 Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública ....	803,1	80,3	722,8	57,1	11,4	45,7	—
25 Ministerio del Interior .....	47,9	4,8	43,1	3,1	0,6	2,5	128,3
28 Ministerio de Educación y Justicia .....	4.536,7	125,9	4.410,8	523,8	13,6	510,2	286,1
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social .....	1.061,7	129,5	932,2	1.635,2	4,5	1.630,7	—
51 Secretaría de Agricultura y Ganadería .....	2.134,1	213,4	1.930,7	192,6	38,5	154,1	57,3
52 Secretaría de Hacienda .....	12,3	1,2	11,1	2,8	0,6	2,2	—
53 Secretaría de Finanzas .....	4.115,8	427,8	3.688,0	282,8	56,6	226,2	910,2
54 Secretaría de Comercio .....	131,5	13,1	118,4	5,2	1,0	4,2	—
55 Secretaría de Industria y Minería .....	91,7	9,2	82,5	20,1	4,0	16,1	53,0
56 Secretaría de Energía y Combustibles .....	30,1	3,0	27,1	1,1	0,2	0,9	1.546,1
61 Secretaría de Guerra .....	3.536,8	353,9	3.184,9	217,9	43,6	174,3	601,8
62 Secretaría de Marina .....	14,1	1,4	12,7	1,2	0,2	1,0	—
63 Secretaría de Aeronáutica .....	2,6	0,3	2,3	0,8	0,2	0,6	—
71 Secretaría de Obras Públicas .....	5.547,5	455,8	5.072,3 (1)	504,9	100,9	404,0	7.900,0
73 Secretaría de Transporte .....	204,3	20,4	183,9	4,3	0,9	3,4	—
Totales .....	22.630,3	1.875,8	20.735,1 (1)	3.492,8	284,8	3.208,0	11.499,8

JURISDICCION	TOTALES GENERALES					
	Créditos brutos	%	Economía a realizar	%	Créditos netos	%
1 Presidencia de la Nación .....	415,0	1,10	43,8	2,03	371,2	1,04
5 Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública ....	860,2	2,29	91,7	4,24	768,5	2,17
25 Ministerio del Interior .....	179,3	0,48	5,4	0,25	173,9	0,49
28 Ministerio de Educación y Justicia .....	5.346,6	14,21	139,5	6,46	5.207,1	14,69
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social .....	2.696,9	7,17	134,0	6,20	2.562,9	7,23
51 Secretaría de Agricultura y Ganadería .....	2.384,0	6,34	251,9	11,66	2.142,1	6,04
52 Secretaría de Hacienda .....	15,1	0,04	1,8	0,08	13,3	0,04
53 Secretaría de Finanzas .....	5.308,8	14,11	484,4	22,42	4.824,4	13,61
54 Secretaría de Comercio .....	136,7	0,36	14,1	0,65	122,6	0,34
55 Secretaría de Industria y Minería .....	164,8	0,44	13,2	0,61	151,6	0,42
56 Secretaría de Energía y Combustibles .....	1.577,3	4,19	3,2	0,15	1.574,1	4,44
61 Secretaría de Guerra .....	4.358,5	11,58	397,5	18,40	3.961,0	11,17
62 Secretaría de Marina .....	15,3	0,04	1,6	0,07	13,7	0,04
63 Secretaría de Aeronáutica .....	3,4	0,01	0,5	0,02	2,9	0,01
71 Secretaría de Obras Públicas .....	13.952,4	37,08	556,7	25,77	13.376,3 (1)	37,74
73 Secretaría de Transporte .....	208,6	0,56	21,3	0,99	187,3	0,53
Totales .....	37.622,9	100,00	2.160,6	100,00	35.442,9 (1)	100,00

(1) Deducido m\$.n. 19,4 millones por contribución a Explotación Capital Federal en concepto de gastos de administración común (Administración General de Obras Sanitarias de la Nación).

CUADRO Nº 13

**COMPARATIVO DEL NUMERO DE CARGOS DE PARTIDAS INDIVIDUALES ENTRE LOS PRESUPUESTOS PARA LOS EJERCICIOS DE 1960 (LEY 15.021) Y 1961 (PROYECTO)**

(En millones de m\$.n.)

ANEXO O JURISDICCION	ADMINISTRACION CENTRAL			Cuentas Especiales		
	1960 Ley 15.021	1961 Proyecto	Diferencia + ó -	1960 Ley 15.021	1961 Proyecto	Diferencia + ó -
1 Presidencia de la Nación .....	1.773	1.526	- 247	-	-	-
2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto .....	3.172	3.102	- 70	-	-	-
5 Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública .....	34.132	31.386	- 2.746	-	-	-
22 Congreso de la Nación .....	1.498	1.563	+ 65	-	-	-
23 Corte Suprema y Tribunales Inferiores .....	5.752	5.768	+ 16	-	-	-
25 Ministerio del Interior .....	27.048	26.775	- 273	-	-	-
28 Ministerio de Educación y Justicia .....	98.815	101.626	+ 2.811	150	154	+ 4
30 Tribunal de Cuentas de la Nación .....	1.132	1.132	-	-	-	-
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social .....	2.977	2.111	- 866	264	251	- 13
50 Ministerio de Economía .....	138	105	- 33	-	-	-
51 Secretaría de Agricultura y Ganadería .....	10.861	8.764	- 2.097	-	-	-
52 Secretaría de Hacienda .....	16.194	16.099	- 95	3.236	3.188	- 48
53 Secretaría de Finanzas .....	76	63	- 13	-	-	-
54 Secretaría de Comercio .....	4.781	3.569	- 1.212	488	1.066	+ 578
55 Secretaría de Industria y Minería .....	10	10	-	-	-	-
56 Secretaría de Energía y Combustibles .....	12	8	- 4	-	-	-
60 Ministerio de Defensa Nacional .....	79	211	+ 132	-	-	-
61 Secretaría de Guerra (1) .....	11.315	10.330	- 985	138	115	- 23
62 Secretaría de Marina (1) .....	7.078	6.532	- 546	653	493	- 160
63 Secretaría de Aeronáutica (1) .....	9.029	9.916	+ 887	289	205	- 84
70 Ministerio de Obras y Servicios Públicos .....	124	97	- 27	-	-	-
71 Secretaría de Obras Públicas .....	5.024	4.629	- 395	94	91	- 3
72 Secretaría de Comunicaciones .....	47.944	47.151	- 793	-	-	-
73 Secretaría de Transporte .....	1.446	1.122	- 324	-	-	-
Totales .....	290.410	283.595	- 6.815	5.312	5.563	+ 251

(1) Excluido personal militar y de seguridad y defensa.

ANEXO O JURISDICCION		ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			TOTAL GENERAL		
		1960 Ley 15.021	1961 Proyecto	Diferencia + ó -	1960 Ley 15.021	1961 Proyecto	Diferencia + ó -
1	Presidencia de la Nación .....	69	1.821	+ 1.752	1.842	3.347	+ 1.505
2	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto .....	—	—	—	3.172	3.102	— 70
5	Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública .....	5.353	5.056	— 297	39.485	36.442	— 3.043
22	Congreso de la Nación .....	—	—	—	1.498	1.563	+ 65
23	Corte Suprema y Tribunales Inferiores .....	—	—	—	5.752	5.768	+ 16
25	Ministerio del Interior .....	524	460	— 64	27.572	27.235	— 337
28	Ministerio de Educación y Justicia .....	42.852	43.951	+ 1.099	141.817	145.731	+ 3.914
30	Tribunal de Cuentas de la Nación .....	—	—	—	1.132	1.132	—
33	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social .....	9.798	9.545	— 253	13.039	11.907	— 1.132
50	Ministerio de Economía .....	—	—	—	138	105	— 33
51	Secretaría de Agricultura y Ganadería .....	14.277	14.819	+ 542	25.138	23.583	— 1.555
52	Secretaría de Hacienda .....	46	40	— 6	19.476	19.327	— 149
53	Secretaría de Finanzas .....	35.712	33.228	— 2.484	35.788	33.291	— 2.497
54	Secretaría de Comercio .....	826	830	+ 4	6.095	5.465	— 630
55	Secretaría de Industria y Minería .....	54	655	+ 601	64	665	+ 601
56	Secretaría de Energía y Combustibles .....	2.083	320	— 1.763	2.095	328	— 1.767
60	Ministerio de Defensa Nacional .....	—	—	—	79	211	+ 132
61	Secretaría de Guerra (1) .....	915	893	— 22	12.368	11.338	— 1.030
62	Secretaría de Marina (1) .....	64	61	— 3	7.795	7.086	— 709
63	Secretaría de Aeronáutica (1) .....	14	14	—	9.332	10.135	+ 803
70	Ministerio de Obras y Servicios Públicos .....	—	—	—	124	97	— 27
72	Secretaría de Comunicaciones .....	33.312	28.172	— 5.140	38.430	32.892	— 5.538
73	Secretaría de Transporte .....	—	—	—	47.944	47.151	— 793
		785	701	— 84	2.231	1.823	— 408
	Totales .....	146.684	140.566	— 6.118	442.406	429.724	— 12.682

(1) Excluido personal militar y de seguridad y defensa.



CUADRO N° 14

**CUADRO RESUMEN**  
**COMPARATIVO ENTRE LOS CREDITOS NETOS PARA LOS EJERCICIOS DE 1960**  
**(LEY 15.021) Y DE 1961 (PROYECTO)**  
**(En millones de m\$.n.)**

CONCEPTO	SERVICIOS			INVERSIONES		
	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + 0 -	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + 0 -
Administración Central .....	57.211,0 (*)	66.489,9	+ 9.278,4	716,2	1.013,2	+ 297,0
Cuentas especiales .....	4.006,8	4.923,4	+ 916,6	703,5	1.024,1	+ 320,6
Organismos descentralizados .....	16.424,6	20.735,1	+ 4.310,6	8.868,6	3.205,0	- 5.663,6
Totales generales .....	77.642,8	92.148,4	+ 14.505,6	10.288,3	5.245,3	- 5.043,0
% diferencia .....			+ 18,68			- 49,02

(\*) Incluye Servicio de la Deuda Pública.

ANEXO O JURISDICCION	TRABAJOS PUBLICOS			TOTALES GENERALES			
	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + 0 -	1960 Ley 15.021	1961 Proyecto	Diferencia + 0 -	Difer. %
Administración Central .....	5.519,2	7.870,1	+ 2.350,9	63.446,9	75.373,2	+ 11.926,3	+ 18,80
Cuentas especiales .....	—	913,9	+ 913,9	4.710,3	6.861,4	+ 2.151,1	+ 45,67
Organismos descentralizados .....	4.338,7	11.499,8	+ 7.161,1	29.631,8	35.442,9	+ 5.811,1	+ 19,61
Totales generales .....	9.857,9	20.283,8	+ 10.425,9	97.789,0	117.677,5	+ 19.888,5	+ 20,34
% diferencia .....			+ 105,76			+ 20,34	

(\*) Incluye Servicio de la Deuda Pública.

CUADRO Nº 15

## CUADRO RESUMEN COMPARATIVO ENTRE LOS CREDITOS NETOS PARA LOS EJERCICIOS DE 1960 (LEY 15.021) Y DE 1961 (PROYECTO)

(En millones de m\$n.)

ANEXO O JURISDICCION	SERVICIOS			DEUDA PUBLICA			INVERSIONES		
	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -
1 Presidencia de la Nación .....	324,9	539,6	+ 214,7	—	—	—	31,8	45,4	+ 13,6
2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto .....	991,4	967,1	— 24,3	—	—	—	4,1	4,1	—
5 Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública .....	2.722,1	3.370,6	+ 648,5	—	—	—	68,0	135,3	+ 67,3
19 Servicio de la Deuda Pública .....	—	—	—	5.667,6	7.679,9	+ 2.012,3	—	—	—
22 Congreso de la Nación .....	253,9	280,6	+ 26,7	—	—	—	2,3	7,3	+ 5,0
23 Corte Suprema y Tribunales Inferiores ..	543,1	749,5	+ 206,4	—	—	—	4,2	8,1	+ 3,9
25 Ministerio del Interior .....	2.126,9	2.490,0	+ 363,1	—	—	—	140,2	66,2	— 80,0
28 Ministerio de Educación y Justicia ....	12.110,3	13.374,6	+ 1.264,3	—	—	—	311,4	573,3	+ 261,9
30 Tribunal de Cuentas de la Nación ....	76,3	87,1	+ 10,8	—	—	—	0,1	0,1	—
31 Obligaciones a cargo del Tesoro .....	10.111,8	10.911,4	+ 799,6	—	—	—	309,4	430,3	+ 120,9
32 Crédito de emergencia .....	6.071,9	5.700,0	— 371,9	—	—	—	80,0	100,0	+ 20,0
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	1.032,8	1.132,1	+ 99,3	—	—	—	1.624,1	1.631,2	+ 7,1
50 Ministerio de Economía .....	12,1	25,9	+ 13,8	—	—	—	—	0,3	+ 0,3
51 Secretaría de Agricultura y Ganadería ..	2.232,2	2.661,8	+ 429,6	—	—	—	1.286,5	180,8	— 1.105,7
52 Secretaría de Hacienda .....	3.633,2	4.041,9	+ 408,7	—	—	—	229,4	305,8	+ 76,4
53 Secretaría de Finanzas .....	3.492,6	3.703,2	+ 210,6	—	—	—	226,4	226,3	— 0,1
54 Secretaría de Comercio .....	886,3	766,3	— 120,0	—	—	—	21,5	26,5	+ 5,0
55 Secretaría de Industria y Minería ....	20,5	84,2	+ 63,7	—	—	—	11,7	16,1	+ 4,4
56 Secretaría de Energía y Combustibles ..	218,4	28,5	— 189,9	—	—	—	5.087,9	1,9	— 5.087,0
60 Ministerio de Defensa Nacional .....	8,3	72,1	+ 63,8	—	—	—	2,4	3,7	+ 1,3
61 Secretaría de Guerra .....	8.516,2	12.007,7	+ 3.491,5	—	—	—	204,1	426,9	+ 222,8
62 Secretaría de Marina .....	4.792,0	7.135,8	+ 2.343,8	—	—	—	210,1	60,3	+ 150,2
63 Secretaría de Aeronáutica .....	3.287,7	3.977,1	+ 689,4	—	—	—	32,8	121,9	+ 89,1
70 Ministerio de Obras y Servicios Públicos	16,0	14,2	— 1,8	—	—	—	0,3	0,3	—
71 Secretaría de Obras Públicas .....	4.859,3	6.268,0	+ 1.408,5	—	—	—	364,7	546,2	+ 181,5
72 Secretaría de Comunicaciones .....	3.415,9	3.795,2	+ 379,3	—	—	—	30,4	30,4	—
73 Secretaría de Transporte .....	221,9	284,0	+ 62,1	—	—	—	4,5	3,6	— 0,9
Totales .....	71.975,2	84.468,5	+ 12.493,3	5.667,6	7.679,9	+ 2.012,3	10.283	5.245,3	— 5.043,0

CUADRO Nº 15 (continuación)

ANEXO O JURISDICCION	TRABAJOS PUBLICOS			TOTALES GENERALES			
	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -	% diferencia
1 Presidencia de la Nación .....	8,0	25,0	+ 17,0	364,7	610,6	+ 245,3	+ 67,26
2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto .....	20,0	20,0	—	1.015,5	991,2	— 24,3	— 2,39
5 Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública .....	150,0	150,0	—	2.940,1	3.655,3	+ 715,8	+ 24,35
19 Servicio de la Deuda Pública .....	—	—	—	5.867,6	7.679,9	+ 2.012,3	+ 35,51
22 Congreso de la Nación .....	—	—	—	256,2	287,9	+ 31,7	+ 12,37
23 Corte Suprema y Tribunales Inferiores	7,0	7,0	—	554,3	764,0	+ 210,3	+ 37,94
25 Ministerio del Interior .....	50,0	178,3	+ 123,3	2.317,1	2.728,1	+ 411,4	+ 17,75
28 Ministerio de Educación y Justicia ....	342,0	602,0	+ 260,0	12.763,7	14.546,9	+ 1.786,2	+ 14,00
30 Tribunal de Cuentas de la Nación ....	—	—	—	76,4	87,2	+ 10,8	+ 14,14
31 Obligaciones a cargo del Tesoro .....	1.284,0	2.991,3	+ 1.707,3	11.705,2	14.333,0	+ 2.327,8	+ 22,45
32 Crédito de emergencia .....	—	300,0	+ 300,0	6.151,9	6.100,0	— 51,9	— 0,84
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	20,0	44,0	+ 24,0	2.676,9	2.807,3	+ 130,4	+ 4,87
50 Ministerio de Economía .....	—	—	—	12,1	26,2	+ 14,1	+ 116,53
51 Secretaria de Agricultura y Ganadería .	34,5	82,4	+ 47,9	3.553,2	2.925,0	— 628,2	— 17,68
52 Secretaria de Hacienda .....	60,0	96,0	+ 36,0	3.922,6	4.443,7	+ 521,1	+ 13,28
53 Secretaria de Finanzas .....	928,2	910,2	— 18,0	4.647,2	4.835,7	+ 192,5	+ 4,14
54 Secretaria de Comercio .....	33,0	11,1	— 21,9	942,8	803,9	— 138,9	— 14,73
55 Secretaria de Industria y Minería .....	58,5	53,0	— 5,5	90,7	155,5	+ 62,6	+ 69,02
56 Secretaria de Energía y Combustibles .	—	1.546,1	+ 1.546,1	5.306,3	1.575,5	— 3.730,8	— 70,31
60 Ministerio de Defensa Nacional .....	11,0	11,0	—	21,7	86,8	+ 65,1	+ 300,00
61 Secretaria de Guerra .....	793,7	1.092,5	+ 298,8	9.508,0	13.527,1	+ 4.019,1	+ 42,27
62 Secretaria de Marina .....	946,0	1.137,0	+ 191,0	5.948,1	8.633,1	+ 2.685,0	+ 45,14
63 Secretaria de Aeronáutica .....	932,0	1.500,0	+ 568,0	4.252,5	5.599,0	+ 1.346,5	+ 31,66
70 Ministerio de Obras y Servicios Públicos	—	—	—	16,3	14,5	— 1,8	— 11,04
71 Secretaria de Obras Públicas .....	4.040,0	9.386,9	+ 5.346,9	9.264,2	16.201,1	+ 6.936,9	+ 74,88
72 Secretaria de Comunicaciones .....	140,0	140,0	—	3.587,3	3.961,6	+ 378,3	+ 10,55
73 Secretaria de Transporte .....	—	—	—	226,4	287,6	+ 61,2	+ 27,03
Totales .....	9.85,9	20.283,8	+ 10.425,9	57.789,0	117.677,5	+ 19.888,5	+ 20,34

SECTOR 2 - TITULO I - SERVICIOS  
COMPARATIVO ENTRE LOS CREDITOS NETOS PARA LOS EJERCICIOS DE 1960  
(LEY 15.021) Y DE 1961 (PROYECTO)  
(En millones de m\$n.)

ANEXO O JURISDICCION	RENTAS GENERALES				CUENTAS ESPECIALES			
	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -	% Diferencia	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -	% Diferencia
1 Presidencia de la Nación .....	219,6	176,7	- 42,9	- 19,53	29,9	40,6	+ 10,7	+ 35,78
2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto .....	983,2	958,9	- 24,3	- 2,47	8,2	8,2	-	-
5 Ministerio de Asistencia Social y Sa- lud Pública .....	2.208,1	2.615,1	+ 407,0	+ 18,43	32,6	32,7	+ 0,1	+ 0,31
22 Congreso de la Nación .....	253,9	280,6	+ 26,7	+ 10,52	-	-	-	-
23 Corte Suprema y Tribunales Infe- riores .....	543,1	749,5	+ 206,4	+ 38,00	-	-	-	-
25 Ministerio del Interior .....	2.066,6	2.410,7	+ 344,1	+ 16,65	27,9	36,2	+ 8,3	+ 29,75
28 Ministerio de Educación y Justicia ..	8.374,3	8.909,7	+ 535,4	+ 6,39	23,4	54,1	+ 30,7	+ 131,20
30 Tribunal de Cuentas de la Nación ..	76,3	87,1	+ 10,8	+ 14,15	-	-	-	-
31 Obligaciones a cargo del Tesoro ...	10.111,8	10.911,4	+ 799,6	+ 7,91	-	-	-	-
32 Crédito de Emergencia .....	6.071,9	5.700,0	- 371,9	- 6,12	-	-	-	-
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social .....	191,5	179,6	- 11,9	- 6,21	31,1	20,3	- 10,8	- 34,73
50 Ministerio de Economía .....	12,1	25,9	+ 13,8	+ 114,05	-	-	-	-
51 Secretaría de Agricultura y Gana- dería .....	545,8	741,1	+ 195,3	+ 35,78	-	-	-	-
52 Secretaría de Hacienda .....	1.384,2	1.709,2	+ 325,0	+ 23,47	2.238,4	2.321,6	+ 83,2	+ 3,72
53 Secretaría de Finanzas .....	16,0	15,2	- 0,8	- 50,00	-	-	-	-
54 Secretaría de Comercio .....	353,6	366,0	+ 12,4	+ 3,51	464,3	281,9	- 182,4	- 39,28
55 Secretaría de Industria y Minería ..	1,5	1,7	+ 0,2	+ 13,33	-	-	-	-
56 Secretaría de Energía y Combus- tibles .....	1,8	1,4	- 0,4	- 22,22	-	-	-	-
60 Ministerio de Defensa Nacional ....	8,3	71,5	+ 63,2	+ 761,44	-	0,6	+ 0,6	-
61 Secretaría de Guerra .....	6.331,6	8.555,6	+ 2.224,0	+ 35,12	126,9	267,2	+ 140,3	+ 110,56
62 Secretaría de Marina .....	4.242,5	5.810,5	+ 1.568,0	+ 36,97	540,5	1.312,6	+ 772,1	+ 142,85
63 Secretaría de Aeronáutica .....	3.216,6	3.860,8	+ 644,2	+ 20,03	68,9	114,0	+ 45,1	+ 65,46
70 Ministerio de Obras y Servicios Pú- blicos .....	16,0	14,2	- 1,8	- 10,62	-	-	-	-
71 Secretaría de Obras Públicas .....	845,5	805,6	- 39,9	- 4,71	372,3	390,1	+ 17,8	+ 4,78
72 Secretaría de Comunicaciones .....	3.377,5	3.754,1	+ 376,6	+ 11,15	39,4	41,1	+ 1,7	+ 4,31
73 Secretaría de Transporte .....	90,6	97,9	+ 7,3	+ 8,06	3,0	2,2	- 0,8	- 26,66
Totales .....	51.543,9	58.810,0	+ 7.266,1	+ 14,09	4.006,8	4.923,4	+ 916,6	+ 22,88

CUADRO Nº 16 (continuación)

ANEXO O JURISDICCION	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				TOTALES GENERALES			
	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -	% Diferencia	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -	% Diferencia
1 Presidencia de la Nación .....	75,4	322,3	+ 246,9	+ 327,45	324,9	539,6	+ 214,7	+ 66,08
2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto .....	—	—	—	—	991,4	967,1	— 24,3	— 2,45
5 Ministerio de Asistencia Social y Sa- lud Pública .....	481,4	722,8	+ 241,4	+ 50,15	2.722,1	3.370,6	+ 648,5	+ 23,82
22 Congreso de la Nación .....	—	—	—	—	253,9	280,6	+ 26,7	+ 10,52
23 Corte Suprema y Tribunales Infe- riores .....	—	—	—	—	543,1	749,5	+ 206,4	+ 38,00
25 Ministerio del Interior .....	32,4	43,1	+ 10,7	+ 33,02	2.126,9	2.490,0	+ 363,1	+ 17,07
28 Ministerio de Educación y Justicia ..	3.712,6	4.410,8	+ 698,2	+ 18,81	12.110,3	13.374,6	+ 1.264,3	+ 10,44
30 Tribunal de Cuentas de la Nación ..	—	—	—	—	76,3	87,1	+ 10,8	+ 14,15
31 Obligaciones a cargo del Tesoro ...	—	—	—	—	10.111,8	10.911,4	+ 799,6	+ 8,91
32 Crédito de Emergencia .....	—	—	—	—	6.071,9	5.700,0	— 371,9	— 6,12
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social .....	810,2	932,2	+ 122,0	+ 15,05	1.032,8	1.132,1	+ 99,3	+ 9,61
50 Ministerio de Economía .....	—	—	—	—	12,1	25,9	+ 13,8	+ 114,05
51 Secretaría de Agricultura y Gana- dería .....	1.686,4	1.920,7	+ 234,3	+ 13,89	2.232,2	2.661,8	+ 429,6	+ 19,25
52 Secretaría de Hacienda .....	10,6	11,1	+ 0,5	+ 4,72	3.633,2	4.041,9	+ 408,7	+ 11,25
53 Secretaría de Finanzas .....	3.476,6	3.688,0	+ 211,4	+ 6,08	3.492,6	3.703,2	+ 210,6	+ 6,03
54 Secretaría de Comercio .....	70,4	118,4	+ 48,0	+ 68,18	888,3	766,3	— 122,0	— 13,73
55 Secretaría de Industria y Minería ..	19,0	82,5	+ 63,5	+ 334,21	20,5	84,2	+ 63,7	+ 309,22
56 Secretaría de Energía y Combus- tibles .....	216,6	27,1	— 189,5	— 87,49	218,4	28,5	— 189,9	— 86,45
60 Ministerio de Defensa Nacional ..	—	—	—	—	8,3	72,1	+ 63,8	+ 768,67
61 Secretaría de Guerra .....	2.051,7	3.184,9	+ 1.133,2	+ 55,26	8.510,2	12.007,7	+ 3.497,5	+ 41,10
62 Secretaría de Marina .....	9,0	12,7	+ 3,7	+ 41,11	4.792,0	7.135,8	+ 2.343,8	+ 48,91
63 Secretaría de Aeronáutica .....	2,2	2,3	+ 0,1	+ 4,54	3.287,7	3.977,1	+ 689,4	+ 20,97
70 Ministerio de Obras y Servicios Pú- blicos .....	—	—	—	—	16,0	14,2	— 1,8	— 11,25
71 Secretaría de Obras Públicas .....	3.641,7	5.072,3	+ 1.430,6	+ 39,28	4.859,5	6.268,0	+ 1.408,5	+ 28,98
72 Secretaría de Comunicaciones .....	—	—	—	—	3.416,9	3.795,2	+ 378,3	+ 11,07
73 Secretaría de Transporte .....	128,3	183,9	+ 55,6	+ 43,33	221,9	284,0	+ 62,1	+ 27,99
Totales .....	16.424,5	20.735,1	+ 4.310,6	+ 26,24	71.975,2	84.468,5	+ 2.493,3	+ 17,36

## SECTOR 3 - TITULO II - DEUDA PUBLICA

COMPARATIVO ENTRE LOS CREDITOS NETOS PARA LOS EJERCICIOS DE 1960  
(LEY 15.021) Y DE 1961 (PROYECTO)

(En millones de m\$.n.)

CONCEPTO	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -	% Diferencia
Servicios de empréstitos emitidos en pesos moneda nacional .....	4.657,6	5.589,9	+ 932,3	+ 20,02
Servicio de intereses de bonos del Tesoro ..	50,0	50,0	—	—
Intereses de letras de tesorería y de otras obligaciones a corto plazo .....	515,0	1.345,0	+ 830,0	+ 161,16
Gastos relativos a la deuda pública .....	20,0	20,0	—	—
Servicio de nuevas obligaciones .....	300,0	550,0	+ 250,0	+ 83,33
Bonos nacionales para inversiones bancarias - decreto ley 13.127/57 - artículo 13 .....	125,0	125,0	—	—
Total .....	5.667,6	7.679,9	+ 2.012,3	+ 35,51

CUADRO Nº 18

COMPARATIVO ENTRE LOS CREDITOS NETOS DE LOS SERVICIOS DE EMPRESTITOS EMITIDOS DE LOS  
EJERCICIOS DE 1960 (LEY 15.021) Y DE 1961 (PROYECTO)

(En millones de m\$.n.)

Partida	EMPRESITITOS	RENTA				AMORTIZACION	
		1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -	% diferencia	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961
773	Bono Perpetuo de la C. N. de J. y P. C. Ley 4.349 ...	0,6	0,6	—	—	—	—
774	Bonos Consolidados del Tesoro Ley 12.160 .....	11,0	10,9	— 0,1	— 0,91	2,0	2,1
777	Crédito Argentino Interno - Conversión 1946 Serie A	23,1	22,8	— 0,3	— 1,30	9,7	10,0
778	Crédito Argentino Interno - Conversión 1946 Serie B	23,7	23,4	— 0,3	— 1,26	10,0	10,3
779	Crédito Argentino Interno - Conversión 1946 Serie C	21,8	21,6	— 0,2	— 0,92	9,2	9,5
780	Crédito Argentino Interno - Conversión 1946 Serie D	20,8	20,5	— 0,3	— 1,44	8,8	9,1

CUADRO Nº 18 (Continuación)

Partida	EMPRESTITOS	RENTA				AMORTIZACION	
		1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -	% diferencia	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961
781	Crédito Argentino Interno - Conversión 1946 Serie E	21,3	21,0	- 0,3	- 1,41	8,9	9,2
782	Crédito Argentino Interno - Conversión 1946 Serie F	15,9	15,7	- 0,2	- 1,26	6,6	6,8
783	Crédito Argentino Interno - Conversión 1946 Serie G	26,4	26,1	- 0,3	- 1,14	11,1	11,4
784	Obligaciones de Previsión Social Serie 1ª	19,1	18,9	- 0,2	- 1,05	4,6	4,7
785	Obligaciones de Previsión Social Serie 2ª	19,0	18,9	- 0,1	- 0,53	4,5	4,7
786	Obligaciones de Previsión Social Serie 3ª	19,1	18,9	- 0,2	- 1,05	4,5	4,7
787	Obligaciones de Previsión Social Serie 4ª	18,3	18,1	- 0,2	- 1,09	4,4	4,5
788	Obligaciones de Previsión Social Serie 5ª	18,4	18,2	- 0,2	- 1,09	4,2	4,4
789	Obligaciones de Previsión Social Serie 6ª	18,4	18,3	- 0,1	- 0,54	4,2	4,3
790	Obligaciones de Previsión Social Serie 7ª	37,0	36,7	- 0,3	- 0,81	8,1	8,4
791	Obligaciones de Previsión Social Serie 8ª	37,2	36,8	- 0,4	- 1,07	8,1	8,4
792	Obligaciones de Previsión Social 1949	73,5	72,9	- 0,6	- 0,82	15,3	15,5
793	Obligaciones de Previsión Social 1950	117,8	116,9	- 0,9	- 0,76	23,4	24,3
794	Obligaciones de Previsión Social 1951	137,3	136,3	- 1,0	- 0,73	26,0	27,0
795	Obligaciones de Previsión Social 1952	188,0	186,6	- 1,4	- 0,74	34,4	35,8
1.851	Obligaciones de Previsión Social 1953	225,6	224,0	- 1,6	- 0,71	38,8	40,4
1.852	Crédito Argentino Interno - 1953	70,8	70,1	- 0,7	- 0,99	22,9	23,6
1.853	Crédito Argentino Interno - 1953 - No negociable	4,7	4,7	-	-	1,7	1,8
1.854	Crédito Argentino Interno - 1954	42,9	42,5	- 0,4	- 0,93	13,4	13,8
1.855	Obligaciones de Previsión Social - 1954	194,0	192,7	- 1,3	- 0,67	31,9	33,2
1.855	Obligaciones de Previsión Social - 1954	61,9	61,6	- 0,3	- 0,48	6,1	6,4
1.856	Obligaciones de Previsión Social - 1955	18,2	18,0	- 0,2	- 1,10	2,9	3,0
1.856	Obligaciones de Previsión Social - 1955	285,6	284,2	- 1,4	- 0,49	26,5	27,8
1.857	Crédito Argentino Interno - 1955	72,3	71,7	- 0,6	- 0,83	21,4	22,1
1.547	Crédito Argentino Interno - 1956	58,2	57,7	- 0,5	- 0,86	16,8	17,3
1.553	Obligaciones de Previsión Social - 1956	19,0	18,8	- 0,2	- 1,05	2,9	3,0
1.553	Obligaciones de Previsión Social - 1956	349,8	348,2	- 1,6	- 0,46	31,1	32,6
1.358	Obligaciones de Previsión Social - 1957	350,6	349,1	- 1,5	- 0,43	29,7	31,1
1.358	Obligaciones de Previsión Social - 1957	13,0	12,9	- 0,1	- 0,77	1,9	2,0
2.359	Crédito Argentino Interno - 1957	44,2	43,9	- 0,3	- 0,68	12,0	12,4
2.711	Crédito Argentino Interno - 1958	317,7	315,2	- 2,5	- 0,79	83,5	86,1
2.712	Obligaciones de Previsión Social - 1958	2,8	2,7	- 0,1	- 3,57	0,4	0,5
2.712	Obligaciones de Previsión Social - 1958	253,9	252,8	- 1,1	- 0,43	20,2	21,2
2.975	Título Nacional de Ahorro - 1958	20,0	20,0	-	-	0,4	0,3
2.976	Plan de Inversión y Capitalización - 1958	399,7	399,2	- 0,5	- 0,12	6,5	6,8
2.977	Plan de Inversión y Capitalización - 1959 (1)	399,7	558,9	+ 159,2	+ 39,83	6,2	9,4
3.113	Plan de Inversión y Capitalización - 1960	-	324,4	+ 324,4	-	-	5,1
3.114	Crédito Argentino Interno - 1960 - Serie A	-	236,0	+ 236,0	-	-	205,0
	Totales	4.072,3	4.769,4	+ 697,1	-	585,2	820,4

(1) Este empréstito fue completado con fecha posterior al 31-X-59, emitiéndose hasta el importe de 7.000 millones.

CUADRO Nº 18 (Continuación)

CUADRO Nº 18 (Continuación)		AMORTIZACION		TOTAL			
		Diferencia + o -	% diferencia	1960 Ley 15.021	1961 Proyecto	Diferencia + o -	% Diferencia
Partida	EMPRESTITOS						
773	Bono Perpetuo de la C. N. de J. y P. C. Ley 4.349 ...	—	—	0,6	0,6	—	—
774	Bonos Consolidados del Tesoro Ley 12.160 .....	+ 0,1	+ 5,00	13,0	13,0	—	—
777	Crédito Argentino Interno - Conversión 1946 Serie A	+ 0,3	+ 3,09	32,9	32,9	—	—
778	Crédito Argentino Interno - Conversión 1946 Serie B	+ 0,3	+ 3,00	33,8	33,8	—	—
779	Crédito Argentino Interno - Conversión 1946 Serie C	+ 0,3	+ 3,26	31,1	31,1	—	—
780	Crédito Argentino Interno - Conversión 1946 Serie D	+ 0,3	+ 3,40	29,6	29,6	—	—
781	Crédito Argentino Interno - Conversión 1946 Serie E	+ 0,3	+ 3,37	30,2	30,2	—	—
782	Crédito Argentino Interno - Conversión 1946 Serie F	+ 0,2	+ 3,03	22,5	22,5	—	—
783	Crédito Argentino Interno - Conversión 1946 Serie G	+ 0,3	+ 2,70	37,5	37,5	—	—
784	Obligaciones de Previsión Social Serie 1ª .....	+ 0,1	+ 2,17	23,6	23,6	—	—
785	Obligaciones de Previsión Social Serie 2ª .....	+ 0,2	+ 4,44	23,5	23,5	—	—
786	Obligaciones de Previsión Social Serie 3ª .....	+ 0,2	+ 4,44	23,6	23,6	—	—
787	Obligaciones de Previsión Social Serie 4ª .....	+ 0,1	+ 2,27	22,6	22,6	—	—
788	Obligaciones de Previsión Social Serie 5ª .....	+ 0,2	+ 4,76	22,6	22,6	—	—
789	Obligaciones de Previsión Social Serie 6ª .....	+ 0,1	+ 2,38	22,6	22,6	—	—
790	Obligaciones de Previsión Social Serie 7ª .....	+ 0,3	+ 3,70	45,1	45,1	—	—
791	Obligaciones de Previsión Social Serie 8ª .....	+ 0,3	+ 3,70	45,3	45,3	—	—
792	Obligaciones de Previsión Social 1949 .....	+ 0,6	+ 3,92	88,8	88,8	—	—
793	Obligaciones de Previsión Social 1950 .....	+ 0,9	+ 3,85	141,2	141,2	—	—
794	Obligaciones de Previsión Social 1951 .....	+ 1,0	+ 3,85	163,4	163,3	— 0,1	— 0,06
795	Obligaciones de Previsión Social 1952 .....	+ 1,4	+ 4,07	222,4	222,4	—	—
1.851	Obligaciones de Previsión Social 1953 .....	+ 1,6	+ 4,12	264,4	264,4	—	—
1.852	Crédito Argentino Interno - 1953 .....	+ 0,7	+ 3,06	93,8	93,8	—	—
1.853	Crédito Argentino Interno - 1953 - No negociable ...	+ 0,1	+ 5,88	6,5	6,5	—	—
1.854	Crédito Argentino Interno - 1954 .....	+ 0,4	+ 2,98	56,3	56,2	— 0,1	— 0,18
1.855	Obligaciones de Previsión Social - 1954 .....	+ 1,3	+ 4,07	225,8	225,8	—	—
1.855	Obligaciones de Previsión Social - 1954 .....	+ 0,3	+ 4,92	68,0	68,0	—	—
1.856	Obligaciones de Previsión Social - 1955 .....	+ 0,1	+ 3,45	21,0	21,0	—	—
1.856	Obligaciones de Previsión Social - 1955 .....	+ 1,3	+ 4,90	312,4	312,4	—	—
1.857	Crédito Argentino Interno - 1955 .....	+ 0,7	+ 3,27	93,8	93,8	—	—
1.547	Crédito Argentino Interno - 1956 .....	+ 0,5	+ 2,98	75,0	75,0	—	—
1.553	Obligaciones de Previsión Social - 1956 .....	+ 0,1	+ 3,45	21,8	21,8	—	—
1.553	Obligaciones de Previsión Social - 1956 .....	+ 1,5	+ 4,82	380,8	380,8	—	—
1.358	Obligaciones de Previsión Social - 1957 .....	+ 1,4	+ 4,71	380,3	380,2	— 0,1	— 0,03
1.358	Obligaciones de Previsión Social - 1957 .....	+ 0,1	+ 5,26	14,9	14,9	—	—
2.359	Crédito Argentino Interno - 1957 .....	+ 0,4	+ 3,33	56,2	56,2	—	—
2.711	Crédito Argentino Interno - 1958 .....	+ 2,6	+ 3,11	401,2	401,2	—	—
2.712	Obligaciones de Previsión Social - 1958 .....	+ 0,1	+ 25,00	3,2	3,2	—	—
2.712	Obligaciones de Previsión Social - 1958 .....	+ 1,0	+ 4,95	274,0	274,0	—	—
2.975	Título Nacional de Ahorro - 1958 .....	— 0,1	— 25,00	20,4	20,3	— 0,1	— 0,49
2.976	Plan de Inversión y Capitalización - 1958 .....	+ 0,3	+ 4,61	406,2	406,0	— 0,2	— 0,05
2.977	Plan de Inversión y Capitalización - 1959 (1) .....	+ 3,2	+ 51,61	406,0	568,4	+ 162,4	+ 40,00
3.113	Plan de Inversión y Capitalización - 1960 .....	+ 5,1	—	—	329,5	+ 329,5	—
3.114	Crédito Argentino Interno - 1960 - Serie A .....	+ 205,0	—	—	441,0	+ 441,0	—
Totales .....		+ 235,2	—	4.657,6	5.589,9	+ 932,3	—

(1) Este empréstito fue completado con fecha posterior al 31-X-59, emitiéndose hasta el importe de 7.000 millones.



**SECTOR 4 - TITULO I - INVERSIONES**  
**COMPARATIVO ENTRE LOS CREDITOS NETOS PARA LOS EJERCICIOS DE 1960**  
**(LEY 15.021) Y DE 1961 (PROYECTO)**  
 (En millones de m\$.n.)

ANEXO O JURISDICCION	USO DEL CREDITO				Cuentas Especiales			
	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -	% diferencia	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -	% diferencia
1 Presidencia de la Nación .....	2,6	1,1	- 1,5	- 57,69	12,4	12,4	-	-
2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto .....	4,1	4,1	-	-	-	-	-	-
5 Ministerio de Asistencia Social y Sa- lud Pública .....	41,3	79,9	+ 38,6	+ 93,46	9,7	9,7	-	-
22 Congreso de la Nación .....	2,3	7,3	+ 5,0	+ 217,39	-	-	-	-
23 Corte Suprema y Tribunales Infe- riores .....	4,2	8,1	+ 3,9	+ 92,86	-	-	-	-
25 Ministerio del Interior .....	14,3	23,1	+ 8,8	+ 61,54	36,5	34,6	- 1,9	- 5,20
28 Ministerio de Educación y Justicia ..	46,6	54,7	+ 8,1	+ 17,38	7,3	8,4	+ 1,1	+ 15,60
30 Tribunal de Cuentas de la Nación ..	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
31 Obligaciones a cargo del Tesoro ...	309,4	430,3	+ 120,9	+ 39 08	-	-	-	-
32 Crédito de emergencia .....	80,0	100,0	+ 20,0	+ 25,00	-	-	-	-
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social .....	0,3	0,4	+ 0,1	+ 33,33	0,1	0,1	-	-
50 Ministerio de Economía .....	-	0,3	+ 0,3	-	-	-	-	-
51 Secretaría de Agricultura y Gana- dería .....	58,4	26,7	- 31,7	- 54,28	-	-	-	-
52 Secretaría de Hacienda .....	14,3	72,4	+ 58,1	+ 40,63	212,8	231,2	+ 18,4	+ 8,65
53 Secretaría de Finanzas .....	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
54 Secretaría de Comercio .....	7,4	6,5	- 0,9	- 12,16	13,9	15,8	+ 1,9	+ 13,67
55 Secretaría de Industria y Minería ..	-	-	-	-	-	-	-	-
56 Secretaría de Energía y Combustibles	-	-	-	-	-	-	-	-
60 Ministerio de Defensa Nacional ....	2,4	3,7	+ 1,3	+ 54,17	-	-	-	-
61 Secretaría de Guerra .....	17,8	31,8	+ 14,0	+ 78,65	121,9	220,8	+ 98,9	+ 81,13
62 Secretaría de Marina .....	50,9	58,9	+ 8,0	+ 15,72	158,4	300,4	+ 142,0	+ 89,65
63 Secretaría de Aeronáutica .....	18,2	62,2	+ 44,0	+ 241,76	14,0	59,1	+ 45,1	+ 322,14
70 Ministerio de Obras y Servicios Pú- blicos .....	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-
71 Secretaría de Obras Públicas .....	10,6	10,6	-	-	116,5	131,6	+ 15,1	+ 12,96
72 Secretaría de Comunicaciones .....	30,4	30,4	-	-	-	-	-	-
73 Secretaría de Transporte .....	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-
Totales .....	716,2	1.013,2	+ 297,0	+ 41,47	703,5	1.024,1	+ 320,6	+ 45,57

CUADRO Nº 19 (continuación)

ANEXO O JURISDICCION	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				TOTALES GENERALES			
	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -	% diferencia	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -	% diferencia
1 Presidencia de la Nación .....	16,8	31,9	+ 15,1	+ 89,88	31,8	45,4	+ 13,6	+ 42,77
2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto .....	—	—	—	—	4,1	4,1	—	—
5 Ministerio de Asistencia Social y Sa- lud Pública .....	17,0	45,7	+ 28,7	+ 168,82	68,0	135,3	+ 67,3	+ 98,97
22 Congreso de la Nación .....	—	—	—	—	2,3	7,3	+ 5,0	+ 217,39
23 Corte Suprema y Tribunales Infe- riores .....	—	—	—	—	4,2	8,1	+ 3,9	+ 92,85
25 Ministerio del Interior .....	89,4	2,5	— 86,9	— 97,20	140,2	60,2	— 80,0	— 57,06
28 Ministerio de Educación y Justicia ..	257,5	510,2	+ 252,7	+ 98,13	311,4	573,3	+ 261,9	+ 84,10
30 Tribunal de Cuentas de la Nación ..	—	—	—	—	0,1	0,1	—	—
31 Obligaciones a cargo del Tesoro ...	—	—	—	—	309,4	430,3	+ 120,9	+ 39,08
32 Crédito de Emergencia .....	—	—	—	—	80,0	100,0	+ 20,0	+ 25,00
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social .....	1.623,7	1.630,7	+ 7,0	+ 0,43	1.624,1	1.631,2	+ 7,1	+ 0,44
50 Ministerio de Economía .....	—	—	—	—	—	0,3	+ 0,3	—
51 Secretaría de Agricultura y Gana- dería .....	1.228,1	154,1	— 1.074,0	— 87,45	1.286,5	180,8	— 1.105,7	— 85,95
52 Secretaría de Hacienda .....	2,3	2,2	— 0,1	— 4,35	229,4	305,8	+ 76,4	+ 33,30
53 Secretaría de Finanzas .....	226,3	226,2	— 0,1	— 0,04	226,4	226,3	— 0,1	— 0,04
54 Secretaría de Comercio .....	0,2	4,2	+ 4,0	+ 2.000,00	21,5	26,5	+ 5,0	+ 23,25
55 Secretaría de Industria y Minería ..	11,7	16,1	+ 4,4	+ 37,61	11,7	16,1	+ 4,4	+ 37,61
56 Secretaría de Energía y Combustibles	5.087,9	0,9	— 5.087,0	— 99,98	5.087,9	0,9	— 5.087,0	— 99,98
60 Ministerio de Defensa Nacional ..	—	—	—	—	2,4	3,7	+ 1,3	+ 54,17
61 Secretaría de Guerra .....	64,4	174,3	+ 109,9	+ 170,65	204,1	426,9	+ 222,8	+ 109,16
62 Secretaría de Marina .....	0,8	1,0	+ 0,2	+ 25,00	210,1	360,3	+ 150,2	+ 71,49
63 Secretaría de Aeronáutica .....	0,6	0,6	—	— 100,00	32,8	121,9	+ 89,1	+ 271,65
70 Ministerio de Obras y Servicios Pú- blicos .....	—	—	—	—	0,3	0,3	—	—
71 Secretaría de Obras Públicas .....	237,6	404,0	+ 166,4	+ 70,03	364,7	546,2	+ 181,5	+ 49,77
72 Secretaría de Comunicaciones .....	—	—	—	—	30,4	30,4	—	—
73 Secretaría de Transporte .....	4,3	3,4	— 0,9	— 2,09	4,5	3,6	— 0,9	— 2,00
Totales .....	8.868,6	3.208,0	— 5.660,6	— 63,82	10.288,3	5.245,3	— 5.043,0	— 49,02

CUADRO Nº 20

## SECTOR 5 - TITULO II - TRABAJOS PUBLICOS

COMPARATIVO ENTRE LOS CREDITOS NETOS PARA LOS EJERCICIOS DE 1960 (LEY 15.021) Y DE 1961 (PROYECTO)

(En millones de m\$n.)

ANEXO O JURISDICCION	ADMINISTRACION CENTRAL						CUENTAS ESPECIALES			
	Uso del crédito	1960 - Ley 15.021 Recursos especiales	Totales	Proyecto 1961	Difer. + o -	% diferencia	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -	% diferencia
1 Presidencia de la Nación .....	8,0	—	8,0	8,0	—	—	—	—	—	—
2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto .....	20,0	—	20,0	20,0	—	—	—	—	—	—
5 Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública .....	150,0	—	150,0	150,0	—	—	—	—	—	—
23 Corte Suprema y Tribunales Inferiores	7,0	—	7,0	7,0	—	—	—	—	—	—
25 Ministerio del Interior .....	50,0	—	50,0	50,0	—	—	—	—	—	—
28 Ministerio de Educación y Justicia ..	10,0	278,0	288,0	9,2	— 278,8	— 96,81	—	306,7	+ 306,7	—
31 Obligaciones a cargo del Tesoro .....	1.284,0	—	1.284,0	2.991,3	+ 1.707,3	+ 132,97	—	—	—	—
32 Crédito de emergencia .....	—	—	—	300,0	+ 300,0	—	—	—	—	—
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social	20,0	—	20,0	20,0	—	—	—	24,0	+ 24,0	—
51 Secretaría de Agricultura y Ganadería ..	27,5	5,0	32,5	25,1	— 7,4	— 22,77	—	—	—	—
52 Secretaría de Hacienda .....	60,0	—	60,0	56,0	— 4,0	— 6,66	—	40,0	+ 40,0	—
53 Secretaría de Finanzas .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54 Secretaría de Comercio .....	20,0	13,0	33,0	—	— 33,0	— 100,00	—	11,1	+ 11,1	—
55 Secretaría de Industria y Minería .....	56,0	2,5	58,5	—	— 58,5	— 100,00	—	—	—	—
56 Secretaría de Energía y Combustibles ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60 Ministerio de Defensa Nacional .....	11,0	—	11,0	11,0	—	—	—	—	—	—
61 Secretaría de Guerra .....	395,0	0,2	395,2	490,5	+ 95,3	+ 24,11	—	0,2	+ 0,2	—
62 Secretaría de Marina .....	946,0	—	946,0	1.137,0	+ 191,0	+ 20,19	—	—	—	—
63 Secretaría de Aeronáutica .....	932,0	—	932,0	1.500,0	+ 568,0	+ 60,94	—	—	—	—
71 Secretaría de Obras Públicas .....	810,0	274,0	1.084,0	955,0	— 129,0	— 11,90	—	531,9	+ 531,9	—
72 Secretaría de Comunicaciones .....	140,0	—	140,0	140,0	—	—	—	—	—	—
Totales .....	4.946,5	572,7	5.519,2	7.870,1	+ 2.350,9	+ 42,60	—	913,9	+ 913,9	—

CUADRO Nº 20 (continuación)

ANEXO O JURISDICCION	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				TOTALES GENERALES			
	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -	% diferencia	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -	% diferencia
1 Presidencia de la Nación .....	—	17,0	+ 17,0	—	8,0	25,0	+ 17,0	+ 212,50
2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto .....	—	—	—	—	20,0	20,0	—	—
5 Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública .....	—	—	—	—	150,0	150,0	—	—
23 Corte Suprema y Tribunales Inferiores .....	—	—	—	—	7,0	7,0	—	—
25 Ministerio del Interior .....	—	128,3	+ 128,3	—	50,0	178,3	+ 128,3	+ 256,60
28 Ministerio de Educación y Justicia ....	54,0	286,1	+ 232,1	+ 429,81	342,0	602,0	+ 260,0	+ 76,02
31 Obligaciones a cargo del Tesoro .....	—	—	—	—	1.284,0	2.991,3	+ 1.707,3	+ 132,97
32 Crédito de emergencia .....	—	—	—	—	—	300,0	+ 300,0	—
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social .....	—	—	—	—	20,0	44,0	+ 24,0	+ 120,00
51 Secretaría de Agricultura y Ganadería ..	2,0	57,3	+ 55,3	+ 2.765,00	34,5	82,4	+ 47,9	+ 138,84
52 Secretaría de Hacienda .....	—	—	—	—	60,0	96,0	+ 36,0	+ 60,00
53 Secretaría de Finanzas .....	928,2	910,2	— 18,0	+ 1,93	928,2	910,2	— 18,0	— 1,94
54 Secretaría de Comercio .....	—	—	—	—	33,0	11,1	— 21,9	— 66,36
55 Secretaría de Industria y Minería .....	—	53,0	+ 53,0	—	58,5	53,0	— 5,5	— 9,40
56 Secretaría de Energía y Combustibles ..	—	1.546,1	+ 1.546,1	—	—	1.546,1	+ 1.546,1	—
60 Ministerio de Defensa Nacional .....	—	—	—	—	11,0	11,0	—	—
61 Secretaría de Guerra .....	398,5	601,8	+ 203,3	+ 51,02	793,7	1.092,5	+ 298,8	+ 37,65
62 Secretaría de Marina .....	—	—	—	—	946,0	1.137,0	+ 191,0	+ 20,19
63 Secretaría de Aeronáutica .....	—	—	—	—	932,0	1.500,0	+ 568,0	+ 60,94
71 Secretaría de Obras Públicas .....	2.956,0	7.900,0	+ 4.944,0	+ 167,25	4.040,0	9.386,9	+ 5.346,9	+ 132,35
72 Secretaría de Comunicaciones .....	—	—	—	—	140,0	140,0	—	—
Totales .....	4.338,7	11.499,8	+ 7.161,1	+ 165,05	9.857,9	20.283,8	+ 10.425,9	+ 105,76

**CUADRO RESUMEN COMPARATIVO ENTRE LOS CREDITOS NETOS PARA LOS  
EJERCICIOS DE 1960 (LEY 15.021) Y DE 1961 (PROYECTO)**

(En millones de m\$.n.)

ANEXO O JURISDICCION	ADMINISTRACION CENTRAL			CUENTAS ESPECIALES		
	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -
1 Presidencia de la Nación .....	230,2	185,8	- 44,4	42,3	53,0	+ 10,7
2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto .....	1.007,3	983,0	- 24,3	8,2	8,2	-
5 Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública .....	2.399,4	2.845,0	+ 445,6	42,3	42,4	+ 0,1
19 Servicio de la deuda pública .....	5.667,6	7.679,9	+ 2.012,3	-	-	-
22 Congreso de la Nación .....	256,2	287,9	+ 31,7	-	-	-
23 Corte Suprema y Tribunales Inferiores .....	554,3	764,6	+ 210,3	-	-	-
25 Ministerio del Interior .....	2.130,9	2.483,8	+ 352,9	64,4	70,8	+ 6,4
28 Ministerio de Educación y Justicia .....	8.708,9	8.973,6	+ 264,7	30,7	369,2	+ 338,5
30 Tribunal de Cuentas de la Nación .....	76,4	87,2	+ 10,8	-	-	-
31 Obligaciones a cargo del Tesoro .....	11.705,2	14.333,0	+ 2.627,8	-	-	-
32 Crédito de emergencia .....	6.151,9	6.100,0	- 51,9	-	-	-
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social .....	211,8	200,0	- 11,8	31,2	44,4	+ 13,2
50 Ministerio de Economía .....	12,1	26,2	+ 14,1	-	-	-
51 Secretaría de Agricultura y Ganadería .....	636,7	792,9	+ 156,2	-	-	-
52 Secretaría de Hacienda .....	1.458,5	1.837,6	+ 379,1	2.451,2	2.592,8	+ 141,6
53 Secretaría de Finanzas .....	16,1	15,3	- 0,8	-	-	-
54 Secretaría de Comercio .....	394,0	372,5	- 21,5	478,2	308,8	- 169,4
55 Secretaría de Industria y Minería .....	60,0	1,7	- 58,3	-	-	-
56 Secretaría de Energía y Combustibles .....	1,8	1,4	- 0,4	-	-	-
60 Ministerio de Defensa Nacional .....	21,7	86,2	+ 64,5	-	0,6	+ 0,6
61 Secretaría de Guerra .....	6.744,6	9.077,9	+ 2.333,3	248,8	488,2	+ 239,4
62 Secretaría de Marina .....	5.239,4	7.006,4	+ 1.767,0	698,9	1.613,0	+ 914,1
63 Secretaría de Aeronáutica .....	4.166,8	5.423,0	+ 1.256,2	82,9	173,1	+ 90,2
70 Ministerio de Obras y Servicios Públicos .....	16,3	14,5	- 1,8	-	-	-
71 Secretaría de Obras Públicas .....	1.940,1	1.771,2	- 168,9	488,8	1.053,6	+ 564,8
72 Secretaría de Comunicaciones .....	3.547,9	3.924,5	+ 376,6	39,4	41,1	+ 1,7
73 Secretaría de Transporte .....	90,8	98,1	+ 7,3	3,0	2,2	- 0,8
Totales .....	63.446,9	75.373,2	+ 11.926,3	4.710,3	6.861,4	+ 2.151,1

CUADRO Nº 21 (continuación)

		ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				TOTALES GENERALES			
ANEXO O JURISDICCION		1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -	% Diferencia	
1	Presidencia de la Nación .....	92,2	371,2	+ 279,0	364,7	610,0	+ 245,3	+ 67,26	
2	Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto .....	—	—	—	1.015,5	991,2	— 24,3	— 2,39	
5	Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública .....	498,4	768,5	+ 270,1	2.940,1	3.655,9	+ 715,8	+ 24,35	
19	Servicio de la deuda pública .....	—	—	—	5.667,6	7.679,9	+ 2.012,3	+ 35,51	
22	Congreso de la Nación .....	—	—	—	256,2	287,9	+ 31,7	+ 12,37	
23	Corte Suprema y Tribunales Inferiores .....	—	—	—	554,3	764,6	+ 210,3	+ 37,94	
25	Ministerio del Interior .....	121,8	173,9	+ 52,1	2.317,1	2.728,5	+ 411,4	+ 17,75	
28	Ministerio de Educación y Justicia .....	4.024,1	5.207,1	+ 1.183,0	12.763,7	14.549,9	+ 1.786,2	+ 14,00	
30	Tribunal de Cuentas de la Nación .....	—	—	—	76,4	87,2	+ 10,8	+ 14,14	
31	Obligaciones a cargo del Tesoro .....	—	—	—	11.705,2	14.333,0	+ 2.627,8	+ 22,45	
32	Crédito de emergencia .....	—	—	—	6.151,9	6.100,0	— 51,9	— 0,84	
33	Ministerio de Trabajo y Seguridad Social .....	2.433,9	2.562,9	+ 129,0	2.676,9	2.807,3	+ 130,4	+ 4,87	
50	Ministerio de Economía .....	—	—	—	12,1	26,2	+ 14,1	+ 116,53	
51	Secretaría de Agricultura y Ganadería .....	2.916,5	2.132,1	— 784,4	3.553,2	2.925,0	— 628,2	— 17,68	
52	Secretaría de Hacienda .....	12,9	13,3	+ 0,4	3.922,6	4.443,7	+ 521,1	+ 13,28	
53	Secretaría de Finanzas .....	4.631,1	4.824,4	+ 193,3	4.647,2	4.839,7	+ 192,5	+ 4,14	
54	Secretaría de Comercio .....	70,6	122,6	+ 52,0	942,8	803,9	— 138,9	— 14,73	
55	Secretaría de Industria y Minería .....	30,7	151,6	+ 120,9	90,7	153,3	+ 62,6	+ 69,02	
56	Secretaría de Energía y Combustibles .....	5.304,5	1.574,1	— 3.730,4	5.306,3	1.575,5	— 3.730,8	— 70,31	
60	Ministerio de Defensa Nacional .....	—	—	—	21,7	86,8	+ 65,1	+ 300,00	
61	Secretaría de Guerra .....	2.514,6	3.961,0	+ 1.446,4	9.508,0	13.527,1	+ 4.019,1	+ 42,27	
62	Secretaría de Marina .....	9,8	13,7	+ 3,9	5.948,1	8.633,1	+ 2.685,0	+ 45,14	
63	Secretaría de Aeronáutica .....	2,8	2,9	+ 0,1	4.252,5	5.599,0	+ 1.346,5	+ 31,66	
70	Ministerio de Obras y Servicios Públicos .....	—	—	—	16,3	14,5	— 1,8	— 11,04	
71	Secretaría de Obras Públicas .....	6.835,3	13.376,3	+ 6.541,0	9.264,2	16.201,1	+ 6.936,9	+ 74,88	
72	Secretaría de Comunicaciones .....	—	—	—	3.587,3	3.965,6	+ 378,3	+ 10,55	
73	Secretaría de Transporte .....	132,6	187,3	+ 54,7	226,4	287,6	+ 61,2	+ 27,03	
Totales .....		29.631,8	35.442,9	+ 5.811,1	97.789,0	117.677,5	+ 19.888,5	+ 20,34	

## ADMINISTRACION CENTRAL

## COMPARATIVO ENTRE LOS CREDITOS NETOS PARA LOS EJERCICIOS DE 1960 (LEY 15.021) Y DE 1961 (PROYECTO)

(En millones de m\$.n.)

ANEXO O JURISDICCION	SERVICIOS				INVERSIONES			
	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -	% Diferencia	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia	% Diferencia
1 Presidencia de la Nación .....	219,6	176,7	- 42,9	- 19,53	2,6	1,1	- 1,5	- 57,69
2 Ministerio de Rel. Ext. y Culto ....	983,2	958,9	- 24,3	- 2,47	4,1	4,1	-	-
5 Min. de Asist. Soc. y Salud Pública	2.208,1	2.615,1	+ 407,0	+ 18,43	41,3	79,9	+ 38,6	+ 93,46
19 Servicio de la Deuda Pública .....	5.667,6	7.679,9	+ 2.012,3	+ 35,51	-	-	-	-
22 Congreso de la Nación .....	253,9	280,6	+ 26,7	+ 10,52	2,3	7,3	+ 5,0	+ 217,39
23 Corte Suprema y Tribunales Inf. ....	543,1	749,5	+ 206,4	+ 38,00	4,2	8,1	+ 3,9	+ 92,86
25 Ministerio del Interior .....	2.066,6	2.410,7	+ 344,1	+ 16,65	14,3	23,1	+ 8,8	+ 61,54
28 Ministerio de Educación y Justicia	8.374,3	8.909,7	+ 535,4	+ 6,39	46,6	54,7	+ 8,1	+ 17,38
30 Tribunal de Cuentas de la Nación ..	76,3	87,1	+ 10,8	+ 14,15	0,1	0,1	-	-
31 Obligaciones a cargo del Tesoro ...	10.111,8	10.911,4	+ 799,6	+ 7,91	309,4	430,3	+ 120,9	+ 39,08
32 Crédito de Emergencia .....	6.071,9	5.700,0	- 371,9	- 6,12	80,0	100,0	+ 20,0	+ 25,00
33 Ministerio de Trabajo y Seg. Social	191,5	179,6	- 11,9	- 6,21	0,3	0,4	+ 0,1	+ 33,33
50 Ministerio de Economía .....	12,1	25,9	+ 13,8	+ 114,05	-	0,3	+ 0,3	-
51 Secret. de Agricultura y Ganadería	545,8	741,1	+ 195,3	+ 35,78	58,4	26,7	- 31,7	- 54,28
52 Secretaría de Hacienda .....	1.384,2	1.709,2	+ 325,0	+ 23,47	14,3	72,4	+ 58,1	+ 40,63
53 Secretaría de Finanzas .....	16,0	15,2	- 0,8	- 50,00	0,1	0,1	-	-
54 Secretaría de Comercio .....	353,6	366,0	+ 12,4	+ 3,51	7,4	6,5	- 0,9	- 12,16
55 Secretaría de Industria y Minería ..	1,5	1,7	+ 0,2	+ 13,33	-	-	-	-
56 Secretaría de Energía y Combustibles	1,8	1,4	- 0,4	- 22,22	-	-	-	-
60 Ministerio de Defensa Nacional ...	8,3	71,5	+ 63,2	+ 761,44	2,4	3,7	+ 1,3	+ 54,17
61 Secretaría de Guerra .....	6.331,6	8.555,6	+ 2.224,0	+ 35,12	17,8	31,8	+ 14,0	+ 78,65
62 Secretaría de Marina .....	4.242,5	5.810,5	+ 1.568,0	+ 36,97	50,9	58,9	+ 8,0	+ 15,72
63 Secretaría de Aeronáutica .....	3.216,6	3.860,8	+ 644,2	+ 20,03	18,2	62,2	+ 44,0	+ 241,76
70 Min. de Obras y Servicios Públicos	16,0	14,2	- 1,8	- 10,62	0,3	0,3	-	-
71 Secretaría de Obras Públicas .....	845,5	805,6	- 39,9	- 4,71	10,6	10,6	-	-
72 Secretaría de Comunicaciones .....	3.377,5	3.754,1	+ 376,6	+ 11,15	30,4	30,4	-	-
73 Secretaría de Transporte .....	90,6	97,9	+ 7,3	+ 8,06	0,2	0,2	-	-
Totales .....	57.211,5	66.489,9	+ 9.278,4	+ 16,22	716,2	1.013,2	+ 297	+ 41,47

CUADRO Nº 22 (continuación)

TRABAJOS PUBLICOS							TOTALES GENERALES								
ANEXO O JURISDICCION		1960 — Ley 15.021		Proyecto 1961	Diferencia	%	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia	%					
		Uso cred.	Rec. esp.								Total				
1	Presidencia de la Nación .....	8,0	—	8,0	8,0	—	—	230,2	185,8	—	44,4	—	19,29		
2	Ministerio de Rel. Ext. y Culto ...	20,0	—	20,0	20,0	—	—	1.007,3	983,0	—	24,3	—	1,42		
5	Min. de Asist. Soc. y Salud Pública	150,0	—	150,0	150,0	—	—	2.399,4	2.845,0	+	445,6	+	18,57		
19	Servicio de la Deuda Pública .....	—	—	—	—	—	—	5.667,6	7.679,9	+	2.012,3	+	35,51		
22	Congreso de la Nación .....	—	—	—	—	—	—	256,2	287,9	+	31,7	+	12,37		
23	Corte Suprema y Tribunales Inf. ..	7,0	—	7,0	7,0	—	—	554,3	764,6	+	210,3	+	37,94		
25	Ministerio del Interior .....	50,0	—	50,0	50,0	—	—	2.130,9	2.483,8	+	352,9	+	16,56		
28	Ministerio de Educación y Justicia	10,0	278,0	288,0	9,2	—	278,8	—	96,81	8.708,9	8.973,6	+	264,7	+	3,04
30	Tribunal de Cuentas de la Nación ..	—	—	—	—	—	—	76,4	87,2	+	10,8	+	14,14		
31	Obligaciones a cargo del Tesoro ...	1.284,0	—	1.284,0	2.991,3	+	1.707,3	+	132,97	11.705,2	14.333,0	+	2.627,8	+	22,45
32	Crédito de Emergencia .....	—	—	—	300,0	+	300,0	—	—	6.151,9	6.100,0	—	51,9	—	0,84
33	Ministerio de Trabajo y Seg. Social	20,0	—	20,0	20,0	—	—	—	—	211,8	200,0	—	11,8	—	5,57
50	Ministerio de Economía .....	—	—	—	—	—	—	—	—	12,1	26,2	+	14,1	+	116,53
51	Secret. de Agricultura y Ganadería	27,5	5,0	32,5	25,1	—	7,4	—	22,77	636,7	792,9	+	156,2	+	24,53
52	Secretaría de Hacienda .....	60,0	—	60,0	56,0	—	4,0	—	6,66	1.458,5	1.837,6	+	379,1	+	25,99
53	Secretaría de Finanzas .....	—	—	—	—	—	—	—	—	16,1	15,3	—	0,8	—	4,97
54	Secretaría de Comercio .....	20,0	13,0	33,0	—	—	33,0	—	100,00	394,0	372,5	—	21,5	—	5,46
55	Secretaría de Industria y Minería ..	56,0	2,5	58,5	—	—	58,5	—	100,00	60,0	1,7	—	58,3	—	97,17
56	Secretaría de Energía y Combustibles	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8	1,4	—	0,4	—	22,22
60	Ministerio de Defensa Nacional ....	11,0	—	11,0	11,0	—	—	—	—	21,7	86,2	+	64,5	+	297,23
61	Secretaría de Guerra .....	395,0	0,2	395,2	490,5	+	95,3	+	24,11	6.744,6	9.077,9	+	2.333,3	+	34,59
62	Secretaría de Marina .....	946,0	—	946,0	1.137,0	+	191,0	+	20,19	5.239,4	7.006,4	+	1.767,0	+	33,73
63	Secretaría de Aeronautica .....	932,0	—	932,0	1.500,0	+	568,0	+	60,94	4.166,8	5.423,0	+	1.256,2	+	30,15
70	Min. de Obras y Servicios Públicos	—	—	—	—	—	—	—	—	16,3	14,5	—	1,8	—	11,04
71	Secretaría de Obras Públicas .....	810,0	274,0	1.084,0	955,0	—	129,0	—	11,90	1.940,1	1.771,2	—	168,9	—	8,71
72	Secretaría de Comunicaciones .....	140,0	—	140,0	140,0	—	—	—	—	3.547,9	3.924,5	+	376,6	+	10,61
73	Secretaría de Transporte .....	—	—	—	—	—	—	—	—	90,8	98,1	+	7,3	+	8,04
Totales .....		4.946,5	572,7	5.519,2	7.870,1	+	2.350,9	+	42,50	63.446,9	75.373,2	+	11.926,3	+	18,80



## ANEXO 100 - CUENTAS ESPECIALES

CUADRO Nº 23

## COMPARATIVO ENTRE LOS CREDITOS NETOS PARA LOS EJERCICIOS DE 1960 (LEY 15.021) Y DE 1961 (PROYECTO)

(En millones de m\$.n.)

## SERVICIOS

ANEXO O JURISDICCION	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -	% Diferencia	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -	% Diferencia
1 Presidencia de la Nación .....	29,9	40,6	+ 10,7	+ 35,78	12,4	12,4	—	—
2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto .....	8,2	8,2	—	—	—	—	—	—
5 Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública .....	32,6	32,7	+ 0,1	+ 0,31	9,7	9,7	—	—
25 Ministerio del Interior .....	27,9	36,2	+ 8,3	+ 29,75	36,5	34,6	- 1,9	- 5,20
28 Ministerio de Educación y Justicia .....	23,4	54,1	+ 30,7	+ 131,20	7,3	8,4	+ 1,1	+ 15,06
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social .....	31,1	20,3	- 10,8	- 34,73	0,1	0,1	—	—
52 Secretaría de Hacienda .....	2.238,4	2.321,6	+ 83,2	+ 3,72	212,8	231,2	+ 18,4	+ 8,65
54 Secretaría de Comercio .....	464,3	281,9	- 182,4	- 39,28	13,9	15,8	+ 1,9	+ 13,67
60 Ministerio de Defensa Nacional .....	—	0,6	+ 0,6	—	—	—	—	—
61 Secretaría de Guerra .....	126,9	267,2	+ 140,3	+ 110,56	121,9	220,8	+ 98,9	+ 81,13
62 Secretaría de Marina .....	540,5	1.312,6	+ 772,1	+ 142,85	158,4	300,4	+ 142,0	+ 89,65
63 Secretaría de Aeronáutica .....	68,9	114,0	+ 45,1	+ 65,46	14,0	59,1	+ 45,1	+ 322,14
71 Secretaría de Obras Públicas .....	372,3	390,1	+ 17,8	+ 4,78	116,5	131,6	+ 15,1	+ 12,96
72 Secretaría de Comunicaciones .....	39,4	41,1	+ 1,7	+ 4,31	—	—	—	—
73 Secretaría de Transporte .....	3,0	2,2	- 0,8	- 26,66	—	—	—	—
Totales .....	4.006,8	4.923,4	+ 916,6	+ 22,88	703,5	1.024,1	+ 320,6	+ 45,57

## TRABAJOS PUBLICOS

ANEXO O JURISDICCION	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -	% Diferencia	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -	% Diferencia
1 Presidencia de la Nación .....	—	—	—	—	42,3	53,0	+ 10,7	+ 25,30
2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto .....	—	—	—	—	8,2	8,2	—	—
5 Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública .....	—	—	—	—	42,3	42,4	+ 0,1	+ 0,23
25 Ministerio del Interior .....	—	—	—	—	64,4	70,8	+ 6,4	+ 9,94
28 Ministerio de Educación y Justicia .....	—	306,7	+ 306,7	—	30,7	369,2	+ 338,5	+ 1.102,61
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social .....	—	24,0	+ 24,0	—	31,2	44,4	+ 13,2	+ 42,31
52 Secretaría de Hacienda .....	—	40,0	+ 40,0	—	2.451,2	2.592,8	+ 141,6	+ 5,78
54 Secretaría de Comercio .....	—	11,1	+ 11,1	—	478,2	308,8	- 169,4	+ 35,42
60 Ministerio de Defensa Nacional .....	—	—	—	—	—	0,6	+ 0,6	—
61 Secretaría de Guerra .....	—	0,2	+ 0,2	—	248,8	488,2	+ 239,4	+ 96,22
62 Secretaría de Marina .....	—	—	—	—	698,9	1.613,0	+ 914,1	+ 130,79
63 Secretaría de Aeronáutica .....	—	—	—	—	82,9	173,1	+ 90,2	+ 108,81
71 Secretaría de Obras Públicas .....	—	531,9	+ 531,9	—	488,8	1.053,6	+ 564,8	+ 115,55
72 Secretaría de Comunicaciones .....	—	—	—	—	39,4	41,1	+ 1,7	+ 4,31
73 Secretaría de Transporte .....	—	—	—	—	3,0	2,2	- 0,8	- 26,67
Totales .....	—	913,9	+ 913,9	—	4.710,3	6.861,4	+ 2.151,1	+ 45,67

## ANEXO 200 . ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

## COMPARATIVO ENTRE LOS CREDITOS NETOS DE LOS EJERCICIOS 1960 Y 1961

(En millones de m\$.n.)

ANEXO O JURISDICCION	SERVICIOS				INVERSIONES			
	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -	% Diferencia	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -	% Diferencia
1 Presidencia de la Nación .....	75,4	322,3	+ 246,9	+ 327,45	16,8	31,9	+ 15,1	+ 89,88
5 Ministerio de Asistencia Social y Sa- lud Publica .....	481,4	722,8	+ 241,4	+ 50,15	17,0	45,7	+ 28,7	+ 168,82
25 Ministerio del Interior .....	32,4	43,1	+ 10,7	+ 33,02	89,4	2,5	- 86,9	- 97,20
28 Ministerio de Educación y Justicia	3.712,6	4.410,8	+ 698,2	+ 18,81	257,5	510,2	+ 252,7	+ 98,13
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social .....	810,2	932,2	+ 122,0	+ 15,05	1.623,7	1.630,7	+ 7,0	+ 0,43
51 Secretaria de Agricultura y Gana- deria .....	1.686,4	1.920,7	+ 234,3	+ 13,89	1.228,1	154,1	- 1.074,0	- 87,45
52 Secretaria de Hacienda .....	10,6	11,1	+ 0,5	+ 4,72	2,3	2,2	- 0,1	- 4,35
53 Secretaria de Finanzas .....	3.476,6	3.688,0	+ 211,4	+ 6,08	226,3	226,2	- 0,1	- 0,04
54 Secretaria de Comercio .....	70,4	118,4	+ 48,0	+ 68,18	0,2	4,2	+ 4,0	+ 2.000,00
55 Secretaria de Industria y Minería	19,0	82,5	+ 63,5	+ 334,21	11,7	16,1	+ 4,4	+ 37,61
56 Secretaria de Energía y Combusti- bles .....	216,6	27,1	- 189,5	- 87,49	5.087,9	0,9	- 5.087,0	- 99,98
61 Secretaria de Guerra .....	2.051,7	3.184,9	+ 1.133,2	+ 55,26	64,4	174,3	+ 109,9	+ 170,65
62 Secretaria de Marina .....	9,0	12,7	+ 3,7	+ 41,11	0,8	1,0	+ 0,2	+ 25,00
63 Secretaria de Aeronáutica .....	2,2	2,3	+ 0,1	+ 4,54	0,6	0,6	-	- 100,00
71 Secretaria de Obras Públicas .....	3.641,7	5.072,3	+ 1.430,6	+ 39,28	237,6	404,0	+ 166,4	+ 70,03
73 Secretaria de Transporte .....	128,3	183,9	+ 55,6	+ 43,33	4,3	3,4	- 0,9	- 2,09
Totales .....	16.424,5	20.735,1	+ 4.310,6	+ 26,24	8.868,6	3.208,0	- 5.660,6	- 63,82

CUADRO Nº 24 (continuación)

ANEXO O JURISDICCION	TRABAJOS PUBLICOS				TOTALES GENERALES			
	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -	% Diferencia	1960 Ley 15.021	Proyecto 1961	Diferencia + o -	% Diferencia
1 Presidencia de la Nación .....	—	17,0	+ 17,0	—	92,2	371,2	+ 279,0	+ 302,60
5 Ministerio de Asistencia Social y Sa- lud Pública .....	—	—	—	—	498,4	768,5	+ 270,1	+ 54,19
25 Ministerio del Interior .....	—	128,3	+ 128,3	—	121,8	173,9	+ 52,1	+ 42,78
28 Ministerio de Educación y Justicia	54,0	286,1	+ 232,1	+ 429,81	4.024,1	5.207,1	+ 1.183,0	+ 29,40
33 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social .....	—	—	—	—	2.433,9	2.562,9	+ 129,0	+ 5,30
51 Secretaría de Agricultura y Gana- dería .....	2,0	57,3	+ 55,3	+ 2.765,00	2.916,5	2.132,1	— 784,4	— 26,89
52 Secretaría de Hacienda .....	—	—	—	—	12,9	13,3	+ 0,4	+ 3,10
53 Secretaría de Finanzas .....	928,2	910,2	— 18,0	— 1,93	4.631,1	4.824,4	+ 193,3	+ 4,17
54 Secretaría de Comercio .....	—	—	—	—	70,6	122,6	+ 52,0	+ 73,65
55 Secretaría de Industria y Minería	—	53,0	+ 53,0	—	30,7	151,6	+ 120,9	+ 393,81
56 Secretaría de Energía y Combusti- bles .....	—	1.546,1	+ 1.546,1	—	5.304,5	1.574,1	— 3.730,4	— 70,33
61 Secretaría de Guerra .....	398,5	601,8	+ 203,3	+ 51,02	2.514,6	3.961,0	+ 1.446,4	+ 57,52
62 Secretaría de Marina .....	—	—	—	—	9,8	13,7	+ 3,9	+ 39,80
63 Secretaría de Aeronáutica .....	—	—	—	—	2,8	2,9	+ 0,1	+ 0,35
71 Secretaría de Obras Públicas .....	2.956,0	7.900,0	+ 4.944,0	+ 167,25	6.835,3	13.376,3	+ 6.541,0	+ 95,69
73 Secretaría de Transporte .....	—	—	—	—	132,6	187,3	+ 54,7	+ 41,25
Totales .....	4.338,7	11.499,8	+ 7.161,1	+ 165,05	29.631,8	35.442,9	+ 5.811,1	+ 19,61

CUADRO Nº 28

**COMPARATIVO DEL CALCULO DE RECURSOS DE RENTAS GENERALES ENTRE  
LOS EJERCICIOS DE 1960 Y DE 1961**

(En millones de m\$.n.)

CONCEPTO	1960	%	1961	%	Diferencia III=II-I	III×100 I
	Ley 15.021 I		Proyecto II			
Impuestos aduaneros y tasas portuarias ....	2.900,0	5,05	4.500,0	5,87	+ 1.600,0	+ 55,17
Impuestos internos unificados .....	5.412,0	9,42	8.480,0	11,05	+ 3.068,0	+ 56,69
Contribución inmobiliaria .....	169,8	0,30	209,0	0,27	+ 39,2	+ 23,09
Impuesto a los réditos .....	12.000,0	20,89	14.310,0	18,65	+ 2.310,0	+ 19,25
Impuesto a las ventas .....	6.689,0	11,65	12.460,0	16,24	+ 5.771,0	+ 86,28
Impuesto a los beneficios extraordinarios ..	645,0	1,12	310,0	0,40	- 335,0	- 51,94
Impuesto de sellos .....	2.100,0	3,66	3.300,0	4,30	+ 1.200,0	+ 57,14
Impuesto a la transmisión gratuita de bienes	350,0	0,61	400,0	0,52	+ 50,0	+ 14,29
Impuesto sustitutivo del gravamen a la trans- misión gratuita de bienes .....	528,2	0,92	890,0	1,16	+ 361,8	+ 68,50
Impuesto a las carreras .....	435,7	0,76	611,0	0,80	+ 175,3	+ 40,23
Impuesto a las ganancias eventuales .....	677,0	1,18	190,0	0,25	- 487,0	- 71,94
Derechos consulares .....	800,0	1,39	900,0	1,17	+ 100,0	+ 12,50
Impuesto a la revaluación de activos .....	—	—	930,0	1,21	+ 930,0	—
Participaciones diversas .....	50,0	0,09	100,0	0,13	+ 50,0	+ 100,00
Lotería de Beneficencia Nacional .....	402,2	0,70	602,4	0,79	+ 200,2	+ 49,78
Rentas diversas .....	1.548,0	2,69	2.500,0	3,27	+ 957,0	+ 61,82
Correos y Telecomunicaciones .....	1.800,0	3,13	3.000,0	3,91	+ 1.200,0	+ 66,66
Reintegro de la Deuda Pública .....	2.389,0	4,16	2.920,0	3,81	+ 531,0	+ 22,23
Contribución de Empresas del Estado ....	40,0	0,07	100,0	0,13	+ 60,0	+ 150,00
Recargos y retenciones sobre importaciones y exportaciones .....	18.500,0	32,21	20.000,0	26,07	+ 1.500,0	+ 8,11
Totales .....	57.435,9	100,00	76.717,4	100,00	+ 19.281,5	+ 33,57

CUADRO Nº 29

**COMPARATIVO DEL CALCULO DE RECURSOS DE CUENTAS ESPECIALES ENTRE  
LOS EJERCICIOS DE 1960 Y 1961**

(En millones de m\$.n.)

JURISDICCION	1960	%	1961	%	Diferencia III=II-I	III×100 I
	Ley 15.021 I		Proyecto II			
Presidencia de la Nación .....	42,3	0,90	53,0	0,77	+ 10,7	+ 25,30
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto .	8,2	0,17	8,2	0,12	—	—
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pú- blica .....	42,3	0,90	42,4	0,62	+ 0,1	+ 0,24
Ministerio del Interior .....	64,4	1,37	70,9	1,03	+ 6,5	+ 10,09
Ministerio de Educación y Justicia .....	30,6	0,65	369,2	5,38	+ 338,6	+ 1.106,54
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ...	31,1	0,66	44,3	0,65	+ 13,2	+ 42,44
Secretaría de Hacienda .....	2.451,2	52,04	2.592,7	37,79	+ 141,5	+ 5,77
Secretaría de Comercio .....	478,2	10,15	308,9	4,50	- 169,3	- 35,40
Ministerio de Defensa Nacional .....	—	—	0,6	0,01	+ 0,6	—
Secretaría de Guerra .....	248,3	5,28	488,2	7,11	+ 239,4	+ 96,22
Secretaría de Marina .....	699,0	14,84	1.613,0	23,51	+ 914,0	+ 130,76
Secretaría de Aeronáutica .....	82,9	1,76	173,1	2,52	+ 90,2	+ 108,81
Secretaría de Obras Públicas .....	488,9	10,38	1.053,6	15,36	+ 564,7	+ 115,50
Secretaría de Comunicaciones .....	39,4	0,84	41,1	0,60	+ 1,7	+ 4,31
Secretaría de Transporte .....	3,0	0,06	2,2	0,03	- 0,8	- 26,67
Totales .....	4.710,3	100,00	6.861,4	100,00	+ 2.151,1	+ 45,67

CUADRO Nº 30

**COMPARATIVO DEL CALCULO DE RECURSOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ENTRE  
LOS EJERCICIOS DE 1960 Y DE 1961**

(En millones de m\$.n.)

CONCEPTO	1960	%	1961	%	Diferencia III=II-I	%	
	Ley 15.021 I		Proyecto II			III×100 I	
Presidencia de la Nación .....	92,3	0,37	371,2	1,05	+	378,9	+ 302,17
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública .....	498,4	1,97	768,4	2,17	+	270,0	+ 54,17
Ministerio del Interior .....	121,7	0,48	173,9	0,49	+	52,2	+ 42,89
Ministerio de Educación y Justicia .....	3.970,1	15,70	5.207,2	14,69	+	1.237,1	+ 31,16
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social .....	2.433,9	9,62	2.563,0	7,23	+	129,1	+ 5,30
Secretaría de Agricultura y Ganadería .....	2.914,5	11,52	2.132,0	6,01	—	782,5	— 26,85
Secretaría de Hacienda .....	12,8	0,05	13,4	0,04	+	0,6	+ 4,68
Secretaría de Finanzas .....	3.702,9	14,64	4.824,4	13,61	+	1.121,5	+ 30,29
Secretaría de Comercio .....	70,6	0,28	122,5	0,34	+	51,9	+ 73,51
Secretaría de Industria y Minería .....	30,7	0,12	151,7	0,43	+	121,0	+ 394,14
Secretaría de Energía y Combustibles .....	5.304,5	20,97	1.574,0	4,44	—	3.730,5	— 70,33
Secretaría de Guerra .....	2.116,1	8,37	3.961,1	11,18	+	1.845,0	+ 87,19
Secretaría de Marina .....	9,8	0,04	13,7	0,04	+	3,9	+ 39,80
Secretaría de Aeronáutica .....	2,8	0,01	2,9	0,01	+	0,1	+ 3,57
Secretaría de Obras Públicas .....	3.879,3	15,34	13.376,2	37,74	+	9.496,9	+ 244,81
Secretaría de Transporte .....	132,7	0,52	187,3	0,53	+	54,6	+ 41,15
Totales .....	25.293,1	100,00	35.442,9	100,00	+	10.149,8	+ 40,13

CUADRO Nº 31

**COMPARATIVO ENTRE LAS CONTRIBUCIONES DEL TESORO, PARA FINANCIAR EN LOS  
EJERCICIOS DE 1960 (LEY 15.022) Y DE 1961 (PROYECTO), LOS DEFICIT DE EXPLOTACION  
Y LAS INVERSIONES PARA OBRAS Y EQUIPOS DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO**

(En millones de m\$.n.)

E M P R E S A S	DEFICIT DE EXPLOTACION			
	1960 Ley 15.022	Proyecto 1961	Diferencia + o -	% Diferencia
<i>Secretaría de Transporte</i>				
Ferrocarriles del Estado Argentino .....	5.319,8	8.333,0	+ 3.013,2	+ 56,64
Flota Fluvial del Estado Argentino .....	238,2	97,8	- 140,4	- 58,94
Administración General de Transportes de Buenos Aires .....	3.392,0	3.000,0	- 392,0	- 11,56
Administración General de Autorrutas Argentinas .....	84,2	35,0	- 49,2	- 58,43
Talleres de Reparaciones Navales .....	-	-	-	-
<i>Secretaría de Aeronáutica</i>				
Aerolíneas Argentinas .....	500,0	500,0	-	-
<i>Secretaría de Energía y Combustibles</i>				
Yacimientos Petrolíferos Fiscales .....	-	-	-	-
Yacimientos Carboníferos Fiscales .....	269,2	234,8	- 34,4	- 12,78
Gas del Estado .....	-	-	-	-
Agua y Energía Eléctrica .....	-	-	-	-
<i>Secretaría de Comunicaciones</i>				
Empresa Nacional de Telecomunicaciones .....	-	-	-	-
<i>Secretaría de Marina</i>				
Astilleros y Fábricas Navales del Estado .....	-	-	-	-
Sociedad Mixta Siderurgia Argentina .....	-	-	-	-
Totales .....	9.803,4	12.200,6	+ 2.397,2	+ 24,45

E M P R E S A S	INVERSIONES PATRIMONIALES			
	1960 Ley 15.022	Proyecto 1961	Diferencia + o -	% Diferencia
<i>Secretaría de Transporte</i>				
Ferrocarriles del Estado Argentino .....	5.000,0	8.400,0	+ 3.400,0	+ 68,00
Flota Fluvial del Estado Argentino .....	500,0	500,0	—	—
Administración General de Transportes de Buenos Aires .....	480,0	1.000,0	+ 520,0	+ 108,33
Administración General de Autorrutas Argentinas ..	—	—	—	—
Talleres de Reparaciones Navales .....	20,0	20,0	—	—
<i>Secretaría de Aeronáutica</i>				
Aerolíneas Argentinas .....	450,0	470,0	+ 20,0	+ 4,44
<i>Secretaría de Energía y Combustibles</i>				
Yacimientos Petrolíferos Fiscales .....	2.425,0	—	— 2.425,0	—
Yacimientos Carboníferos Fiscales .....	800,0	—	— 800,0	—
Gas del Estado .....	100,0	1.300,0	+ 1.200,0	+ 1.200,0
Agua y Energía Eléctrica .....	3.000,0	1.200,0	— 1.800,0	— 60,0
<i>Secretaría de Comunicaciones</i>				
Empresa Nacional de Telecomunicaciones .....	1.500,0	—	— 1.500,0	— 100,0
<i>Secretaría de Marina</i>				
Astilleros y Fábricas Navales del Estado .....	—	63,0	+ 63,0	—
<i>Sociedad Mixta Siderurgia Argentina</i> .....	2.800,0	3.950,0	+ 1.150,0	+ 41,07
Totales .....	17.075,0	16.903,0	— 172,0	— 1,01

E M P R E S A S	TOTALES GENERALES			
	1960 Ley 15.022	Proyecto 1961	Diferencia + o -	% Diferencia
<i>Secretaría de Transporte</i>				
Ferrocarriles del Estado Argentino .....	10.319,8	16.733,0	+ 6.413,2	+ 62,14
Flota Fluvial del Estado Argentino .....	738,2	597,8	— 140,4	— 19,02
Administración General de Transportes de Buenos Aires .....	3.872,0	4.000,0	+ 128,0	+ 3,31
Administración General de Autorrutas Argentinas ..	84,2	35,0	— 49,2	— 58,43
Talleres de Reparaciones Navales .....	20,0	20,0	—	—
<i>Secretaría de Aeronáutica</i>				
Aerolíneas Argentinas .....	950,0	970,0	+ 20,0	+ 2,11
<i>Secretaría de Energía y Combustibles</i>				
Yacimientos Petrolíferos Fiscales .....	2.425,0	—	— 2.425,0	—
Yacimientos Carboníferos Fiscales .....	1.069,2	234,8	— 834,4	— 78,04
Gas del Estado .....	100,0	1.300,0	+ 1.200,0	+ 1.200,0
Agua y Energía Eléctrica .....	3.000,0	1.200,0	— 1.800,0	— 60,00
<i>Secretaría de Comunicaciones</i>				
Empresa Nacional de Telecomunicaciones .....	1.500,0	—	— 1.500,0	—
<i>Secretaría de Marina</i>				
Astilleros y Fábricas Navales del Estado .....	—	63,0	+ 63,0	—
<i>Sociedad Mixta Siderurgia Argentina</i> .....	2.800,0	3.950,0	+ 1.150,0	+ 41,07
Totales .....	26.878,4	29.103,6	+ 2.225,2	+ 8,28

**Sr. Falco.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

**Sr. Falco.** — Señor presidente: ha llegado la oportunidad de que esta Cámara se pronuncie sobre el plan de gastos, inversiones y recursos, que proyectó el Poder Ejecutivo para la gestión correspondiente al ejercicio 1960-61.

Por mi parte, como miembro integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, he analizado lo concerniente a recursos

de la administración central y lo planificado para las empresas del Estado.

Las estimaciones presentadas por conducto de la Secretaría de Hacienda, están agrupadas en dos grandes títulos: uno, correspondiente al grupo denominado de administración central y el otro, a las empresas del Estado. Tanto en uno como en el otro, los recursos están desglosados para afrontar estos conceptos.

Por razones de orden, comenzaré por informar los resultados de la interpretación sobre los

recursos que atenderán las erogaciones de la administración central. Lo que genéricamente se titula como Administración Central dentro del presupuesto, aglutina también el movimiento de los organismos descentralizados y de las cuentas especiales.

Las erogaciones que tienen que solventar los recursos previstos ascienden a los 115.600 millones de pesos. Los cálculos de ingresos estimados superan este compromiso en 9.400 millones. Con esto quiero decir que lo que se prevé recaudar durante el ejercicio que ya comenzamos, son 125.000 millones de pesos.

Ahora bien, ¿cómo canalizará el Estado estos futuros ingresos? Lo hará por los tradicionales conductos del efectivo con 110.900 millones de pesos y por la colocación de títulos de créditos con 8.000 millones. Este recurso proveniente de la negociación de los títulos cubrirá parte de los 22.100 millones de pesos programados para inversiones dentro de la administración central. Todas estas inversiones hubiesen podido ser solventadas por la deuda pública y cargadas a las generaciones que las disfruten en la medida de su duración. Se prefirió lo contrario, lo que demuestra con claridad la seriedad de la política presupuestaria del gobierno.

Quiero subrayar, señor presidente, que este desequilibrio que refleja el monto de inversiones públicas con el uso del crédito indica, como muestra inconfundible, el espíritu de consolidación y sacrificio que aspieta entre sus líneas este presupuesto. Esto quiere decir, señores senadores, que la generación que encabezamos no está dispuesta a tirar el país por la ventana.

Estas inversiones planificadas dentro del organismo central, como en los descentralizados y cuentas especiales, no se agotarán en su primer uso; muy por el contrario, lo usufructuarán nuestros descendientes con el sacrificio contributivo de los ciudadanos de hoy.

Esta sana intención —y creo que llegará a ser realidad— no es ninguna primicia de este presupuesto que estamos tratando, pues ya en el anterior aprobamos en este recinto una aplicación similar al uso de la negociación de títulos. Esto demuestra la concreción financiera de una línea política.

Bien; hace apenas un momento, decíamos que esperamos recaudar 125.000 millones de pesos dentro del año para hacer frente a las imponderables necesidades de la función tutelar y administradora que ejerce el Estado sobre sus gobernados. También dijimos que, cubiertas estas exigencias —que consideramos mínimas—, quedaba un remanente estimado en 9.400 millones de pesos. A propósito del juego de estas cifras quisiera aclarar, señor presidente, cómo se conforma este superávit, pues tuve oportunidad de consultar cuadros y análisis del desarrollo de los recursos y pude apreciar que existe cierta confusión, inclusive en las síntesis numéricas publicadas por algunos diarios y revistas

especializados. La falsa interpretación se debe a la inclusión de cifras de transferencias entre concepto y concepto, de lo que resulta para los montos transferidos una incidencia duplicada. Por consiguiente, trataré de clarificar estas apreciaciones dentro de las posibilidades que me brinda esta Honorable Cámara.

Por rentas generales se presupone recaudar en efectivo 82.717 millones de pesos, los que se afectarán a cubrir las exigencias de un pleno funcionamiento de la administración, que ascenderá aproximadamente a los 67.700 millones de pesos, lo que equivale a un superávit de 15.000 millones de pesos. O sea, señor presidente —y permítaseme esta disgresión—, que si el gobierno se limitase a prestar el servicio de la administración pública propiamente dicha, le sobrarían 15.000 millones de pesos. Pero, como la finalidad del presupuesto no consiste en que sobre sino que alcance, hubiese habido, hipotéticamente, una reducción en las distintas imposiciones, de aproximadamente el 19 por ciento.

Esto quiere decir, señor presidente, que el país no ha de estar tan mal administrado. Alguien me podría contestar que si el gobierno utiliza todo su poder de exacción para recaudar fondos no habría jamás presupuestos desequilibrados. Pero da la coincidencia que esto no está sucediendo, pues es innegable que las imposiciones fiscales vigentes no han sido elementos perturbadores o contenedores de la economía. Muy por el contrario, todavía estamos significativamente mucho más abajo que otros países lejanos a los que admiramos desde el río de la Plata. Lo que realmente ha sucedido en nuestra administración central es que desde 1958 hasta la fecha se fue drenando todo lo que se pudo sin resentir a nadie ni afectar el servicio. Lógicamente que aún no se ha terminado y tampoco nos conformamos con la gloria de haber comenzado, pues queda mucho por podar, sin afectar al árbol de la burocracia.

Hace un momento nos sobran 15.000 millones de pesos y habíamos prestado lo mejor posible, dadas las circunstancias, los servicios atinentes a la administración central. Pero resulta que en este punto no termina el presupuesto y las necesidades públicas; éstas siguen con las exigencias de los organismos descentralizados. Estos organismos cubren heterogéneas necesidades del pueblo y, en muchos casos, reciben una contraprestación por parte del sector beneficiado con sus servicios. A veces, esta retribución alcanza a cubrir los gastos de explotación e inversiones del propio organismo. Pero otras veces esto no sucede, y da la casualidad que los deficitarios aparecen como los más necesarios.

Cuando un organismo no se autofinancia recurre al Tesoro, y a su cargo éste afronta la diferencia. Para el año 1960/61 el Tesoro tendrá que aportar, para cubrir gastos de funcionamiento de estos organismos, 4.600 millones y 900 millones más para inversiones, lo que nos reduce

el superávit a 9.400 millones de pesos. Como atenuante los organismos descentralizados recibieron durante el ejercicio pasado una mayor contribución por parte del Tesoro, a pesar de que sus erogaciones fueron más reducidas. Con esto tenemos otro factor de tendencia al equilibrio financiero.

En cuanto a las cuentas especiales no he de comentar más que lo referente a su autofinanciación. Todas las erogaciones que insumirán —las que sufrieron un tenue crecimiento vegetativo— se financiarán con recursos afectados dentro de su mismo desarrollo.

A esta altura, el superávit aún alcanza a 9.400 millones; volvamos sobre lo andado para entrar al comentario de las rentas generales de la Nación.

Los recursos provenientes, tanto de las cuentas especiales como de los organismos descentralizados, se afectan a sus propios regímenes. Los 8.000 millones de pesos que se prevé colocar en títulos se aplicarán a inversiones patrimoniales por un monto de 1.013 millones de pesos, y a trabajos públicos, en jurisdicción de distintos anejos, por unos 7.800 millones. En cuanto a este recurso, como se puede apreciar, está aún en un déficit de alrededor de los 800 millones.

Al poder administrador, cuando confecciona sus cuadros de estimaciones, se le abren varios caminos en cuanto a las posibilidades de recaudación y sus formas prácticas de llevarlas a cabo.

Comencemos por uno de los extremos, el menos violento. Cuando una empresa del Estado vende sus bienes o sus servicios, percibe un precio. El que paga recibe un bien o una prestación. Se va con algo que no poseen quienes no lo compraron como él. Este precio puede ser igual, superior o inferior al costo; no importa quién lo pagó: lo hizo libremente usando de su facultad de elección o de supresión, en el caso de una explotación monopolística. El dinero que recaudó la empresa entra dentro del torrente jurisdiccional del Estado, aunque los regímenes de aquélla le den cierta autonomía de aplicación.

Cuando se trata de los fondos ingresados por los organismos sucede algo similar a las empresas, pues quien paga comisiones o intereses bancarios es porque optó por un banco oficial; lo mismo le sucede a quien decida estudiar en la universidad del Estado o contrate suministros con la Dirección de Fabricaciones Militares. Es algo diferente para quien aporte a alguna caja de previsión, pero, asimismo, recibirá una compensación directamente proporcional a lo aportado.

Una mecánica similar se da con las cuentas especiales.

Si el gobierno recurre al uso del crédito, quien contribuye —si no se tratase de empréstitos forzosos— lo hace porque quiere o le conviene. Salvo en los casos en que el Ejecutivo resuelva colocaciones inflacionarias por el sistema ban-

cario oficial o privado; en esta excepción todos pagarán el impuesto.

En todos estos casos se observa un principio de equidad en el que prevalece la voluntad del que aporta los medios de pago.

Bastante diferentes son los sistemas recaudadores que manejan los rubros componentes de rentas generales. En ellos, en vez de prevalecer la voluntad compensada del contribuyente, gravita la necesidad del Estado de solventar los compromisos contraídos en beneficio de la población, sin ninguna clase de discriminación. Es por este motivo, señor presidente, que el Congreso debe fijar atentamente sus ojos sobre este sector de los presupuestos. No solamente en sus montos, sino también en la forma en que llega al bolsillo del pueblo.

De los 125 mil millones que el Estado se propone recaudar entre todos los conceptos, con exclusión de los ingresos de las empresas del Estado, 82.717 millones de pesos provendrán del rendimiento de rentas generales. La proporción es tan importante que me atrevería a decir que, sin rentas generales, la Nación no existiría como tal y su organización jurídico-administrativa resultaría una utopía.

Sin duda que esta última cantidad es mucho dinero para cargar sobre las espaldas de solamente 20 millones de personas. Claro está que, afortunadamente, la proporción de aportes no es pareja, pero sí creo que es bastante equivalente la contribución de sacrificios.

Sin embargo, señor presidente, algunos sectores critican la magra intervención del Estado en cuanto a la atención de problemas de carácter social o económico. Nos dicen que no fomentamos lo suficiente la enseñanza, la sanidad pública, etc., o que abandonamos los proyectos necesarios de obras públicas, sin prestar la merecida colaboración a las provincias.

Yo pregunto, señor presidente, cuál sería el gobierno, por más insensible que fuera, al que no le resultara grato y fecundo —desde el punto de vista político— acometer el analfabetismo, generalizar la enseñanza superior, abrir dispensarios y hospitales, aplicar profilaxis sanitaria, construir puentes, caminos, diques, costear obras que representen la punta de lanza de la prosperidad en regiones que mucho les haría falta. Además, ayudar con generosidad a la concreción de todos esos hermosos proyectos provinciales. Asumir la grata tarea de remunerar a los docentes con lo que bien merecen; ajustar los sueldos de los servidores del Estado a la altura de sus necesidades, y mil cosas más.

Vuelvo a preguntar a mis colegas y a todos los dirigentes políticos del país, si alguno rehusaría hacerlo, teniendo las posibilidades en la mano.

—Se retira del recinto el señor secretario de Estado de Transporte, ingeniero Manuel F. Castello.



**Sr. Falco.** — Descuento que este anhelo es el de todos los que alguna vez hemos ingresado a la lucha política. Este es el móvil de nuestro largo derrotero, señor presidente. Lo que sucede, y esto lo saben muchos pero se lo callan, es que apenas podemos afrontar los compromisos primarios indispensables e ineludibles del Estado, sin herir mortalmente la renta nacional.

Lo que estamos tratando de hacer es dar al país esta posibilidad dorada de realizaciones dentro del más breve plazo. Para lograrlo se necesitan hombres templados y de vuelo largo. Los egoístas o amantes de fáciles trofeos no lo tolerarían. Alguien tenía que capear la mala y la historia insiste, una vez más, en que sea el radicalismo.

Quien paga un impuesto, contribución o tasa no lo hace porque quiera ni como quiera sino que, por tratarse de una imposición que emana de un poder competente, tiene la obligación ineludible de hacerlo. Inclusive el agente recaudador está provisto de derechos suficientes para exigir coactivamente su liquidación.

Esta característica del impuesto nos lo presenta con ciertos rasgos de unilateralidad que hace que tomemos la materia con la debida responsabilidad.

Dentro del cuadro de los rubros recaudadores de rentas generales los hay que, por su técnica de aplicación, son de incidencia subjetiva o directa, mientras otro grupo de imposiciones se caracteriza por la no individualización del contribuyente, centrándose únicamente sobre el objeto pasible de imposición. Esto último son los indirectos. Con esto no quiero decir que todo el cuadro de rentas generales presenta estas características, pues hay ingresos provenientes de contribuciones de algunas empresas del Estado, producido de la Lotería Nacional y otros conceptos ajenos a la clásica mecánica impositiva.

Una de las estimaciones que más me ha llamado la atención por su monto calculado es la adjudicada a «los recargos y retenciones sobre importaciones y exportaciones». Con estos recargos se presupuesta incorporar al Tesoro 20.000 millones de pesos.

Decía hace un instante que me había llamado la atención, porque siempre consideré a los gravámenes sobre los movimientos del comercio exterior como una medida gubernativa de carácter económico o, más bien, como una tipificación de una planificación en política económica. Esto no se interprete como que subestimo las virtudes fiscales que suelen trascender de estos gravámenes, pero el logro de recursos es lo accesorio, siendo lo principal la consecución de los fines que promueve o retrae esta clase de medidas en cuanto a las exportaciones o importaciones. Es por considerarla supletoria desde el punto de vista de la renta fiscal, que siempre me sorprende un poco ver los recargos

y retenciones sobre exportaciones e importaciones a la cabeza del ranking, participando en este presupuesto con aproximadamente el 25 por ciento del total calculado para rentas generales y, en el anterior, con el 32,21 por ciento.

¿Quién contribuirá al aporte de estos 20.000 millones? En este caso es un poco complicado desarrollar todo el proceso de las traslaciones, pero les puedo asegurar que quien termina por pagarlo es el público consumidor. Es cierto: lo paga el pueblo; pero es para el pueblo en sus dos acepciones económicas, pues el pueblo es el destinatario de los servicios administrativos de la Nación y es también el beneficiario de la protección y desarrollo económico que este rubro regula.

Los planteos económicos nacionales tienen la virtud didáctica de poderse resumir en elementales premisas de economía familiar o, diríamos, doméstica. La tendencia de una familia organizada es la de autoabastecerse hasta donde el valor del intercambio lo haga rendidor. El excedente de esfuerzo habrá que colocarlo o venderlo fuera del grupo familiar, con lo que se logrará lo suficiente para proveerse de lo que no se pueda o no convenga hacer en tal caso. Si sobrasen monedas de intercambio, mejor; quiere decir que la familia es próspera porque acumula trabajo excedente, el que, con una sabia política de inversión, le podrá generar más excedente. Si la familia no alcanza a cubrir lo que necesita de afuera, le quedarán dos alternativas: la primera, privarse de lo que necesita, con las consecuencias derivadas de la insatisfacción; la segunda, cubrir estas necesidades pidiendo prestado, hasta la bancarrota.

El Estado, padre tutelar de la familia argentina, no puede permitir ni la humana desesperación que provocan las necesidades insatisfechas, ni la bancarrota del país. Al Estado no le queda otro camino que el de la recuperación, fomentando el bienestar dentro de un planificado desarrollo. A esto, señor presidente, es a lo que contribuyen los recargos y retenciones que estoy comentando.

La industria nacional, generadora auténtica de riqueza, se está ajustando por una parte, y por la otra está naciendo. ¿Qué sería de ella si liberásemos de recargos a todos los productos provenientes de experimentados colosos manufactureros? La industria argentina sucumbiría, y en mala ley. Tanto las organizaciones económicas como las biológicas, deben protegerse de las inclemencias agresivas exteriores durante el nacimiento y la primera infancia. Una vez que toman características propias y comienzan a endurecerse, habrá que darles oportunidad para que se ejerciten en las lides de la competencia. En estos primeros contactos de luchas se ajustarán y, progresivamente, se irán capacitando para sobrevivir por sus propios medios. Ya no necesitarán que nadie las proteja.

En términos de economía moderna, podríamos afirmar que la prosperidad material y espiritual de los pueblos está dada por la capacidad que tengan en transformar materia prima inerte en productos elaborados. No hay mejor negocio que vender mano de obra, y esto se ve muy claro en los anales estadísticos del precio del intercambio. La cotización de la materia prima se estabiliza, sufre aumentos meramente vegetativos, mientras que la elaborada aumenta en proporción directa al standard de vida de quien la fabrica. Quien vende trabajo compra prosperidad.

Es por todas estas consideraciones que este rubro, agente catalizador de las exportaciones y regulador de las importaciones, alcanza una vigencia significativa en este momento nacional. La industria argentina le debe su afincamiento. Esperemos que el Poder Ejecutivo concrete cabalmente su deseo, que es también el de esta Cámara, de estimular con todo su esfuerzo las posibles exportaciones de productos fabricados en el país. Para ello habrá que contar con la justa aplicación del *draw-back*, exenciones impositivas y fomento del crédito.

En cuanto a la protección de la industria local, dada por los recargos a las importaciones, deberá irse manejando con cautela para no lesionar esta fuente imponderable de riqueza. Si alguna rama industrial tarda en ponerse a tono, habrá que conminarla o encarrilarla, pero meditemos antes de neutralizarla. En esta tierra de bendición no hay nada que haya hecho hombre alguno que no se pueda hacer. Nuestra mano de obra es excelente; los directivos y técnicos se están forjando y la política del gobierno nos está capitalizando. Como ustedes ven, lo único que nos falta es paciencia para que el tiempo fecunde el esfuerzo.

Otro de los puntales de los recursos que se agrupan como rentas generales, es el del impuesto a las ventas, con 16.460 millones de pesos.

Este gravamen indirecto tiene la peculiaridad de estar absorbido en el precio del producto. El consumidor lo paga, sin apreciar psicológicamente la contribución del impuesto. El empresario lo recauda y lo usufructúa hasta el momento de su liquidación, a pesar del régimen de anticipos. La imposición se aplica sobre el proceso agregado a la materia prima que dé por resultado un mayor valor del producto vendido.

Este impuesto tiene el inconveniente de su aplicación automática. Resulta difícil orientarlo en un sentido social y es de gran implicancia sobre la política de precios.

Es preciso, señor presidente, reconocer que en el laberinto de la economía moderna, donde fuerzas negativas pugnan siempre por malograr sanos esfuerzos, conviene manejar con hilos cortos y precisos la política fiscal. Creo que los ingentes gastos que demanda el funcionamiento

de un Estado, al que cada día se le adicionan más responsabilidades, debe, poco a poco, derivar al impuesto directo o al indirecto, cuyo objeto imponible signifique por su sola presencia una estratificación social. Esto sucedería gravando, en la medida de las exigencias, a todos aquellos artículos que, por su calidad de suentuarios, llenan satisfacciones marginales. Con el tiempo, tenemos que evitar el impuesto a estar vivo. Eso sí, con el arma fiscal habrá que recurrir, entre otras cosas, a nivelar diferencias odiosas entre los distintos sectores de la población.

Llegará algún día en que el mundo afin al nuestro, construya una estructura fiscal lo suficientemente orgánica que sirva, no sólo para la consecución de medios de pago por parte de los gobiernos, sino también como fuente de la justicia distributiva.

El que gasta mal o lo hace en demasía, debe ser afectado por la imposición para desalentarlo de la dilapidación. Con esto se cobra el perjuicio que ocasiona a la comunidad ese despilfarro. La canalización y graduación de los gastos de un pueblo, da la pauta exacta de su cultura social y puede brindar las bases de un acertado pronóstico económico.

Este impuesto a las ventas que estamos comentando, entró en el presupuesto calculado con el incremento del dos por ciento proyectado por el Poder Ejecutivo. El aumento de la tasa trata de amortiguar el déficit del año financiero que comienza y compensará, en cierta medida, el aumento del monto no imponible de réditos. Con esto quiero decir, que los acontecimientos nos obligan a aceptarlo con la convicción que será uno de los últimos mojonos que nos quedan para llegar a la meta.

Estoy preocupado por estas compensaciones entre la rebaja del mínimo no imponible y el aumento del impuesto a las ventas, y quiero hacer extensiva esta inquietud al Poder Ejecutivo, en la seguridad de que ya habrá reparado en ella y tendrá preparados los elementos técnicos para neutralizarla.

Se trata, sencillamente, que hay una gran cantidad de personas que no se han de beneficiar directamente con la atenuación del rédito personal. Pero esos mismos excluidos pagarán un mayor precio por lo que consuman, por gravitación del mayor coeficiente del impuesto a las ventas.

Como atenuante de esta medida, creo que el impacto por mayor tributo de este impuesto a las ventas, no se va a trasladar sobre los precios tan salvajemente como estábamos acostumbrados a tolerarlo en épocas anteriores. Las cosas han cambiado y la oferta se encuentra cada día más cerca de la demanda. Los empresarios tratarán en lo posible, en salvaguardia de sus propios intereses, de que esto no suceda. Ellos saben que los consumidores tienen la última palabra y que no están dispuestos a pagar aumentos excesivos o especulativos. Estamos

iniciando la hora de las empresas que se consolidan con trabajo y eficacia. Los que no lo quieran entender, sucumbirán inexorablemente.

El tercer gran concepto recaudador de rentas generales, es el de los impuestos a los réditos. En el proyecto de ley que estamos tratando, se estima un ingreso de 15.310 millones de pesos; 3.310 millones de pesos más que lo correspondiente al ejercicio pasado. Este rubro está llamado a ser la cabeza del cuadro de rentas de la Nación y, por su idiosincrasia, reúne las virtudes de más estricta justicia tributaria.

El problema práctico de este gravamen está en su difícil percepción y control. La atomización del contribuyente exige una armazón recaudadora complicada y de precisión. Pareciera que lo primero que se le enseñase a los niños en la escuela fuera evadir réditos. Entre los contribuyentes registrados por la Dirección Impositiva que falsean sus declaraciones y la legión de los no presentados, se podría solventar una buena parte de este presupuesto. El Poder Ejecutivo ha tomado con seriedad este problema y, poco a poco, está ajustando la máquina verificadora.

Esta inmoralidad fiscal de los contribuyentes en potencia, se la debemos en buena parte a la pasada inmoralidad económica del país. Hagamos un poco de memoria y recapitulemos aquellos días en que, por obra y milagros de la euforia inflacionaria, se amasaban fortunas por generación espontánea, las que danzaban de mano en mano. No olvidemos tampoco la complacencia y la complicidad de aquel gobierno que trastrocó todos los valores éticos del derecho fiscal. Ese vértigo lo detuvimos, pero aún quedan en el aire algunas de sus consecuencias. Fronto disfrutaremos de las fuerzas normalizadoras de la estabilización, donde el rédito crece con serena firmeza en detrimento de los pescadores en río revuelto.

El impuesto a la renta debe conjurar el peligro de los excesos en la distribución de la riqueza, pero no retacear estímulos al humano afán de seguridad material. La acumulación de riquezas puede ser, tal vez, ilimitada; pero la posibilidad de su utilización dentro de un esquema moral, tiene más o menos límites precisos. Esta será el área donde el poder fiscal debe aplicar toda su fuerza niveladora a favor del resto de la comunidad.

Los impuestos internos unificados rendirán un 56 por ciento más que lo previsto para el año anterior. Durante este período se presume una recaudación de 8.480 millones. Con un crecimiento similar, según pueden apreciar los señores senadores en los cuadros del proyecto, los tributos aduaneros y tasas portuarias —dado el mayor movimiento del objeto imponible— producirán 4.500 millones de pesos.

Panorámicamente, el crecimiento promedio de la tabla de recursos por rentas generales

aumentará en un 34 por ciento sobre lo calculado para el ejercicio 1959/1960.

La prudencia en el uso del tiempo me lleva a concluir con las consideraciones en particular de este aspecto presupuestario que encierra todos los secretos de una orientación financiera. Pasaré a continuación y dentro de la brevedad que me permite el tema, a referirme al título correspondiente a las empresas del Estado.

Hace ya un tiempo que venimos observando cómo el pesado desenvolvimiento de algunas de las empresas del Estado, complica los resultados del presupuesto nacional. El año pasado se incluyeron el doble de empresas con respecto a este año, que necesitaban auxilio financiero por parte del Tesoro.

Para 1960/1961 sólo son seis las que lo solicitan; excluimos el aporte de 3.950 millones para Siderurgia Argentina. Todo este compromiso insumirá una inversión del orden de los 29.103 millones de pesos, para lo que contamos nada más que con el superávit de la administración central, que asciende a los 9.400 millones. De esto se deduce que el déficit previsto va a redondearse alrededor de los 19.700 millones. De cómo se cubrirá este vacío, habrá que resolverlo sobre la marcha.

Durante el ejercicio pasado pudimos observar la habilidad que desplegó el Ejecutivo para enjugar una importante porción del déficit. Lo difícil es superar el desequilibrio sin contaminar la estabilización monetaria. La confianza sobre los papeles del Estado se está consolidando y éste sería un camino de carácter excepcional pero, dentro de las pocas opciones que quedan, resultaría bastante aceptable. Inclusive desde el principio teórico de la utilización del crédito, esta forma de afrontar la liquidez del Tesoro se justificaría por las fuertes sumas destinadas a inversiones, tanto de la administración como de las empresas.

Ferrocarriles del Estado, bajo la jurisdicción de la Secretaría de Transporte, es el factor que en mayor proporción agrava el panorama de las empresas deficitarias. Para seguir funcionando, necesita que el Tesoro se haga cargo de los 8.333 millones faltantes en su presupuesto de explotación. Además, habrá que invertir en el plan de obras 16.733 millones. Estos conceptos totalizan 16.733 millones, que no los tenemos previstos. Estos 16.733 millones permitirán seguir cubriendo el servicio que, dadas sus características monopolistas, no puede prescindirse ni sentirse.

El país tiene el derecho de exigir que circule su producción y se trasladen sus habitantes en condiciones decorosas. Lamentablemente, con los ferrocarriles está pasando lo mismo que con todo lo demás: años de desgobierno los desquiciaron y nos toca a nosotros la responsabilidad de hacer maravillas con hierros viejos, con una excesiva dotación de personal afectado a

la atención de elementos cuyo rendimiento no alcanza a superar los cálculos más pesimistas.

El círculo vicioso es tan estrecho que se teme tomar decisiones por donde vencerlo. Las instalaciones fijas no se adecuan a las exigencias de un tráfico competitivo; y los móviles, si se renovasen sustancialmente, no brindarían el rendimiento técnico para el que fueron diseñadas. Día a día, los gastos de conservación agotan los recursos producidos por las tarifas y, a medida que baja la calidad del servicio, aumenta la cantidad de las erogaciones. Pero, señor presidente, no se puede hacer borrón y cuenta nueva. Tenemos que afrontar valientemente alguna salida a este tremendo entuerto. No esperemos que el servicio ferroviario contribuya en algún futuro con una explotación de superávit. Pero sí, creo que nos deberíamos conformar con dar un servicio efectivo dentro de un déficit congelado. Me conformaría con que se evitara el crecimiento de la contribución a cargo del Tesoro, mientras se alcance a retribuir este sacrificio financiero con un servicio adecuado. Si interpretamos serenamente los resultados de los balances de costo por tráfico, se llega a la paradójica conclusión de que cuanto más se transporta sobre los rieles de nuestra empresa más se pierde. Ahora bien, si los recursos por precio del servicio se estiman en 18.740 millones de pesos y los gastos para poder realizarlos se presupuestan en 27.084 millones, teóricamente y especulando que el tráfico se mantuviera inmutable, habría que aumentar las tarifas en un 50 por ciento. Suponiendo que esta mayor recaudación no se infiltrase por las arenas improductivas, el déficit emergente se circunscribiría a las sumas de inversiones, que para este año es de 8.400 millones.

Es obvio que la capitalización de la empresa no puede estar solventada por el usuario. Si así se pretende, no sería empresa sino un organismo sui generis. Creo, señor presidente, que ningún empresario normal pretenderá recurrir a un aumento de precio del producto que vende para costearse el reequipamiento de activo fijo. Esta activación la cubrirá con beneficios anteriores o con el uso del crédito, permitiendo, eso sí, amortizarla con el mayor rendimiento que su aplicación le produzca.

Los aumentos de tarifas en la proporción equivalente al costo del servicio, no siempre son viables en materia como la de los ferrocarriles. Estos trascienden la esfera de la economía privada para gravitar en la de la economía política. Es tan generalizado este criterio que siempre en cuestiones de tarifas predomina el criterio político.

En nuestro problema específico, ya que será difícil cubrir la explotación con las tarifas, tendremos que recurrir —en ayuda del equilibrio— a la capacidad creadora de los técnicos y organizadores especializados. O sea, tratar de elimi-

nar lo superfluo, las superposiciones improductivas y activar al máximo todos los menguados recursos afectados al servicio. Por el otro lado, ajustar discretamente las tarifas hasta el límite de tolerancia económica en lo social.

Con respecto a las inversiones, éstas habrá que cubrirla con el uso del crédito público e industrial, planificando cuidadosamente que cada tornillo que se incorpore a la estructura redundará en una economía del servicio o mejora en la prestación.

Este arduo planteo merecería mucho más tiempo del que en este momento disponemos, por lo que pasaré a comentar brevemente, lo previsto para Transportes de Buenos Aires.

La Secretaría de Transporte tiene también bajo su jurisdicción el segundo déficit en cuanto a su monto dentro del cuadro de las empresas estatales. La situación de Transportes de Buenos Aires, es similar en sus lineamientos generales, a la de los ferrocarriles.

Tiene a su favor las características de una explotación más dúctil que permite subdividir el problema en sectores más manejables. La influencia geográfica de su servicio está mucho más localizada, y su resultado deficitario resulta mayúsculo si tomamos como referencia al ferroviario, ponderando su importancia nacional.

Los 4.000 millones que le faltarán durante el año 1961 son provenientes, en un 75 %, del desequilibrio entre el costo y la tarifa del servicio. Esto indica a las claras una dosis de anquilosamiento que se contradice con las exigencias dinámicas del transporte urbano. Además, este quebranto tiene una peculiaridad antipática que habrá que esclarecer, que es la utilización de un servicio eminentemente local, cuyo déficit tiene que cargar el país entero.

Las unidades de transporte afectadas están trabajando a pleno y utilizan al máximo insospechado su capacidad. La renovación de la flota pareciera que no fuese factor moderador de las pérdidas por la desproporción entre los 1.000 millones solicitados para inversiones y los 3.000 declarados como déficit de explotación. Deduzco, en consecuencia, que el quid ha de estar radicado entre los gastos indirectos, los de conservación o la tarifa muy por debajo del costo ideal.

Las necesidades de inversiones del plan de obras que estiman Gas del Estado y Agua y Energía, de 2.500 millones de pesos, se justificaría por el esfuerzo renovado de desarrollo de estas empresas, que vuelcan las soluciones al planteo energético del país.

Aerolíneas Argentinas tendrá que recurrir a la ayuda del Tesoro para poder concretar su programa. Esta empresa, en franca competencia en las rutas internacionales con los líderes de la aeronáutica comercial del mundo entero, ha prestado concomitantemente los servicios de cabotaje que el interior del país reclamaba.

Como factor de soberanía y de demostración técnica cumplió fielmente la representación que

invierte su bandera. Como empresa comercial trató de ganar la vanguardia a un costo que los argentinos sabremos disculpar. No creo que haya en el mundo empresas de aviación que, franca o veladamente, sean estandartes del país que representan, que disfruten de fecundos dividendos. Lo que pasa con Aerolíneas es que aún no terminó de desarrollarse y ajustar su marcha a una rigurosa exigencia comercial; no obstante, su desprendimiento permitió llevar el servicio aéreo a zonas de nuestra patria donde no hubiese llegado el interés privado. Esta empresa es el resultado de un pueblo con vocación de futuro, y sabemos que, paulatinamente, tratará de superarse. En esta hora sus necesidades nos exigen un mayor sacrificio, que Aerolíneas sabrá agradecer devolviendo al pueblo un servicio eficaz.

El artículo 5º del proyecto, por el que se fijan los máximos a que podrán llegar los déficit financieros de las empresas del Estado para este ejercicio que estamos informando, dispone el aporte que el Estado integrará en acciones de la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina, el que asciende a 3.950 millones de pesos.

Este ambicioso paso al desarrollo económico nacional promoverá una de las industrias más caras al anhelo popular. Ello es índice inequívoco del derrotero cumplido. Nada más.

**Sr. Secretario de Hacienda.**— Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Guido).**— Tiene la palabra el señor secretario de Hacienda.

**Sr. Secretario de Hacienda.**— Señor presidente: he escuchado con el mayor interés la sólida y detallada exposición del senador Bértora, como igualmente las ponderadas consideraciones sobre impuestos del señor senador por Santiago del Estero, que le ha seguido en el uso de la palabra.

No tiene objeto que yo entre en los pormenores del presupuesto que estamos tratando, y como este discurso será presumiblemente el último que habré de pronunciar en este recinto, quisiera aprovechar la oportunidad para examinar el problema de nuestro presupuesto en sus grandes lineamientos.

Son cuatro los problemas fundamentales que presenta el presupuesto: el déficit, el volumen total de los gastos, la necesidad de gastar con provecho ese volumen de gastos y la mejor distribución de las contribuciones.

Celebro mucho que el peligro del déficit haya penetrado ya profundamente en la conciencia de los argentinos.

¿Qué significa para nosotros la existencia de un déficit? Significa que hay un volumen de gastos para el que no se tiene la seguridad de contar con una financiación regular. No significa, como en algunos otros países, que hay gastos que se financiarán con el uso del crédito, sino que son simplemente gastos que por el momento no se sabe cómo se cubrirán. Como bien lo ha señalado el señor senador Bértora, hemos hecho un cálculo razonable y ajustado

de los recursos, hemos tratado de adecuar a esa cifra la suma de los gastos, reduciéndolos proporcionalmente, racionándolos, y después de haber hecho eso, nos hemos encontrado todavía con un margen irreducible respecto del que no estamos seguros en qué forma será financiado.

Hay razones, como lo diré al final, que me hacen confiar en que si nos mantenemos dentro de las cifras del presupuesto, esa diferencia entre los gastos y los recursos previstos resultará cubierta, por lo menos, en una apreciable medida. De cualquier modo, es importante señalar que, sobre el total de los gastos, el déficit previsto para este año es sustancialmente inferior, en proporción, al déficit del año pasado.

Esta clase de déficit, como lo saben los señores senadores, es una causa potencial de inflación, porque siempre existe el peligro de que se lo cubra con la emisión de moneda. La alternativa es que se dejan de cumplir compromisos de la administración. Cuando se recurre a la emisión, generalmente se quita a los grupos de menos recursos dentro de la colectividad. Por ese motivo, desde que comenzamos nuestra gestión económico-financiera, hemos luchado denodadamente contra el déficit, y seguimos creyendo que debe extirparse el déficit para no caer en su financiación con el despojo de determinados grupos de la población, generalmente los de menos recursos.

Tiene también importancia el volumen absoluto de los gastos. Las cifras del presupuesto, las sumas monetarias previstas en él, representan recursos reales que pasan por manos de la administración pública. Las cifras monetarias son siglas que utilizamos para comodidad y como común denominador para poder sumar y restar, pero de hecho siempre se trata de bienes materiales, de máquinas y materias primas, de materiales de construcción, de bienes de consumo, de mano de obra, de cuya utilización dispone la administración. Si las sumas monetarias podrían suponerse ilimitadas, se comprende en cambio que los recursos materiales, los hombres disponibles, los víveres, los materiales de construcción son evidentemente limitados. Si el gobierno toma para sí una porción muy grande de esos recursos materiales, quedará una porción tanto menor para ser utilizada en las iniciativas particulares de los habitantes del país. Tengo aquí algunas cifras que menciono para que se vea que todavía el volumen de nuestros gastos es muy elevado y que conviene que lo reduzcamos si es que creemos —como entiendo creemos todos— en la gran utilidad de reservar a los hombres de nuestro pueblo, como individuos o libremente asociados con otros en la realización de actividades útiles, la disposición de una porción importante de los recursos reales de que dispone la Nación Argentina.

Desgraciadamente no puedo extender mucho estas cifras, porque las estadísticas de que dis-

ponemos no se compilan de mucho tiempo atrás con el mismo criterio.

En 1959, el ingreso neto nacional, a precios corrientes, se calcula en 486,8 mil millones de pesos. Y en 1960 se puede calcular —todavía no se ha publicado la cifra— que el ingreso neto nacional alcanzará 650 mil millones de pesos corrientes, lo que supone un aumento efectivo en 1960 sobre 1959, de más o menos 4,6 por ciento, teniendo en cuenta que ha habido un aumento en los precios del 11 por ciento aproximadamente en el curso del año. Esta última cifra ha sido adelantada por las oficinas estadísticas del Banco Central, con todas las reservas del caso; coincide con cálculos llevados a cabo por entidades privadas, y creo que es una cifra buena. No dudo de que en 1960 ha habido un positivo aumento del ingreso nacional sobre 1959. Tomando 1960 en conjunto no parecería todavía un aumento cuantitativo sobre 1958. Pero no debemos olvidar que este tipo de estadística no refleja nada de la calidad de lo producido. Comparemos con estas dos cifras el total general de gastos públicos, sumando a los del presupuesto los gastos totales de las empresas del Estado, más los gastos totales de las cajas de jubilaciones, que, al fin y al cabo, también disponen de recursos a través de canales oficiales; tenemos en 1959, 205 mil millones de pesos, y en 1960, 272 mil millones. Como se ve, es una proporción sustancial de lo que suponemos es el valor del ingreso neto nacional en estos dos años.

Creo que no debemos extendernos más allá en nuestros gastos oficiales —por el contrario— entiendo que en lo futuro debe ser nuestra meta reducirlos o por lo menos propender a que aumente el ingreso neto nacional sin que se eleven en la misma proporción los gastos oficiales.

Sobre los criterios de una buena distribución de las contribuciones, el señor senador Falco ha hecho atinadas observaciones. Es mi convicción que no debemos aumentar las contribuciones que el pueblo tributa para que las utilice la administración pública y las empresas del Estado. Pero, aparte de eso, es importante cómo se distribuye esta carga impositiva. Para el momento actual no creo que sea demasiado mala la distribución presente, pero sí creo que es un punto que debe merecer la continua atención del gobierno para ajustarla incesantemente a las necesidades de la Nación. Sobre todo debe tenderse a que la gravitación de la carga impositiva favorezca la capitalización del pueblo argentino. Deben respetarse aquellos puntos donde se acumulan recursos que verosímelmente se utilizarán para aumentar el equipo productivo de la Nación, dirigido por los individuos más emprendedores y activos de nuestro pueblo.

También es importante y no merece ningún reparo que una parte de nuestros gastos se financie con crédito. Por curioso que pueda parecer a algunos, no es lo ideal financiar todos los gastos con recursos en efectivo. Al ofrecer empréstitos al público, el Estado fomenta el ahorro,

a condición de asegurar el valor de la moneda, de modo que ésta valga tanto cuando se devuelve que cuando se entregó. Si este riesgo, el mayor que corre quien presta al Estado, es eliminado, los empréstitos públicos representan una colocación segura. El público ahorrador no tiene que preocuparse de elegir entre los muchos objetos de inversión concreta. Y de este modo pueden ahorrar y permitir al mismo tiempo sin preocupación que la colectividad utilice esos ahorros, aquellos numerosos sectores que no tienen ni pueden tener en contacto directo con las actividades productoras y quienes lo tienen pueden diversificar sus inversiones y reducir sus riesgos. La colectividad devolverá con creces los ahorros recibidos en préstamo con el producto de una economía más rica. Esta financiación es importantísima porque significa que una parte de la expansión económica es agada con contribuciones voluntarias, a cambio de un premio a recibir en el futuro, y no mediante contribuciones coercitivas, que cuando pasan de cierto límite producen numerosos efectos perjudiciales.

Tenemos finalmente el problema de gastar bien. Este problema se vincula con los grandes renglones que provocan el desequilibrio y el gran volumen de nuestro presupuesto. Voy a mencionar, en primer término, el déficit de los ferrocarriles, que por sí solo alcanza o quizás excede la suma del déficit del presupuesto. Es un problema complejo. El señor secretario de Estado de Transportes ha hecho una exposición muy completa hace pocos días en la Honorable Cámara de Diputados. Sólo me voy a referir a un factor, el de la actitud del personal, que aumenta este déficit en mucho. Este déficit sería mucho menor si el personal comprendiera la fundamental importancia de una reorganización que asegure un rendimiento normal del personal de acuerdo con la naturaleza del servicio. Este, como también otros grupos del personal del Estado, han asumido reiteradamente actitudes de fuerza contra el gobierno o contra el Estado, en realidad, contra la colectividad.

He expresado en la Cámara de Diputados que esas actitudes son intolerables y también lo ha manifestado allí el señor secretario de Transporte. No se concibe que grupos de hombres al servicio de la colectividad presionen a ésta, como si la colectividad fuera una entidad extraña, una entidad enemiga, con la cual aquellos hombres se encuentran trabados en lucha. Es evidentemente una postura subversiva. Más es así cuando lo que se trata de imponer por la fuerza es una política distinta de la adoptada por el gobierno, o cuando se trata de asegurar mayores ingresos, que sólo podrían pagarse quitándoselos a otros miembros de la colectividad que no están en mejor situación o cuando se trata de mantener o imponer procedimientos y prácticas de trabajo que hacen a éste particularmente improductivo. Todo ello significa trasladar a otros un sacrificio mayor y justificaría

en éstos una reacción defensiva de la misma naturaleza. En esas condiciones ninguna sociedad puede funcionar y va camino a la desintegración. Por eso tales actitudes no deben tolerarse.

Debemos reducir en lo posible los gastos estériles e improductivos, que los tenemos muchos en todos los servicios del Estado. No debemos tratar de financiar con recursos públicos aquellos objetos que pueden financiarse en forma privada. Tenemos dos ejemplos típicos: uno es el de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que puede financiar una gran parte de sus inversiones en forma privada; el otro la usina del Dock Sud, que también puede y debe financiarse en la medida de lo posible en esa forma. Es necesario proceder así, porque los recursos son limitados y el Estado debe reservarlos para objetos que no pueden financiarse inicial o definitivamente en forma privada, particularmente la red de caminos y las viviendas requeridas por los sectores menos fuertes de la colectividad.

Y esta cuestión de gastar bien nos lleva finalmente, señor presidente, al problema de las jubilaciones, que deberá afrontarse con valentía y sentido de la realidad en el ejercicio corriente. El problema tiene varias facetas: la multiplicidad de las cajas, la cuantía de los beneficios, la forma de reunir los fondos y su utilización transitoria y definitiva, la edad del retiro. Voy a referirme sólo a esta última que creo de fundamental importancia.

Nuestro régimen jubilatorio comprende, prácticamente, a todas las personas ocupadas en la producción y los servicios. Una proporción considerable de estas personas está autorizada por la ley para dejar de trabajar a los 50 años. Otra parte se retira con 55 años. Pero muchos se retiran antes y perciben desde entonces alguna renta a cargo de las cajas o directamente a cargo de la administración, en el caso de los militares. Si se tiene en cuenta que los miembros de nuestra colectividad normalmente no comienzan a trabajar sino a los 15 años y, muchas veces, recién a los 20, quedan entonces escasos 30 a 35 años dedicados a la vida productiva. Es un período demasiado corto para asegurar un firme progreso al país y en la disyuntiva de extender hacia abajo o hacia arriba el límite de la edad de trabajo no hay duda que la vida moderna nos insta a no extenderlo hacia abajo.

La producción en las condiciones modernas exige una preparación técnica cada vez mayor; y por consiguiente cada vez más tiempo dedicado a adquirirla. Hay un interés colectivo en que nuestra población adquiera más conocimientos. Un número creciente de jóvenes debe poder dedicar su juventud enteramente a su preparación. Esto no es sólo conveniente para el joven que así lo hace, lo es también desde el pun-

to de vista colectivo. No siendo por consiguiente posible obtener un mayor trabajo nacional, haciendo comenzar el trabajo en una edad más tierna, no queda sino la alternativa de extender el límite de edad en que cesa el trabajo, hacia arriba; y esto está perfectamente de acuerdo con la extensión que ha experimentado nuestra vida media, dadas las buenas condiciones de salubridad que prevalecen en nuestro país.

Hay que reflexionar otra vez, señor presidente, que cuando hablamos de aportes que suman 26 % de las remuneraciones, o cuando establecemos límites de edad de 50 a 55 años, no se trata de una cuestión de meras cifras que se pueden fijar como se quiere. La contribución es muy gravosa y lo es por la sencilla razón de que es la fracción relativamente pequeña de los que se hallan entre los 15 y 20 y los 50 ó 55 años, quienes tienen que mantener a los que son más jóvenes y los que son más viejos. No cuesta ver que si un tercio de la población tiene que mantener a los restantes dos tercios, la contribución tiene que ser proporcionalmente mucho más gravosa que si fueran los dos tercios los que mantienen al tercio faltante.

En el momento en que corremos hacia arriba la edad del retiro, disminuye el gasto que debemos financiar, por ser menos los beneficiarios; y disminuye la contribución por habitante activo, por ser mayor el número entre quienes la contribución se divide. Además esa menor contribución es todavía más llevadera porque se toma de un producto mayor. Cualquiera sea la solución que se dé a los demás aspectos del problema jubilatorio, será inevitable elevar la edad del retiro, si es que nuestra pretendida ambición de desarrollo tiene algún alcance práctico.

Este presupuesto que tenemos por delante está inspirado, sin duda alguna, por el anhelo de impulsar por todos los medios las actividades privadas y aunque ese anhelo sólo parcialmente ha podido llevarse a la práctica, esa es la orientación. ¿Por qué deseamos impulsar las actividades privadas? No es por razones teóricas ni es tampoco en primer término en homenaje al individuo mismo. Es porque son mejores los servicios prestados privadamente por quien depende para su subsistencia y quizás su existencia del continuo mejoramiento de esos servicios. La necesidad le obliga a dar servicios excelentes, lo cual no sucede así en la administración pública, como lo sabemos por experiencia, porque aquí nunca la calidad del servicio es condición de subsistencia de quien lo presta.

Además, la financiación es más fácil. Afluyen más ahorros en los lugares donde abundan, hacia las empresas privadas, y es una consideración de fundamental importancia. Tampoco es de gran consecuencia presupuestaria una escasez transitoria de fondos. El déficit de una



empresa privada no conduce fácilmente a la emisión.

Pero además de estas consideraciones hay dos que merecen meditar muy particularmente. Al orientar hacia el sector privado el mayor número posible de iniciativas y reducir el volumen de gastos que se hacen por medio de resortes oficiales, contribuimos a que sea menos poderosa la administración y creamos condiciones de mayor y más intenso progreso. La administración, señor presidente, no es la colectividad. La administración es un grupo más o menos numeroso de personas que viven de la colectividad prestando o aparentando prestar servicios más o menos necesarios. Ese grupo de personas puede hipertrofiarse. Lo digo sin discernir culpas individuales. Puede llegar el momento en que una porción demasiado grande del pueblo está dedicada a prestar servicios públicos más o menos innecesarios y tiene que ser mantenida con el trabajo productivo de una porción demasiado pequeña de la colectividad. En ese caso la carga de la administración en todas sus ramas, civil y militar, se vuelve agobiante. En los países de estirpe hispánica es desde antiguo ambición de todo el mundo ingresar a la administración pública, y existe allí muy agudo ese peligro de una administración hipertrofiada, que no sólo no rinde servicios que elevan el nivel de vida de la población, sino que inventa procedimientos que muchas veces dificultan las actividades productivas para justificar el gran número de personas que la componen.

Además señor presidente, cuanto más poderosa y voluminosa la administración, tanto más virulenta se vuelve la lucha política por dominarla. Si nosotros queremos para nuestro país una vida libre, una democracia real y ordenada, estaremos bien servidos si reducimos este aparato administrativo a un volumen moderado, trasladando así la lucha política de las cuestiones de dominación, a las verdaderas controversias culturales, económicas, sociales que son decisivas en la vida de los pueblos y que no tienen que ver necesariamente con la utilización del poder.

En cuanto al progreso, señor presidente, me voy a referir nuevamente, como lo hice el año pasado, a las condiciones históricas y sociales del desarrollo o como prefiero seguir llamándolo, del progreso. La administración no ofrece un ambiente propicio al progreso, porque en ella prevalece el espíritu de control. La administración no es lugar para hacer experimentos, para arriesgarse y ganar o perder, según triunfen o fracasen nuevos procedimientos. La administración es un lugar para aplicar procedimientos conocidos y probados, donde la iniciativa del individuo está frenada por múltiples controles, establecidos precisamente para que no se utilicen en forma imprudente los recursos de la colectividad. Por eso, las actividades que

están en plena evolución, aquellas actividades que requieren experimentación y en las cuales es útil y aun necesario correr riesgos, afrontando la eventualidad del fracaso, deben dejarse en lo posible a la iniciativa privada y no encomendarse a la administración. Corremos el peligro si hipertrofiamos la administración con este tipo de actividades, de tener una economía retrógrada o por lo menos estacionaria y estancada, cuyos procedimientos técnicos son la copia de lo que se ha hecho décadas atrás en otras partes.

Señor presidente: se ha producido últimamente un fenómeno que celebro enormemente y que es el caso de mencionar aquí: es el programa del partido Radical Intransigente adoptado en Chascomús, favorable también a la actividad privada. Si se me permite definirlo con una frase aforística, diría que es la clase media argentina que se está descubriendo a sí misma. En el pasado prevalecían en este y en otros de los partidos representantes de nuestra clase media, ideas que eran fundamentalmente de inspiración y orientación socialista. He aquí que esta clase media ha encontrado que efectivamente los individuos de que ella se compone, son capaces de realizar; que, actuando con libertad en el campo económico, son focos de actividad esenciales para el progreso de la Nación y hay un partido que, resueltamente, después de décadas de repetir ideas de carácter colectivizante, se ha declarado por este individuo emprendedor; activo, arriesgado, que es el que va a llevar adelante la vida de nuestro país.

Señor presidente: todos tenemos aquí un profundo deseo de progreso. Creo que este deseo prácticamente une a todos los argentinos, aun cuando, seguramente, los comunistas prefieren que este progreso se verifique sólo después del juicio final, representado en la teología comunista por la revolución proletaria. El resto de nosotros deseamos el desarrollo, el progreso inmediato, y estamos preocupados por asegurarlo.

Pero, señor presidente, es mi convencimiento de que no existen recetas para el progreso, no existe un mecanismo que se pueda poner en movimiento para sentarse tranquilo a observar cómo ese mecanismo, solo e inexorable, produce el progreso deseado. El progreso es continua acción. No depende de que se tenga combustible o siderurgia o energía eléctrica. Todo ello es útil y puede ser necesario, pero no es suficiente. No es nada en sí. Puede haber progreso sin esos elementos. Ahí está el ejemplo de Suiza, que no tiene siderurgia, que no tiene combustibles, que sólo tiene la energía que extrae de sus caídas de agua. Los suizos señalan con razón que estas caídas de agua tampoco producen ninguna energía aprovechable solas, sino que ellos se la tienen que arrancar con los recursos reunidos a fuerza de hacer puntillas y guantes y relojes y de explotar en forma magnífica su industria del turismo.



No existe una receta que sea segura garantía del progreso, ni puede establecerse una vez por todas. El progreso hay que actuarlo continuamente.

Ampliando la idea, diría que tampoco la riqueza es algo que se tiene. La riqueza es algo que se hace. Es muy común pensar que la riqueza es algo que se tiene. Si es algo que se tiene o que alguien tiene es algo que también se puede quitar o que se puede pedir prestado. Pero no hay tal. La riqueza que se tiene carece de consistencia y se disgrega. La riqueza se hace y supone actividad permanente. El secreto del progreso es hacer todo lo que se hace lo mejor que se puede, dedicar todos los días una porción del pensamiento a hacer y organizar mejor las cosas. Cuando un cierto número de los habitantes de un país tienen ese espíritu, el país progresa.

De paso, señor presidente, quiero contestar a una observación que escuchamos con frecuencia: que lo económico será o no será muy importante, pero que lo que fundamentalmente interesa es lo moral. Señor presidente, lo moral tiene vinculación directa e inmediata con lo económico. No se concibe una actividad económica fecunda sino como actuación de virtudes morales. Toda actividad fecunda supone colaboración, y ésta, a su vez, reconocimiento del trabajo ajeno, puntualidad y exactitud en el cumplimiento de la contribución propia, respeto por la palabra empeñada, la voluntad de mejorar la propia prestación, la devoción por la calidad en el trabajo, todos ellos valores morales sin los cuales no puede existir progreso. Y así observamos que en el seno de las sociedades que han progresado más intensamente actúan esas virtudes, como lo reconoce todo el mundo, produciendo una vida de relación de buena voluntad y respeto mutuo y de respeto de las reglas sociales que llamamos la ley.

Es, pues, un gran error pensar que se puede separar lo económico de lo moral. Y los que nos preocupamos del progreso argentino sabemos que él supone una consolidación moral. Por eso es tan difícil que pueda ponerse en marcha el progreso por medio de la inflación, que es desorden en la gestión monetaria, falta de cumplimiento de todas las operaciones que se realizan por medio de moneda e insinceridad en las transacciones del Estado.

En cuanto a la idea de la riqueza que se tiene y que se puede quitar, tan difundida en todos los tiempos, permítaseme una ilustración histórica que pone bien de manifiesto el error de la concepción.

Cuando en las postrimerías del imperio romano los bárbaros se agolpaban en sus confines traían esa misma idea, de que la riqueza del imperio era algo que existía materialmente dentro de sus lindes o dentro de sus ciudades, puesto allí por no se sabe qué poder o circunstancia propicia. Creían que violentar esos límites y colocarse dentro del imperio importaría participar

de esa riqueza. Así lo hicieron. Rompieron las vallas y se volcaron en la cuenca del Mediterráneo, pero la riqueza se esfumó. Las zonas que ocuparon, las Galias, el Norte de Africa, el Norte de Italia, España, Dalmacia, dejaron de ser ricas por muchos siglos. Y esto era así porque con la invasión desapareció la forma de vivir y de actuar que era la única fuente de esa riqueza, siempre renovada mientras esa manera vivir y de actuar subsistía: el imperio de la ley, el sistema de las comunicaciones, los métodos de producción industrial, la administración municipal; un complejo y delicado sistema de cooperación social que sólo se conservó en las zonas del imperio de Oriente y donde con él también se conservó la riqueza.

—Entra al recinto y ocupa una banca en el hemiciclo el señor ministro de Obras y Servicios Públicos, ingeniero Alberto R. Costantini.

**Sr. Secretario de Hacienda.** — La idea de la riqueza, objeto de posesión, producto de la rapia y que a su vez se puede quitar, aparece modernizada, sistematizada con acopio de una ógica sutil y de gran talento por Marx. Aparece expuesto por Marx que la riqueza de los que hoy la tienen habría llegado a sus manos porque se la quitaron a otros a través de un mecanismo sumamente complejo, y que esa riqueza, a su vez, les sería quitada en el curso de un proceso futuro inexorable. Cuando Marx desarrolló su filosofía, el sistema industrial ya tenía en Inglaterra tres o cuatro generaciones de edad. En Alemania tendría en esa época una generación, porque ese país siguió a Inglaterra con bastante margen de tiempo. Marx pudo haber visto ya, pero no vio, que la razón de la riqueza de Inglaterra fue la iniciativa e inventiva individual, la intensa actividad y el espíritu de empresa de su pueblo y, especialmente, la capacidad de idear ingeniosos mecanismos que ahorran esfuerzos o multiplican sus resultados y de utilizar siempre de nuevos modos ciertas fuerzas de la naturaleza que hasta entonces no se habían empleado, ante todo el vapor, y muchos nuevos materiales y procedimientos, una cada vez mayor aplicación de la ciencia a los procesos productivos y una mejor aplicación, distribución y división del trabajo, es decir, mejor aprovechamiento y organización del esfuerzo humano. En la época en que escribió Marx sus obras fundamentales, esto pudo haber sido más o menos visible, pero pudo no haberse visto con la claridad con que se lo ve con posterioridad. Pero hacia fines del siglo XIX eran evidentes los factores que producían esta riqueza, y era también evidente que el asiento de esta riqueza se ensanchaba y la evolución catastrófica anticipada por Marx, la siempre creciente miseria de las masas y la riqueza concentrada en manos cada vez menos numerosas, no sólo no se cumplía sino que se

producía, por lo contrario, una importante difusión de la riqueza.

Este hecho de la difusión de la riqueza es extraordinariamente importante y para volver un momento al programa de Chascomús y vincular con él este fenómeno de la difusión de la riqueza, creo que debo complementar la descripción que de él di hace un momento, diciendo que es «la clase media argentina que se está descubriendo a sí misma y que quiere crear condiciones para que todos puedan llegar a ser clase media». Esto es perfectamente factible, es lo que está realizándose hoy en una serie de naciones progresistas. Y no hay razón para que en la Argentina la población entera no pueda elevarse al nivel de vida y de conocimiento de la clase media.

Bien, señor presidente, esta evolución se manifiesta claramente a fines del siglo pasado y a comienzos del presente. Se produce entonces la división entre los pensadores socialistas que creen que la doctrina debe irse ajustando a medida que cambian los hechos y aquellos otros que consideran que la doctrina, una doctrina tan sutilmente elaborada con tanto primor lógico, jamás puede estar errada y que son los hechos los que deben admitir alguna interpretación que los ajuste a la doctrina.

El grupo de socialistas que creyeron necesario adaptar la doctrina a los hechos, abandonaron la interpretación catastrófica de la historia y también en cierta medida su interpretación expoliacionista. El otro grupo, después de cavilaciones y vacilaciones, encontró una explicación que le pareció en ese momento magníficamente adecuada: si las clases obreras de las naciones industriales gozaban de un nivel de vida en permanente ascenso, es que habían acabado por ser socias de la clase dirigente, los empresarios, los capitalistas, en la explotación y expoliación de las poblaciones que aún no habían aprendido a producir en forma moderna e industrial. Esa explicación pudo satisfacer algún tiempo y encontró bastante difusión, aún fuera del campo socialista y comunista, en los países menos adelantados.

Pudo parecer ajustada al caso de Inglaterra y de Francia, grandes potencias coloniales. Era más difícil ya aplicarla a Alemania y los Estados Unidos, cuyas posesiones coloniales eran de escaso valor y requerían inversiones mayores que la renta que producían. No había cómo armonizarla con la situación en los países escandinavos o en Suiza, por ejemplo. Hoy ya no es posible sostenerla porque los hechos la desmienten abiertamente. Luego de una guerra destructora como no las ha habido desde hace mucho tiempo, la riqueza colectiva ha aumentado y sigue aumentando en varios países a un ritmo nunca antes conocido, ha llegado a alcanzar y en cierto modo a exceder por momentos los deseos humanos que llamamos necesidades y ha dado lugar a poblaciones enteras sa-

tisfechas con la organización social en que viven. Mientras durante el siglo anterior la evolución industrial se realiza en medio de luchas entre los grupos sociales satisfechos —los dirigentes— y los insatisfechos —los dirigidos—, después de la segunda guerra mundial presenciamos el cuadro nuevo y sumamente interesante de poblaciones enteras satisfechas con el tenor de vida que llevan y seguras de que esta vida les proporcionará niveles de vida en ascenso ulterior.

He dicho que el fenómeno es difícil de explicar y no he encontrado en los autores explicaciones simples y satisfactorias, así que me será permitido tratar de dar la mía. No puede ser la causa la acumulación previa de equipo, de capital, porque el hecho se produce en países donde el equipo había sido totalmente destruido por la guerra: Alemania, Japón, la pequeña Finlandia. Y por grande y generosa que fue la ayuda norteamericana, nunca pudo proveer de equipo suficiente a poblaciones de por lo menos ciento cincuenta millones de habitantes. Este equipo debieron crearlo aquellas naciones con su propio trabajo. Sólo en lo que se refiere a conocimientos pudieron aprovechar del esfuerzo de las generaciones anteriores. Tampoco puede decirse que ha sido el entrenamiento de la guerra. Evidentemente, la guerra representa un esfuerzo extraordinario. Enseña a aceptar sacrificios en favor de la colectividad. Pero esa nueva y abundante riqueza también se crea en países que desde hace mucho tiempo no han conocido la guerra, como Suecia y Suiza, que han sido neutrales y que no han necesitado imponer a sus poblaciones esta dedicación entera a alguna causa colectiva.

Es mi impresión, señor presidente, que en la evolución de la economía moderna se pueden distinguir claramente dos etapas: la primera, en que la cualidad principal, el motor del progreso, parece haber sido la iniciativa de los individuos y el empleo de nuevos dispositivos mecánicos relativamente sencillos; y la segunda, en que el motor del progreso parece residir en una cada vez más afinada organización de los esfuerzos coordinados de grandes conjuntos de personas, siempre en combinación con la iniciativa e inventiva individuales. Si se busca el común denominador que explique el extraordinario adelanto de alemanes y japoneses, suecos y suizos, norteamericanos e israelíes, después de la guerra mundial, lo hallaremos seguramente en primer término en la disposición de esos pueblos de someterse voluntariamente a una disciplina de trabajo de gran eficacia y, en segundo término, al esfuerzo de algunos de idear sistemas de organización del trabajo cada vez más eficaces. En esas naciones se piensa constantemente en organizar mejor la producción, y este pensamiento hace que el esfuerzo sea cada vez más productivo, lo cual me parece que explica gran parte del florecimiento de posguerra.

¿Tendremos que pasar nosotros por ambas etapas? Yo creo que sí, señor presidente, pero aceleradamente: pienso que tenemos que absolver la etapa del arrojito en la conducta individual —creo que estamos en ella— y que también deberemos impulsar enérgicamente la adopción de métodos que hagan más eficaz el trabajo de los grandes conjuntos y vencer la resistencia obrera que está mal encaminada en esta cuestión de la mejor organización del trabajo.

Por muchas causas esta forma de producir y de vivir provoca resistencias. Supone ciertos conocimientos, la observancia de ciertas reglas, la aceptación de ciertos valores, cierta velocidad en el ritmo de la ejecución que quieren ser aprendidos y asimilados e imponen quieras que no, el abandono de otras modalidades. De tales resistencias nuestro país ofrece un ejemplo. Es que nuestra población no es del todo homogénea: hay sectores que se adaptan con relativa facilidad a esta forma de vivir y producir, y hay otros que viven de una manera más tradicional, particularmente en el interior, y no les resulta tan fácil, necesitan un período, acaso toda una generación, para adaptarse a esta modalidad moderna, a esta rapidez en la ejecución, a esta coordinación en el producir.

Hemos tenido en los últimos diez años una continua migración desde el interior hacia la Capital. Y esta migración ha modificado el tenor de la población en el litoral, al integrarse grupos con un sentido más tradicionalista, con un ritmo más lento, con una actitud menos positiva frente a la necesidad del trabajo intenso, que encuentra dificultades para adecuarse a estas formas modernas de vivir y producir. Es una de las razones por las que observamos cierta expansión de las doctrinas subversivas.

Para apreciar este fenómeno y hacerle frente, debemos buscar sus causas. Debemos analizar la realidad, tratar de comprenderla: ese procedimiento nos facilitará la lucha contra esas doctrinas, que no sólo son subversivas sino también totalmente estériles, pero que tienen un gran atractivo para los hombres que se encuentran en determinada situación. He tenido oportunidad de conversar con representantes de la moderna economía italiana que me han señalado en su país un aspecto sumamente ilustrativo de esta cuestión. Hay en Italia un gran margen en el nivel de vida del Norte y el del Sur; el Norte progresa a grandes pasos; el Sur está compuesto de poblaciones más tradicionales y que se adaptan más difícilmente al sistema industrial. El gobierno italiano hace grandes esfuerzos por fomentar el Sur: ha radicado allí importantes industrias y ha tratado de crear condiciones de progreso, habilitando fuentes de energía, proveyendo maquinaria, para llevar a

la población meridional a un ritmo parecido al de la Italia del Norte.

El éxito es relativo, y el margen de bienestar entre el Norte y el Sur se ensancha en lugar de desaparecer. No es que el Sur, no progrese; adelanta evidentemente; lo que sucede es que el Norte progresa mucho más rápido. Y ese margen creciente es justamente una de las circunstancias que hacen cundir las doctrinas subversivas.

En Italia sucede algo parecido a lo que ocurre entre nosotros: hay una corriente intensa de migraciones del Sur al Norte. Los habitantes del Mediodía no sólo son tradicionalistas en su forma de producir, también lo son en su modo de pensar y viven íntimamente identificados con las instituciones vertebrales de su vida, la familia, la Iglesia y los partidos políticos tradicionales. Pero trasplantados al Norte abrazan las doctrinas extremas y forman la masa de los comunistas que existen allí. Y eso es comprensible, señor presidente, porque trasladados al Norte tratan de seguir viviendo instintivamente como vivían en el Sur y por consiguiente y mientras no se asimilan del todo, ni ellos rinden como los septentrionales, ni la vida en el Norte les paga y ofrece lo que ofrece a éstos y lo que algún día seguramente les habrá de ofrecer también a ellos cuando se hayan integrado en la nueva forma de vivir. Entretanto son desarraigados que no pueden volver a la antigua vertebración de su vida, no han encontrado una nueva y son fácilmente catequizables por los apóstoles que parecen preocuparse por sus dificultades.

Mencioné esto en el seno de la Comisión de la Cámara de Diputados y el señor diputado Maluf por Santiago del Estero, observó que, efectivamente, aquí tenemos un fenómeno bien parecido. El habitante de las provincias del interior que se traslada a Buenos Aires levanta aquí su rancho similar al que tenía en el interior, en el cual vivía pasablemente contento y por obra de la naturaleza, del sol y de la vida al aire libre en condiciones aceptablemente higiénicas; pero en los alrededores de Buenos Aires, la aglomeración de estos ranchos adquiere un carácter completamente distinto, las condiciones sanitarias son deficientes, la falta de espacio externo se traduce en hacinamiento, la comparación con viviendas mejores pone de manifiesto su pobreza y así ese grupo de ranchos se transforma en villa miseria. Y el vecino del interior, que en su pago era acaso persona de alguna consecuencia, aparece como un ciudadano de segunda categoría, maltratado por la vida, un hombre que no puede hacer un papel activo, un simple objeto empujado de un lado a otro que a veces para afirmar su personalidad toma el camino de la delincuencia y que, por consiguiente, es fácilmente presa de las doctrinas subversivas.

El atractivo que la doctrina marxista ejerce sobre nuestros intelectuales es de otra naturaleza. Desgraciadamente hay una proporción grande que por pereza mental prefieren las teorías elaboradas y listas, les gusta tener para los interrogantes de la vida contestaciones redondas que ofrecen para cada desarmonía una explicación final y la receta para resolverlas. Hay una gran inclinación entre nosotros por aceptar esas doctrinas elaboradas en otros medios como verdades inconcusas y absolutas, como los estudiosos de la Edad Media aceptaban los estropeados textos de Aristóteles y Platón como la definitiva explicación del mundo. Así proceden no sólo con la enseñanza marxista sino también con otras teorías, como las keynesianas, nacidas en otro ambiente, para hacer frente a otros problemas, pero que tienen entre nosotros un enorme auge, sin que a muchos se les ocurra poner a prueba su validez confrontándolas con nuestra realidad. Lo que necesitamos es que nuestros universitarios, en vez de conformarse con esas a veces imponentes construcciones lógicas que representan el esfuerzo mental de otros hombres, luchando con la interpretación de los hechos que tenían frente a ellos y que no son los que tenemos frente a nosotros, en vez de quedar satisfechos con ese resultado de la penetración e imaginación ajenas, sin aportar siquiera un poco de espíritu crítico, debieran enfrentarse con las realidades y tratar de hallar un camino que partiendo de ellas lleve a la realización de nuestros ideales, apartando teorías que evidentemente no conciben con la realidad.

Hay un ejemplo, señor presidente, que permite ilustrar estas situaciones. Cuando Marx elaboró sus doctrinas creyó poder vincular a los dirigentes de la nueva era industrial que él llama capitalistas, con los descendientes de la antigua nobleza. Creyó poder explicar así el poder de esos grupos dirigentes como derivado del poder feudal medieval, y eso le permitía negar a los modernos conductores de la economía todo mérito, toda justificación de la posición que revestían en ella.

Esta interpretación, señor presidente, era sin embargo ya entonces de una verdad muy incierta. Pudo haber sido, dentro de ciertos límites, aplicable a Alemania, donde a raíz de las guerras napoleónicas, se produjo una apreciable capitalización en el campo y donde algunos terratenientes activos y progresistas, miembros de la antigua nobleza, llevaron esos recursos a la creación de nuevas industrias. No tenía en cambio aplicación en Inglaterra donde, es cierto, los dirigentes de la economía industrial gustaban —como ocurre en todas partes— mostrar que eran de vieja alcurnia y que descendían acaso de los cruzados. Recuerdo haber aprendido en mis estudios que en Europa no hay prácticamente habitante que no descienda de Carlomagno. Sucede así inevitablemente por el gran número de cruzamientos que se produce a través de los siglos. En una isla un tanto aislada del

resto del mundo, donde fueron aun menos los habitantes originarios que han producido la actual descendencia muchas veces millonaria, en Inglaterra, es todavía más probable que todos descendan de Guillermo el Conquistador. Pero esto no quiere decir que el poder de los nuevos grupos comerciales e industriales fuera derivado del poder de la nobleza medieval, aun cuando haya habido nobles que participando de la evolución hayan llegado a promover industrias. Esta explicación tampoco no tenía nada que ver con la realidad de los Estados Unidos de América donde, en esa misma época, hubo un gran progreso industrial, una intensa actividad fabril, y donde los dirigentes y las circunstancias que le confieren esa posición no pueden ser relacionados ni con la más fecunda imaginación, con los cruzados. Son descendientes de inmigrantes más recientes o más antiguos, que encuentran en el nuevo ambiente las condiciones requeridas para que la voluntad de progresar, de mejorar la calidad de los productos, de mejorar los implementos, la organización, el aprovechamiento de las energías de la naturaleza, les rindan grandes riquezas.

Y finalmente esta explicación nada tiene que ver con la realidad de nuestro país, donde se está formando al presente una clase empresaria respetable, activa, emprendedora, que empieza a tomar interés en la calidad de su producto, en la organización de sus colaboradores y que no deriva de nuestra vieja aristocracia terrateniente que a su vez no deriva de la nobleza feudal.

Esta clase empresaria, se compone en su mayoría de inmigrantes recientes, muchos de ellos obreros que han llegado a ser jefes de sala, luego propietarios de taller y que en mucho menos de una generación —en el curso de quince años— han hecho progresar ese taller hasta transformarlo en fábrica y algunos en gran empresa.

Sería bueno que nuestros jóvenes, que gustan de las recetas, estudien nuestra realidad social verdadera y la confronten con esas doctrinas.

Hay otros aspectos que creo sumamente importante señalar. El sistema industrial se ha formado lentamente a través de continuas mejoras de lo que se hacía antes. No existe progreso —parece perogrullada pero no siempre lo tenemos en cuenta— si una fracción decisiva de la colectividad no alienta la permanente preocupación por mejorar lo que existe, y esta preocupación tiene que ser concreta, relacionada con los procesos productivos que se están realizando: no existe progreso sin una devoción por la calidad del trabajo. Pero tampoco existe progreso sin la disposición a la capitalización, es decir, la disposición, a dedicar una porción apreciable del esfuerzo de todos los días a constituir instrumentos de trabajo, y a idear procedimientos que sirvan mañana para producir más y quizá también para hacer menos pesado el esfuerzo.

Las naciones que iniciaron el sistema industrial, lo hicieron en una época en que aun las sociedades europeas estaban sólidamente integradas, en que la estructura de las sociedades estaba fuera de discusión y la conducción era facilitada por el respeto que tradicionalmente se sentía por los dirigentes quienes podían contar así con la colaboración voluntaria y respetuosa de los muchos que hay que reunir en una explotación fabril, esos muchos, que son los padres y abuelos de los que hoy disfrutan de esa incrementada riqueza colectiva creada por sus mayores. Las naciones que han llegado más tarde, nosotros entre ellas, no hemos tenido igual suerte. La historia no se detiene, las sociedades han seguido transformándose y en casi todas ellas se observa cierta desintegración que, en algunas como la nuestra, ha sido deliberadamente fomentada por nuestro gobierno dictatorial, así como lo están haciendo otros gobiernos de fuerza en otros países de nuestro continente. Esos gobiernos necesitan destruir las jerarquías tradicionales y el respeto entre los sectores sociales, para poder sustituir a los dirigentes anteriores sin temor a las comparaciones.

Por consiguiente ha prevalecido entre nosotros durante mucho tiempo un clima de mala voluntad entre los distintos sectores sociales y particularmente entre los grupos que dirigen la economía y los que colaboran en menesteres más sencillos, entre empresarios y asalariados.

Esta oposición entre grupos sociales, es uno de los mayores peligros, señor presidente, para nuestro progreso y está en el interés de todos nosotros, sin excepción, reducir esas fricciones y asegurar una conducción enérgica, esencial en una economía dinámica y activa. ¿Qué hay que hacer para lograrlo?

Hay que fortalecer la autoridad de los que dirigen, la autoridad voluntariamente reconocida, que es en el estado actual de nuestra sociedad la única que puede poner y mantener en marcha la voluntad de progreso. Este fortalecimiento de la autoridad moral es obra de cada uno y de todos. Cada individuo en posición dirigente tiene que apreciar la responsabilidad que cae sobre él de responder a las exigencias de esa posición. Cada grupo social o institucional que ejerce funciones dirigentes en nuestra sociedad, debe asumir aquellas actitudes que ante el pueblo enaltezcan su figura, debe estar atento a las corrientes de la opinión pública, que no se puede dirigir sino siguiéndola, debe observar en su seno y entre sus componentes una consideración, una disciplina, una elevación de criterio, que irradie confianza.

Porque lo que necesitamos para asegurar el progreso, señor presidente, para que las fecundas iniciativas y el pujante espíritu de empresa de los muchos, desemboque en un movimiento coherente de conjunto, es el sentir de que hay una meta común, una causa común que halla su expresión visible en cierta conducción volunta-

riamente aceptada, autoridad voluntariamente reconocida. Nada fomenta más el comunismo y cualesquiera otras corrientes subversivas que la difusión de la irreverencia. Y esto deben escucharlo particularmente aquellos grupos políticos e institucionales que, sin duda de buena fe, están difundiendo por todos los medios a su alcance la irreverencia, pretendiendo tener ellos solos la clave capaz de resolver nuestras dificultades y arrogándose la misión de imponer su adopción por todos los medios y particularmente la presión de la fuerza.

El verdadero efecto de esa conducta es el de aminorar, no ya la autoridad de los que en este momento están a cargo de la conducción del país, sino la de todos cuantos puedan estar a cargo de la conducción, hoy o mañana: de ellos mismos si hubiesen de verse en ese trance.

Esa actitud es radicalmente equivocada y trabaja en beneficio directo de las corrientes subversivas. Estas corrientes, lo que necesitan hacer en todas partes, y lo que se aplican a hacer con mayor ahínco, es destruir la reverencia, el respeto de los conductores que se encuentran a cargo de las colectividades dentro del marco de su estructura presente. Necesitan destruir totalmente esa estructura para poder surgir y tomar el poder sin temor a volver a perderlo. Y para destruirla totalmente necesitan disolver el respeto y el sentido de la autoridad y de la ligazón en la estructura colectiva, que es el más fuerte aglutinante social, indestructible cuando responde a un sentimiento vivo, pero expuesto a la acción corrosiva de la propaganda continua cuando está debilitado por quienes debieran ser sus sostenedores.

Las conmociones, las huelgas, las inquietudes institucionalizadas, señor presidente, todas destruyen el respeto que necesitamos para seguir a cualquier conducción y conspiran así contra el progreso. En una democracia hay que aceptar la conducción que las circunstancias han favorecido y que es revisible a plazo breve. Es mejor cooperar en la realización de un plan, aunque fuera mediocre, que ayudar a la imposición de dos o tres planes contradictorios, aunque cada uno fuera excelente. Al hacerse más lento el progreso, aumenta el margen entre nuestro nivel de vida y el que observamos en los países más adelantados, y ese margen es como lo muestra el ejemplo de Italia, uno de los factores impersonales más activos en la difusión de las doctrinas subversivas.

Los movimientos subversivos no se vencen con la represión violenta, señor presidente, sino con la creación de condiciones que atraigan y mantengan a núcleos cada vez más numerosos sólidamente agrupados alrededor de nuestra presente organización social. Nuestra finalidad tiene que ser que todos encuentren —así como sucede en Alemania, Dinamarca, Suiza—, satisfacción en vivir en este mundo presente nuestro

y puedan desplegar en él con éxito su actividad, en provecho propio y de la colectividad toda.

Difundir estas ideas, señor presidente, es una tarea difícil y ellas deben difundirse incansablemente al tiempo que se realiza el programa mismo. Se escuchan a veces apreciaciones irónicas sobre la actuación del señor ministro de Economía, quien viene dedicando un esfuerzo extraordinario y una energía pocas veces igualada a la difusión de estas ideas fundamentales. El país le debe profundo reconocimiento por esta campaña de difusión de ideas, que es algo de lo más importante que se está realizando. Porque la consolidación y el progreso de nuestro país sólo puede ser la obra de todos y esa obra no se realizará si no reposa en una fe y en una sólida confianza. Ya esta difusión está produciendo frutos, ya nos ha colocado hoy en una situación mucho mejor que hace un año.

El mismo homenaje corresponde al señor presidente de la Nación, quien también es un vocero incansable de este pensamiento y en cuya actuación como jefe de la Nación Argentina no conozco un acto que no sea consistente con esta orientación.

Señor presidente: voy a referirme a otro aspecto más. Es la posición de la Argentina en el mundo. Cuando estuve en Washington, hace dos meses, recogí de un distinguido egipcio este pensamiento: «La prosperidad es indivisible.» Y así es, señor presidente: la prosperidad es indivisible en el mundo. Esto coincide con ideas muchas veces expresadas por el señor presidente de la Nación: los países que se quedan rezagados son un peligro para una feliz evolución del mundo. Responde al bien entendido interés de los países más adelantados, ampliamente reconocido por ellos, ayudar a los otros para que vaya reduciéndose el margen en el tenor de vida, para que se establezca un standard de vida común, pero, señor presidente, en el nivel más alto del momento, no en los niveles inferiores. No siempre los países menos adelantados se dejan ayudar y a veces impiden un progreso más rápido por la aplicación ciega de recetas librescas que no coinciden con las exigencias y las posibilidades de la vida real. Entretanto es bueno recordar que la economía moderna, señor presidente, ha nacido y crecido y está organizada sobre base mundial. Las civilizaciones no se organizan necesariamente sobre base mundial. Las civilizaciones del pasado se desenvolvían en un ambiente local totalmente cerrado. La civilización china, tan sutil y refinada, estaba organizada todavía hace cien años, más o menos, en sentido completamente local. La civilización occidental fue otra cosa. Tiene una dinámica expansiva; ha ido a todos los rincones del mundo, descubriendo nuevos materiales, nuevos alimentos, poniendo bajo cultivo vastas tierras vírgenes, desarrollando nuevos sistemas globales de comunicación, estudiando con inagotable deseo de saber las modalidades de otros pueblos y otras civili-

zaciones. Materiales y productos inexistentes o desconocidos en la zona de su nacimiento —el maíz, el petróleo, el caucho y tantos otros— han modelado aspectos fundamentales e implementos insustituibles de nuestra civilización. Hay producciones que sólo se pueden llevar a cabo en escala muy grande, para mercados que coinciden prácticamente con el mundo. Las plantas para movilizar las más poderosas fuerzas naturales que conocemos no podrían realizarse en áreas reducidas, no digo en la República de Andorra, si ella fuera sujeto de una civilización separada, sino ni siquiera en Francia o en Italia, si Francia o Italia vivieran aisladas del resto del mundo.

Con la conciencia de este carácter mundial de nuestra civilización se crearon después de la guerra, señor presidente, algunos organismos de cooperación mundial a los que me quiero referir especialmente, entre ellos el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

En nuestro país no se ha interpretado siempre con exactitud y no se ha presentado siempre con objetividad y buena fe el alcance y la enorme utilidad que prestan estas organizaciones. El Banco Mundial, señor presidente, es una cooperativa bancaria de naciones, todas las cuales han contribuido con sus cuotas a constituir su capital; las naciones más grandes y ricas han contribuido con cuotas mayores; pero todas las naciones han contribuido. El primer objeto de esa cooperativa de crédito era facilitar la reconstrucción de la tierra desolada por la guerra. Pero también se la había constituido para fomentar el desarrollo económico, el desarrollo de los recursos naturales en cualquier parte del mundo. Los bancos, señor presidente, son intermediarios del crédito que movilizan los recursos del público, los recursos monetarios disponibles durante un breve término o los ahorros disponibles durante plazos mayores, llevándolos hacia aquellos puntos donde esos recursos pueden hallar una aplicación provechosa. Los bancos seleccionan a los deudores, y al intercalarse en la operación, a veces como deudores directos del público y acreedores directos de los destinatarios de los recursos movilizadas, a veces también en otras formas, dan al público la tranquilidad de que sus fondos están seguros. Gracias a esta tranquilidad hay muchos más fondos disponibles. El Banco Mundial no es nada distinto. Tiene un capital apreciable aportado por sus socios. Pero si las operaciones del Banco Mundial estuvieran limitadas a prestar su capital, sería muy estrecho su radio de acción. Pocos préstamos habrían absorbido ese capital, y poco fomento podría esperarse de su actuación. No es, pues, ésa su función. El Banco Mundial sale a los mercados donde existen ahorros individuales o institucionales, como las reservas de las compañías de seguros y los fondos privados de retiros, por ejemplo. El banco moviliza esas disponibilidades, ya tomando



prestado él mismo, ya patrocinando préstamos solicitados por otras entidades. Esa es la gran utilidad que presta dicha institución y es el servicio que nosotros esperamos de ella para la financiación de una serie de importantes proyectos de capitalización, entre ellos en primer término la usina de Dock Sud.

Estamos, pues, muy lejos de hallarnos frente a una institución que realiza estas operaciones para colocar su capital a interés. Lo que el Banco Mundial hace es secundar a prestatarios, que puede recomendar de buena fe, movilizándolo fondos de terceros. Al movilizar fondos de terceros, señor presidente, es forzoso que el banco tenga en cuenta las condiciones en que esos terceros están dispuestos a prestar sus fondos. Es forzoso también que el Banco Mundial tenga en cuenta y respete los negocios de las instituciones financieras y bancarias que operaban en esos mercados antes que él, que no les haga competencia ni en la selección de deudores ni en la absorción de fondos disponibles. Todo eso traza determinadas limitaciones a las actividades del Banco Mundial y le impide encarar cualquier financiación bajo cualesquiera condiciones. Por causas vinculadas precisamente con estas limitaciones, hay financiaciones que ofrecen ciertos problemas que en el caso, por ejemplo, de la usina de Dock Sud, se espera obviar por la constitución de una gran empresa argentina privada que se hará cargo de la obra, y por cuya futura deuda el gobierno argentino asumirá una amplia garantía.

En cuanto al Fondo Monetario Internacional, que también es objeto de referencias ásperas o irónicas de gente que no sabe lo que el Fondo significa, obedece a dos finalidades fundamentales. La primera fue la de permitir la reanudación de un comercio multilateral después de la guerra, con su tremenda destrucción de mercados y su artificiosa reorientación de las corrientes del intercambio internacional. El Fondo debería ayudar a salvar los desniveles en el intercambio entre varios países hasta que las corrientes de ese intercambio se encargaran de borrar esos desniveles. No es difícil comprender la utilidad de esa función. Nosotros, al igual que otras muchas naciones, hemos vivido durante bastante tiempo en un régimen de convenios de compensación bilateral con una serie de países. Estos convenios tienen una institución característica que se denomina con un término inglés, el *swing*, es decir el margen en que cada una de las dos partes del convenio puede estar en deuda con la otra sin que nada suceda, a la espera de que con el transcurso del tiempo una corriente comercial contraria se encargue de compensar esa deuda.

El Fondo Monetario Internacional, que también es una cooperativa de naciones, llena la función correspondiente en un intercambio multilateral. El intercambio multilateral es generalmente mu-

chísimo más amplio de lo que podría serlo la suma de intercambios bilaterales entre los mismos países. También en el comercio multilateral es inevitable que se produzcan estos descubiertos en el comercio de un país con otros, que no podrán ser cubiertos hoy pero quizá mañana sí, por compras o ventas de otros países. El Fondo Monetario Internacional tiene fundamentalmente, como principal finalidad, la de asegurar que el comercio internacional no quede trabado por esos márgenes descubiertos que se producen continuamente en distintas partes del mundo, que los países deudores puedan seguir comerciando, pero que también pueda hacerlo el país acreedor. A esa finalidad obedecen muchos de los préstamos, incluso el que concedió a la Argentina en 1958.

Pero cuando el Fondo Monetario Internacional tiende un puente para que un país no quede paralizado en su comercio exterior por estos desequilibrios, se debe preocupar al mismo tiempo de que esos desequilibrios no se sigan reproduciendo indefinidamente. Pues el puente que el Fondo Monetario Internacional tiende es simplemente un crédito a cargo del conjunto de las otras naciones, para que la nación deudora que no tiene ya nada que reclamar a nadie, pueda seguir abasteciéndose. Pero esa ayuda no tiene objeto si al cabo de un par de meses el país deudor volverá a estar en la encrucijada de la que se lo salvó, por ejemplo porque a su signo monetario se le atribuye oficialmente un valor externo mayor que el que corresponde a su poder de compra en el mercado interno. Todo el mundo hallará entonces ventaja en cambiar moneda nacional contra divisas; las compras en el exterior seguirán siendo de gran volumen y las ventas al exterior resultarán trabadas.

En segundo término, el Fondo Monetario Internacional tiene por finalidad mantener entre las distintas monedas una relación estable también, para hacer posible un continuado intercambio general. Las monedas vistas desde afuera son expresión de deudas de los países que las han emitido. Los pesos argentinos en manos de España representan una deuda de la Argentina hacia España que España puede cobrar comprando con esos pesos productos argentinos. Las pesetas en nuestro poder representan una deuda de España con nosotros. Todo el mundo tiene interés en que estas deudas conserven su valor a través del tiempo, porque de lo contrario no nos acordaríamos recíprocamente ningún crédito, o ese crédito sería extraordinariamente caro.

El Fondo Monetario Internacional tiene por finalidad facilitar, sobre la base de una razonable estabilidad de los valores de las distintas monedas, la cancelación de estos créditos, y tiene como segunda finalidad la de ayudar a los países a mantener estable el valor de su moneda. Esta estabilidad, desde el punto de vista internacional, está en el interés de cada uno de los

países socios, porque significa gozar de crédito en el exterior.

Aunque parezca redundante, quizá no esté de más agregar que el Fondo Monetario Internacional no es una creación de los Estados Unidos ni de otro país. El Fondo Monetario Internacional, señor presidente, es en realidad una cooperativa monetaria mundial en que los distintos directores representantes de distintos países o grupos de países tienen la misma voz y un número de votos en relación a su interés en el Fondo Monetario Internacional y donde la Argentina puede exponer sus puntos de vista con idéntico aplomo que Estados Unidos, Inglaterra, Francia o Alemania.

La Argentina, como hoy todas las naciones, debe recostarse en el mundo; como parte del mundo y recostada en él progresará rápidamente. Existe en el mundo no sólo una buena disposición, sino un profundo deseo de recibirnos como uno de los países de más intenso y rápido progreso. El mundo cree que somos capaces de eso y descuenta que lo haremos. Eso no es solamente el halago que acaso por razones políticas nos podrían mostrar los estados grandes: es el estado de ánimo de pequeños países como Holanda, Suecia y Suiza, que anhelan que la República ingrese al grupo de las naciones que han descubierto cómo, mediante un trabajo de calidad serio y responsable, mediante una eficaz cooperación bien organizada diariamente, se hace la riqueza. La República Argentina es capaz de hacerlo, y yo tengo grandes esperanzas de que en el ejercicio 1961 vamos a dar un paso positivo en esa dirección.

Señor presidente: el ejercicio de 1961 no será fácil. Mi sucesor en el cargo de secretario de Hacienda tendrá grandes problemas que resolver, por lo menos tan importantes y difíciles como los que tuvimos que afrontar durante el ejercicio pasado. Hay problemas que ya hoy podemos vislumbrar y otros que aún están ocultos en el futuro. Pero tampoco sabíamos nosotros cómo saldríamos del paso en el ejercicio 1960, y no podíamos esperar que el déficit que nos preocupaba resultaría menor del anticipado. Debíamos temer y temimos por el contrario, ante las presiones que se ejercían sobre nosotros de tantos lados para aumentar gastos —y ninguna para darnos mayores recursos— que en el curso del ejercicio ese déficit crecería considerablemente.

La evolución real ha sido distinta. Teniendo en cuenta los recursos realmente cobrados y la totalidad de los créditos utilizados (que nunca se agotan completamente) se prevé en este momento que el déficit será menor en 4 mil millones de pesos de lo que se había previsto, que en lugar de 27 mil millones sólo alcanzará a 23 mil millones. Es pues posible que la cifra definitiva sea aun menor. Este resultado se ha logrado manteniendo un mismo criterio restric-

tivo firmemente día a día, con el apoyo del presidente de la Nación, con la concordante política del Congreso y con la dedicación completa del personal de la Secretaría de Hacienda.

Tengo la esperanza de que el año 1961 ofrezca una evolución parecida. Como lo ha señalado el señor ministro de Economía ayer, y me es muy satisfactorio confirmarlo, el año 1960 ha visto un crecimiento moderado, pero real de nuestra economía. Se puede calcular que en el año 1960 el producto bruto nacional excederá al del año anterior en algo así como 4,6 %. Si comparamos solamente los segundos semestres, el de 1959, en que ya la estabilidad comenzaba a afirmarse, y el de 1960, en que el movimiento ascendente ha tomado mayor aceleración, la diferencia alcanza acaso a 13,5 %.

Puedo ilustrar esta circunstancia con un hecho significativo. En el año 1958 la producción de automóviles en nuestro país, en su mayoría sólo armados aquí, era de 10.170 unidades. Esta producción disminuyó en 1959. Sabíamos perfectamente que el primer efecto de la estabilización sería una disminución en la producción, por razones muy simples de mecánica económica. Cuando el empresario ha dispuesto todo anticipando un aumento de los precios que no se produce, se abre un margen negativo entre los gastos contraídos en previsión del aumento de los precios y las menores entradas, que obligan al empresario a reducir el giro de su empresa. Igual fenómeno se advierte cuando bajo el imperio de una moneda estable se produce una inesperada baja en los precios.

En el año 1959 la producción de automóviles baja a 9.650 unidades; pero en el año 1960 se han producido ya, en octubre, por lo menos 15.170 unidades (faltan sumar algunas producciones menores) y se prevé que hasta fin de año se producirán 18.000 unidades. En cuanto a camiones, furgones, camionetas y pick-up, la producción de 21.125 unidades en 1958 baja al año siguiente a 20.991 unidades, pero sube en 1960 a 65.102, estimándose que llegará a 5.000 para fin de año. Es evidente que éste no es el cuadro de un país en estancamiento y retroceso.

En lo que se refiere a tractores existe, como se sabe, un problema de colocación. Pero este problema, más que resultado de una falta de capacidad de compra, lo es el de un inesperado exceso de producción. Las ventas totales de tractores han aumentado de 12.000 unidades en 1959 a 16.000, aproximadamente, en 1960. Pero las fábricas han producido 22.000 unidades y se han quedado con 6.000 que todavía no han podido vender. Tampoco éste es el cuadro de una economía en retroceso y, sobre todo, no es el cuadro de un agro en retroceso. Se calcula que si los camiones, furgones, camionetas y pick-up, así como los tractores, han ido durante este año en proporción apreciable al campo,



la capitalización en el campo es dos veces la que fue en 1959.

Señor presidente: creo que el panorama es alentador y que podemos afrontar el futuro sin temores, siempre que tengamos el valor de mantenernos dentro de la moderación de los gastos, que es la característica de este presupuesto. Nada más, señor presidente. (Aplausos.)

**Sr. Turano.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Guido).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. Turano.** — Señor presidente: luego de las palabras del señor secretario de Estado, es evidente que me hubiera resultado más cómodo hacer un comentario, participando de muchas de las ideas que ha expresado, en lugar de entrar a exponer un informe mucho más frío.

En algún otro momento de la sesión me dedicaré a ello, pero no quiero dejar de decir, en este instante, que la política de conducción del gobierno ha partido de la apreciación de objetivos veraces de la realidad del mundo y del país en las actuales circunstancias.

El Poder Ejecutivo nacional somete a este Honorable Congreso sus conclusiones acerca de las reformas proyectadas a varias leyes impositivas, y le corresponde a este honorable cuerpo considerarlas, una vez que la Cámara de Diputados se ha expedido sobre el particular. Comienza el proyecto de reformas con la ley 11.683 de procedimiento para la aplicación y percepción de impuestos, a la que se le introducen las variantes que aconseja la corta experiencia desde la reforma que creó el Tribunal Fiscal, sancionada el 29 de diciembre de 1959.

Tenemos el caso del artículo 63, cuya redacción es una vuelta al texto ordenado en 1959, y que amplía la etapa de la determinación del impuesto al alcance de la interrupción de la prescripción. El texto vigente impide a los contribuyentes, en caso de prescripción inminente, y cuando el impuesto aún no ha sido determinado, que puedan renunciar al término corrido de la prescripción para dar lugar a la discusión del caso. Igual cosa ocurre con el artículo 72, ya que el párrafo que se agrega había sido suprimido en la última reforma, y por este proyecto se lo incluye nuevamente. Es evidente que del modo que se propicia se simplificará el sustanciamiento de los recursos, pues el texto vigente prolonga innecesariamente el procedimiento.

La modificación propuesta del artículo 110, al declarar aplicable el régimen de la ley 11.683 en materia de «sobrepuestos a los combustibles», dota a la Dirección General Impositiva de las facultades necesarias para determinar este impuesto, exigir su ingreso y reprimir su evasión.

Las reformas proyectadas a la ley del impuesto a los réditos benefician directamente a los contribuyentes y representan para el fisco una disminución de recursos, pero todas están inspiradas en un alto sentido social.

El artículo 19, en sus varios incisos, enumera las exenciones al gravamen y, por la reforma, se agregan los siguientes: La redacción actual del inciso f) excluye a los réditos que obtienen las asociaciones y entidades que tienen un fin social o benéfico, cuando tengan la forma jurídica de sociedades anónimas, y el texto proyectado establece que en tales casos se admitirá la devolución por parte de la Dirección General Impositiva de las sumas percibidas por impuesto a los réditos, contra presentación de los comprobantes necesarios.

En el inciso h) se introduce una innovación interesante, al considerar exentas las sumas que las empresas acrediten a sus empleados en concepto de depósitos o préstamos. De este modo, se estimulará la política de gratificaciones y premios al personal, sin afectar la liquidez de las mismas.

Se agregan entre las exenciones las indemnizaciones por antigüedad en los casos de despido que perciban los obreros o empleados. Esta es una forma de aumentar el valor real de dicha indemnización, aunque si vamos a la esencia de la misma, no podría considerársela como renta, sino más bien como un seguro acumulado durante los años de trabajo.

Atento con la política de desgravar las rentas provenientes del trabajo personal, se propone elevar de \$ 45.000 a \$ 96.000 la deducción adicional de la cuarta categoría. Con esta modificación, el total de las deducciones por mínimo no imponible, cargas de familia y gastos de enfermedad llega a la suma de \$ 151.000 en el caso del contribuyente casado con dos hijos (familia tipo). De este modo, el impuesto no alcanzará al jefe de familia con ingresos del orden de los \$ 13.000 mensuales.

Además, juntamente con los gastos de sepelio, honorarios médicos y odontológicos, que se admiten deducir sin prueba hasta la suma de \$ 6.000 anuales, por contribuyentes, se permite incluir, según la reforma propuesta, aquellos «de laboratorios de análisis, de radiografías y de internación en clínicas y sanatorios».

Entre las deducciones admitidas por el actual artículo 62, figura el inciso g) que dice: Los gastos que origine la percepción de los réditos. Se proyecta un agregado a este inciso por el cual se permitirá deducir por todo concepto el 50 % de los importes efectivamente percibidos por beneficiarios del exterior que cobren intereses por préstamos otorgados a empresas radicadas en el país. Es indudable que esta modificación será bien recibida en el mercado monetario y que contribuirá a reducir las tasas de interés elevadas que prevalecen en él.

La ley vigente permite deducir las donaciones que se hacen en favor de obras o instituciones de bien público, y como el Estado tiene interés en fomentar las mismas, se permitirá además computar como entrega a cuenta del

impuesto a los réditos el 10 % de las sumas donadas.

Es sabido que aquellas inversiones que se permiten deducir de los réditos del año fiscal se convierten en un incentivo que el Estado aprovecha para seguir su política de desarrollo. Coincidente con ésta es que vemos con agrado que se proponga incluir las sumas invertidas en la suscripción de acciones de empresas que el Poder Ejecutivo declare de interés nacional (actualmente sólo se permite las cooperativas eléctricas), como asimismo aquellas destinadas a construcción de viviendas o ampliación de las existentes, ya sea para vivienda propia, renta o venta, dentro de la tercera categoría, aunque estas últimas el Poder Ejecutivo reglamentará en qué porcentajes se podrán deducir. Será ésta un arma más para solucionar el problema de la vivienda.

Dentro de las deducciones permitidas en la tercera categoría están las reservas para indemnizaciones por despido. Es sabido que el fondo de reserva que las empresas tienen constituido cubre el riesgo total que aquéllas deberían afrontar en caso de despido de la totalidad de su personal. Pero esta eventualidad es excepcional; por ello, este «fondo» constituye, técnicamente, una reserva que aumenta el pasivo no exigible.

—Se retira del recinto el señor ministro de Obras y Servicios Públicos, ingeniero Alberto R. Costantini.

**Sr. Turano.**— Si se permitiera fiscalmente que las empresas pudieran aumentar la reserva para los riesgos de la ley 11.729 en la medida en que crecerían sus responsabilidades teóricas frente a la reciente modificación de esta ley que eleva a \$ 5.000 la indemnización por año de antigüedad en caso de despido, se facilitaría el incremento desproporcionado de una reserva que cubre riesgos, en su mayoría hipotéticos. Nada impide que la empresa efectúe las reservas que crea oportunas, pero dadas las dificultades actuales del gobierno para equilibrar su presupuesto, no sería justo que pidiéndosele a todos los sectores esfuerzos para contribuir a sufragar los gastos públicos, se permitiera que, con cargo a la recaudación impositiva, un sector constituyera reservas que van más allá de sus responsabilidades reales.

Se proponen dos sistemas para determinar la reserva anual deducible del balance fiscal, y que son los que se indican en los puntos a) y b) del inciso proyectado. Los importes que resulten de aplicar cualquiera de estos procedimientos a elección de los contribuyentes, irán a aumentar las reservas que se hubieran constituido hasta el 31 de octubre de 1960 y contra ella se imputarán las indemnizaciones realmente abonadas en caso de despido, rubro antigüedad.

Finalmente, se eleva el importe mínimo de la escala que es de \$ 10.000 a \$ 20.000, disposición ésta que tiende a aliviar la carga fiscal que pesa sobre las rentas menores, haciendo que no tributen el adicional progresivo los contribuyentes cuyas rentas imposables no excedan de \$ 20.000 anuales.

El aumento del impuesto a las ventas del 8 % al 10 % tiene por finalidad obtener recursos para financiar parte del déficit presupuestario. No obstante ser éste un impuesto indirecto, no creemos que el aumento de la alícuota vigente haya de gravitar en los presupuestos de los hogares de recursos modestos, ya que entre las exenciones se encuentran los artículos de primera necesidad.

En armonía con las facultades que el artículo 12 de la ley actual acuerda en determinadas circunstancias al Poder Ejecutivo para dejar en suspenso el impuesto a las ventas y para acordar exenciones totales o parciales, se incorpora la disposición de poder dejar sin efecto, total o parcialmente, las exenciones vigentes, y siempre, naturalmente, con la obligación legal de dar cuenta al Honorable Congreso del uso que hiciera de las atribuciones conferidas.

La reforma proyectada a la ley de impuestos internos amplía la facultad del Poder Ejecutivo de disminuir los gravámenes, siempre que sea necesario para proteger o fomentar industrias nacionales, ya que el texto vigente circunscribía esta facultad al 20 % de las alícuotas.

En lo que respecta al impuesto a los objetos suntuarios, que están gravados con el 7 % en cada una de las etapas de su comercialización, se aumenta la tasa al 10 % pero se cambia el sistema de recaudación, ya que se adopta el de «percepción en la fuente» (importador o fabricante). Este cambio redundará en una simplificación de las tareas de recaudación y principalmente una disminución evidente de la evasión del gravamen, que permite el régimen actual.

Para las prendas de vestir con individualidad propia confeccionadas con pieles de peletería y los tapices y alfombras confeccionados a mano, se mantiene la tasa del 7 %.

Una modificación efectuada por la Honorable Cámara de Diputados es la de rebajar el impuesto que actualmente tributan las cervezas, de producción nacional o extranjera, que es de \$ 1,80 por litro, a \$ 1.

La ley 15.274 creó dos impuestos, que forman el fondo nacional complementario de Vialidad, que son: a) \$ 40 por kilogramo a las cubiertas, ya sean de fabricación nacional o extranjera, y b), de \$ 500 por tonelada a los vehículos de más de 12 toneladas. Se proyectaba fijar como fecha a partir de la cual comenzará su aplicación la de la publicación de dicha ley en el Boletín Oficial (2 de marzo de 1960), no obstante que del texto de la ley surge que comenzarían a aplicarse a partir del 1º de noviembre de 1959.

Como la reglamentación de esta ley ha demorado y tuvo lugar por decreto del 22 de septiembre de 1960, y con el objeto de no abusar de la aplicación retroactiva de los gravámenes, es que se propone esta modificación, máxime si se tiene en cuenta que no afecta los planes de la Dirección Nacional de Vialidad.

Como una medida de fomento de las operaciones sobre seguros de vida, individuales o colectivos, y de accidentes personales, como también las relacionadas con los títulos de ahorro y capitalización, se declaran exentas de impuestos nacionales internos y de sellos. Es obvio que esta medida ha de incrementar estas formas de ahorro popular.

En oportunidad de dictarse la ley 15.021 se derogó por medio de su artículo 47, el decreto ley 6.266/58 al advertirse que la referida norma adolecía de vicios de imprecisión legal que imposibilitaban su aplicación, pero en esa ocasión no se estableció desde que fecha se derogaba el decreto ley de referencia. En consecuencia, la derogación tuvo lugar a partir del 20 de diciembre de 1959, es decir al día siguiente de la publicación. Por la reforma proyectada se salva tal omisión y se establece que se deroga a partir del 1º de enero de 1958, que fue la fecha de iniciación de su vigencia, ya que por los fundamentos dados al aprobarse la ley 15.021 la finalidad que se persiguió era dejar sin efecto por inaplicable el gravamen que estableció el decreto ley 6.266/58.

La modificación proyectada a la ley del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, en su conjunto obedece a una política de desgravación en relación con la desvalorización sufrida por la moneda desde 1956, año en que se estableció la escala que se modifica.

Es lógico por lo tanto que los mínimos no imponibles que se proyectan sean de \$ 500.000 para las hijuelas de padres, hijos, cónyuges, y demás ascendientes y descendientes, así como también de \$ 50.000 para las categorías de colaterales y extraños.

En la ley vigente se dispensa un trato distinto a las herencias entre padres, hijos y cónyuges por un lado y otros ascendientes y descendientes por otro. Como entendemos que no tiene razón de ser esta diferencia es que apoyemos la reforma en el sentido de unificar las dos categorías, recibiendo así un trato igualitario.

Otra modificación que tiene por base el no reconocer diferencias en el tratamiento de los contribuyentes es la que deroga el recargo por ausentismo que establece el artículo 5º de la ley.

En lo que respecta a la esencia del impuesto, se mantiene su progresividad y el tope del 33 por ciento para las grandes herencias, sin rozar de esta manera el convertirse en confiscatorio.

En lo que respecta a la ley de sellos, además de la ya comentada exención de las operacio-

nes de seguros, ahorro y capitalización, las demás modificaciones tienen por objeto excluir del sellado a actuaciones de escaso interés fiscal, pero en lo fundamental tienden a reparar una omisión involuntaria de la ley 15.017, que aumentó el sellado de actuación para financiar las mejoras al personal de la justicia, donde no se mencionó los tribunales del trabajo.

Por el proyecto que consideramos, se establece que rigen para este fuero las mismas disposiciones que gobiernan todas las demás actuaciones judiciales.

Además se adecua la mención de los distintos fueros a la actual organización de la justicia nacional.

Un agregado de la Honorable Cámara de Diputados considerando que la redacción actual del artículo 32 es taxativa, menciona dentro de la misma la palabra «mercaderías», solucionando de ese modo, sin duda, inconvenientes en la aplicación del impuesto en las operaciones en bolsas y mercados, que es el tópico que abarca el mencionado artículo 32.

Entre las modificaciones proyectadas a la ley de aduana encontramos muy justificada la referente a la tasa de estadísticas, que actualmente es del tres por mil, y que se elevará, en el caso de mercaderías que se importen, hasta el tres por ciento, y para mercaderías a exportar, de hasta el uno por ciento. El Poder Ejecutivo, como hasta ahora, será el encargado de fijarla dentro de los límites que le fija el Congreso, pero a su vez estará autorizado para reducirla según las necesidades de su política.

Por la última reforma introducida a la ley de aduana (texto ordenado en 1956), en virtud de la ley 14.792, sancionada el 13 de enero de 1959, se estableció, entre otras modificaciones, la derogación de la parte dispositiva legal que permitía la «toma de contenido» (artículo 146).

La práctica ha demostrado el perjuicio que esta prohibición causa al comercio importador, razón por la cual se hace necesario reimplantar esta disposición derogada, pues el mantenimiento de la derogación no reporta ventaja alguna al fisco.

La reforma del artículo 174 de esta ley resulta indispensable porque son muy crecidas las multas que anualmente deben soportar las empresas navieras por la verificación de infracciones imputables a los tripulantes de los barcos o sus empleados, y que lógicamente las empresas deben cargar a sus gastos de explotación, encareciéndose en esta forma los fletes y por ende el costo de las mercaderías importadas.

Actualmente las multas son de 2 a 5 veces el valor de las mercaderías y se modifica estableciendo que serán el 100 % del valor de las mismas.

Además, con la modificación que se propicia la empresa podrá repetir el importe de las multas contra el o los tripulantes responsables.

Se agrega al artículo 12 de la ley 14.792 un párrafo que establece que lo dispuesto en el mismo referente a falsas manifestaciones en operaciones de importación y exportación será también aplicable a idénticas maniobras tendientes a obtener el reintegro ilegítimo de derechos, recargos y otros gravámenes comprendidos en el régimen del Draw-back.

El artículo 1.032 de las ordenanzas de aduana dispone que en caso de que un infractor no tuviera bienes para responder a la multa que se le aplicara, la justicia puede imponerle pena de prisión de hasta dos años. Como no existe en nuestro régimen impositivo la pena corporal, para adecuar a él las ordenanzas, se deroga este artículo y los vinculados con el mismo, artículos 1.075 y 1.076 de dicho cuerpo legal.

Por tratarse la recaudación proveniente de los recargos y retenciones sobre importaciones y exportaciones, de un recurso con afectación propia, para poder realizar su desafectación es necesario la autorización que se proyecta para que el Poder Ejecutivo pueda destinarlo también a financiar inversiones comunes del presupuesto ordinario y obras y trabajos públicos. En el texto proyectado se establece que tales inversiones se atenderán en la medida en que lo permita el desarrollo financiero del ejercicio. La segunda parte de este artículo mantiene la facultad que tiene el Poder Ejecutivo de introducir modificaciones en este régimen de recursos, pero limitando su alcance hasta el 100 % de los máximos en vigencia.

La Honorable Cámara de Diputados introdujo un agregado al proyecto del Poder Ejecutivo por el que se concreta la liberación de recargos de importación y derechos aduaneros, previa comprobación de destino, a la importación de repuestos que se utilicen para adoptar los controles de automóviles para su conducción por lisiados, así como todos los elementos ortopédicos necesarios para los mismos, siempre que no se fabriquen en el país o que su producción sea insuficiente. Como párrafo final se propone que se faculte al Poder Ejecutivo a coordinar con los bancos oficiales las medidas conducentes para otorgar créditos para la adquisición de estos elementos por parte de los interesados.

Es innecesario destacar el fin altamente humanitario de la medida proyectada.

Hecho el análisis técnico de las distintas modificaciones efectuadas al régimen impositivo nacional y que constituyen en su conjunto el proyecto de ley en revisión que estamos considerando, puede sintetizarse el espíritu de las reformas en los siguientes conceptos:

- a) Elasticidad en los trámites de procedimiento, aconsejado por la experiencia de un año de funcionamiento del tribunal fiscal;
- b) Intensificación de la política de alivio en la presión tributaria sobre los menores contribuyentes, en especial de quie-

nes abonan réditos de cuarta categoría, como una forma efectiva de elevación de los sueldos y salarios reales;

- c) Énfasis en el acento de apoyo a las industrias consideradas de interés nacional, con la desgravación impositiva sobre aquellas sumas que se inviertan en las mencionadas empresas;
- d) Fomento de la construcción de viviendas mediante el concurso de la actividad privada, autorizando la liberación total de réditos a los capitales que se destinen a tal fin;
- e) Mantenimiento de la política que tiende al equilibrio del presupuesto, compensando los menores ingresos previsibles por los conceptos antes mencionados, con la elevación en una reducida parte del impuesto a las ventas, que se estima no incidirá en los costos; y
- f) Reajuste de distintas tasas en diversas leyes impositivas, concretadas con el objeto de actualizar valores en unos casos, y de intensificar la percepción de impuestos en otros.

Estas consideraciones, evidentes con la simple lectura del articulado del proyecto, son las que han movido a la Comisión de Presupuesto y Hacienda a despacharlo favorablemente, y las que me permiten solicitar a los distinguidos colegas su voto favorable para sancionarlo definitivamente.

Pasaré ahora a ocuparme del dictamen favorable que la comisión, en cuyo nombre informo, ha producido en el proyecto de reformas a la ley sobre contribución inmobiliaria.

Ya por el texto legal sancionado el 3 de febrero de 1960, bajo el número 15.266, se discriminó la parte correspondiente a cada uno de los tres tributos que integran la contribución inmobiliaria, es decir: impuesto de contribución territorial, impuesto de alumbrado, barrido y limpieza y tasas por los servicios de provisión de agua y desagües cloacales y pluviales.

No obstante tal discriminación, la referida ley centralizó la percepción de los tributos precedentemente mencionados en la Dirección General Inmobiliaria, organismo encargado de depositar los importes recaudados por cada concepto, a la orden de la Tesorería General de la Nación, Obras Sanitarias de la Nación y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, según correspondiere.

Como bien expresa el Poder Ejecutivo en el mensaje con que acompaña la iniciativa en examen, «en lo fundamental se trata de devolver a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación la atribución para liquidar y percibir directamente, por una parte, el impuesto municipal de alumbrado, barrido y limpieza,

y por la otra, las tasas y derechos por los servicios de provisión de agua y desagües cloacales y pluviales».

Así tenemos que por el articulado de la reforma se establece que a partir del 1º de enero de 1961, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires será la encargada de liquidar y percibir el impuesto municipal de alumbrado, barrido y limpieza, como así también de establecer por ordenanza municipal las bases impositivas y demás detalles de avalúo, exenciones, reclamos, formas de pago, plazos y demás circunstancias relativas al cobro de dicho impuesto.

Asimismo, se encomienda a la Administración General de Obras Sanitarias de la Nación —a partir de la misma fecha— y dentro de la esfera de aplicación de la ley 13.577, la liquidación y recaudación de las tasas y derechos por los servicios de provisión de agua, desagües cloacales y pluviales.

En lo que respecta al impuesto de contribución territorial, en jurisdicción de la Capital Federal, se suspende su aplicación durante el bienio 1961/1962 y transcurrido este lapso, será la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires la encargada de su liquidación y percepción.

No obstante, la Dirección General Inmobiliaria continuará percibiendo el impuesto de contribución territorial liquidado hasta el 31 de diciembre de 1960, y será de aplicación, en cuanto hubiere lugar, el régimen de la ley respectiva.

Como será dentro de dos años la encargada de la percepción de este impuesto, quedan a cargo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires todas las tareas relativas al Catastro de la Capital Federal, para el cumplimiento de la ley 14.159, incluida la modificación del estado parcelario y la división de inmuebles por propiedad horizontal.

Para el mejor cumplimiento de lo dispuesto se autoriza al Poder Ejecutivo para convenir con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires la transferencia de personal, oficinas técnicas, muebles y útiles y demás elementos que resulten indispensables, y se transfieren a partir del 1º de enero de 1961 las atribuciones previstas en el decreto ley 7.688/56, a los organismos competentes.

Fundamentalmente, señor presidente, han sido éstas las reformas que se han introducido. Para la redacción de ellas, se ha consultado la opinión de los técnicos del Ministerio de Hacienda, habiéndose establecido que, a los efectos de llevar a la práctica las nuevas disposiciones, el Ministerio de Hacienda deberá convenir con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires todos los detalles del caso.

Es por eso que esta comisión pide a mis honorables colegas el voto favorable para la aprobación del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, en lo que se refiere a la parte impositiva e inmobiliaria, que he informado. Nada más.

**Sr. Ministro de Economía.** — Pido la palabra.  
**Sr. Presidente (Guido).** — Tiene la palabra el señor ministro de Economía.

**Sr. Ministro de Economía.** — Señor presidente: después de las exposiciones que se han efectuado en este recinto, solamente voy a tomar a la Cámara unos pocos minutos, y lo haré para referirme, más que al presupuesto en sí mismo, a su futura aplicación, lo cual tiene una importancia decisiva para el año próximo.

El señor senador Bértora ha dicho con mucha exactitud algo que hemos señalado en el momento de remitir el mensaje a las Cámaras: que el presupuesto no es simplemente un registro contable, de cifras, sino que contiene la intención de la política económica del gobierno. Realmente lo hemos señalado así, y le damos a esta expresión el verdadero contenido que tiene. Decimos: «El presupuesto nacional no es solamente el documento de ordenamiento contable y financiero, sino también el más importante instrumento de acción económica de gobierno. La decisión del gobierno de promover un gran desarrollo nacional, objetivo básico de toda su acción económica, y las posibilidades de realizarla, se expresan en la práctica a través de dicho documento.»

La acción del grupo económico, desde que se hizo cargo de sus funciones, ha tenido, entre otros objetivos, la de devolver ante la opinión pública del país la importancia que tiene el presupuesto nacional como instrumento básico del ordenamiento económico y financiero.

Durante muchos años se había perdido esto que podíamos llamar «la majestad del presupuesto», porque era un instrumento que a veces se hacía después de transcurrido el tiempo en que debía regir, y además se lo desvirtuaba constantemente en su aplicación porque las finanzas del país se manejaban en otra forma.

Es ya un éxito, como lo ha señalado el doctor Klein con precisión, que se haya logrado atraer a la opinión pública sobre el presupuesto, aunque esto se nos vuelva un poco en contra nuestra. De ahí las críticas que se nos hacen porque no hemos sido capaces de reducir el déficit del presupuesto. En buena hora esta crítica que sirve para atraer la atención de la opinión pública sobre el presupuesto y, fundamentalmente, sobre la necesidad de reducir el déficit.

Este ha sido un problema que nos ha preocupado siempre, y que no se estudia solamente en un momento determinado, sino que constituye una preocupación permanente. Era prácticamente imposible cortar el déficit, que venía como resultado de una política económica y financiera equivocada de muchos años, y mucho menos al término de un período de inflación. Además, en ninguna parte del mundo se ha podido cortar bruscamente un déficit de presupuesto por el solo método de reducir los gastos; ni aun en los países donde ha sido posible tomar las medidas más severas y drás-

ticas este sistema ha servido, sobre todo —vuelvo a repetirlo— al término de un período de perturbación.

El camino a seguir es, por un lado, tratar de contener los gastos en la máxima medida posible y, sobre todo, procurar agrandar la actividad económica del país. Al hacerlo, estamos en condiciones de obtener de esa actividad económica una mayor participación para atender los servicios que debe prestar el Estado; entonces, si por un lado somos capaces de contener el aumento de los gastos, y por el otro, de aumentar la recaudación dentro de los límites que tolera naturalmente la economía, habremos resuelto el problema de los déficit de presupuesto.

Para esto se requiere un cierto tiempo, y por ello hemos seguido una política progresiva en lugar de una más espectacular, más drástica, pero que no hubiéramos estado en condiciones de soportar. De ahí el sentido progresivo que tiene la disminución limitativa de los déficit presupuestarios, año a año, en la medida que lo vamos realizando actualmente.

También se ha dicho aquí que esto no debe significar un conformismo de nuestra parte ni una fácil explicación o una argucia frente a los esfuerzos que debimos haber hecho para reducir totalmente el déficit. En ese sentido estamos dispuestos a soportar todas las críticas que se realicen. Tal vez nuestra única defensa es la que hacemos, y es preguntarles a los críticos fáciles cuál es el rubro que quieren reducir. Porque cuando se entra a señalar cuál es el rubro empiezan las dificultades; y hasta ahora no hemos encontrado ninguna idea constructiva que valga la pena considerar. Porque no se trata de reducir centavos, sino cifras de gran consideración.

Algo de esto se intentó publicitariamente el año pasado, y la realidad fue que no hubo ideas constructivas. Estos críticos no son capaces de aportar nada sensato y constructivo ni de hacer una contribución real que tenga significado dentro de las cifras actuales.

El presupuesto, como piedra angular de la política económica del gobierno, tiene, por supuesto, esa enorme importancia de ser precisamente la piedra angular. No quisiera entrar ahora, porque me extendería demasiado; ya no sería oportuno analizar la política económica del gobierno de la Nación. Ya ha sido hecho el examen y también se ha publicado. A los señores senadores que tengan la paciencia de leerlo, les recomendaría que leyeran el resumen que he hecho ayer, al término de los años anunciados por el presidente de la Nación, y en el que encontrarán algunos datos útiles para el estudio y análisis de la evolución de este proceso.

Pero sí quisiera señalar simplemente que estamos en condiciones de ver como un razonable éxito lo que se ha hecho hasta ahora y con un razonable optimismo lo que nos queda por re-

correr hacia adelante. Las críticas y las observaciones se han centrado últimamente en muy pocas cosas; tal vez la más espectacular fue la que se produjo el otro día cuando el Banco Central dio a conocer, con cierto retraso, las cifras del ingreso, producto bruto, consumo y de la inversión correspondientes al año 1959. Se apresuraron allí algunos a deducir de esas cifras que la política económica del gobierno había fracasado y que estábamos en un proceso de estancamiento y retroceso que, por otra parte, no corresponde a la realidad ambiente; pero las cifras daban la sensación de que eso pudiera suceder. Es claro que si se analizan las cifras de 1959 con relación a las de 1958 se observa que existe una disminución de estas cifras, aunque desde ahora anticipo que los índices deben ser corregidos por una simple razón. Estamos operando todavía con el censo de 1946 y con muestreos del año 1946. De manera que nuestros exámenes no registran ni remotamente la realidad del proceso industrial producido en los años anteriores. Cabe formular la advertencia de que si las cifras son válidas para 1958, en el mismo caso debemos utilizar el mismo muestreo para 1959, pero tampoco es correcto, porque justamente la gran transición se produce con motivo de la reforma fundamental establecida a fines de 1958. De manera que el muestreo, sobre todo el índice de producción industrial, no refleja todo el impulso producido a partir del año 1959 en adelante. En todo caso, no refleja de ninguna manera el índice de 1960. Pero aun tomando el muestreo tal cual está hecho, que solamente abarca aquellas industrias en las cuales precisamente debe esperarse alguna defección o recesión, hemos podido considerar —ya el doctor Klein lo ha hecho— que la producción en el segundo semestre de 1960 es el 13,6 % superior a la del mismo período de 1959. Estudiando la curva, ésta demuestra que el punto más bajo de la economía argentina se ha producido entre septiembre de 1959 y abril de 1960, y a partir de abril de 1960 estamos marchando rápidamente hacia arriba. Un conjunto de índices, señores senadores, que sería largo enumerar ahora y que están en parte registrados en la exposición a que me he referido, demuestran que desde todos los ángulos en que se lo mire, el problema que estamos viviendo ya está superado. Por otra parte, no es un hecho nuevo descubrir que en el año 1959 la producción iba a ser menor que la de 1958, aunque no lo fuera en la proporción que marcan esos índices, y no era nuevo porque esta política tenía por objeto deliberadamente reducir los consumos para lograr el margen necesario de ahorro a efectos de capitalizar el país y aumentar la producción futura. De manera que no hay que alarmarse frente a que se haya obtenido un propósito que deliberadamente se buscaba.

Lo importante era saber si éramos capaces de afrontar esa tendencia en un período razonable

de tiempo, o no, y además si ese fenómeno se iba a producir con desocupación o no. Por lo general, el precio que se paga por esos procesos es precisamente el de una elevada cuota de desocupación. Este país, evidentemente, tiene reservas superiores a las que uno mismo ha creído en el pasado, y además pienso que el proceso ha podido ser conducido razonablemente, en una forma ordenada, ya que no hemos experimentado la etapa aguda de desocupación que pudimos haber experimentado y que en otros países se ha producido frente a un período de transición de esta naturaleza. Próximamente vamos a publicar con más exactitud estas cifras, que son el resultado de encuestas rápidas que hemos realizado, porque nuestras estadísticas están muy atrasadas. Pero pueden estar absolutamente seguros de que el punto más bajo de la curva ha pasado precisamente desde septiembre de 1959 hasta abril de este año.

Naturalmente, es difícil explicar al hombre común, al trabajador medio, esta situación a través de curvas y de índices, porque es mucho más visible la realidad presente cuando se la compara con los períodos fáciles, cuando vivíamos de préstamos, con un nivel superior al que podíamos mantener. De modo que para señalar este fenómeno no tenemos otra defensa, excepto que la de dejar transcurrir el tiempo. Lo que hoy se puede decir a través de índices y curvas, dentro de algún tiempo será visible para cualquier persona desapasionada que quiera ver la realidad argentina. Repito que contra ese fenómeno no tenemos defensas ni ustedes ni nosotros, y no hay más remedio que dejar correr el tiempo.

Sin embargo, creo que el margen de tolerancia de la población es muy grande en la República Argentina. No hay más que mirar lo que pasa en otros países en este momento, donde al solo anuncio de que será puesto en marcha un plan de esta clase, se producen perturbaciones muy agudas, a pesar de la alta educación cívica existente. Entonces, podemos estar tranquilos con respecto a lo que ha ocurrido en nuestro país en materia de tolerancia por parte del público.

Técnicamente podemos decir que la crisis aguda que tuvimos a fines de 1958, y que se reprodujo en junio de 1959, está realmente superada.

Ya han sido dadas a conocer las cifras más demostrativas de este fenómeno, que es el aumento de las reservas en divisas convertibles, que hemos aumentado de 96 millones a 528 millones en total, y las no convertibles han aumentado de 179 millones a 700 millones de dólares.

La Argentina es el país que más rápidamente ha aumentado sus reservas, y esto fue hecho con moneda absolutamente convertible, en un mercado de cambios que no ha sido sostenido artificialmente, sino que, por el contrario, nos ha permitido comprar dólares en el mercado libre. El Banco Central ha comprado 320 millones de

dólares el año pasado, que ha aplicado a cancelar viejos permisos de cambio de antes de 1959; que ha aplicado a suscribir una cuota de 42 millones de dólares en los organismos internacionales; que ha aplicado también a pagar deudas contraídas por el Banco Central en el pasado.

Cuando se solicitaron los créditos de estabilización, se pidieron, como ha dicho el doctor Klein, con la idea de poder mantener nuestro comercio internacional, sobre todo el comercio de importación, que significa materias primas para las fábricas y la posibilidad de continuar manteniendo un razonable nivel de vida.

La teoría era que nuestra balanza de pagos iba a ser desfavorable, y que esos créditos nos iban a permitir, hasta que llegara el momento de la mayor producción, mantener un adecuado nivel de producción. La realidad es que la recaudación ha sido más rápido de lo previsto, y no hemos tomado un solo dólar de esos créditos para los fines que habían sido primitivamente destinados. Todos esos dólares están en la reserva del Banco Central y podríamos devolverlos hoy mismo.

Si en este momento estamos pidiendo prórrogas y estableciendo nuevas formas de pago es porque ha llegado el momento de atenuar un poco este esfuerzo y transferir esta financiación a obras de desarrollo en las que, evidentemente, estamos todos empeñados.

Esto puede decirse sin ningún temor a equivocarse, ya que no solamente las reservas han aumentado de 179 a 700 millones de dólares, sino que, además, en el curso del año pasado el Banco Central ha comprado 320 millones de dólares que aplicó a cancelar deudas a un ritmo superior al que se aplica normalmente.

La estructuración de la crisis, que no ha visto el pueblo argentino como inminente y he ahí otro de los graves problemas psicológicos que tenemos, porque al no haber visto la destrucción, muchos no creen que estuvimos al borde de la cesación de pagos, de la desocupación, y como no hemos visto tampoco las casas, ferrocarriles y los medios de producción destruidos, no hemos creído en esa destrucción que es real y positiva y a veces es peor que la física. Justamente, por esas mismas circunstancias la superación de esa crisis es el primer éxito que ha tenido este gobierno en una escala ponderable. El segundo, es haber establecido bases adecuadas para promover el progreso. Y estamos ahora volviendo a la palabra progreso, para no usar siempre el término desarrollo, ya que su constante utilización nos puede llevar a la atenuación del esfuerzo.

El otro factor positivo es la situación laboral. Nadie que piense desapasionadamente puede dejar de ver que hay un gran progreso en las relaciones laborales; por más que existan algunos conflictos localizados, el clima social



es completamente distinto al que teníamos hace algún tiempo atrás. Sobre todo ya no existe esta tendencia de considerar la huelga como arma política y aun revolucionaria. Indudablemente hemos evolucionado en este aspecto, porque las huelgas vuelven a tener el sentido auténtico y en la medida que podamos mantener ese aspecto, volveremos al principio de disciplina a que se ha referido el doctor Klein. Esto ha sido posible por la concentración de poder en las oficinas de gobierno, que bien o mal han manejado las cosas y no simplemente han dejado que las cosas se manejasen por sí solas.

Dos problemas tenemos fundamentalmente que enfrentar desde el punto de vista de la mentalidad pública. El primero es la impaciencia del público y sobre todo de determinados sectores por ver realizadas cosas que durante muchos años ni siquiera hemos podido intentar. No solamente nos negamos a discutir o a entrar en el diálogo sobre la inminencia del dilema que hemos vivido, sino que eso lo queremos superar rápidamente y además deseamos que ya esté todo realizado y ahí surge la idea del desarrollo.

También he preguntado muchas veces qué es lo que se quiere entender por desarrollo. Hagan ustedes la pregunta y verán las dificultades que se presentan cuando se trata de concretar ese aspecto. En realidad, el gobierno aporta de sañar la economía y crear las bases necesarias para que la actividad privada haga el desarrollo, poco puede hacer de por sí, salvo algunas grandes obras concentradas y que no están al alcance de la actividad privada. Pero el verdadero desarrollo ya está y la contestación a las críticas se está produciendo: se está efectuando en este momento una encuesta entre las empresas que cotizan en bolsa y hay planes de expansión en marcha, por más de 20.000 millones de pesos, y entre las empresas que ya están en óptimas condiciones figuran las de la industria textil, que tiene planes por 15.000 millones de pesos. Por otra parte, es digno destacarse que el 45 % de lo que estamos importando este año son maquinarias de producción, contra un 20 % que era lo tradicional a lo largo de los últimos 10 años. Ese es otro efecto extraordinario de la economía liberada a sí misma. Cuando existían los permisos de cambio con la pretendida intención de los funcionarios de que sabían dirigir la economía y entonces canalizaban el esfuerzo hacia las maquinarias para no gastar las divisas en elementos de lujo, porque era la argumentación que se hacía, el país destinaba solamente un 20 % de sus importaciones a maquinarias; ahora, con la economía liberada, cuando nadie le dice a nadie qué es lo que debe hacer, el 45 % de lo que se compra en el extranjero está representado por las maquinarias y el resto se distribuye entre todas las otras cosas.

Ese 45 % de las maquinarias no se puede instalar de la noche a la mañana. Hace recién un año que hemos liberado de recargos a ciertas líneas de producción; mientras se compra la maquinaria, llega al país, se instala y empieza a producir, transcurre más de un año. Pero todo eso está en operación, y ustedes, que conocen varias zonas del país, saben que desde Santa Fe, Villa Constitución, Rosario, Córdoba hasta Comodoro Rivadavia, existen vastas zonas del país donde este proceso se está desarrollando. Es cierto que hay zonas que están quedando rezagadas y también algunos sectores de la producción, pero eso es la circunstancia prevista y calculada. ¿Y qué significa esto? El cambio de estructura que esta acción de gobierno ha tratado de producir.

De manera que nuestra tendencia debe ser quitarle espectacularidad a la palabra desarrollo, para que la gente no persiga la tendencia a sentarse y esperar que el desarrollo se produzca por un milagro especial. El desarrollo solamente lo vamos a conseguir si cada uno de los empresarios argentinos están pensando cómo agrandar su pequeña, mediana o gran industria y si el gobierno hace lo posible para que ese señor pueda lograrlo. Y en esa política estamos, y ustedes recogerán los frutos a corto plazo, porque es espectacular el crecimiento que se está produciendo.

El otro punto por el cual hay que luchar es el de la protección industrial excesiva. La demagogia y la propaganda son muy fáciles en esta materia: defender la industria nacional, defender las fuentes de ocupación, defender al trabajo argentino contra el trabajo extranjero. Todo eso prende fácilmente, pero es terriblemente pernicioso porque estamos creando una distorsión de costos tremenda.

Hace algunos años la industria textil argentina no necesitaba protección; competía contra cualquiera. Hoy piden el doscientos por ciento de protección. Si creamos una estructura que requiera protección del orden del 150 al 200 por ciento, sucederá que no vamos a poder mantener el equilibrio actual con la producción agropecuaria y tendremos que ir otra vez a la devaluación monetaria y obligar, sobre todo, al consumidor argentino a pagar precios que no debiera pagar. Además, por los instrumentos que poseemos, no tenemos más remedio que hacer esta protección a través de instrumentos imperfectos, creamos el problema de las distorsiones, y éste nos lleva a amasar cuantiosas fortunas en poco tiempo a pequeños sectores, en detrimento de toda la colectividad.

Hoy la industria argentina sana, estable, que nos conviene, está trabajando en condiciones severas de restricción de créditos, y cada día con mayor eficacia. Pero bajo la máscara de la protección industrial excesiva están surgiendo grandes fortunas apresuradas que después dan



algunos espectáculos que no quiero nombrar aquí, pero que no son edificantes para la colectividad.

De manera que la lucha contra la protección industrial excesiva, disimulada a través de solicitudes en todos los medios de publicidad, como defensa auténtica de intereses nacionales, es otro de los problemas de orden psicológico y mentales que debemos enfrentar. La clave de todo esto es el presupuesto nacional, que resume toda la acción y política económicas del gobierno. El tema de los recargos, por ejemplo, a que me he estado refiriendo en la protección industrial excesiva, está contenido en el presupuesto. No hay tema de política económica que no tenga su reflejo directo o indirecto dentro de este instrumento maestro de la política que es el presupuesto nacional.

Y dentro del presupuesto, el déficit tiene a su vez una importancia formidable porque de él depende, como ha explicado muy bien el doctor Klein, la posibilidad de mantener o no la estabilidad monetaria. Nuestro déficit no es de orden corriente; no significa que debamos ir a la actividad privada por la vía del empréstito o por la vía de una mayor contribución. Significa lisa y llanamente que si no podemos encontrar una financiación de este tipo —que no la existe—, no inflacionaria en los términos del presupuesto demasiado abultado, tendremos que ir a la devaluación monetaria, y entonces, todo lo conseguido hasta el momento, tan trabajosamente, se vendría abajo en forma inmediata.

Hasta este año hemos tenido que seguir en la conducción económica una política flexible con respecto al presupuesto. Señaló también el secretario de Hacienda que al principio del año pasado teníamos poca idea de cómo íbamos a terminar el presupuesto de este año. Alguna vez el doctor Klein se enojó conmigo diciendo que yo era un jugador y arriesgaba demasiado. Y es cierto. Porque tuvimos que seguir la política flexible de ir acomodando las cosas, e ir explicándolas sobre la marcha. No estaba preparado el país para proceder demasiado drásticamente en este sentido.

Pero hoy ese proceso ya no admite más flexibilidades. Hemos utilizado todos los recursos del crédito argentino para el presupuesto. Hemos utilizado todos los recursos tolerables en el presente estado administrativo para conseguir recursos. Esta vez tenemos que mantenernos firmes en el presupuesto de 1961. El déficit de 19.200 millones previsto podemos manejarlo con recursos no inflacionarios. Pero el problema no está allí. El presupuesto mantiene peligros potenciales muy grandes. Hay un quince por ciento de economía que habrá que realizar. Hay ciertos supuestos dentro del presupuesto —y por eso le llamo acción y no simplemente registro— que habrá que cumplir, como por ejemplo el de la usina de Dock Sud, que habrá que financiar con recursos privados. Y sobre todo tendremos que

contener las alteraciones del presupuesto a lo largo del año. Esta vez, como digo, no hay flexibilidad posible sino dentro de los límites que nosotros mismos podamos establecer conforme al aumento de la recaudación y a la mejora económica.

El año 1961 es el año clave. Si podemos mantener el presupuesto dentro de las cifras establecidas, evidentemente la recuperación argentina adquirirá un ritmo acelerado y habremos en verdad superado sin mayor esfuerzo, comparativamente con otros países, un proceso extremadamente agudo. Inversamente también, si fracasamos en la ejecución de este presupuesto toda la obra realizada corre peligro de desmoronarse en veinticuatro horas.

Y no cometo una exageración en esto, señores senadores. Los acontecimientos de los últimos meses nos han producido un daño incalculable: en septiembre teníamos una corriente inversora y de confianza que nos hizo creer que el país había resuelto todos sus problemas; y esa corriente inversora se ha detenido. Es un milagro que no se hayan cortado también otros tipos de créditos. No se puede jugar con esa confianza. No es que estemos queriendo mirar constantemente al extranjero, sino que, como muy bien se ha dicho aquí, dependemos del mundo occidental, del que formamos parte, y en este momento necesitamos de él para una financiación sana, no inflacionaria, de nuestro programa de desarrollo.

De manera que si la estabilidad política y la paz social no acompañan este proceso, poco podrá hacer un equipo técnico o económico, o de cualquier clase que fuere, porque aquéllos son fenómenos que escapan totalmente a sus posibilidades.

El fenómeno no es ningún fenómeno técnico. Las fórmulas que hemos aplicado son muy simples: cuatro o cinco reglas, más que nada de buen sentido, y no otra cosa. El fenómeno es esencialmente político y se basa en la confianza.

Es evidente también que en este sentido el país ha dado un enorme salto adelante. El hecho es que, no diré contra todas las previsiones, porque algunos habían previsto que ello podría ocurrir, pero contra el supuesto general de que nos veríamos embarcados en una política cada vez más socializante —para llamarla de algún modo, puesto que hay que ponerle un nombre—, se está hoy realizando la única política capaz de rescatar las libertades individuales; y eso se está haciendo a través de un partido que, como otros partidos han hecho recientemente en Europa, ha tenido la habilidad, la visión y el coraje de hacerlo en el momento justo, porque realmente no aguantábamos otro período de transición.

Y esto hay que decirlo, y decirlo cada día con mayor orgullo, si así se lo quiere definir, porque ello ayuda incluso a acelerar el proceso

económico. Ayuda, porque demuestra convicción y fe en lo que se está haciendo. Se han hecho cosas extraordinarias, que han tenido poca defensa frente a la opinión pública. Creo que vale la pena tratar de transmitir esta convicción y esta fe que tenemos cada uno de nosotros, a una gran mayoría del pueblo argentino. Si logramos que lo que hoy es tolerancia se transforme en convicción y fe, con los datos que tenemos en la mano y con lo visto a lo largo de este año y medio, que ha sido un pasaje tan duro para todos nosotros, puedo asegurarles con toda responsabilidad que el problema argentino está totalmente terminado. (Aplausos.)

**Sr. Presidente (Guido).**— Si ningún señor senador hace uso de la palabra, se va a votar en general el dictamen de la comisión sobre presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio de 1961.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Guido).**— En consideración en particular.

**Sr. Rocha Errecart.**— Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Guido).**— Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Rocha Errecart.**— Hago indicación de que se suprima la lectura de los artículos del proyecto de ley en revisión y se haga su simple enunciación por Secretaría, salvo el caso de que algún señor senador quisiera hacer alguna observación o proponer alguna modificación, en cuyo caso se haría la lectura completa.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente (Guido).**— Habiendo asentimiento, se procederá en la forma solicitada.

—Sin observaciones se enuncian y aprueban los artículos 1º al 49, inclusive.

—Se enuncia el artículo 50, y dice el

**Sr. Weidmann.**— Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Guido).**— Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

**Sr. Weidmann.**— Solicito que se dé lectura al artículo, señor presidente.

**Sr. Presidente (Guido).**— Por Secretaría se le dará lectura.

—Se lee el artículo 50.

**Sr. Weidmann.**— Quiero destacar, señor presidente, el significado de este precepto que ha sido incorporado por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto originario del Poder Ejecutivo. El mismo es de singular trascendencia en los momentos en que se está operando de manera definitiva el traspaso de los bienes que el Banco de la Nación Argentina tenía en su sección de colonización al Consejo Agrario Nacional, y cobra mayor relieve cuando estamos en una etapa decisiva en el ordenamiento definitivo del régimen legal de arrendamientos y

aparcerías rurales, es decir, el régimen de emergencia que se implantó hace una cantidad de años y que todos quisieran ver definitivamente superado por la normalidad en cuanto a la ocupación de la tierra por aquellos que la trabajan.

Como bien lo dice el precepto, la suma de 100 millones de pesos estará destinada al Consejo Agrario Nacional. Ello implica un intento —que ojalá sea definitivo— de darle la autarquía financiera que este organismo requiere para cumplir con los objetivos que inspiraron su creación, y al mismo tiempo está dirigido para que aquellos que han sido exceptuados de las distintas prórrogas legales y que desde hace muchos años están esperando ser incluidos dentro de los planes de colonización del Consejo Agrario Nacional puedan lograr que se les adjudiquen los lotes para desocupar los que actualmente detentan, permitiendo así la restitución a los legítimos propietarios de dichas unidades de explotación.

También se refiere el artículo a aquellos arrendatarios o aparceros sobre los que ha recaído sentencia definitiva, y agrega que esta inversión debe ser aplicada a la habilitación de muchas tierras que el consejo tiene en su patrimonio, prohibiendo terminantemente que sea aplicada esta provisión de fondos para subvenir gastos administrativos.

Yo quiero hacer una ligera referencia en el curso de este debate, porque tiene un significado especial.

Nosotros hemos postulado, a través de los muchos años en que hemos participado del gran debate de ideas que ha tenido por escenario el ámbito de la República, que la tierra sea de quien la trabaja, y hemos propugnado la radicación definitiva del hombre que trabaja la tierra. Si alguna vez hemos votado leyes de emergencia, de prórroga de contratos de arrendamientos rurales, de congelación de precios y de suspensión de desalojos, ha sido porque circunstancias de evidente anormalidad en la vida del país así lo imponían: en una palabra, para evitar males mayores. Pero creemos, con toda convicción, que estamos en el camino de la superación definitiva de esos regímenes que la experiencia ha demostrado que han conspirado contra el progreso del país.

No es un misterio para nadie que todo aquello que significa una lesión al derecho de propiedad, que no esté justificada desde el punto de vista del interés social, implica una restricción; porque el inversor, el empresario y todo aquel que es promotor del desarrollo de la riqueza de un país no encuentra el ambiente propicio para dar rienda suelta a sus planes de expansión y al espíritu de empresa, que es lo que realmente contribuye al desarrollo y la grandeza de un país.

En alguna medida estoy de acuerdo con el señor ministro de Economía, cuando nos dice que el desarrollo nacional tiene que

venir, en gran medida, de la iniciativa privada. No es el Estado el que tiene que tomar a su cargo esa tarea, pero sí debe realizar las obras fundamentales. Hemos dicho nosotros que debe lograrse el autoabastecimiento del petróleo y del gas, con todos sus subproductos; que se debe avanzar en el campo de la siderurgia porque eso es indispensable; en la promoción del aprovechamiento de la riqueza hidroeléctrica para nuestra autosuficiencia en el campo de la energía; en la construcción de caminos y en una cantidad de cosas más. Y yo agrego, en este aspecto de la colonización, de una reforma agraria que nos lleve a una efectiva colonización, que es mucho lo que el Estado tiene que hacer.

No es un misterio para nadie la cantidad de tierras fiscales existentes, en Formosa, por ejemplo, alcanza —creo— al 80 por ciento de la superficie de esa rica provincia nortea. Allí están esperando esas tierras fiscales que vaya la mano del hombre a promover el desarrollo de la riqueza y extraer todo el potencial que permanece poco menos que inaprovechado, o por lo menos no aprovechado en la medida que las exigencias del desarrollo nacional requieren.

Allí es donde el Estado debe ir con sus medios a promover la colonización de esas tierras. Allí es donde debe construir grandes obras, como la explotación de la energía hidroeléctrica, la construcción de diques para irrigación y todo otro tipo de obras públicas cuyos resultados no pueden ir en beneficio inmediato y directo de los propietarios linderos de esas grandes construcciones.

Aprovecho esta circunstancia para decir que he tenido hoy la satisfacción de conocer —aunque más no sea ligeramente— el resultado de los trabajos relativos al aprovechamiento integral del valle de Viedma, en la provincia de Río Negro. Es un trabajo de una envergadura singular, y que constituye —creo— el primer precedente que tenemos en la Argentina. Ha trabajado Italconsult y también han participado veinte técnicos argentinos, lo cual honra a nuestro país porque demuestra que tenemos aquí equipos calificados como para acometer empresas de esta envergadura, de las que tanto necesitamos para la promoción de nuestro desarrollo. Digo, sentando un principio de carácter general al que me he adherido hace mucho tiempo y del que no me he apeado, que en todo lugar donde se haga una obra de este tipo, acometida por el Estado y con financiación externa —porque no podemos hacerlo con el ahorro nacional—, así como en Córdoba, cuyos diques únicamente proporcionan energía eléctrica, pero cuya agua está esperando fecundar las tierras colindantes, lo que transformaría totalmente el centro de la República, y lo mismo ocurre en la provincia de Catamarca; el día que esto se haga, el Estado tendrá que intervenir, porque

es el que ha puesto su esfuerzo y el de todo el pueblo, para evitar que el beneficio vaya a enriquecer en forma desmedida, excesiva e injustificada socialmente, a los propietarios de esas tierras.

Pero nadie se debe alarmar. Yo no creo en la expropiación como un medio de progreso y de promoción del desarrollo económico. Entiendo que se deben respetar las unidades agrícolas adecuadas a las posibilidades de explotación por la empresa individual, pero todo lo que exceda de esa medida debe ser distribuido para dar ubicación a nuevos agricultores, granjeros, horticultores, citricultores y floricultores. Tenemos el caso reciente de la cuenca del río Badajoz, en España, donde el gobierno español procedió exactamente lo mismo, y respetó a cada propietario la unidad de superficie compatible con las posibilidades de explotación por vía directa. Y lo demás, señor presidente, por vía del impuesto o de cualquier otro medio que el Estado tiene para, en alguna manera, incitar y obligar sin llegar a la expropiación, salvo en último extremo, y lograr una redistribución de esas tierras.

Yo hago propicia la circunstancia para formular esta apelación para que todas esas grandes obras públicas que están planeadas, y que espero ver concretadas con la confianza que es indispensable sentar definitivamente en el país, logremos alcanzarlas en la medida requerida para que esas grandes inversiones y financiación internacionales lleguen al ámbito de la República y hagan posible la materialización de esos sueños, que son los de todo el pueblo argentino.

Pero no quiero terminar esta breve incursión, sin hacer mención de la obra del Consejo Agrario Nacional, obra un poco diluida a través del tiempo, y que creo que debemos promover por todos los medios, a fin de facilitar el desarrollo de nuestra riqueza agropecuaria, sabiendo, como todos sabemos, que la riqueza agropecuaria es la que aporta el 95 por ciento de las divisas del comercio de exportación.

El total de títulos de propiedad que va a entregar el Consejo Agrario Nacional asciende a 5.867. El número de lotes pendientes de escrituración en el consejo es de 2.662. El número de lotes adjudicados, 5.867; el de lotes sin adjudicar, 863. Tierras disponibles, 107.702 hectáreas; y voy a hacer una breve relación para dar la sensación cabal de la importancia que tiene la incorporación en el presupuesto de esta cifra de 100 millones de pesos, que se ha de lograr mediante la emisión de títulos. Hago votos para que la Secretaría de Hacienda de la Nación logre materializar esto.

Voy a dar cifras del número de los exceptuados de prórrogas por aplicación del decreto 18.290/45; y leyes 12.842/46, 12.995, 13.246 y 14.451.

En la provincia de Buenos Aires el número de exceptuados asciende a 2.084, y la superficie

ocupada por estos arrendatarios y aparceros es de 236.987 hectáreas; en Santa Fe, 550, con 36.834; en Córdoba, 211, con 21.216; en La Pampa, 85, con 16.702; en Entre Ríos, 54, con 5.736; en Mendoza, 3, con 34; en el Chaco 3, con 78; en Corrientes, 10, con 2.485; en Río Negro, 3, con 3.321, y en el Chubut, 1, con 200; total, 3.014 exceptuados de las prórrogas de arrendamientos y aparcerías rurales, que ocupan 323.593 hectáreas de superficie en la actualidad.

Estas excepciones en la prórroga no tienen término de vigencia. La colonización debe dar solución al problema. La ley simplemente establecía que el arrendatario o aparcerero debía inscribirse en los planes, y el consejo algún día daría el lote, que produciría la extinción definitiva del vínculo entre propietario y arrendatario o aparcerero. Esto permitía que los dueños pasaran a ocupar sus predios. En esta forma termina el problema, que viene de quince años atrás.

La verdad es que donde mayor gravedad adquiere este problema es en la provincia de Buenos Aires, y la cifra que acabo de dar de 2.084, está indicando a las claras la magnitud de esta cuestión. En cuanto a la provincia que represento, que es la de Santa Fe, si bien es cierto que hay 550 exceptuados de la prórroga de arrendamientos y aparcerías rurales, la superficie que ocupan es de 36.834 hectáreas, con lo cual el problema de su ubicación definitiva para poner término a esa situación de precariedad y emergencia, no adquiere la magnitud que tiene en la provincia de Buenos Aires.

Yo hago votos para que la incorporación de esta partida de 100 millones de pesos sea efectiva cuanto antes. Creo que el Consejo Agrario es un instrumento de realización de una reforma agraria tranquila, sin conmociones políticas ni sociales, que a nada conducen, pero sí acelerando el proceso de radicación definitiva del productor en la tierra que trabaja.

Y quiero hacer propicia esta circunstancia para decir que la reforma agraria ha sido tan vapuleada por haber sido mal planteada, quizá, por los teóricos a quienes aludió el doctor Klein cuando hacía referencia al embanderamiento en las ideologías en el campo en que se divide el pensamiento del mundo contemporáneo. Los teóricos de la reforma agraria, aquellos que no la conocen sino a través de la información libresca, que no tienen ninguna experiencia de la vida y que no conocen la realidad económico-social del país, son los que han deformado los términos de este proceso de desarrollo y de evolución, que es connatural con el avance de la técnica, de la ciencia y de la incorporación de nuevos principios en la empresa agropecuaria; esto por un lado; por el otro están quienes se aferran a fórmulas primitivas y consideran que la tierra puede ser también un instrumento de lucro.

Es innecesario recordar aquí que hasta la propia iglesia católica condena el aprovecha-

miento de la tierra como instrumento de lucro o de dominación, como desgraciadamente lo fue durante mucho tiempo. Tenemos que evolucionar conforme lo hace el mundo; de lo contrario estaremos presos de aquellos regímenes de despotismo, de barbarie y destrucción de la comunidad cristiana a los que tanto tememos, y a los que abrimos también las puertas cuando permanecemos insensibles al avance de las ideas y del pensamiento, y al ansia de liberación de los pueblos.

Que no ocurra en la Argentina y en Latinoamérica —donde hay muchas naciones que han sido bendecidas con prodigalidad por la Providencia con tierras extraordinarias por su feracidad y aptitud, y con climas también favorables al desarrollo de la producción agrícola-ganadera—, que no ocurra que esas teorías exóticas, que son contrarias a nuestro espíritu y a nuestra historia, que son la negación del sentimiento cristiano occidental, que orienta y conduce los destinos de la República; que no ocurra que por incomprensión, por egoísmo o por torpeza nos convirtamos en los mejores aliados de esas ideas destructoras de los cimientos de la sociedad cristiana a que pertenecemos.

Termino formulando votos para que, sin atacar a la propiedad privada —que no hay por qué hacerlo porque es un instituto en el que se basa la comunidad occidental a que pertenecemos—, y con respeto a los principios tradicionales que han informado el desarrollo y el progreso de nuestras instituciones políticas, hagamos lo que sea necesario para contemplar esa ansia de liberación de los pueblos, esa necesidad que tiene el hombre que trabaja la tierra de sentirse dueño de ella, y afincarse, de construir su casita, de tener una quinta y de sentirse ligado a ella por el vínculo indisoluble que da el título de propiedad. Nada más. (Aplausos.)

**Sr. Presidente (Guido).** — En consideración el artículo 50. Si no se hacen observaciones se dará por aprobado.

—Aprobado.

—Sin observación, se enuncia y aprueba el resto del despacho.

**Sr. Presidente (Guido).** — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

En lo que se refiere a las inserciones solicitadas por el señor senador por Entre Ríos, ellas se harán si hay asentimiento del cuerpo.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente (Guido).** — Se procederá en consecuencia.

Se va a votar en general el proyecto de ley en revisión por el que se fija el monto máximo a que podrá ascender el déficit financiero de explotación de las empresas del Estado.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente** (Guido). — En consideración en particular.

**Sr. Rocha Errecart.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Guido). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Rocha Errecart.** — Hago indicación de que se suprima la lectura de los artículos, enunciándolos solamente, y que si no son observados se den por aprobados.

—Asentimiento.

**Sr. Presidente** (Guido). — Habiendo asentimiento, se procederá en la forma indicada por el señor senador.

—En particular es igualmente aprobado.

**Sr. Presidente** (Guido). — Queda definitivamente sancionado. Se hará la comunicación de estilo al Poder Ejecutivo.

Se va a votar en general el proyecto de ley en revisión sobre reformas al sistema impositivo nacional.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular es igualmente aprobado.

**Sr. Presidente** (Guido). — Queda definitivamente sancionado. Se hará la comunicación de estilo al Poder Ejecutivo.

Se va a votar en general el proyecto de ley en revisión sobre reforma de la ley de contribución inmobiliaria de la Capital Federal.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular es igualmente aprobado.

**Sr. Presidente** (Guido). — Queda definitivamente sancionado. Se hará la comunicación de estilo al Poder Ejecutivo.

## 20

# **PRESUPUESTO DEL TERRITORIO NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR**

**Sr. Presidente** (Guido). — Corresponde tratar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de que se dará cuenta por Secretaría.

**Sr. Secretario** (Maffei). — (*Leyendo*):

## **Dictamen de comisión**

*Honorable Senado:*

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el proyecto de ley en revisión sobre presupuesto del territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur para el ejercicio 1960/61; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

Sala de la comisión, 27 de diciembre de 1960.

*José María Antonio Bértora. — Juan Argentino Mansilla. — Clodomiro Falco. — Armando Luis Turano.*

## **Sanción de la Honorable Cámara de Diputados**

(15 de diciembre de 1960)

## **PROYECTO DE LEY**

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Fijase en la suma de ciento cuarenta y cuatro millones trescientos treinta y siete mil trescientos cincuenta y nueve pesos moneda nacional (\$ 144.337.359), de acuerdo al detalle que figura en planillas anexas, el presupuesto del territorio nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud a regir para el ejercicio 1960/1961:

A N E X O S	Gastos en personal	Otros gastos	Plan de obras	Total
A. Gobernación .....	566.220	1.343.200	—	1.909.420
B. Secretaría de Gobierno, Educación y Salud Pública .....	6.327.165	28.333.999	—	34.661.164
C. Secretaría de Hacienda y Economía .....	4.787.340	5.141.700	800.000	10.729.040
D. Secretaría de Obras Públicas .....	1.638.930	25.505.795	69.320.000	96.464.725
E. Consejo Territorial .....	224.010	349.000	—	573.010
Totales .....	13.543.665	60.673.694	70.120.000	144.337.359

Art. 2º — Estimanse en la suma de ciento cuarenta y cuatro millones trescientos treinta y siete mil trescientos cincuenta y nueve pesos moneda nacional (\$ 144.337.359), los recursos propios del territorio nacional de la Tierra del

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, destinados a la financiación del presupuesto a regir en el ejercicio 1960/1961, que autoriza el artículo 1º de la presente ley, de acuerdo al siguiente detalle:

1. — Recursos de la ley 15.263 .....	\$	4.350.000
a) Impuesto a las actividades lucrativas .....	\$	1.500.000
b) Impuesto inmobiliario .....	"	1.500.000
c) Impuesto de sellos .....	"	1.300.000
d) Impuesto a la transmisión gratuita de bienes .....	"	50.000
2. — Recursos de la ley 14.773 .....	"	139.987.359
a) Regalía de petróleo - Ejercicios anteriores .....	\$	9.070.987
b) Regalía de petróleo .....	"	130.916.372
Total .....	\$	144.337.359